

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**  
Departamento de Economía



TESIS DOCTORAL

**Los grupos sociales y su incidencia sobre la transformación  
económico-social y fiscal de España durante la Segunda  
República**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**Juan Gómez Castañeda**

Madrid, 2015

Juan Gómez Castañeda

TP  
1983  
055



\* 5 3 0 9 8 6 0 7 1 5 \*  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

A-53-31647-9

LOS GRUPOS SOCIALES Y SU INCIDENCIA SOBRE LA TRANSFORMACION ECONOMICO-  
SOCIAL Y FISCAL DE ESPAÑA DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA.

Departamento de Economía  
Sección de Ciencias Políticas  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
1983



BIBLIOTECA

Colección Tesis Doctorales. Nº 65/83

© Juan Gómez Castañeda  
Edita e imprime la Editorial de la Universidad  
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía  
Noviciado, 3 Madrid-8  
Madrid, 1983  
Xerox 9200 XB 480  
Depósito Legal: M-6423-1983

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS  
Y SOCIOLOGIA  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

TITULO: LOS GRUPOS SOCIALES Y SU INCIDENCIA SOBRE LA  
TRANSFORMACION ECONOMICO-SOCIAL Y FISCAL  
DE ESPAÑA DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA

AUTOR: Juan GOMEZ CASTAÑEDA

DIRECTOR: Prof. Ricardo CALLE SAIZ

AÑO: 1980





Agradezco profundamente la ayuda y el estímulo prestados por el director de esta tesis, profesor D. Ricardo CALLE SAIZ. Mi agradecimiento también para aquellas personas que con su trabajo y con su apoyo han colaborado a su culminación.

Sin todos ellos no sólo no hubiera sido posible, sino que no tendría ningún sentido.



## S U M A R I O

|  |            |
|--|------------|
| INTRODUCCION .....   | página 1   |
| CAPITULO I.- FUERZAS POLITICO-SOCIALES AL FINAL DE LA<br>DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA .....  | página 6   |
| I.1.- Consideraciones previas  |            |
| I.2.- El contexto general de partida   |            |
| I.3.- El comportamiento de los partidos<br>políticos   |            |
| 3.1.- Partidos clásicos de la Res-<br>tauración  |            |
| 3.2.- Partidos Republicanos  |            |
| 3.3.- Partidos Obreros   |            |
| CAPITULO II.- LAS FUERZAS SOCIALES, LAS FUERZAS ECONO-<br>MICAS Y LOS GRUPOS DE PRESION AL FINAL<br>DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA ..... | página 65  |
| II.1.- Los Sindicatos  |            |
| II.2.- La Banca y los grupos económico-<br>financieros   |            |
| II.3.- La Oligarquía Terrateniente y<br>otros grupos agrarios  |            |
| II.4.- El Ejército y los grupos milita-<br>res   |            |
| II.5.- La Iglesia  |            |
| CAPITULO III.- LAS FUERZAS POLITICO SOCIALES DURANTE LA<br>IIª REPUBLICA .....   | página 142 |
| III.1.- Los Partidos Políticos: cambios<br>y alternativas  |            |
| III.2.- Partidos Republicanos  |            |
| III.3.- Partidos Obreros   |            |
| III.4.- Partidos Dinásticos  |            |
| III.5.- Partidos de Extrema Derecha y<br>Fascistas   |            |
| CAPITULO IV.- LAS FUERZAS SOCIOECONOMICAS Y LOS GRUPOS<br>DE PRESION: EVOLUCION E INCIDENCIAS<br>DURANTE LA IIª REPUBLICA .....              | página 217 |
| IV.1.- Las fuerzas sindicales  |            |
| IV.2.- Grupos bancarios y económico-<br>financieros  |            |
| IV.3.- Grupos Agrarios y Latifundistas   |            |

IV.4.- El Ejército y los grupos militares: su actitud

IV.5.- La Iglesia: Evolución y posturas

CAPITULO V.- EL PROCESO DE TRANSFORMACION ECONOMICO-SOCIAL Y FISCAL DE LA IIª REPUBLICA: UN BALANCE ..... página 344

V.1.- Consideraciones previas

V.2.- Transformaciones fiscales

V.3.- Otras transformaciones económico-sociales

3.1.- Transformaciones Agrarias

3.2.- Transformaciones Educativas y Religiosas

3.3.- Transformaciones militares

CONCLUSIONES ..... página 465

BIBLIOGRAFIA ..... página 473

I N T R O D U C C I O N

## I N T R O D U C C I O N

Probablemente pueda pensarse que abordar un trabajo que constituya la elaboración de una Tesis Doctoral, supone una tarea poco grata y edificante si se emprende de manera aislada e individual. - Está en lo cierto quien así se manifieste y compartimos tal valoración, pues surgen una importante serie de problemas de difícil resolución a la hora de abordar una investigación de amplio alcance, - cuando se realiza a nivel individual.

Cuando nosotros nos planteamos la realización de un trabajo de investigación de este tipo éramos conscientes de tales dificultades y optamos por realizar un planteamiento viable del tema objeto del trabajo, una vez elegido este.

La elección recayó sobre el área de la problemática fiscal a lo largo de la etapa de la Segunda República española (1.931-1.936) y, más concretamente, sobre las transformaciones que aporta este período crucial de la vida española contemporánea, tan prontamente - frustrado por vías ajenas a esa dinámica transformadora y a la misma racionalidad histórica.

A medida que se nos iba perfilando el conocimiento del contexto general de la época según entrábamos en materia, no tardó en explicitársenos la necesidad de analizar ese conjunto de transformaciones fiscales en el contexto de otra serie de transformaciones - económico-sociales muy relacionadas con la anterior, y sin cuyo conocimiento quedarían aquellas aisladas del contexto esencial de la etapa.

Así pues, el trabajo quedaba configurado como un análisis de las transformaciones fiscales republicanas, en su contexto económico-social, que había contemplado otro conjunto de transformaciones de parecida génesis y similar desarrollo.

Pero tales análisis sólo constituirán una parte del trabajo. Parte que, aunque esencial, resulta sólo parcial, supuesto que implica meramente el conocimiento de los efectos, faltando la relación con su causa, que habrá de delimitarse, so pena de abordar un trabajo excesivamente genérico al quedar indefinido y sin acotar el variado abanico de aspectos causantes de las múltiples transformaciones aportadas por un período histórico especialmente dinámico y accidentado.

Sólo se completará la definición del campo problemático a estudiar cuando se aporten dos premisas más. La primera no será otra que el análisis de tales causas. Estas transformaciones, estos cambios y reformas económicos y fiscales se estudian en su relación -- con una serie de grupos sociales y de presión que juegan en aquella época, y que habrá que comenzar por definir y acotar.

La segunda comporta el hecho de que, dada la ambición del proyecto y la amplitud previsible de sus resultados que, a todas luces desbordarían el ámbito y los medios materiales y personales de una Tesis Doctoral, hayamos considerado más oportuno limitarnos a ofrecer un balance de la problemática citada. Un balance necesariamente parcial pero, entendemos, significativo de las transformaciones que más lograron poner en funcionamiento el juego de grupos político-sociales y de presión a lo largo de seis apasionantes años de la vida española y, especialmente, de aquellas incluidas en el ámbito hacendístico y fiscal.

De esta manera, hemos tratado de combinar el contenido, a -- nuestro entender más idóneo, de un trabajo dirigido y realizado en un Departamento de Hacienda Pública, pero de una Facultad de Ciencia Política. Así, junto al análisis de la incidencia de los diversos grupos considerados sobre el conjunto de transformaciones fiscales de la Segunda República, ofrecemos el balance del resultante de aquellos sobre puntos neurálgicos de la política, la economía y la



sociedad española de los años treinta, como son: las transformaciones agrarias, las educativo-religiosas y las militares, que constituyen el esencial campo de batalla sobre el que se jugó la lucha - por un modelo de vida, de sociedad y de relaciones económicas como el que se intentó por la Segunda República, que pretendía aportar - una nueva dinámica a una colectividad humana azotada por el atraso y la ignorancia, desde que ese pionero y, en cierta medida, modélico Estado Moderno fundado en su suelo entrara en profunda crisis.

Entendemos que ningún estudio de este tipo debe emprenderse sin una referencia al marco histórico-político en que se desenvuelve por cuanto, además, resulta evidente que las fuerzas determinantes de una época ya se hallan configuradas en su inmediata anterior; siendo, por lo tanto, en este caso, de obligada referencia la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y primeros meses de los años - - treinta.

Estructuralmente, el trabajo se compondrá de cinco capítulos. Los cuatro primeros estarán dedicados al análisis de los diferentes grupos políticos, sociales y económicos que incidirán en la dinámica transformadora de la etapa estudiada. Tendrán una relación de continuidad entre sí supuesto que el primero, dedicado como el tercero - al análisis de las fuerzas político-sociales, analizará el panorama de estos grupos en la etapa precedente al espacio temporal estudiado, mientras que este se ocupará de su diseño a lo largo de la República.

Igual metodología es la seguida en el segundo y el cuarto de los capítulos; sólo que en este caso su objeto de estudio son, primordialmente, las fuerzas económico-sociales y grupos de presión en su configuración al final de la Dictadura-inicio de los años treinta y durante la IIª República, respectivamente.

El último de los capítulos, el quinto, será el que nos ofrez

ca el balance sintético del proceso de transformaciones fiscales y económico-sociales en los campos específicos ya citados, en su relación con el juego de las diferentes fuerzas consideradas con anterioridad. Así, se ofrecerán primeramente las comprendidas en el ámbito fiscal y hacendístico, para pasar finalmente a una selección - de aquellas transformaciones que entendemos esenciales y que configuraron determinadamente la política económica y social de la Segunda República y que afectan al terreno agrario, al de la educación, al religioso-eclesiástico y al militar.

El apartado relativo a conclusiones pretenderá establecer - unas síntesis básicas del contenido del trabajo, pretendiendo abstraer de él las impresiones esenciales obtenidas en el curso de su realización.

Considerando suficiente el contenido de este preámbulo introductorio, pasemos sin mayores dilaciones a desarrollar el contenido de su esquema.

C A P I T U L O I

FUERZAS POLITICO-SOCIALES AL FINAL  
DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

C A P I T U L O I  
FUERZAS POLITICO-SOCIALES AL FINAL DE LA  
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

I.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Cuando nos planteamos la tarea de investigar los factores y acontecimientos socio-políticos que se produjeron durante la Segunda República Española, no tenemos más remedio que considerar - el tiempo histórico pretérito, en el que se comienzan a producir las condiciones que determinan la evolución de los acontecimientos que se tratan de analizar.

Así, en el tema que nos ocupa, y para analizar dentro de - él cuestiones como el de la situación social, las condiciones ju rídico-políticas y los factores constitucionales entre otros, no tendremos más remedio, si queremos comenzar a caminar por firmes senderos, que retroceder en nuestra visión hacia la época pretérita. De tal modo, nos encontraremos con la Dictadura del General Primo de Rivera y, sobre todo, con la liquidación de ese am plio período de la vida española, que fué la Restauración.

Entendemos que, cualquiera que sea nuestra pretensión a - la hora de estudiar la problemática de la Segunda República, ha bremos de analizar el período de la Restauración en los siguien tes factores:

- El peculiar sistema político que se mantuvo durante - - ella con el turno pacífico de "alternancia" en el poder, de tipo bipartidista.
- El equilibrio de fuerzas sociales que permiten el funcionamiento sincronizado del sistema durante parte de su existencia.
- La destrucción de este peculiar sistema.
- Y, finalmente, la salida de este sistema en dirección a

la Segunda República, pasando por una etapa final de excepcionalidad (Dictadura Primorriverista) que, configurada como salvación del sistema cuando sus principios y sus sistemas de equilibrio ya estaban rotos, supone en realidad su definitiva liquidación, al haber terminado de desmontar, de hecho, varios de los pilares básicos en que se apoyaba este artificio político bipartidista, cuyo principal organizador fue Don Antonio CANOVAS DEL CASTILLO.

#### El Sistema de la Restauración.

No exagera quien sostenga que el sistema político que se -- crea durante el período que nos ocupa, debe su orientación fundamental a la figura de CANOVAS DEL CASTILLO. Tampoco conviene concederle una exagerada importancia, en el sentido de que su obra -- no fué sino el ensamblaje de una serie de circunstancias y situaciones que, de alguna manera, configuraban el panorama político. Así, por ejemplo, se ha citado en numerosas ocasiones la colaboración del pueblo español gracias a ese "ansia de vivir" en que se había traducido toda una insostenible situación anterior de inestabilidad.

La mejor virtud de la tarea política en cuestión fué, sin -- embargo, la de resolver por otros medios, los políticos, lo que -- hasta entonces se había resuelto en la historia de España a base de guerras y, en todo caso, de "pronunciamientos", esa palabra -- que, ni siquiera, es preciso traducir a cualquier idioma extranjero en que se emplee, porque ha sido exportada como típicamente española.

La idea de CANOVAS se centraba en un sistema liberal parlamentario que, a imagen del modelo británico, se asentara sobre un bipartidismo que aceptase unas reglas de juego marcadas por la -- Constitución, que habría que hacer de inmediato, y bajo la acepta

ción del régimen monárquico. Todo ello, presidido por una "civilización" de la vida política, en el sentido de que los militares - no tuvieran su tradicional participación activa.

Como idea, era ciertamente considerable; habría que ponerse a trabajar para institucionalizarla y, además, era necesario que se hiciese efectivo su principio de abarcar a todas las fuerzas - políticas más importantes, para que tuviera realidad su aspiración de durar por un período importante.

El Sistema de la Restauración tiene de positivo, generalmente, aquello que lo relaciona con su tiempo precedente, supone un avance racionalizador de nuestro sistema. No obstante, se puede - incluir en su saldo negativo, aquello que lo relaciona con su futuro inmediato: su incapacidad integradora para evitar el desbordamiento de su propio seno de aquellas fuerzas políticas que, por la nueva dinámica de los acontecimientos, aparecen en el espectro socio-político español.

Este saldo negativo, puede plasmarse en las dos siguientes vertientes:

1) No constituir unos sólidos cimientos, típicos de un régimen liberal-parlamentario puro que, a pesar de sus esperanzadores comienzos, ya nació con graves problemas de fondo.

En tal sentido, aparte de las formas específicas de la - limitación del sufragio en nuestro país, estamos de acuerdo con JACKSON cuando afirma que: "Las Cortes no eran ni mucho menos un organismo gobernante responsable semejante al Parlamento británico. El presidente del Consejo de Ministros - era libremente nombrado y retirado por el Rey y la iniciativa legislativa era casi enteramente una prerrogativa real." (1).

2) No reconocer la realidad social del país para el que es-

taba instrumentado el sistema, resultando incapaz de integrar en su seno a aquellas nuevas fuerzas que aportó la dinámica económico-social española.

Pero, comencemos por el principio: Como reconoce Raymond CARR, "la monarquía de la Restauración fué la estructura política más estable erigida por el liberalismo español del siglo XIX" (2) y eso suponía un mérito especialísimo; aunque, bien es cierto que quedan a extramuros dos fuerzas políticas que, aún teniendo cierta entidad en 1.875, no van a ser decisivas para condicionar su validez en la hora inicial, pero cuyo desarrollo posterior va a ser importante y acrecentará esa falta, nos estamos refiriendo: al Carlismo, por el flanco derecho del sistema, y al Republicanismo por el izquierdo.

A pesar de ello, alrededor de la monarquía restaurada, se aglutinarán, por un buen número de años, el pueblo y los intereses españoles.

Su máximo artífice, ya lo habíamos apuntado, será CANOVAS DEL CASTILLO que, en todo momento, se inspira en la idea de establecer un terreno de juego lo más amplio y aceptable para todos, punto que sabrá determinante para su validez. Tendrá que abrir al máximo la posibilidad de participación por la izquierda y necesita hacer algunas concesiones hacia la clientela liberal, sin que deje de ampliarse el espectro por la derecha, hacia el partido conservador.

Será Don Práxedes Mateo SAGASTA quien encabece la oposición dentro del sistema, acogiendo en torno suyo a los liberales y progresistas del 68 que, en gran parte, acaban aceptando la Constitución de 1.876. Sin SAGASTA, tampoco habría sido posible el régimen, porque era la pieza clave que necesitaba el "invento" de CANOVAS: un partido liberal, a la izquierda del sistema, que lle-

garía al poder en su turno y que no necesitaría el empleo de las armas, para tal fin, de ningún militar "pronunciado".

El sistema necesitará para su funcionamiento, no digamos para llegar a su sorprendente grado de duración y estabilidad, más instrumentos y nuevos protagonistas. En cada elemento nuevo, aparece la mano del artífice.

El Rey, ALFONSO XII, será la persona que, nuevamente, habrá de ocupar la alta Institución del Trono. Su educación en SANDHURTS fué elegida por el propio jefe del partido de los conservadores; hacía falta un rey familiarizado con el sistema británico, que no educado en escuelas prusianas de formación de soldados.

Será el mismo protagonista el principal inspirador de la redacción del texto constitucional, pero dándole la suficiente legitimidad parlamentaria, como para que fuese aceptable y útil. Se oyó la voz de la oposición, se aceptan enmiendas, existen temas conflictivos; al final, sirve para que la estabilidad y el éxito acompañe a su artífice. Su duración avala la calidad del documento.

Escogidos, en principio, con acierto los protagonistas y establecidas las reglas, hará falta la dinámica suficiente como para ponerlos en juego. El modelo británico está siempre presente; el bipartidismo es el ideal a que se aspira, la Constitución no lo explicita pero, por su ambigüedad, deja amplio margen a la interpretación. Será bipartidismo alternante, según convenga al sistema.

CANOVAS, que no solo es el "alma mater" del sistema, sino también jefe de uno de los partidos en liza, el conservador, llegado el momento, incluso se resiste a aceptar su relevo y ser turnado; llegado el caso, el Rey cumple su labor y apoya la alternativa. Se pretende la independencia del monarca respecto de los



partidos, pero el modelo canovista le concedía un poder más que moderador; si bien, es cierto que su ideal no era la monarquía carlista; como afirma GARCIA ESCUDERO, su modelo era "una monarquía constitucional no parlamentaria". (3)

Uno de los méritos que quizá se le puedan atribuir a un régimen que, en primera instancia, funcionó bien y con regularidad, fué el tantas veces ponderado de lograr un sistema civil, un régimen en el que no fueran artífices básicos los militares a los que, a partir de entonces, se les continuaba considerando en un puesto destacado de la pirámide social, pero que ya dejarían de ser el núcleo en torno al cual se agrupase cada grupo político o de interés, que pretendiera imponerse a la situación existente para trastocarla.

Serán, en fin, los partidos del turno, los que sustituyan a unos militares, que se mantenían moderadamente liberales; pues no se olvide que, es este un carácter que les va apropiadamente, debido más a sus recientes enfrentamientos con los carlistas, que a su propio sentimiento liberal, que encajaba a la perfección con el régimen más que moderado de la Restauración. Ello, aún con más motivo, en cuanto que ya han "visto las orejas al lobo" progresista de la Revolución de 1.868.

Entendemos que, el sistema de la Restauración, suponía una situación de equilibrio tan difícil que, al menor fallo de algunas de sus piezas inicialmente armónicas, todo el conjunto se estremecería. La desaparición del Monarca restaurado y la del propio fundador, serían sólo parte del principio del drama.

Sin dejar de reconocer lo encomiable y meritorio de la labor restauradora, tenemos que acometer la tarea de relacionar los errores que lleva implícitos y que, finalmente, desembocarán en un régimen de excepcionalidad constitucional y jurídica,

que se encarna en la Dictadura del General Primo de Rivera.

Hablábamos inicialmente de que nos encontramos ante la implantación del régimen liberal-parlamentario español, con vocación de estabilidad y perdurabilidad. Este régimen, llegado el momento de fallar, lo hizo por varios flancos. Uno, por su importancia, merece nuestra consideración: la sociedad y la economía españolas, no presentaban una estructura adecuada, capaz de sostener un régimen a imagen y semejanza del británico, como se estaba pretendiendo.

Faltaba, ante todo, el sostén de una burguesía renovadora y dinámica que impregnase de nuevos aires al contexto socio-económico español; lejos de ello, se mezcló con los estratos procedentes del antiguo régimen (nobleza, aristocracia, clase militar ennoblecida) y de ellos adquirió los hábitos arcaizantes que hicieron imposible la salida de un modelo agrario tradicional, sector que ocupaba al 68% de la población, frente a un solo 16% del sector industrial, tanto en el régimen de propiedad, como en el de la producción.

Bien lejos estaba la realidad española, respecto del modelo necesario para posibilitar el soñado bipartidismo a la británica de Cánovas.

¿Cuál será el punto clave en el que se reflejen las tensiones entre la realidad social y económica y el modelo político que se pretende hacer viable?. La respuesta a este interrogante nos la ofrecerá, sobre todo, el sistema electoral.

Se había implantado el sufragio universal durante el período revolucionario de 1.868, que hubo de ser aceptado en las primeras elecciones del canovismo, para ser desechado posteriormente y, de nuevo recuperado, en el turno de poder liberal en 1.890. Parecía lógico que el sistema, según estaba montado, no admitiría -

un sufragio universal puro; ello por varias razones: la primera - de ellas, era el elevado grado de analfabetismo alcanzado en nuestro país por aquellos años, así como la apatía y la lejanía con - que se contemplaba la "cosa pública", por un país de las referi- das estructuras socio-económicas.

Además, y no es menos importante, los partidos Conservador y Liberal, por mucho que tratasen de ensanchar sus bases fundacio- nales sus dos mentores, no llegaron jamás a ser durante la referi- da época, aquellos partidos de masas capaces de acoger a esas cla- ses sociales trabajadoras, agrícolas e industriales, que poseían una entidad innegable y una fuerza potencial que se desarrollaría imparablemente al mínimo estímulo. El sistema no era adecuado a - tales efectos. Surge así una práctica de la que fueron maestros - los políticos de la Restauración: La corrupción y manipulación - del sufragio, el denominado "caciquismo", otra de esas frases que no necesitarían de traducción a ningún idioma, por ser genuinamen- te típica de procesos españoles.

El cacique, agente electoral del gobierno, principalmente - en zonas agrarias y pequeñas poblaciones, de donde es típico el - fenómeno por ser más factible el control, amaña los resultados - electorales según los deseos del ministro de la gobernación; como contrapartida, controla el mercado local de trabajo y concede pre- bendas de todo tipo en su área de influencia. Este personaje, el fenómeno que representa, será consustancial con la vida local es- pañola del período de la Restauración.

Hay autores, como Raymond CARR o el español GARCIA ESCUDE- RO, que nos ofrecen una aportación estimable acerca del fenómeno del caciquismo, en el sentido de considerarlo sustitutivo espontá- neo de una inexistente organización de la vida local o como efec- to de la "aplicación de unos derechos electorales muy amplios a - una sociedad atrasada con poco interés o escasa comprensión de -

los problemas nacionales." (4)

Lo que entendemos censurable del caciquismo, es el hecho de que condujo a la falacia del propio sistema, a falsear su propia realidad, impidiendo que los resultados electorales reflejasen - las verdaderas fuerzas que emanaban del propio sistema social - - real que, por sí mismo, iba más allá de unos partidos constituídos por unos grupos de notables, por unos cuadros anhelantes de - cargos y prebendas -el "cesante" fué figura típica y tradicionalmente engendrada por el turnismo- y por un grupo de especialistas del amañó electoral dentro de ellos.

Si el caciquismo nació como una necesidad "natural" de unas relaciones entre "ciudadanos de segunda", que no podían encuadrar se en sistemas importados, lo cierto es que acabó siendo utilizado para perpetuar, falaz y artificialmente, un sistema que estaba desbordado por aquellas clases sociales a quienes jamás había representado plenamente y que emergían poderosamente; así como por aquellas otras "descontentas" que, procedentes de su mismo interior, comenzaban a desconfiar de él y a engrosar las filas del republicanismo. Ello por causas diversas, entre las que no estaban ajenas las consecuencias del desastre colonial de 1.898 y los sentimientos nacionalistas vasco y catalán, cuyas causas radicaban, más que nada, en el descontento de unas burguesías más dinámicas, cuyos intereses no se veían protegidos en los moldes del viejo - sistema. En todo caso, puede quedarnos la duda acerca del "naturalismo" o "necesidad" de ese vicio del sufragio, engendrado por - unas condiciones peculiares de la realidad española.

Es evidente que, siendo el caciquismo un modo peculiar dentro de la vida política española, todos los autores que se centran en el análisis de la época, han de analizarlo particularmente. Intentemos ahora una breve síntesis de las distintas concep-

ciones acerca de este fenómeno dominante en la Restauración, aunque no privativo de ella, ya que pervivirá bastantes años con posterioridad. Por una parte, habrá que considerar la postura de - aquellos que lo consideran como un mecanismo válido, e incluso necesario, dada la inhibición política y el grado de incultura de - los ámbitos territoriales en que tiene mayor auge y vigencia (zonas agrarias y rurales, principalmente). Para estos autores, el - caciquismo sería el instrumento que suple a los cauces políticos normales, considerándolo útil para el funcionamiento del país; de tal modo que, de sus afirmaciones, puede deducirse que la estructura socio-política española de la época lo lleva implícito.

Por otro lado, aquellos otros autores que lo consideran como un sistema artificial y negativo, de dominación y falseamiento de la realidad electoral, que se aprovecha por unas determinadas clases, grupos e intereses, en favor propio. Postura que corresponde a autores como ARTOLA que, concretamente, rebate las posiciones - citadas por nosotros con anterioridad en el otro sentido, cuando sostiene que:

"La tesis de CARR según la cual el falseamiento de los resultados electorales no permitían a la Corona aceptar el consejo de sus ministros sobre la disolución de las Cortes, sin que tampoco pudiese aconsejarse de ninguna institución constitucional para - sustituir el gabinete, desconoce los supuestos elementales del derecho y la práctica constitucionales. Atribuir el falseamiento - electoral a alguna causa que no sea la acción del poder es querer ignorar una realidad que las estadísticas y todos los testimonios de la época demuestran de forma irrefutable. Sin un Congreso medianamente representativo no se puede tener un gabinete que lo - sea, ni se puede lograr una activa participación de los ciudadanos. La abstención, denunciada por todos los políticos como un - mal imputable a la falta de conciencia ciudadana, no es sino la -

consecuencia de la ficción electoral, y no su causa." (5)

Para el tratamiento del tema que nos ocupa, se utiliza muchas veces una postura sintética de las dos citadas. De alguna manera, para nosotros, a la hora de tratar el tema, el camino elegido será también de síntesis. Pues si bien hemos de partir del supuesto de que se trató de un sistema artificial y manipulador, - que alteró radicalmente la esencia de un sistema liberal-parlamentario puro, en la época considerada, faltaban en nuestro país las bases socio-culturales y económicas para su desarrollo óptimo.

Así pues, el caciquismo incrementó y perpetuó aquella ignorancia y desmembración del electorado español, siendo el germen posterior del anquilosamiento de un sistema que, para sobrevivir, ha de solicitar ayuda, en primer lugar, de esa fórmula que había venido definitivamente a desechar, el golpe o pronunciamiento militar y que, finalmente, ha de sucumbir ante la agrupación y - alianza de buena parte de sus clases dirigentes propias, con aquellas otras ajenas pero ya en vías de sólida organización: las masas trabajadoras.

Serán decisivas estas clases en el desenlace final de la Monarquía Restaurada, a pesar de que el sistema electoral caciquil las había tenido apartadas de la escena política. Y lo serán porque emergen impetuosamente, luego de haber estado fortaleciéndose, progresiva y gradualmente, y haber sido sistemáticamente olvidadas en el sistema canovista. Recuérdese, como indica TUSELL, - que "una de las vías, en realidad la fundamental, mediante la - cual el sistema caciquil hubiera podido desaparecer consistía en el advenimiento de una política de masas. Un rasgo fundamental del sistema político caciquil es la desmovilización política que es la que en definitiva favorece la corrupción electoral y el - clientelismo." (6)

Esta será, en fin, la situación a través de la cual se va a llegar a la Segunda República que será, por muchos años, el último de los regímenes constitucionales-parlamentarios españoles después de la monarquía restaurada. Esta institución, al haberse visto com prometida e impelida a tomar partido explícitamente, sustituyendo la incapacidad de las demás fuerzas sociales y políticas durante - los últimos años de existencia, sale derrotada por sobrepasar, en las peores condiciones, la función para la que había sido concebida en el sistema canovista.

La resolución de la aguda crisis en que, principalmente, - las circunstancias más arriba citadas habían colocado a la Corona y su sistema, hubo de afrontarse por parte del monarca recurriendo a la solución de excepcionalidad dictatorial: el directorio del en tonces Capitán General de Cataluña, Don Miguel PRIMO DE RIVERA, - que más tarde analizaremos en sus puntos más sobresalientes, como paréntesis final y puente entre el Régimen Canovista de la Restauración y la IIª República, a la que, casi inevitablemente, conducen los acontecimientos que se desarrollan de 1.923 a 1.930.

Hemos visto cómo el sistema político de la Restauración se está mostrando progresivamente más ineficaz para organizar la vida política española. Veíamos cómo al fin se superan importantes crisis, como las derivadas de la desaparición física de los dos pilares personales del "turnismo", CANOVAS Y SAGASTA; así como la que sucede a la pérdida de las últimas colonias americanas. Pero, avan zado el siglo XX, son profundas también las crisis que, en conti nua sucesión, minan constantemente el sistema. Este, ante cada nue vo embate, irá explicitando una debilidad que se agudiza merced a su eterno problema de estar aislado político-institucionalmente de la realidad más elemental del país.

Los años 1.912-1.913, marcan una clara inflexión en los pro

blemas, con la imposibilidad material del mantenimiento del turno y "la tranquila fluidez que caracteriza el proceso político español entre 1.890 y 1.913, a pesar de las dos grandes situaciones de gravedad en 1.898 y 1.909 (Semana Trágica), al llegar este periodo de 1.913 a 1.917 sufre profundas alteraciones. La crisis de 1.917 lo confirmaría." (7)

Este año de 1.917, ve agudizados los conflictos sociales y - pone sobre el tapete la fuerza reivindicativa de las clases trabajadoras, que lanzan sus ímpetus huelguísticos y revolucionarios - empujados por la crisis española, reflejo nacional de la crisis - general europea causada por la Iª Guerra Mundial que, en buen número de casos, les relega a condiciones de precaria y mínima subsistencia. En este mismo sentido se pronuncia M. TUÑÓN DE LARA, - viendo nuestra economía inserta en un contexto mundial en el que domina "la coyuntura económica inflacionista y de superbeneficios, las pasiones políticas despertadas por la oposición Alemania-Aliados, y luego por el hundimiento de los imperios centrales y el zarismo, la crisis de la internacional obrera ante la guerra y la creación de una Internacional más -La Tercera-..." (8). Ello durante los años 1.916/1.920, en los que se enmarcará perfectamente nuestro país, con una "coyuntura económica inflacionaria, la - crisis de los partidos de turno, la progresión del movimiento - - obrero minado, sin embargo, por su diversificación en tres corrientes..." (9).

Por otra parte, y esto será también importante, las dificultades y, por ende, la incomodidad dentro del estrecho corsé del - régimen, empezarán a afectar a las clases conservadoras por esas fechas, clases estas que tenían su lugar natural dentro del propio sistema en los tiempos precedentes pero que, circunstancias tales como el pánico que entre ellos levanta la revolución soviética de 1.917, a simultáneo de la grave situación española, así -



como el problema de Marruecos recrudecido por los fracasos de - - 1.921 (Annual y Monte Arruit), que levantarán verdaderas heridas en fibras bien representativas de estos sectores conservadores. Y no digamos el ya conocido problema regionalista, principalmente - catalán, hacen que ya se pueda hablar de un "viejo sistema", caduco e inservible, que pasa por momentos a los anales de la histo-ria, por su ineficacia e incapacidad para recoger estas nuevas inclinaciones y fuerzas sociales, haciendo que el deterioro institu-cional sea absoluto.

Así pues, será 1.917 el año que podamos calificar de fronte-ra hacia la fase definitiva de crisis y quiebra del sistema, que va conduciéndose hacia alguna salida de tipo excepcional. Porque, no es de desestimar el hecho de que se produce, simultáneamente, el descontento de, por una parte, los militares, que resultaban - ser víctimas del proceso inflacionista y que se traduce en la - - constitución de las Juntas de Defensa; recordemos en este punto - el fracaso de un régimen que se proponía en sus albores la neutra-lización del estamento militar, y de, por otra parte, "la burgue-sía catalana que cristalizará en la asamblea de parlamentarios y en los proyectos de Estatuto; el descontento obrero estará expre-sado en una huelga general que, en verdad, tenía implicaciones po-líticas (pedir Cortes Constituyentes para decidir sobre el futuro del régimen)". (10)

Podría aún quedar la posibilidad de la reforma constitucio-nal, para intentar salvar la Corona del directo compromiso que le supondría el abandono de la legalidad constitucional que será, en cambio, la salida única finalmente adoptada, precipitándola "ha-cia la alianza de los sectores civiles y militares intransigentes con la revisión constitucional y hasta con la permanencia del ré-gimen, en contra del parlamento, en contra de los partidos histó-ricos que en verdad ya estaban desfasados, en contra de las nue-

vas fuerzas democráticas." (11)

La solución final, pues, es lo que el mismo MARTINEZ CUADRADO denomina "ensayo autoritario y decisionista", la Dictadura de Primo de Rivera que, como indica GARCIA ESCUDERO: "Fué todo menos una sorpresa; si la hubo, fué por la persona del dictador." (12)

PRIMO DE RIVERA se dispone a liquidar los partidos políticos - sus grandes fantasmas, causantes, a su entender, de todos los males, aunque quizá no fueran ya más que "fantasmas" de partidos, a liquidar la Constitución de 1.876- que, no se olvide, había legitimado en la cúspide del poder a la propia Monarquía - y liquidación, en fin, de todo el sistema de entrerrepúblicas, con la propia monarquía incluida a los pocos años. Todo ello, paradójicamente, "con el entero beneplácito de Alfonso XIII" (13) en cuanto a la llegada de PRIMO DE RIVERA, como afirma TUÑON o, al menos, - con el consentimiento regio, al encargarle lo que él mismo desearía hacer pero que, por razones obvias, no podía hacer.

Tres serán las finalidades que pretende el Dictador al hacer se cargo del poder: (14)

- 1.- Realización de una purga entre los políticos.
- 2.- Restablecimiento de la "paz social"
- 3.- Resolución de la cuestión marroquí.

Como generalmente sucede, la continuada experiencia histórica así lo demuestra, toda dictadura, consciente de su excepcionalidad, empieza sus días declarando su carácter de provisionalidad y, como generalmente es una vana afirmación que sólo cumplen con grandes dificultades y presiones, su segunda intención es la de - componer de la mejor manera posible un régimen con faz de legitimidad, de cara a su pretensión de permanencia.

Primo de Rivera no podía ser menos y, si llegó para aclarar

provisionalmente la maraña de problemas irresueltos y heredados - de los últimos años del sistema canovista, acabó tratando de montar una estructura política de partido único (la Unión Patriótica) y convocando una Asamblea meramente consultiva, tan sumamente eficaces, artificiales y caciquiles ("fantasmas" también), como - el corrupto sistema del que habían venido a "salvar a la patria".

Empezaron a verse síntomas de que esas no eran exactamente - las misiones para las que el Dictador había sido llamado por el - Rey, mucho menos, en cuanto que se canjeó el enfrentamiento del - propio Ejército -recordemos el grave incidente con el arma de Artillería, a razón del asunto de las escalas abiertas-. Así, pasada la época de euforia, que siguió al éxito del Dictador en la resolución de los más acuciantes problemas de Marruecos, así como - de los logros económicos conseguidos y proyectados a la luz del - auge internacional que le acompañó -sin desdeñar actuaciones internas y ordenaciones en sectores problemáticos-, intentó la sustitución del primer Directorio Militar, por un sistema de Directorio Civil institucionalizado pseudo-representativamente, que fracasó rotundamente, al presentar al Rey, a finales de diciembre de 1.929 un "plan de normalización (...) en el que figuraba la derogación, por Decreto, de la Constitución del 76 para sustituirla - por otra nueva. El Rey lo rechazó y ello precipitó los acontecimientos que en menos de un mes dieron fin a la Dictadura." (15)

Visto el fracaso del Dictador, hace el Monarca un nuevo y desesperado intento de recuperar y rehacer lo imposible: el viejo - sistema de la Restauración. Para ello, llama al General Dámaso RENGUER. Estamos ante la popularizada "Dictablanda". Hay de nuevo que llamar a los viejos políticos, a los viejos partidos, pero es tan deshechos. "La caída de la Dictadura (...) fué la vuelta al - sistema anterior, que sólo duró poco más de un año, principalmente porque ya no era nada en 1.923, también porque lo poco que era

lo destruyó Primo de Rivera." (16)

La puerta al cambio se va a empezar a abrir. Estamos en el principio del final. Vamos hacia la IIª República.

BERENGUER intenta lo imposible. La Dictadura Primorriverista, lejos de haber dado salida al Régimen, cosa que quizá hubiera podido suceder, de haber confirmado su provisionalidad, resueltos los más graves problemas coloniales y dando entrada a la savia nueva que recorría el cuerpo social, para luego retirarse convocando Cortes Constituyentes, salvando así la Monarquía; lejos de ello, insistimos, trató de aferrarse al poder y constituir una falacia que, lo que consiguió en realidad, fué terminar de desmontar los resortes, aunque débiles, que le quedaban al sistema.

Los monárquicos desertaron en grandes cantidades de la fidelidad real, los viejos políticos no podían reír al monarca la - - "gracia" de haber llamado a su verdugo y, en fin, siguiendo el ciclo tomado de GARCIA ESCUDERO para toda la Dictadura: deslumbramiento, añoranza de la libertad y críticas y descontento, ha llegado el último y definitivo escalón: la dura crítica, que "es la consecuencia de una larga oposición a la Dictadura, que ahora, al caer el Dictador, descubre lo que lleva dentro: la hostilidad implacable al Rey." (17)

Que durante la etapa de Primo de Rivera se criticara ampliamente el sistema caciquil todo y que, en el intento de destruirlo, al menos se consiguiera su desorganización, fueron cuestiones evidentes, de difícil refutación; en opinión de TUSELL, "las consecuencias de ambos hechos serían sufridas por la monarquía en los meses siguientes." (18)

No es nuestro propósito el análisis de este tema en profundidad, pero entendemos que no puede ser calificado más que de fracaso rotundo e inevitable la experiencia de Berenguer que, si que-

ría volver a la normalidad constitucional de la Restauración, no podía ser por otro camino que mediante la reconstrucción de todo el -ensamblaje caciquil que, quizá conscientemente, aunque con la intención de sustituirlo por una pieza válida de recambio que resultó inservible, fué desarticulado por el Dictador. "La realidad -siguiendo con la misma fuente- es que la reconstrucción del sistema caciquil por Berenguer (y sus sucesores y colaboradores) resultó anacrónica." (19)

Estamos ante el conocido "error Berenguer", que fuera destacado en el homónimo artículo, por Ortega y Gasset en el diario -"El Sol", el 15 de noviembre de 1.930. Tal error, según el eminente pensador español, "consistía en pretender la vuelta a la normalidad como si no hubiese pasado nada nuevo y anormal."

No resulta muy difícil para el Rey comprender que este fracaso podría suponer la resolución definitiva de toda la problemática planteada, precisamente en contra de la propia institución monárquica. Se trataba, por tanto, de terminar con el Gobierno Berenguer, a lo cual colaborará decisivamente Romanones, que plantea la posible solución a Alfonso XIII: "Un gobierno más representativo de los partidos clásicos, que fuese primero a la celebración de elecciones municipales y provinciales y que, con una menor carga política, permitieran al régimen afrontar luego las legislativas." (20)

Por fin, jura AZNAR el 19 de febrero de 1.931. No queda otra alternativa que plantear la convocatoria de elecciones, rodeada de una evidente liberalización, para así poder conservar lo esencial: La Institución Monárquica, que aglutina en su seno los intereses de las grandes fuerzas económico-financieras del país, que "cieran filas" en torno al Monarca. Todo lo que no sea darle al proceso electoral venidero los mayores caracteres de autenticidad, puede ser pernicioso para la conservación de los objetivos previstos. El

punto de equilibrio puede ser difícil de encontrar, pero no existe otra alternativa.

Si no perdemos de vista la composición del Gabinete del Almirante Aznar, podremos reafirmarnos en lo antedicho: Romanones ocupa la cartera de Estado, conocido es su peso en el mundo económico español, aparte de gran terrateniente. García Prieto se encarga de Gracia y Justicia, recordándosele sus relaciones con la Banca y las Finanzas; Ventosa ocupa Hacienda.

La Gran Nobleza y los intereses que representa, también están al punto junto al Rey y en apoyo de la posibilidad que se ofrece con el gobierno AZNAR; ahí están los Duques de Alba, Medinaceli, Arión, Vistahermosa, etc... "En resumen, la casi totalidad de los grupos familiares que tenían en sus manos las palancas de la economía nacional, los títulos de riqueza, las fuentes de ingresos más cuantiosas estuvieron hasta el último día con la Monarquía de Alfonso XIII." (21)

De la labor de Aznar se puede destacar la realización de esas concesiones, absolutamente necesarias y logradas por la misma dinámica de los acontecimientos que, como hemos dicho, fueron consideradas por los grupos de interés y personas próximas a la Monarquía, como absolutamente necesarias para permitir la supervivencia de esta Institución, ya seriamente dañada y amenazada por los sucesivos errores cometidos en el intento de dar solución a la salida del Régimen Canovista de la Restauración. Se propician medidas tales como, la apertura de Universidades, del Ateneo de Madrid, así como la autorización de partidos y fuerzas políticas, que habrían de ser los protagonistas en el proceso electoral, que se abre con la convocatoria de Elecciones Municipales en toda España, el 12 de abril de 1.931, así como las generales, para los días 7 y 15 del siguiente mes de junio, para diputados y senadores, respectivamente.

### I. 2.- EL CONTEXTO GENERAL DE PARTIDA

Vistos los directos precedentes del momento histórico - que nos va a ocupar: la Segunda República Española, será imposible cualquier explicación de los acontecimientos ocurridos a lo largo - de ésta, si no tenemos presente estos precedentes, que determinarán el contexto en que nuestro objeto de estudio se va a desarrollar.

Continuaremos considerando, en profundidad, los puntos ob- jeto de nuestro interés, siguiendo la pauta de nuestro esquema tra- zado.

Ya hemos analizado la forma que adoptó la salida del Régi- men de la Restauración, resolviéndose mediante un período de excep- cionalidad constitucional, representado por la Dictadura de Primo - de Rivera, que, nacida con carácter de provisionalidad y en tanto - que se ponían en orden las situaciones creadas por la esclerotiza- ción del modelo canovista, ya desgastado y sin posible solución, - dió paso, como es sabido, a la Segunda República, que se presentó - como la única alternativa viable, al no ofrecerse posibles salidas dentro de la institución monárquica.

Para el estudio del capítulo concreto que nos ocupa, tene- mos que partir de la previa consideración de la situación político- social en su conjunto en el momento de transición que va desde la - caída del Dictador, General Primo de Rivera, hasta la celebración - de elecciones; la primera de las cuales, de ámbito municipal, supon- dría el recambio en el modelo de régimen.

Precisamente nos proponemos el análisis de las fuerzas so- ciales y políticas protagonistas de este crucial momento histórico, como preámbulo de su actuación y desarrollo a lo largo de los años del régimen republicano, ya que entendemos esencial analizar su pa- sado inmediato para contar con bases firmes, que nos permitan un me

jor análisis del período central de nuestra consideración.

El 30 de enero de 1.930 está agotada la vía que ofrece la Dictadura y la Corona insta a dimitir a Primo de Rivera, en la certeza de que será una medida decisiva para permitir al Monarca una cierta capacidad de actuación, en busca de una salida que la Dictadura no había posibilitado y, lo que es peor, posiblemente hubiera cerrado por mucho tiempo.

Esta Dictadura no había sido un período propicio para el desarrollo y la vida de los partidos políticos. Todo lo contrario; el régimen había nacido teniendo presente, como una de sus principales metas a realizar, para "limpiar" literalmente del panorama del país a los viejos políticos y partidos, absolutamente caducos e ineficaces de la Restauración. Tampoco los demás partidos, a extramuros de aquel régimen, iban a suponer excepción alguna, por ajenos que hubieran sido hasta entonces al sistema de poder efectivo. El Dictador tenía fobia a los partidos y, sencillamente, trata de eliminarlos, al menos de la vida legal. En la práctica, lo consigue respecto de algunos, precisamente consigue eliminar a aquellos que, mal o bien, venían sosteniendo a la Monarquía; pero lo consigue porque ellos mismos estaban en franca recesión o crisis.

Por el contrario, no lo consigue respecto de aquellos que, situados fuera del Régimen, están en proceso de potenciación debido a la gran cantidad de seguidores que, descontentos y desengañados de lo que pueden ofrecerle los partidos del turno canovista o situados en una esfera social que escapó a las posibilidades estructurales de aquel modelo -gran fracaso el suyo en este aspecto-, llegan a ellos como única posibilidad de encontrar su acoplamiento sociopolítico.

Pero, ¿cuáles son estos partidos situados a extramuros del Régimen al que pondría fin la Dictadura?. Pues, suficientemente sa-



bido es que los hay fuera, tanto por su derecha como por su izquierda. Los Carlistas son, principalmente, los situados a su derecha. A su izquierda y en sentido ascendente a medida que avanzaban los -- años, sobre todo los Republicanos. Al final, y también con fuerza, los Socialistas, que vienen a representar a unas clases nuevas, el proletariado rural y urbano, cuya aparición y dinámica, no estaba -- prevista por Cánovas en su tiempo y que tampoco se pudo adaptar el sistema a tales mutaciones.

La Dictadura fué capaz de desmontar y desarticular aquellos partidos que daremos en llamar "Clásicos de la Restauración" y que son los Liberal y Conservador que, con sus fundadores, Don Práxedes Mateo Sagasta y Don Antonio Cánovas del Castillo, respectivamente, iniciaron la prometedora y estable singladura del Régimen -- que ahora, en su declive, analizamos. Y lo consiguió porque, lo que realmente deshizo fué, entendemos que involuntariamente, todo el en tramado social y caciquil sobre el que se había montado aquella dualidad turnante de partidos. Deshizo lo que no se había autodestruido por causa de los traumas que vivió nuestro país, con la terminación del siglo XIX y la pérdida colonial americana, así como los -- que se dejaron sentir por diferentes causas en los principios del -- presente.

No le fué posible, sin embargo, desmontar y deshacer todos los demás partidos; sobre todo, aquellos que tenían un apoyo en -- fuerzas sociales dinámicas y ascendentes, que presentaban un futuro prometedor, independientemente de que se pretendiese su eliminación a golpe de decreto.

Sabemos que la Dictadura de Primo de Rivera aparece con -- pretensiones de provisionalidad, en tanto que ordena la situación -- del país. También sabemos que aquella provisionalidad no acabó de -- hacerse realidad, ya que pronto apareció la intención en el Dicta-

dor de permanecer "sine die". No veía nunca llegado el momento propicio para su relevo.

Desde el punto de vista de su oferta en el terreno de los partidos, pretendió la organización de uno único, promovido de arriba a abajo y cuyas posibilidades de éxito "a priori" resultaban, - por su carácter y condiciones, más bien escasas. Tal partido fué el denominado Unión Patriótica y se configuró como netamente gubernamental, en sentido contrario a la práctica partidista plural. Es decir, un partido emanado del Gobierno de la Dictadura, en lugar de - un gobierno emanado de un partido electoralmente mayoritario.

Tratando de aprovechar en su favor el aparato caciquil - - existente en la Restauración y aprovechando la inercia de muchos de los integrantes de aquel aparato, cuya única razón de ser se hallaba en el hecho de situarse al lado del poder, se conceden ciertas - posibilidades de éxito a tal partido único. Con él de base, se trata de organizar un Directorio Civil, que sustituya y suavice el primer Directorio Militar. Pero, un organismo desvinculado del cuerpo social y con una existencia artificial y sólo fundamentada en el ámbito oficial, no logra ser el recambio óptimo para un sistema liberal-parlamentario de partidos.

La Unión Patriótica, apoyando nuestra tesis en una obra libre de toda sospecha, en cuanto a parcialidad negativa respecto de tal institución, como es la de José M<sup>a</sup> García Escudero, será definida como, "un partido artificial, como formado desde el poder, de - aluvión, donde se mezclaban los idealistas sinceros con los logreiros aprovechados, donde lógicamente prevalecían el funcionarismo y la pasividad." (22)

Tal fué, en fin, la situación y entidad del partido político en el que se quiso apoyar un régimen, que nace declarando el Estado de Guerra en todo el territorio nacional, que suprime la acti-

vidad de las Cortes, que suprime la actividad de todos los partidos políticos excepto del suyo propio y que, por supuesto, está contra el Regionalismo y contra la lucha de clases; todo ello, aparte de constituir la única posibilidad de salida que se le ofrece a la Monarquía.

Así las cosas, contaría la Dictadura, por la recíproca, con el sentimiento de hostilidad de los partidos, grupos y sectores sociales que representaban tales ideas; es decir, los Partidos Republicanos, los Partidos Regionalistas y los Partidos Obreros.

A la Dictadura propiamente dicha, entendida como el período cronológico en el que se mantuvo en el poder Primo de Rivera, es decir, de septiembre de 1.923 a enero de 1.930, sucedió un período intermedio, de transición entre el Régimen Constitucional Monárquico basado en la Constitución de 1.876 y el Régimen Constitucional Republicano, con base en la Constitución de diciembre de 1.931.

Este período intermedio varió sensiblemente la situación observada durante la Dictadura, en lo relativo a la situación de los partidos políticos que, lógicamente, habremos de considerar a lo largo de esta etapa, en la que progresivamente se van perfilando con la caracterización con la que luego se manifiestan a lo largo del período republicano.

Si la Dictadura se caracterizó por la lucha decidida contra los políticos y su organización partidista y, dados los efectos negativos que, a la larga, tal lucha ocasionó, este período inmediatamente posterior hubo de presentar matices diferentes. Si la Dictadura había puesto seriamente en peligro la situación de la propia Corona, al no ser capaz de dar un contenido político al espacio en el cual se habían movido los viejos políticos, ya neutralizados, su sustitución habría de tener un significado bien diferente.

El primer paso consistió en la llamada al General Dámaso -

Berenguer que, con menos fobias respecto de los partidos que su antecesor, estuvo ocupado en la misión de rehacer lo deshecho por Primo de Rivera, con la falaz base de creer que todo podía reconstruirse como si nada hubiera ocurrido en el país, pensando que, nuevamente, podrían funcionar los viejos partidos del contexto del viejo sistema, con los retoques que lo hicieran posible.

Elemental error en el que incurre Berenguer, ya que, si aquel sistema ni siquiera funcionaba en 1.923, pues de otra forma nunca se hubiera producido el paréntesis dictatorial de Primo de Rivera, mucho menos iba a funcionar después de los años en que el dictador jerezano se había ocupado de destruir, puntualmente, todo aquello que creía tan nocivo para su patria.

Aquel sistema, "sólo duró poco más de un año, principalmente porque ya no era nada en 1.923, también porque lo poco que era lo destruyó Primo de Rivera." (23) La conclusión obvia que sacará este mismo autor y que compartimos enteramente es que, el único que la Constitución declaraba irresponsable sería el que tendría que responder de la situación: El Rey.

A este se le presentaba el dilema, a la caída de Primo de Rivera, de volver a una nueva Dictadura que hiciera rápidamente lo que no había hecho la anterior: "evolucionar rápidamente hacia un sistema representativo estable". Pero era altamente dudoso que otra nueva Dictadura lo consiguiera, además de que se había tenido la muy reciente experiencia de que las responsabilidades de una dictadura, salpicaban con mucha facilidad al Monarca, mientras que éste, sólo con muchas dificultades, podía imponer su control a aquella, que, lejos de cumplir sus compromisos, fácilmente se veía inmersa en la dinámica de su propio poder, que pasaba de provisional a inmovible con cierta facilidad. En este sentido, no tenemos más remedio que coincidir con aquella afirmación que sostiene que, "la in-

cógnita ante toda dictadura es siempre si sabrá reconocer el momento en que su indiscutibilidad nace, no de causas extrínsecas a ella misma, como las que le han dado vida, sino de las prohibiciones que ella misma impone después y que por esto difícilmente serán aceptadas como válidas para justificar el sacrificio de la crítica." (24)

Si el dilema se centraba en elegir una nueva dictadura o la vuelta a un sistema constitucional, retomando el hilo de nuestras argumentaciones, fué elegida esta última solución como más racional, pero sobre todo como más viable. No obstante, aquí no concluiría el problema, aún quedaría por determinar qué sistema constitucional se escogería.

Llegados a este punto, la solución igualmente podría ser doble: una solución constitucional nueva, con partidos nuevos y apertura de un período constituyente, o, aquella otra que, siempre en el ámbito de una vuelta al constitucionalismo, tratase de hacer la recomposición del mismo esquema político-constitucional existente a la altura de 1.923.

En aquella coyuntura no se eligió la primera solución, seguramente porque los vientos soplaban con fuerza a extramuros de la propia monarquía, por las ya citadas "salpicaduras" del sistema Primorriverista. Además, precisamente de lo que se trataba era de salvar a la propia Corona pues, no en vano, alrededor suyo se moverían las clases e intereses más potentes del país, dispuestos a mantenerla a toda costa, como institución y símbolo de estabilidad política y conservación social. Empeño que ni siquiera perdieron durante la etapa republicana.

Berenguer intentó la segunda de las salidas antedichas con una variante. A sabiendas de que, en un principio, resultaría muy difícil recomponer algo que casi había desaparecido, como eran los partidos clásicos del turnismo restauracionista, intentó el manteni

miento del constitucionalismo de 1.876, con la convocatoria de unas Cortes ordinarias compuestas por nuevos partidos.

Pero, cualquier partido que no fueran los ya anteriormente comprometidos con el sistema, difícilmente se arriesgaría a aceptar el estrecho cauce que ofrecía la legalidad de la Restauración sentándose en unas Cortes ordinarias. Así que la solución sólo podría estar, y a ello se ocupó el General Berenguer durante su mandato, - en la renovación de los partidos Conservador y Liberal.

Difícil tarea, tan difícil que no fué posible, pues las - personas que podrían darle una nueva contextura, que entonces se - pensaba aceptable, pero que, en nuestra opinión, tampoco lo hubiera sido, eran Cambó y Santiago Alba. El primero de ellos quedó totalmente descartado por razones de salud. Alba, presentaba un programa de elecciones más dinámico, que suponía el reflejo y la plasmación de su idea básica: que no era posible hacer ningún trabajo político serio para mantener la Monarquía, si ésta no tenía un verdadero apoyo popular. Postura ciertamente honrada y, sobre todo, realista pero que venía a suponer, en la realidad, la anulación de los planes propuestos por Berenguer. El éxito difícilmente le acompañaría.

La dificultad radicaba en que una convocatoria de Cortes - ordinarias, suponía seguir ignorando la realidad del país, la existencia de unos partidos políticos verdaderamente representativos, - al margen de los oficiales de la Restauración. Así pues, sin la participación de Republicanos y Socialistas, ¿serían posibles unas Cortes con el sólo concurso de unos partidos decadentes y fantasmales?

La caída de Berenguer y su ya citado error, tienen un -- transfondo elemental, los planteamientos propuestos por éste son - inaceptables para la mayoría de las fuerzas políticas del país. Su misión, en cambio, es la de proteger a la Monarquía de la caída. El callejón sin salida se resuelve con la caída de Dámaso Berenguer, -

intentándose una última oportunidad, una nueva posibilidad que, por supuesto, será la última de la Monarquía.

Esta última solución se aborda con el nombramiento para la Jefatura del Gobierno del Almirante Aznar y tiene como inspirador y patrocinador a Romanones, llegándose a decir que, en esta última etapa, "el presidente efectivo fué Romanones y, como presidente nominal, el almirante Aznar."

El corto período en que ocupó el poder el Gabinete Aznar - fué, inexorablemente, una sucesión de acontecimientos que van hacia el desenlace final republicano. Dada la liberalización cultural que permitió el restablecimiento de los centros culturales, la suavización de la censura y la libertad en el proceso asociacionista, se - posibilitó el acceso a un proceso electoral escalonado, que se intentó hacer aceptable a los intereses de todas las fuerzas concurrentes en el proceso.

Los partidos políticos aceptan la participación en unas - elecciones libres que, inexorablemente, se convertirían en un referéndum que daría exacta medida de las fuerzas que tendría cada formación en liza, cada bloque: monárquicos y republicanos. Sería la - gran oportunidad de acceder al cambio esperado por tantos sectores del país, sin violencia.

Por otra parte, Aznar y Romanones, plantean el proceso - electoral de la manera que entienden más favorables a los intereses de la Monarquía, de tal manera que, no van a las elecciones generales directamente, sino que fijan previamente las fechas de las elecciones locales y provinciales.

Es, pues, la lucha política en torno a la legitimación que habría de darse al régimen cuando, por fin, se produce la salida de la Dictadura, lo que centra nuestra atención y lo que mantuvo en -

pié el caballo de batalla durante los gobiernos de Berenguer y Aznar.

Será, precisamente, la "cuestión electoral", el planteamiento electoral, el que origine todas las luchas en torno suyo durante este período. Y si esto es así, lo es sencillamente por las razones - siguientes:

1º.- Porque con la Dictadura de Primo de Rivera se ha desactivado totalmente el Sistema Canovista de la Restauración que - ya, a la altura de 1.923, es tan ineficaz, que hace necesaria la intervención del Dictador, con el consabido peligro para - la propia Corona que le llama a gobernar.

2º.- Porque, como consecuencia de lo anterior, se han descom- puesto totalmente los dos partidos clásicos turnantes.

3º.- Porque existen otros intereses que agrupan a otros partidos que, habiendo estado marginados por el canovismo, emergen en la vida política nacional y dejan entrever un republicanis- mo y un socialismo, con progresiva fuerza ascendente.

4º.- Porque la Monarquía ha salido seriamente afectada del - proceso político de los últimos años, incluso anteriores a la Dictadura, y se trata de salvarla por todos los medios, in- - cluído un proceso electoral que sea lo suficientemente verídico y, a la vez, lo suficientemente controlado, como para que le resulte favorable a la Institución. Pero, a la vez, por un proceso que, siendo aceptable para las fuerzas no monárquicas e izquierdistas, como para que no se abstengan de participar y hagan inútil el intento, dé los resultados apetecidos.

Entretanto, el tiempo corre en contra de la Monarquía y de - sus apoyos porque, pasado el tiempo de las inhibiciones y de las - prohibiciones de la Dictadura, la reorganización de los competido-



res y oponentes es rapidísima y cada día que pasa, juega a favor de su consolidación y se hace más difícil el triunfo monárquico puesto que, cada acto, cada manifestación y cada declaración hecha contra el Gobierno, se convierte, automáticamente, en hecha contra la propia Monarquía.

### I. 3.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Ya se puede deducir, de lo analizado hasta aquí, que la época típicamente dictatorial, denominación que otorgamos a la que contempló en el poder al propio General Primo de Rivera, fué de recesión e inactividad legal obligatoria de los partidos políticos. No se olvide la misión de eliminación de estos entes políticos que se había propuesto el Dictador, al ser los cauces naturales de expresión política, que era realmente la actividad a eliminar. Lo que, en rigor, no puede sostenerse, es que los partidos desaparecieran por completo en tal época, cosa que queda fehacientemente demostrada si analizamos el resurgir de la actividad política partidista -ya se verá más exactamente de qué partidos se trata-, al final de esta etapa e inicio de la republicana.

Durante la etapa dictatorial, como decíamos, no se produce un receso en la actividad de aquellos partidos que realmente tienen base de supervivencia; lo que ocurre es que, mientras unos están obligados a mantenerse en la clandestinidad desarrollando de forma precaria su labor, con los problemas e inconvenientes que ello plantea, otros se mantienen de forma más viva a través de centrales sindicales que permanecen en la legalidad. Diferente consideración nos merecerá la suerte futura que correrán aquellos otros partidos que tienen muy erosionada esa base de supervivencia por su dinámica anterior a 1.923. Para éstos tuvo fatales consecuencias la etapa que nos ocupa.

Pero analicemos con mayor detenimiento las circunstancias concretas de los partidos, agrupados por afinidad ideológica.

#### I.3.1.- Partidos Clásicos de la Restauración

Podemos sostener, sin ningún temor a equivocarnos, que estos

partidos son los más directamente perjudicados por la Dictadura de Primo de Rivera. En tal aserto concurren dos circunstancias diferentes: de un lado, estos serán los partidos que funcionan, o, para ser exactos, que malfuncionan, en el momento de efectuarse el "pronunciamiento" de Primo de Rivera y será precisamente contra ellos, contra los que se produzcan las más directas actividades de Dictador, en el sentido de prohibición y supresión de sus actividades y "poli-tiquerías". De otro, ellos son los representantes del viejo sistema e, igualmente, sienten en sí mismos el desgaste, la impotencia de seguir adelante, que permitirá el advenimiento de la Dictadura con el propósito de ordenar las cosas.

Además, en los combates del Dictador contra el caciquismo, el sistema político, etc., está asestando golpes directos contra los pilares básicos que sostienen a aquellos partidos Conservador y Liberal. Parece como si, además de haber demostrado su incapacidad para integrar a esa nueva sociedad española más dinámica, a fuerza de aquellos vaivenes producidos por múltiples circunstancias históricas, que se suceden inexorablemente: pérdida de colonias americanas, desaparición de los artífices y fundadores, a cuya imagen y semejanza estaban hechos los partidos e, incluso el régimen; desastres militares de Africa: Annual, Monte Arruit; descontento de sectores influyentes de la sociedad: militares y burguesías periféricas; emergencia de una clase obrera, etc. etc.; insistimos, parece como si, encima de todo eso, la Dictadura los hubiera considerado como únicos y exclusivos culpables de todos los males.

Consideremos, por añadidura, que la descomposición de tales partidos fué evidente a medida que avanza el período que nos ocupa. Tan es así que, al final de la Dictadura, principalmente durante el Gobierno Berenguer, se encontraron de nuevo en las más privilegiadas de las situaciones posibles y no pudieron aprovecharlas.

Tal situación fué aquella en que se intenta, como salida posible al desastre que se avecinaba con la caída de Primo de Rivera, constituir de nuevo el sistema en torno suyo, protegiéndolos de la competencia de los demás partidos, claramente inclinados hacia el - republicanismo. Pues bien, ni aún así, con protección contra sus - competidores y otorgándoles la confianza, fueron capaces de renacer de entre sus cenizas, prueba más que evidente de que habían claudicado paralelamente a como lo había hecho el sistema para el que habían nacido.

Esta afirmación, creemos que está suficientemente probada en la serie numerosa de citas y literatura aportada y consultada, que nos hablan de la imposibilidad de su reconstrucción cuando ello fué necesario. Ni Alba, ni Cambó, ni tampoco Romanones, fueron capaces de garantizar la permanencia de la Monarquía, a base de sus anti- - guos partidos.

El Conde de Bugallal, elegido para la presidencia de los conservadores (10-II-1.930), "fué el único en declararse en favor del simple retorno al régimen del 76." (25) Los Liberales se recomponen más tarde aún, en julio de 1.930, bajo la presidencia de Romanones. Como vemos, una actividad tardía y débil la de estos partidos que, difícilmente, podrían ayudar a la Monarquía en la recomposición del sistema.

Nadie tenía fe en tales partidos, de ahí que la batalla se librase alrededor de la consideración de que había que organizar un - proceso electoral lo suficientemente representativo de las demás - fuerzas políticas y lo suficientemente seguro para la estabilidad - de la Corona. Punto de equilibrio que ya, sencillamente, era imposible porque las fuerzas situadas lejos de la Monarquía eran abrumadora mayoría, al menos en aquel momento. Incluso otras fuerzas de la derecha, no se comprometen o se hacen republicanas.

Citada la opinión de Artola en tal sentido, se centran en su misma línea las investigaciones realizadas por los M. Cuadrado, Tuñón, que ven como realmente improbable la recomposición del sistema de la Restauración después de la Dictadura, a base de los clásicos partidos Liberal y Conservador que, nacidos como reuniones de notables, uno y otro, en otros tiempos y con los resortes caciquiles en sus manos, ya al final de la Dictadura e inicio de los años treinta, no tenían razón alguna de ser, en cuanto que eran cuerpos extraños en un contexto diferente y, además, hostil.

Si ya en el momento de la fundación del régimen para el que nacieron, se podía comprobar la insuficiencia del campo social abarcado por ellos, en las fechas que nos ocupan, su desbordamiento e impotencia eran totales.

### I.3.2.- Partidos Republicanos

Durante la Dictadura no se puede considerar que fueran tiempos muy propicios para los partidos republicanos. No obstante, es de destacar el mantenimiento de sus actividades en la clandestinidad y en cada ocasión que existe oportunidad, comienzan a ofrecer señales de vida.

La característica que presentan los partidos republicanos, -- siendo ello una constante a lo largo de su historia, salvo en momentos muy cruciales, es la de su fragmentación y organización particularista alrededor de unas personalidades representativas de sus numerosas tendencias; en tales puntos radica, fundamentalmente, su debilidad.

A pesar de tales inconvenientes internos de los republicanos, será precisamente la época de la Dictadura la que les impulse hacia arriba, como representantes de esa posible alternativa a esa Monarquía que se ve comprometida por el fracaso del Dictador.

Hemos de reconocer, y para ello nos situamos al lado de Martí

nez Cuadrado, que el republicanismo sufrió notables oscilaciones - hasta 1.931; quizá esa inestabilidad, insistimos, puede ser una de sus más claras connotaciones en cuanto que, tales partidos "care- - cían de una verdadera unión programática en cuanto a objetivos polí- - ticos". (26) Pero, por otra parte, como decíamos más arriba, "la - opinión republicana creció durante aquellos años, cuando la dictadu- - ra desveló su estructura integrista y sus pretensiones corporativis- - tas contrarias a la voluntad nacional, convirtiéndose desde 1.927- - 28 en inequívoca solución ante la próxima e ineluctable caída de la monarquía." (27)

La constitución de Alianza Republicana, que data de 1.926, es la primera tendencia aglutinante de las posturas republicanas, sien- - do precisamente durante el período dictatorial cuando se producen - tales agrupaciones. La fecha señalada supondría el inicio de un in- - cremento de la actividad de estos grupos, "en buena parte, gracias a la actividad desplegada por el catedrático José Giral y el tam- - bién profesor Enrique Martí Jara." (28)

Esta Alianza Republicana contará con figuras tan significati- - vas en su seno como las siguientes: Manuel Azaña, que representa y encarna al reciente grupo de Acción Republicana; Manuel Hilario Ayu- - so, del Partido Republicano Federal; Marcelino Domingo, en represen- - tación de los republicanos catalanes; Alejandro Lerroux, del Parti- - do Radical y Roberto Castrovido, en representación de la prensa repu- - blicana.

Gracias al Manifiesto lanzado con esta ocasión, que data de - 26 de febrero de 1.926, podemos conocer el programa alternativo que presentan los republicanos. Tengamos en cuenta lo heterogéneo de - las personas que componen la Alianza, para comprender la moderación de sus propuestas. Estas son:

-Reformas sociales: ciertamente moderadas, pues no tocan nin-

gún tipo de cambios estructurales profundos.

-Régimen ampliamente democrático.

-Autonomía de las regiones.

-Especial sensibilidad al problema de la cultura, no olvidemos las valiosas aportaciones realizadas a aquel grupo por intelectuales de los de mayor prestigio de la época en nuestro país: Machado, Unamuno, Marañón, Leopoldo Alas, Pérez de Ayala, Eduardo Ortega y Gasset, etc...

Insistimos en destacar, con Tuñón de Lara, la heterogeneidad de aquel primer grupo republicano, cuando dice que, : "sin duda, - - aquel conglomerado republicano estaba unido por el objetivo común - de derribar la Monarquía, pero no tenían gran homogeneidad de ideas. Los federales tenían concepciones dieciochescas, mientras que hombres como Azaña y Giral, de aquilatado trabajo intelectual, eran de concepciones más modernas." (29)

Dentro mismamente de la Dictadura, se produce una escisión - producto de un enfrentamiento personal entre Azaña y Marcelino Domingo y Albornoz; no es extraño que ello pasara, en cuanto que el - republicanismo se caracterizaba por su personalismo y poca entidad estructural de cada uno de sus partidos. Así, tal escisión acaecida en 1.929, da lugar a la formación del partido Radical Socialista, - que puede considerarse más avanzado que el núcleo principal del que se desgaja. Tampoco se podía pensar en una muy larga colaboración - de los que permanecen en la Alianza Republicana, debido a las peculiaridades y recelos con que eran mirados Alejandro Lerroux y su - Partido Radical.

Pero necesariamente habría de llegar el momento en que los - vientos sean favorables a nuevas alternativas. Primo de Rivera ha - de abandonar y, con Berenguer, la Dictadura se ha convertido en - - "Dictablanda" pues, aunque no se devuelvan plenamente las garantías

constitucionales, no tiene más remedio que establecer una situación de tolerancia que haga aceptables las condiciones para la necesaria recomposición del sistema, que salve a la Institución Monárquica - que, en aquel momento, es tarea prioritaria. Es de sobra conocido, cómo la solución Berenguer, se está traduciendo como absolutamente ineficaz para reorganizar el viejo sistema y, sobre todo, para recomponer un fuerte partido monárquico. Para salvar a la Corona sólo hay un camino: el sistema verdaderamente representativo de las fuerzas políticas y sociales del país. No habrá para ello más remedio - que permitir la existencia de partidos políticos, lo que implica - que, mientras surgen las dificultades conocidas para los monárquicos y, al abrigo de la necesaria tolerancia, se producirá una reactivación vigorosa de las fuerzas republicanas, además de las representativas de la clase obrera, estudiadas en otro apartado.

La dinámica hubo de ser grande, puesto que, de la desorganización anterior, surgen multitud de nuevas formaciones en este terreno, que, siendo poco más que agrupaciones en torno a personalidades destacadas, se van aglutinando alrededor de los dos bloques fundamentales: republicanismos y monarquismo. Son los primeros los que están ocupando ahora nuestro estudio.

Tal agrupación en torno al republicanismos, así como la proliferación y dispersión anterior de pequeños grupos de esta ideología, hizo que, como ya se apunta desde el Directorio Civil de la etapa Primorriverista, se produjera la tendencia a la constitución de uniones y coaliciones republicanas, ante la no existencia de un partido unitario y fuerte de esta corriente ideológica.

En esta gran actividad y fluidez del republicanismos, se denota una pluralidad de tendencias y procedencias, de las cuales destacan dos como más interesantes y que son omnicomprensivas de todos los grupos. Tales tendencias destacadas tienen su raíz explicativa



en la marcha de los recientes acontecimientos. Se trata de:

- Los Antiguos Partidos Republicanos, que proceden de los - - años de la primera experiencia republicana en nuestro país y ya tuvieron expresión de su poder e influencia en 1.873, y - los.
- Nuevos Partidos Republicanos, que surgen de la deserción de muchos monárquicos, a raíz de la crisis del país en los últimos años de la Monarquía Restaurada y, principalmente, del - desgaste de la Institución derivado de su compromiso y fracaso de la Dictadura.

En cuanto a la composición de los Antiguos Partidos Republicanos, ya habíamos estudiado la constitución de la conocida Alianza Republicana, que era el principal grupo de fuerzas de este viejo republicanismo; principalidad que le viene dada, sobre todo, de la intensidad de su actividad combativa contra el monarquismo y se concretiza, también, en una importante tarea de reorganización.

Es sabido que, dentro de la citada Alianza, el núcleo más activo y que constituye el grupo inicial más homogéneo, es Acción Republicana, bajo el liderazgo de Manuel Azaña, grupo que, "pretendía ser un movimiento orientado exclusivamente a fomentar la unión de las agrupaciones republicanas y, por tanto, sin programa ni jefe."  
(30)

Cuando estamos en esta etapa de transición entre la Dictadura y la República, dada la obligada liberación que se acusa en el ámbito asociativo, el Partido Republicano Radical Socialista, que a finales de la Dictadura había surgido con entidad autónoma, tiene la creciente tendencia hacia la ampliación de las agrupaciones y uniones de los republicanos con las fuerzas obreras, que son una base importante hacia las cuales mirar con el proyecto de sustituir sólidamente al régimen monárquico.

Este Partido Republicano Radical Socialista, llega nuevamente - estamos en mayo de 1.930 - a un acuerdo con la Alianza Republicana para la constitución de una nueva Unión Republicana, del estilo de las que tantas veces se habían negociado entre los republicanos y que, a la altura de los tiempos que analizamos, parecen tener un mayor éxito, debido, como es lógico, a que la coyuntura y condiciones del momento resultan mucho más propicias.

Esta Unión prosigue sus contactos hacia las demás agrupaciones que mantengan el denominador común de su republicanismo; tal es el caso del republicanismo regionalista, derecha republicana e intelectualidad republicana. Tal conexión de fuerzas van a ser los pasos previos dados antes de contactar definitivamente con los socialistas, para la constitución del Pacto de San Sebastián, que sería el embrión del futuro primer Gobierno Provisional de la Segunda República.

Volveremos sobre el tema, pero recogiendo de nuevo el esquema dual, mediante el cual considerábamos dos tendencias republicanas - convergentes en este momento estudiado, recordemos que con el declive de la Dictadura de Primo de Rivera y con la decepción que a muchos sectores del país les causa la decadencia del régimen monárquico y de la propia institución, se produce la aparición de una serie de nuevos republicanos, antiguos monárquicos, cuya procedencia no supone una automática calificación de oportunismo, ya que aportan a veces su seria colaboración al régimen republicano desde sus diversas posiciones ideológicas, defendidas con precisión y, en todo caso, plenamente respetables. Hacen, además, un gran favor a la República al cubrirle un flanco que, por el entusiasmo y a veces jacobinismo de algunos republicanos a lo largo de esta etapa, estaba ciertamente desprotegido y podía costarle la credibilidad al régimen ante ciertos sectores.

Entre estos Nuevos Partidos Republicanos, hemos de considerar especialmente a la Derecha Liberal Republicana, cuyos artífices fundamentales son D. Niceto Alcalá Zamora, figura principalísima y, - sin duda la más importante del grupo, a recordársele su discurso de Valencia de 13 de abril de 1.930, donde se pronuncia a favor de una República conservadora y viable, pero donde, específicamente, proclama su republicanismo.

Junto al citado personaje, es también de destacar D. Miguel - Maura quien, igualmente partidario de un régimen democrático liberal, había llegado a la conclusión de que resultaba absolutamente - inviable dentro de los cauces de la vieja Monarquía, dentro de la - cual ni siquiera estaba garantizado el orden social. Su público pro nunciamiento favorable a la República se realizó en febrero de - - 1.930, en una conferencia celebrada en San Sebastián.

Esta Derecha Republicana: "Reiteraba sus respetos por los sen timientos religiosos, pero propugnaba la separación de la Iglesia - del Estado, a ser posible en forma gradual y concordada." (31)

Así pues, guiada su labor por la honradez, ahí está la figura de Alcalá Zamora tanto tiempo situado en la más Alta Magistratura - republicana; siendo importantes, de esta Derecha Republicana, tanto su preocupación por una solución moderada y racional al problema re ligioso, como su preocupación por el mantenimiento del orden, tema éste que sabían vital para el futuro de la República. Al fin y al - cabo, se trataba de la representación de la derecha, pero una derecha moderna capaz de adaptarse al progreso de los tiempos y defender sus típicos intereses por la vía democrática y parlamentaria - que exige una racionalidad elemental.

No menor importancia tiene la movilización, también novedosa, favorable a la República que realizan los intelectuales, constituyendo un grupo de gran influencia, denominado Agrupación al Servi-

cio de la República, el 10 de febrero de 1.931, que realizó severas críticas a la decadente Institución Monárquica. Son de sobra conocidas las figuras de gran talla intelectual que integraron este grupo, destaquemos a los Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, etc. y que se hallan próximos a las posturas de Alianza Republicana, aunque consideramos que, por su peculiaridad, merecían ser considerados de forma individualizada respecto de los partidos políticos convencionales. Hubo posteriormente rectificaciones y abandonos en este grupo. En nuestra opinión, es perfectamente explicable, por cuanto que el espíritu crítico e inquieto inherente al intelectual, es difícilmente estable en cuanto a su encuadramiento orgánico y partidista; además, la propia República decepcionó muchas esperanzas puestas en ella, su evolución fué bien diferente a como se había pensado por muchos en sus inicios.

Esta dinámica asociación de intelectuales apostó por la República; evidentemente era la esperanza frente a su imposible compatibilidad con una Monarquía identificada con la Dictadura; luego, ya vendrían los tiempos de rectificar sus posturas. En sus inicios, el impulso de estos republicanos fué vital para los albores de la República.

Hará falta hacer una mención especial, dentro de los partidos que nos ocupan (los Republicanos), de aquellos que tienen la connotación común de su ámbito regionalista.

Estos Partidos Regionalistas, no todos los cuales fueron republicanos pero sí en su mayoría, sufrieron una persecución especialmente rigurosa durante la Dictadura. Es conocido que, para el Dictador Primo de Rivera, la salvaguarda de la unidad de la Patria a cualquier precio, fué un principio fundamental de su actuación. La dura persecución y combate, fué uno de esos precios que estuvo dispuesto a imponer a estos partidos.

Decíamos que, al inicio del período republicano, no todos los partidos regionalistas fueron decididamente republicanos, sí lo fueron, inequívocamente, los regionalistas catalanes y los gallegos, - más tardaron en serlo los vascos, aunque finalmente también lo fueron.

El caso concreto de Cataluña fué producto de una mutación. Sabida es la colaboración de Cambó y Ventosa con la Monarquía y con la Dictadura, la Lliga Regionalista había sido un partido ciertamente representativo de los intereses regionalistas catalanes hasta entonces que, para satisfacer sus intereses económicos de tipo burgués, siempre les había sido factible su conexión y entendimiento con el gobierno central.

El final de la Dictadura supone el término de esta situación. Muy bien dirá García Escudero: "Partido de la alta burguesía, la Lliga había consolidado inequívocamente esta característica, y la de españolista, a lo largo de una cadena de intervenciones (julio de 1.917, participación en el gobierno nacional; actitud ante el Golpe de Estado de 1.923; participación en los Gobiernos de Berenguer y Aznar) y carecía de crédito ante unas clases medias, cuyo izquierdismo prevalecía en ellas sobre el denominador común del Catalanismo. Por eso, el partido portavoz de Cataluña en la Segunda República, no será la Lliga, sino la Esquerra." (32)

Decíamos que el regionalismo Gallego está a favor de la República desde los inicios de ella; su principal organización fué la O.R.G.A., que agrupa al azañismo gallego bajo el liderazgo de Casares Quiroga, además de los nacionalistas que propugnan la autonomía de Galicia. Será precisamente el año 1.930, el que contemple esta reactivación del Nacionalismo Gallego.

El Nacionalismo Vasco, por otro lado, sufrió divisiones importantes durante las vísperas de la Dictadura de Primo de Rivera y,

llegado 1.930 con su actividad reorganizadora y dinámica para llenar el vacío post-dictatorial, se encontró con poca capacidad de -- reacción para ponerse al frente de la opinión vasca y conseguir su movilización. El proceso de reunificación se comienza a realizar -- desde los primeros meses de la década de los años treinta, bajo la advocación de la doctrina nacionalista de Sabino Arana y con la denominación de Partido Nacionalista Vasco. Tal reunificación no será completa, al producirse con escaso margen de tiempo la aparición de A.N.V. (Acción Nacionalista Vasca).

No obstante, la principal de aquellas fuerzas, el P.N.V. propugna un planteamiento nacionalista, con el añadido de una fuerte -- presencia de contenido social-católico y un progresivo, si no inmediato, entendimiento con la República.

Conocida con aproximación la situación de los grupos republicanos al final de la Dictadura de Primo de Rivera, hemos de considerar que, producto de la dinámica situación y del apogeo de tales -- grupos en su enfrentamiento y lucha contra la Monarquía para conseguir su recambio, se produce una gran tendencia hacia su fortalecimiento, vía agrupaciones y uniones, dada su endebles individual.

Así se llega a la conformación del llamado "Pacto de San Sebastián", que sería decisivo a la hora de poder presentar una alternativa de gobierno republicano, que supliera al monárquico en el momento de su esperada caída.

No sostendremos que el Pacto de San Sebastián fuera, única y exclusivamente, firmado por partidos de los que en este epígrafe estamos considerando como republicanos, pero sí hemos de afirmar que tales partidos fueron el núcleo original de este Pacto y que, además, fué la tendencia republicana sostenida por tales partidos, la principal beneficiada del Pacto al conseguir, antes que nada, que -- supusiera una alternativa de Gobierno republicano al vacío que pre-

visiblemente quedaría en el poder con la caída de la Monarquía de Alfonso XIII, con motivo de las elecciones municipales celebradas en toda España en abril de 1.931. Son tales razones las que nos mueven a considerar el Pacto de San Sebastián incluido precisamente en este epígrafe de nuestro trabajo y no en otro, ya que, en un principio, la participación de las fuerzas obreras ciertamente no existió, pues, como acertadamente sostiene Carr: "La debilidad de la alianza revolucionaria establecida por el Pacto de San Sebastián es tribaba en la incertidumbre y la tenuidad de sus relaciones con los partidos obreros." (33). Recordando posteriormente la asistencia de Indalecio Prieto a título meramente personal.

No dejó de presentar problemas la constitución del Pacto de San Sebastián puesto que, como ya hemos citado sobradamente, es muy variada la procedencia de los propios grupos republicanos que allí concurren, con lo que ello conlleva de diferencias ideológicas y de planteamientos, aparte del nexo común de su republicanismo; sobre todo, a la hora de establecer un programa de acción común, ampliable lo suficiente, como para ser viable como programa de un Gobierno Provisional republicano alternativo.

Digamos, ante todo, que de la reunión celebrada en la tarde del 17 de agosto de 1.930, en el Círculo Republicano de San Sebastián, es la que origina el acuerdo al que nos referimos y que ha sido denominado para la posteridad con el citado nombre.

A tal reunión asistieron, bajo la presidencia del Sr. Asiáin, a la sazón presidente de la citada institución, los siguientes representantes:

Alejandro Lerroux, por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Alvaro de Albornoz y Angel Galarza, por el Partido Radical Socialista; Manuel Azaña, por Acción Republicana; Santiago Casares Quiroga, por la O.R.G.A.; Manuel Carrasco Formiguera, por "Acció Ca

talana"; Matías Mallol, por "Acció Republicana de Catalunya"; J. Aiguadé por "Estat Catalá"; Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, por Derecha Liberal Republicana. Así como los socialistas Indalecio - - Prieto y Fernando de los Ríos a título personal, como ya indicábamos anteriormente. Fueron invitados a aquella reunión, Eduardo Ortega y Gasset y Felipe Sánchez Román. (34)

Había una serie de problemas planteados que requerían un importante nivel de negociaciones previas. No se trataba simplemente de la constitución de una nueva unión republicana, de las que se habían prodigado hasta entonces con encomiable dinamismo; las dificultades eran mayores. Hombres del prestigio republicano tradicional - de un Lerroux, aún siendo representante del viejo republicanismo, - no sería del todo apto para coordinar y presidir aquel organismo, - pues había una serie de contenciosos pendientes, como su aversión a la Iglesia, al regionalismo catalanista y a los partidos obreros, - que le hacían poco apto para tales funciones.

Será Manuel Azaña, el más adecuado para aquella tarea de coordinación de intereses. Entre ellos, era fundamental la resolución - del problema autonómico para la próxima y, aún hipotética, salida - republicana que se preparaba, siendo necesario que aquella República acordase la concesión del Estatuto de Autonomía para los Catalanes. Asimismo, era necesario el apoyo de las fuerzas obreras a - - aquel proyecto de régimen futuro, puesto que, la República, como - luego se demostrará, no contaba con unas fuerzas sociales adecuadas, lo suficientemente estables, de nivel medio y preparadas, para servir de soporte a este nuevo proyecto. Fué la apertura hacia los Socialistas, como partido unitario más fuerte e importante del país en aquellos años, la única salida que haría viable un apoyo de masas a la República. Los contactos tomados en el Pacto de San Sebastián, aunque realizados con representantes del socialismo simplemente a título personal, serían fundamentales en tal sentido.



Igualmente era necesario establecer acuerdos y apoyos por la derecha, para hacer aceptable este nuevo proyecto a ese importante e influyente núcleo social, al menos a alguno de sus sectores. Estaba, fundamentalmente, en este sentido presente el problema religioso, cuyo arraigo en importantes sectores moderados de la sociedad española, igualmente aprovechables para su integración por el nuevo modelo, hacía que se tomara bien en consideración. En este tema, al posibilitar la aceptación de la República por esos sectores citados, fué decisiva la presencia de Niceto Alcalá Zamora, aún a costa de poner elevado precio a su participación, pues sería él el futuro Presidente de la República, precio de pago obligado ante la recompensa del aumento de la credibilidad republicana a sectores cuyo poder e intereses, hacían necesaria su adhesión. Además, esta figura histórica imprimiría un sentido de moderación y de orden a la República, sin los cuales no hubiera sido viable de partida.

Así pues, el Pacto de San Sebastián dejó resueltos tres problemas fundamentales para la eventual viabilidad republicana que, decididamente, se habían propuesto hacer realidad los allí reunidos, a la luz de los acontecimientos del país; aquellos que, como dice Tuñón, se habían propuesto "encontrar una fórmula para coordinar los esfuerzos de todos los que se proponían un cambio de régimen." (35) Tales problemas fueron:

La garantía de estabilidad, orden y, por ende, de aceptación de sectores de la derecha liberal. Tema que, en el proyecto, se saldó con el importante nombramiento de Alcalá Zamora.

La aceptación de la resolución del problema autonomista con la concesión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo que su puso el apoyo de las fuerzas de esta tendencia.

Finalmente, el principio de acuerdo con los Socialistas, que permitiría el apoyo de estos y sería un no menos importante paso para la viabilidad republicana, dado su potencial. Tal -

apoyo se ratificó con la reunión de la Ejecutiva del PSOE, el 20 de octubre de 1.930, que decidió la participación en el futuro Gobierno Provisional de la República, con tres ministros.

Tenemos, por lo tanto, las bases de partida de lo que luego - evolucionaría con toda rapidez hacia la consolidación de una alternativa republicana viable.

Podemos sostener, con muchos de los autores consultados sobre la materia que, además del carácter sistematizador y organizativo - del Pacto de San Sebastián en cuanto a propósitos y estructuras, tu vo un posterior desarrollo en dos sentidos diferentes: uno político y el otro revolucionario.

Desde el punto de vista político, su mayor importancia posterior radica en la cristalización de un comité unificador que, pocos meses después, en octubre de aquel mismo año, se iba a convertir, - interina pero formalmente, en el Primer Gobierno Provisional Republicano, presidido por D. Niceto Alcalá Zamora y que tendría exacta mente la composición ya conocida, pero que relacionamos a continuación:

Presidencia: N. Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana).

Estado: Alejandro Lerroux (Partido Radical).

Justicia: Fernando de los Ríos (Partido Socialista).

Hacienda: Indalecio Prieto (Partido Socialista).

Guerra: Manuel Azaña (Acción Republicana).

Marina: S. Casares Quiroga (O.R.G.A.).

Gobernación: Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana).

Instrucción Pública: Marcelino Domingo (Partido Radical Socialista).

Fomento: Alvaro de Albornoz (Partido Radical Socialista).

Trabajo: Francisco Largo Caballero (Partido Socialista).

Economía: Luis Nicolau d'Olwer (Acción Catalana).

Comunicaciones: Diego Martínez Barrio (Partido Radical).

Con tal composición entra en funcionamiento institucional, te niéndose que hacer cargo del primer gobierno de esta República en - el momento mismo de su proclamación.

Antes de tales acontecimientos, la misión de este Gobierno en la sombra, ayudada por el clima liberalizador que, progresiva e - - inexorablemente, se va produciendo durante los últimos meses del go bierno Berenguer, contribuye a crear un estado de opinión, va ganan do un prestigio de tal manera que, mediante la propaganda, mítines y campaña de prensa, "logrará arruinar el prestigio de la Monar- quía". (36)

Al margen de esa línea política que se desprende de los Acuer dos de San Sebastián, se desarrolla igualmente una línea revolucio- naria que va, desde el movimiento huelguístico y de manifestacio- nes, hasta el intento realizado en Jaca, el 12 de diciembre de -- 1.930, de sublevación militar, por los Capitanes Fermín Galán, dele gado del Gobierno Provisional y García Hernández. Es sabido que el fracaso de esta intentona cuesta la vida a sus principales protago- nistas, que son fusilados de inmediato.

Tampoco se puede denominar como triunfo del gobierno a tales hechos, puesto que han servido para convertir a los citados Capita- nes, en los dos primeros mártires de la República y serán elementos aglutinadores y cosechadores de nuevas adhesiones.

La situación, estamos en el Gobierno del General Berenguer, - se presenta de tal manera que parece perfectamente clara la inviabi lidad del proceso intentado, de vuelta a la normalidad anterior a - la Dictadura. Así las cosas, Berenguer ha de renunciar; porque lo - que evidentemente mantiene el consenso de ideologías e intereses de la derecha, es la necesidad de mantener la Corona y, para tal propó

sito, la situación está muy oscura.

Sube al Gobierno el Almirante Aznar, por un corto período de tiempo, bajo el patrocinio y dirigismo político de Romanones, con la misión casi desesperada de lograr cerrar filas en torno a la Monarquía junto con aquellos sectores que todavía sean fieles; sectores que, dicho sea de paso, mantienen su fidelidad a la Institución hasta los últimos momentos, por considerar que será este y no otro Régimen, el más representativo y defensor de sus intereses, máxime viendo los apoyos merced a los cuales va a ser posible la República.

De ello se deduce que la liberalización que necesariamente hubo de propiciar Aznar para la consecución de tales fines, favorece todos los intentos de organización republicana, que se venían observando con mayor intensidad en estos últimos meses. Una de aquellas medidas, el regreso de Maciá, permite que bajo sus auspicios, se produzca la creación de la Izquierda Republicana de Cataluña, constituyendo la importante "Esquerra".

La medida fundamental del Almirante Aznar, para los propósitos que nos ocupan, es la de la escalonada convocatoria de elecciones, comenzando por las locales que, según su criterio y el de sus allegados, podrían ser más favorables a la Monarquía. Los resultados son de sobra conocidos y, tras la primera tanda electoral de ámbito municipal, el 12 de abril, sucede la proclamación de la República, el 14.

### I.3.3.- Partidos Obreros

Cuando se trata de hablar de partidos obreros en la época que nos ocupa, debemos efectuar una matización aclaratoria previa: se produce dentro de la clase obrera la existencia de tres grandes grupos: Socialistas, Anarquistas y Comunistas. Los Anarquistas habrán de ser objeto de estudio separado en el apartado correspondiente a

los sindicatos, puesto que es bien sabida su doctrina negativa al -  
politicismo partidista, quedando encuadrados, con diferentes alter-  
nativas y tendencias, en la corriente anarcosindicalista, principal-  
mente representada por la C.N.T..

Los Comunistas son de reciente aparición como partido espa- -  
ñol, ya que, su razón de existir, radica en la aparición de una Ter-  
cera Internacional, que nace como consecuencia de la victoria revo-  
lucionaria Bolchevique en la Unión Soviética y que, bajo los auspi-  
cios de Lenin, fomenta la agrupación internacional en torno suyo, -  
de aquellos partidos que compartan su ideología y metodología.

El Partido Socialista Obrero Español, ve aparecer en su seno  
las discusiones tendentes a clarificar la postura a seguir, mante-  
nerse en la IIª Internacional (Socialista) o adherirse a la nueva -  
de matiz comunista. El Congreso del PSOE celebrado en 1.919 decide,  
con sus posiciones divididas en dos partes casi iguales, la perma-  
nencia en la Segunda Internacional; no así las Juventudes Socialis-  
tas, que deciden adoptar el modelo de la Tercera, en el año 1.920,  
convirtiéndose en Partido Comunista de España el 15 de abril de - -  
aquel año, fortaleciéndose posteriormente con la unión de aquellos  
Socialistas que se escinden en 1.921 del partido para seguir la mis-  
ma línea de las Juventudes.

Este Partido de los comunistas españoles será la tercera de -  
las fuerzas obreras españolas aunque, en rigor, no se le puede otor-  
gar mas que un relativo peso específico en la sociedad española has-  
ta bien entrada la República e, incluso, comenzada la Guerra Civil.  
No obstante, forman siempre un reducido pero cohesionado grupo, ex-  
cesivamente fiel y vinculado a la doctrina y directrices de la dis-  
ciplina soviética.

Durante la Dictadura Primorriverista, el PCE añade a su esca-  
sa entidad, la forma dura en que es combatido, lo cual corta las po

sibilidades de su desarrollo inmediato, pero le va imprimiendo el carácter con que se contemplará posteriormente. Su propia radicalidad e intransigencia, hacen que aquel período excepcional no le fuera demasiado propicio. Además, es un partido cuya escasa entidad y extrema radicalidad, no le permite estar en los acuerdos que ponen fin a la Dictadura y que colaboran al advenimiento de la República. No obstante, en su IIIº Congreso, que se celebra en Francia durante el año 1.929, "estimó que el país se encontraba ante la perspectiva de una revolución democrático-burguesa, etapa indispensable antes de llegar al socialismo." (37)

La tendencia demostrada en alguna ocasión, a lo largo de sus primeros años de constitución en España, fué la de capitalizar como partido y en su favor al movimiento sindical Cenetista lo cual, como es sabido, no fué posible, quedando sin cobertura sindical a la hora de enfrentarse con la Dictadura, como habían hecho los socialistas. Al quedar meramente como partido político, sufrió la consabida persecución por parte de Primo de Rivera, manteniéndose en la clandestinidad y en el exilio sus líderes más destacados.

La caída de la Dictadura y la liberación acaecida en las etapas Berenguer y Aznar, sirvió para otorgar una mayor libertad de movimientos e implantación a los comunistas que, sin embargo, no tuvieron un gran arraigo, manteniéndose como una reducida minoría aún después de que les afectara la amnistía que concede Berenguer el 5 de febrero de 1.930.

De las tres tendencias que se manifiestan en el seno de la clase obrera española, a la altura de la Dictadura de Primo de Rivera y meses previos a la Segunda República, son los socialistas el grupo que, como partido, presenta mayor entidad, organización y consistencia.

Será precisamente durante la Dictadura, años 1.928-1.929, en

la etapa del Directorio Civil, cuando el PSOE experimenta un importante despliegue en importancia y afiliación.

No obstante, desde la proclamación del primorriverismo, las tendencias predominantes en el socialismo español, son las tendentes al aprovechamiento de las posibilidades de actuación que les ofrezca el régimen; táctica oportunista, que les cuesta en los primeros años del Directorio Militar un importante receso en su militancia. Están en esta línea de colaboración figuras del socialismo español, como los Besteiro, Largo Caballero, Saborit... No por ello deja de mantenerse una importante oposición a esta línea, representando esta postura figuras no menos importantes de la directiva socialista, como son Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Oposición que cuenta con el apoyo de comunistas y cenetistas, ambos grupos marginados y perseguidos por el Dictador.

Tal postura de distante colaboración con la Dictadura, así como la permanencia en la legalidad de la central sindical tan identificada con los socialistas, como era la Unión General de Trabajadores, hace que la organización y estructura del partido, así como sus cuadros, se mantengan unidos y en funcionamiento a lo largo del período de excepción, lo cual les supone una gran ventaja si se les compara con los demás partidos políticos, perseguidos y en suspenso, si no desarticulados, durante aquellos años. Así pues, el PSOE sobrevive organizadamente a la Dictadura.

Durante los últimos años de tal Régimen, el PSOE cambia sus tácticas y planteamientos; surgen tales modificaciones de los acuerdos tomados por los Congresos respectivos del partido (XII Congreso) y de la UGT (XVI) que ya, en primer lugar, no aceptan la propuesta de participación que se les ofrece ante el intento de organización de la Asamblea Nacional por parte del Dictador, dado el nivel de descomposición que ya se dejaba sentir sobre el régimen. Entendemos que, llegada esa coyuntura, hubiera sido de nefastas conse

cuencias para el partido su mantenimiento en la colaboración con la Dictadura, ya que, lejos de haber colaborado a enderezar la suerte de la Monarquía, constituyéndose en su alternativa de oposición, posibilidad apuntada por García Escudero en su obra (38) y con lo que nosotros discrepamos, pensamos que el Partido Socialista hubiera - perdido su credibilidad y hubiera entrado en una profunda crisis, - de imprevisibles consecuencias, si se tiene en cuenta que no habían pasado muchos años desde la discusión y escisión en su seno, de la línea favorable a la IIIª Internacional. De tal modo que, quizá, el PSOE hubiera hipotecado su historia y trayectoria para unir su suerte, tarde o temprano, a la que corrió poco después la Dictadura y - la propia Monarquía.

Así pues, se acusa, desde 1.929, la separación del socialismo español de su tendencia colaboracionista con la Dictadura, inclinándose poco después a una solución republicana.

No obstante, y dado que es constante la manifestación de diferentes tendencias dentro del Partido Socialista, se siguen produciendo diferentes visiones de la situación y suscitando dudas respecto a su comportamiento en la recta final que conduciría a la proclamación de la República.

En este sentido, estamos con Artola al afirmar que la problemática que se plantea al PSOE a la caída del Dictador es doble: de una parte, ha de pronunciarse claramente y decidir cuál será su posición respecto al tema de la colaboración que le ofrecen los partidos burgueses republicanos de cara al derrocamiento de la Monarquía; de otro lado, tendrá que hacer frente como partido más cualificado de la clase obrera, a la importante demanda de afiliación que se le presente al final de un período difícil para el asociacionismo obrero, en el que la afiliación sindical ha disminuído y en el que los más jóvenes ni siquiera han llegado a integrarse en agrupación política alguna. (39)



Insistimos en el hecho fundamental de la duda que pesa sobre el partido, de recoger o no los ofrecimientos de los partidos burgueses para colaborar en el advenimiento de la República y, si se puede sostener que están claramente en contra del Gobierno Berenguer y de la situación de la decadencia monárquica, hasta la segunda mitad del año treinta no se resuelve la duda. Piénsese que, hasta tal punto esto es así, que la asistencia de los delegados a la reunión constitutiva del Pacto de San Sebastián, entre ellos Indalecio Prieto, se produce a título meramente personal, entre los que sostenían la tesis, dentro del partido, de la colaboración. Además, y sólo por una exigua minoría, tardan dos meses en aceptar aquel Pacto, decisión que no se tomaría hasta el mes de octubre en una reunión en la que se decide la colaboración con las fuerzas republicanas, eligiendo para el Gobierno Provisional a Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.

Realmente, el planteamiento de cara a la aceptación o no de las propuestas republicanas, contempla dos posturas fundamentales: La que propugna la no conveniencia de la colaboración ministerial activa, para que el desarrollo del régimen burgués republicano se potencie de manera autónoma y el socialismo tenga las manos libres para desarrollarse y potenciarse, sin ningún tipo de compromiso activo. Es la postura de Julián Besteiro, que resultó minoritaria e incluso le acabó costando la presidencia de la UGT y PSOE, que ocupaba hasta entonces. Por otro lado, está la corriente mayoritaria, que se pronuncia por la colaboración ministerial con la República, para lo cual será necesario, de forma transitoria, renunciar a alguno de los principios socialistas para apoyar y hacer viable el sistema democrático republicano. Esta será la postura defendida por I. Prieto, L. Caballero, de los Ríos, etc. y, como es sabido, la triunfante.

Quedan perfectamente claras las posturas que se reflejan en -

el socialismo español al final de la Dictadura y principio de los - años treinta. Desde poco después de la aceptación del Pacto de San Sebastián, el PSOE actuará en apoyo de las decisiones políticas que se adopten por el Gobierno Provisional, mediante el apoyo del movimiento huelguístico que, de forma activa, se repite aquellos meses y aportando la única organización de masas con que realmente podría contar la República.

Pero queremos reflejar la opinión que nos merece un tema repetidamente tratado y queremos hacerlo dentro de este contexto previo a la proclamación de la República.

A veces se ha comentado el carácter socialista de la República española o de su legislación. Tiempo tendremos de analizar los - principales puntos del marco legislativo que desarrolló el primero de los bienios republicanos, en que estuvo más presente el socialismo en el gobierno. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar ahora es el hecho de que el Gobierno Provisional y los acuerdos salidos de la Conjunción Republicano-Socialista y del Pacto de San Sebastián, contemplaban una participación del PSOE, como partícipe y colaborador de un gobierno republicano, cuyo carácter y programa me recen la calificación de burgueses, democráticos y parlamentarios; participación socialista que se realiza, al menos en aquel primer - momento en que se produce el punto de partida del Pacto, a sabiendas de las renunciaciones y recortes que supondría para su programa, con la finalidad de potenciar la vía hacia una República que aportara - esa revolución liberal democrática y burguesa que, a la altura del primer tercio de nuestro siglo, aún no se había definitivamente con solidado en nuestro país.

Es evidente que, con el paso de los años y, a medida que evolucionaron los acontecimientos, no quedó exento el socialismo de - avances y evoluciones hacia otros derroteros, pero tiempo habrá de

estudiar en qué dirección se produjo tal evolución y movida por qué circunstancias. En todo caso, lo que nos interesa destacar en este momento es que, al inicio del período republicano, el PSOE, primer partido español en cuanto a estructura y potencia por su nivel de afiliación, se dedicó por entero al empeño de la consolidación de un régimen republicano liberal, democrático y parlamentario, aún a costa de renunciar a sus postulados del socialismo marxista. Por en de, no se puede sostener su protagonismo en las reuniones que prepa ran la constitución de un Gobierno Provisional para la República, - sino su participación secundaria y, en todo caso, contestada desde su seno y con diferenciadas tendencias sobre tal particular, entre los miembros más destacados de su dirección.

Se inicia 1.931. Se plantea por el Gabinete Aznar, recientemente constituido, la convocatoria de un proceso electoral, que se celebra bajo un clima y condiciones lo suficientemente aceptables, para la libre participación en él. El PSOE aborda el proceso electo ral y se aproxima el momento de su mayor esplendor histórico, al - compartir las tareas de gobierno de la República Española, que aho ra se inicia.

## CAPITULO I

## Relación de Citas

- [illegible]

- (22) José M<sup>a</sup> G<sup>a</sup> ESCUDERO: op. cit., pág. 791.
- (23) " " " " " " " " " , pág. 833.
- (24) " " " " " " " " " , pág. 785.
- (25) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 572.
- (26) Miguel MARTINEZ CUADRADO: op. cit., pág. 461.
- (27) " " " " " " " " " , pág. 464.
- (28) Manuel TUÑON DE LARA: "La España del Siglo XX", pág. 169.
- (29) " " " " " " " " " " " " " , pág. 170.
- (30) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 577.
- (31) " " " " " " " " , pág. 577.
- (32) José M<sup>a</sup> G<sup>a</sup> ESCUDERO: op. cit., pág. 938.
- (33) Raymond CARR: op. cit., pág. 571.
- (34) Manuel TUÑON DE LARA: "La España del Siglo XX" pág. 199.
- (35) " " " " " " " " " " " " " pág. 199.
- (36) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 579.
- (37) Manuel TUÑON DE LARA: "La España del Siglo XX", pág. 169.
- (38) José M<sup>a</sup> G<sup>a</sup> ESCUDERO: op. cit.,
- (39) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 587.

C A P I T U L O   I   I

LAS FUERZAS SOCIALES, LAS FUERZAS ECONOMICAS  
Y LOS GRUPOS DE PRESION AL FINAL  
DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

## CAPITULO II

LAS FUERZAS SOCIALES, LAS FUERZAS ECONOMICAS  
Y LOS GRUPOS DE PRESION  
AL FINAL DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERAII.1.- LOS SINDICATOS

Al abordar la problemática que encierra este capítulo, vamos a hacerlo considerando primeramente las fuerzas sindicales. Es sabido, que la importancia que tienen estas fuerzas a lo largo de esta etapa que abordamos, se debe a dos cuestiones fundamentales:

De una parte, porque son verdaderas organizaciones de masas - que, en sí, tienen una importancia fundamental en la vida política y social de un país. Puede sostenerse, a la vista de las cifras, - que el grado de afiliación a las centrales sindicales principales, su potencial de convocatoria y aglutinación de fuerzas sociales, su pera casi siempre al de los partidos políticos importantes, próximos a aquellas en ideología y organización.

De otro lado, será ciertamente fundamental el estudio de estas organizaciones, durante el período de la dictadura primorriverista que ahora nos ocupa, ya que fué a través de ellas como se realizó exclusivamente la participación de las fuerzas socio-políticas en los asuntos públicos, al haber sido expresamente prohibida la actuación y actividades de los partidos políticos como tales, e inclusive, habiéndose mantenido en muchos casos la estructura organizativa de estos a través de los sindicatos.

Durante esta etapa del régimen primorriverista, así como durante la etapa de transición entre este y la proclamación de la República, que igualmente nos interesa y es objeto de análisis en este capítulo, podremos considerar principalmente tres grupos de organizaciones sindicales, al margen de alguna otra de menor entidad e interés insignificante, que tienen mayor importancia y llevan la ma

por carga de protagonismo en todos los asuntos estudiados. Se trata del sindicalismo socialista, representado por la central sindical - Unión General de Trabajadores (UGT), del anarcosindicalismo, cuya - expresión organizativa más importante se halla en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); así como del sindicalismo que genéricamente podemos agrupar y estudiar bajo la denominación de Católico, que tuvo una importancia y entidad bastante menor que la de los dos grupos anteriores, indiscutibles protagonistas de la época, y teniendo un alcance más limitado que el de estos en cuanto a las - áreas geográficas en las que se extiende.

Otros sindicatos merecerán ser citados a lo largo de la época, pero al ser de incomparable menor entidad, habrán de ser considerados sólo tangencialmente en el momento en que el desarrollo argumental de este y posteriores capítulos lo hagan aconsejable y necesario.

Ni que decir tiene que la importancia de las organizaciones - sindicales durante la Dictadura de Primo de Rivera se aumenta proporcionalmente en la medida en que ha disminuído la entidad e implantación legal de los partidos políticos, que pasan a ser considerados como los enemigos a batir por el régimen que surge en septiembre de 1.923, como causantes de los males de la Monarquía surgida - de la Restauración, al menos en la opinión de Primo de Rivera. Por lo tanto, no será raro considerar y contemplar la infraestructura - ideológica y organizativa de partidos tan importantes y de peso en la época, como el Partido Socialista Obrero Español, plasmada en organizaciones sindicales afines, como la Unión General de Trabajadores, al verse coartada en cierta medida su posibilidad de vida legal.

A modo de indicación metodológica, diremos que el estudio del presente capítulo relativo a las organizaciones sindicales, será estudiado mediante la división en tres bloques fundamentales. De un -



lado estudiaremos, y este será el primer subapartado, el sindicalismo de tinte socialista, a través de la importante y mayoritaria en la época, Unión General de Trabajadores (UGT). Seguiremos con el exponente del anarcosindicalismo español, la Confederación Nacional - del Trabajo (CNT), influyente sindicato en todo momento, a pesar de que la etapa de la Dictadura fuera poco propicia para su desarrollo, debido a la prohibición, clandestinidad y consiguiente desorganización que todo ello causara en su seno. Finalmente, bajo el subapartado relativo al sindicalismo católico, estudiaremos algunas importantes centrales, entre las que destaca alguna de ámbito territorial regional, como la de trabajadores vascos, Sindicato de Obreros Vascos (SOV).

Previamente, insistiremos en que para abordar el estudio de - las fuerzas sindicales durante y al final de la Dictadura de Primo de Rivera, así como al inicio de los años treinta, habremos de tener en cuenta la especial situación que para la vida social y política española trajo consigo el establecimiento del régimen dictatorial. Si puede sostenerse que la evolución de los movimientos sociales españoles a lo largo del siglo XX, se había ido acelerando como consecuencia tanto de factores internos, como de factores externos, la llegada del Dictador y la supresión de numerosas libertades y garantías, hizo que se produjese un considerable cambio de tácticas y de ritmos en el movimiento obrero español.

Aparte de ello, la relativamente positiva coyuntura económica que se produjo en España acompañando la entrada en el poder del Dictador, hizo que disminuyese asimismo la actividad reivindicativa - del movimiento obrero, representado por sus fuerzas sindicales más potentes.

Si ya hemos citado en otro lugar de este mismo trabajo que, a medida que iba mostrando insuficiente representatividad, el sistema canovista de la Restauración fué contemplando la aparición a extra-

muros suyos de unas cada vez más poderosas fuerzas sociales y políticas, ahí está el republicanismo para justificar este aserto, igualmente se puede sostener que el movimiento socialista va hacia arriba, contando ya en 1.909 el PSOE con un acta de diputado para su máximo dirigente histórico y fundador, Pablo Iglesias.

La crisis mundial aparecida como consecuencia de la primera gran contienda armada de nuestro siglo, afectó a España con unas cifras ciertamente alarmantes del nivel de desempleo y tasa de inflación, provocando las reacciones huelguísticas y pre-revolucionarias del trienio 1.916-18, en las que participan, a veces aliada y coordinadamente los dos más importantes sindicatos españoles de la época: los citados anarcosindicalista y socialista, respectivamente, - CNT y UGT.

Como decíamos, la llegada del Dictador coincide con una mejora de las condiciones económicas del país, y por ende, con un descenso natural del nivel de presión y combatividad de la clase obrera. Pero, naturalmente, el descenso de actividad reivindicativa y sindical, también se debe al proceso represivo que conlleva la instauración de la Dictadura.

Llegado el momento del acceso al poder del General Primo de Rivera, la situación de las diversas centrales sindicales, concretamente la de las dos más importantes, es bien diferente entre sí y respecto de las otras centrales de importancia menor que igualmente habremos de tratar y que citamos más arriba en el presente capítulo.

Con la Dictadura, contra lo que podría pensarse, la suerte de las dos centrales mayoritarias es radicalmente distinta pues, mientras la CNT es perseguida y prohibida habiendo de pasar a la clandestinidad y al exilio sus dirigentes principales, la UGT mantiene su vida legal e incluso tiene relaciones de colaboración con el Dictador, actitud "no exenta de ambigüedad", según reconoce Tuñón de -

Lara; aparte de que tiene la misión que cumplir de ocupar el espacio del Partido Socialista Obrero Español que, como todos los partidos políticos, es objetivo principal de los ataques del dictador, - aunque, hay que reconocer que su labor más dura fué realizada en - contra de los llamados "Clásicos Partidos de la Restauración", el - Conservador y el Liberal, que ya no se recuperarían jamás del emba- te, prueba evidente de su debilidad estructural y período de deca- dencia por el que atra-viesan.

Decíamos que lo pensable era que el trato recibido por las - centrales sindicales mayoritarias, de clase, específicamente obre- ras, durante la Dictadura hubiera sido semejante. Mas ello no fué - así y se debió, tanto a causas relativas a las propias centrales in- trínsecamente, como al distinto criterio y consideración de la Dic- tadura respecto de una y de otra.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) pasó automática- mente a una situación de semiclandestinidad al darse el golpe del - 13 de septiembre de 1.923, pero es que la propia central al año si- guiente, en 1.924, se ratifica nítidamente en su línea ácrata, ce- rrando toda posibilidad de ser aceptada en la estrecha vía legal - que ofrecía el sistema primorriverista, es en tal año en el que, de- finitivamente, queda esta central fuera de la ley, iniciándose para su organización y para sus miembros más destacados una etapa espe- cialmente dura y difícil, ya que, al ser declarado el estado de gue- rra en todo el territorio nacional, "fueron clausurados sus locales sindicales, suspendido su diario y detenidos una gran mayoría de - sus dirigentes" (1)

Era evidente que la radicalización de este sindicato hacía - más difícil su convivencia dentro de la Dictadura primorriverista, ya que el orden y la disciplina eran escasos en su seno y difícil- mente podía imponerse la directiva y sus directrices, en un grupo -

donde la discusión y los enfrentamientos en su seno eran norma entre sus diferentes corrientes y tendencias. Hay que tener igualmente presente que el sindicato cenetista estaba planteado, más que como un fin organizativo en sí, como un método de lucha; siendo sus principios el apartidismo y el apoliticismo, tendiendo en la mayoría de los momentos históricamente claves, hacia una cierta utilización de los métodos de "acción directa" y de huelga general revolucionaria. Todo ello, es lógico, hace difícilmente pensable el colaboracionismo del sindicato anarquista con el dictador y ni siquiera su convivencia pacífica.

Tampoco es de extrañar, como a veces se ha manifestado, que en este sindicato predominen aquellos trabajadores que, por sus dificultades sociales y laborales especiales, están más predispuestos hacia posturas más radicales que aquellos que acuden, como regla general, a su afiliación al sindicato social-ugetista; aunque, como más tarde veremos, también dentro de este sindicato se irán produciendo posturas radicales que harán necesaria su evolución de forma relativamente continuada, evolución que no pocas veces estará motivada por esas posturas cenetistas más radicales que infunden el temor en el seno de los dirigentes ugetistas a que las masas sigan - aquella línea y abandonen el sindicato socialista, dentro de la generalizada rivalidad que muchas veces es la causante de que se modifiquen tácticas y actividades sin otra aparente justificación.

Como casi resulta inevitable en la dinámica de las organizaciones políticas y sindicales españolas, también en el anarcosindicalismo cenetista luchan y coexisten diferentes tendencias, que se agudizan y fomentan por causa de la obligada clandestinidad citada durante la Dictadura.

Poco antes de 1.923 y aprovechando la corta etapa de legalidad anarcosindicalista que va de 1.922 a 1.923, se celebra la Confe

rencia de Zaragoza en la que triunfa la línea sindicalista pura, - frente a la que representaban los anarquistas ortodoxos.

Esta tendencia mayoritaria y ciertamente la más moderada dentro del anarcosindicalismo, es la que domina en el sindicato cenetista cuando se produce el golpe de Primo de Rivera. Es la línea dominada por los Peiró, Pestaña, etc. pero, llegado el acontecimiento de excepcionalidad constitucional representado por el General Jerezano, se produce una incidencia en el sindicato que, internamente, agudiza el enfrentamiento y la separación de las posturas enfrentadas y preparará las posteriores escisiones, que durante la etapa republicana contemplarán la expulsión del denominado grupo "treintista".

Acerca del tema, sostiene Tuñón de Lara en su obra que habremos de citar repetidas veces, "El Movimiento Obrero en la Historia de España" que, a la altura de la Dictadura primorriverista, no es muy fuerte la organización cenetista y se desarrollan acciones desconectadas de miembros aislados de la Confederación, que propiciarán precisamente los argumentos para la ilegalización por el Gobierno de la CNT y para la supresión de su órgano principal de expresión "Solidaridad Obrera", así como para ordenar la detención de sus líderes más destacados, como ya citábamos anteriormente.

La existencia de dos grupos perfectamente diferenciados, el de los sindicalistas puros y el de los anarquistas-faístas, será perfectamente observable igualmente al inicio de los años treinta, cuando se configura y proclama la Segunda República, fenómeno ante el cual, naturalmente, cada una de las dos tendencias en liza va a presentar su propio criterio y su particular definición.

Existe constancia de que se produjeron diversos contactos entre sectores cenetistas y partidos de la izquierda republicana, de cara a provocar la caída del directorio militar; si bien la CNT fué

poco proclive a la participación y apoyo a los proyectos republicanos optando, como ya veremos más tarde, por una postura que generalmente combinaba el abstencionismo con la hostilidad manifiesta, a pesar de que, luego de la etapa de clandestinidad y vuelta a la legalidad en 1.930, predominaba en su seno la desorganización, situación que no se resolvería internamente hasta bien avanzado el año treinta, en favor del dominio y hegemonía de la FAI.

Concretamente, es en abril de ese año cuando se produce el retorno a la legalidad de la CNT y en julio cuando se volverá a publicar "Solidaridad Obrera", comenzando una etapa de clara rivalidad entre las dos centrales mayoritarias de la época para conseguir la hegemonía del movimiento obrero, que siguen tácticas bien diferentes a la hora de buscar la consecución de sus fines.

En tal momento histórico el problema fundamental que se plantea a esta organización es el ya esbozado de su colaboración o no para llevar a cabo la implantación de la República, que es, asimismo, el centro de las discordias internas de los confederados, algunos de los cuales se pronuncian por su tradicional postura de la abstención, mientras que otros propugnan su colaboración para llevar a cabo la implantación de una República Federal grandemente reformista. Bien es sabido el resultado de la opción ganadora.

No obstante, y así finaliza la Confederación Nacional del Trabajo la etapa final de la Dictadura e inicia el período previo a la proclamación de la República, acusa una rápida recuperación de su actividad y situación deteriorada durante la clandestinidad, que se manifiesta, ante todo, en su creciente influencia en los conflictos laborales de la época y en el rápido incremento de sus niveles de afiliación, frente a la situación de desventaja observada a lo largo y final de la Dictadura de Primo de Rivera, de esta central respecto de la otra de importancia, ya que, los ugetistas mantienen su

organización en todo aquel período, que es siempre una ventaja de -  
partida respecto de sus rivales.

Bien distinto al del sindicato considerado es el panorama del  
de matiz socialista Unión General de Trabajadores, tanto de cara a  
su táctica y organización durante la etapa de la Dictadura de Primo  
de Rivera, como ante el hecho de la proclamación de la Segunda Repú-  
blica.

Tampoco puede decirse que no se tratase de unos años de difí-  
cil toma de decisiones en el seno ugetista, por causa de las encon-  
das disensiones internas observadas entre las distintas tendencias  
que se manifiestan tanto en el sindicato UGT, como en el propio par-  
tido, a la hora de pronunciarse en los momentos cruciales que nos -  
van a ocupar.

El sindicato socialista es el de mayor antigüedad entre los -  
españoles y cuando se inicia la etapa de excepcionalidad constitu-  
cional que preside Primo de Rivera, tiene una considerable implanta-  
ción a escala nacional; prueba de ello es la cifra de afiliación -  
con que cuenta el año anterior al inicio de tal etapa, año en que -  
se celebra su XV Congreso, y que gira alrededor de los 208.170 miem-  
bros. (2)

Esta importante central sindical permanece en la legalidad y  
mantiene su actividad a lo largo de toda esta etapa que considera-  
mos, si bien es cierto que de manera mitigada y con un cierto grado  
de control, aunque no es de desestimar el hecho de que a lo largo -  
de todo el período dictatorial su grado de afiliación va en aumento  
progresivo. Así, si exceptuamos el año 1.928, mientras que en di-  
ciembre de 1.923 la UGT contaba con 1.275 secciones y 210.617 afi-  
liados, en diciembre de 1.930, contaba con 1.734 secciones y 277.011  
afiliados. (3)

Tales datos pueden ser cotejados con los ofrecidos por Manuel

Tuñón de Lara y que nos sirven para apoyar nuestras afirmaciones, -- puesto que este autor nos habla de los siguientes:

Año 1.923, UGT cuenta con 210.617 afiliados, que es exactamente la cifra ofrecida por el anterior autor en su obra de mucho más reciente aparición. Tal situación se mantiene aproximadamente igual en 1.924, llegando el año siguiente, 1.925, a los 217.386; siendo -- ya, en 1.929, 258.503. "Estos datos últimos --sostiene Tuñón-- correspondientes al último mes del año, ofrecen la medida cuantitativa de la central sindical al terminar la Dictadura de Primo de Rivera."

(4)

Todo ello nos demuestra que, de alguna manera, no fuera tan -- equivocada la táctica de la dirección socialista (rama sindical UGT) en aquellos años, si bien es de destacar que realizan una total rec tificación ateniéndose a la marcha de los acontecimientos, lo que -- impide una excesiva desbandada de sus afiliados y sus bases, que ya empezaban a decepcionarse de tan sumisa táctica; decepción que, naturalmente, hubiera ido a beneficiar a sus más inmediatos rivales -- del sindicato cenetista por la hegemonía sindical.

A la llegada al poder de Primo de Rivera mostraron poca in-- quietud los ugetistas, a pesar de que otros sindicatos empezaban a ser prohibidos y perseguidos. No obstante, ante tal coyuntura, adop-- tan una postura conservadora y defensiva. Para la Unión General de Trabajadores estaba saliendo a la luz, ante aquella coyuntura histó rica, todo el bagaje de enseñanzas que habían obtenido de los con-- flictos revolucionarios de 1.917, quedando plenamente convencidos -- de que no era rentable arriesgar los logros sociales paulatinamente obtenidos, por causa del abandono de la vía legalista. En tal enten-- dimiento, se preparan a abordar el sistema autoritario que se im-- planta de hecho.

Así pues, la postura ugetista a lo largo de la Dictadura fué



en su conjunto cambiante y ambivalente, pasándose de una libertad - de actuación e, incluso, de una directa colaboración con este régimen excepcional, a un claro enfrentamiento. Tal variabilidad de posturas fué debida tanto a la evolución del propio régimen, como a - los cambios de tácticas e intereses de los propios dirigentes del - sindicato socialista.

Desde el punto de vista del régimen dictatorial, fué el propio dictador el que propuso y ofreció a UGT la posibilidad de colaboración en las tareas del gobierno, participando en organismos paragubernamentales, supuesto que la única fuerza verdaderamente representativa de los trabajadores que mantenía su actividad legal, - su fuerza e implantación, era el sindicato socialista, dada la situación de clandestinidad y persecución en que se encontraban anarquistas y comunistas.

Al fin y al cabo, tal ofrecimiento serviría para legitimar al propio dictador cosa que, seguramente, fuese valorado por la directiva ugetista y, finalmente aceptado, como un coste razonable a pagar por los beneficios esperados de tal colaboración, especialmente en lo relativo a las ventajas respecto de su rival en la representatividad de la clase trabajadora.

Además, la favorable coyuntura económica de los primeros años del directorio permitieron a la clase obrera mantener un sistema de vida que no le suponía nuevas ni extraordinarias presiones a su nivel de vida y existencia, siendo así posible mantener de forma viable la táctica reformista, legalista y socialdemócrata que, en la - práctica, venía sosteniendo la UGT por aquellos años, independiente - mente de la vía militar que acabó con el sistema constitucional - - existente hasta entonces en España.

Desde el punto de vista de la propia organización y de la propia burocracia social-ugetista, la colaboración con el régimen del

General Jerezano era analizada favorablemente para sus propios intereses; de ahí que, tras largas polémicas, se aceptase tal colaboración, más tarde se comenzase a variar y, finalmente, se rechazase y plantease una neta oposición a la Dictadura y a la propia Monarquía.

No obstante, ya lo hemos dicho, no fué unilateral e inequívoca la toma de cualquiera de estas importantes decisiones, manifestándose diferentes posiciones y tendencias en el movimiento socialista en su doble vertiente política y sindical, e incluso radicalizándose tales posiciones enfrentadas, respecto a la actitud a tomar ante la Dictadura.

En un principio, solamente Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos se oponen a la participación en la política de la Dictadura - vía colaboración de cualquier tipo. Es suficientemente conocida la postura de estos dos líderes a lo largo de estos años y, por lo tanto, no podían estar de acuerdo en poner el movimiento socialista - más vivo en aquellos años de prohibición partidista, la Unión General de Trabajadores, al servicio de un régimen aniquilador de aquellos partidos, no solo obreros, sino burgueses y republicanos que, según la línea de Prieto y sus seguidores, tenían una importante labor que realizar en el establecimiento de un régimen democrático-burgués, que era considerado como un paso adelante respecto de la situación anterior y que, a su vez, serviría para allanar el camino hacia una futura sociedad socialista.

El resto de las posturas dentro del social-uguetismo, eran proclives al colaboracionismo con Primo de Rivera, pero con una serie de matices entre sí. Tales colaboracionistas podrían contemplarse - en dos grupos diferentes:

- El grupo, influyente y activo, de Largo Caballero, a quien Paul Preston denomina "Sindicalistas prácticos" y
- El grupo de Julián Besteiro, también prestigioso principal-

mente por la personalidad de su líder; a quienes el citado autor llama "revisionistas marxistas". (5)

La postura de Largo Caballero y sus afines, fué la que marcó en la práctica la pauta de comportamiento ugetista a lo largo de todo el período de la Dictadura de Primo de Rivera. Tal "sindicalismo práctico" del que nos habla Preston, fué el que guió la actividad - de esta central sindical a lo largo del período que va de 1.923 a - 1.930.

Por una parte, Largo Caballero era guiado por su animosidad - tendente al mantenimiento pacífico y legalista de los logros sociales conseguidos en los últimos años; veía, además, la imposibilidad de enfrentarse al Ejército y pensaba lograr, por la vía de la menor resistencia, mejores frutos de la clase obrera y particularmente para los afiliados a su sindicato; tal vía no sería otra que la del - colaboracionismo. Aparte de ello, era patente el oportunismo de la actuación de este líder, siempre celoso de mantener su organización por encima, en influencia y afiliación, de la de su más directo rival dentro de la clase obrera: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Se produce el comienzo de la colaboración cuando, al ser reemplazado el Instituto de Reformas Sociales por un Consejo de Trabajo, los ugetistas aceptan pasar al nuevo ente sin mayor escándalo, hecho que se produce el 2 de junio de 1.924. De este organismo habría de pasar uno de sus miembros al Consejo de Estado en representación de los trabajadores, cargo para el cual es elegido, en octubre de - ese mismo año, el mismo Largo Caballero.

De tales manifestaciones de la colaboración de la colaboración de 1.924 arranca la citada protesta de Indalecio Prieto y de los Ríos, así como la división bipolar de estos miembros socialistas y su posterior enfrentamiento.

En aquel preciso momento el planteamiento es el siguiente: - ¿sería posible luchar contra la Dictadura o sería mejor mantener intacta la organización con vistas al futuro, con lo cual no habría - que plantearse ningún tipo de enfrentamiento con la Dictadura?.

De 1.923 a 1.928, según Tuñón de Lara, a tal dilema la gran - mayoría de la dirección social-uguetista respondió así: "una lucha - sería un suicidio, hay que salvar y consolidar a las organizaciones a trueque de algunas concesiones; no tenemos que aliarnos con nadie: el papel esencial en este período corresponde a la Unión." (6)

No sin posturas encontradas, la colaboración con la Dictadura aumentó, siendo el año 1.926 en el que se manifiesta con mayor nitidez tal colaboración, que se evidencia tanto si atendemos a los dis cursos de Largo Caballero, que llegó a decir que "la oposición al - régimen podría ser desastrosa para la organización de la clase obrera" (7), como por la aceptación de los "Comités paritarios" organizados por el ministro primorriverista Eduardo Aunós, que eran unos instrumentos de arbitraje entre obreros y patronos, del más neto - sentido corporativista o, si se quiere emplear otra terminología, - verticalista.

Fué precisamente dentro de estas entidades, donde Largo Caballero hubo de comenzar a sentir los errores cometidos o, al menos, cuando aceptó la posibilidad de emprender un giro sensible en su posición puesto que, en 1.927, cuando ya tocaba a su fin la situación de auge económico que hasta entonces había prevalecido, eran más - los fracasos que los éxitos de tales instituciones y dejará de interesar la participación en ellos por la misma lógica, coyuntural y - poco científica, que había producido su entrada.

Sabido es que Largo Caballero se dedicaba a seguir de cerca - las inquietudes y evoluciones de las masas y las bases ugetistas, - cambiando de actitud en el sentido que apuntaban tales bases al pro

nunciarse por opciones diferentes. Tal sucedió en 1.927, o es en tal año cuando tiene sus raíces, principalmente al observar el descontento de dos de las organizaciones más fuertes e influyentes de la UGT: la sección del Sindicato Minero de Asturias (SMA) y los trabajadores agrícolas.

Aquel mismo año de 1.927, Primo de Rivera ofrece puestos a los socialistas en la Asamblea Nacional, que renueva tal año. Son seis los escaños ofrecidos, que son rechazados debido a que el declive de la estrella del dictador ya ha comenzado y se espera que siga decayendo, dado el descontento existente entre sectores sociales inicial y naturalmente adictos al dictador, podría caber la posibilidad de que a Primo de Rivera solamente le quede el apoyo socialista, lo cual podría haber sido negativo para UGT, sobre todo de cara a la pérdida de miembros ante la "competencia" cenetista.

Así pues, "El temor a ser superados por las circunstancias cambiantes y a perder el apoyo de la base acabó por afectar a la mayoría colaboracionista de la dirección socialista". (8) Tanto es así, que cuando en junio de 1.929 Primo de Rivera vuelve a ofrecer cinco puestos en la Asamblea Nacional a los representantes socialistas, no nominales como en 1.927, que fué la circunstancia que propició el retraso, sino a elegir libremente entre los propios socialistas, son rechazados.

La Dictadura está al caer y no otra cosa que no fuese la diferente presión de las bases hubiera motivado en otros tiempos el rechazo. Ahora se combinan las dos circunstancias y para la mentalidad de Largo Caballero ya no cabía ningún tipo de dudas. Además, es sabido que el inicio de los años treinta es el momento en que el anarcosindicalismo se recupera de su pasada persecución y clandestinidad y, junto con los comunistas, están en período de franco crecimiento; tales síntomas no pueden escapar a la observación de Largo

Caballero, que ya claramente se pronuncia por el abandono del colaboracionismo y propugna el apoyo a la República.

En estos inicios de los años treinta que analizamos como etapa previa a la proclamación de la República y como manifestación final del régimen monárquico via dictadura primorriverista o gobiernos de transición, como pueden ser considerados los del General Dámaso Berenguer o los del Almirante Aznar, dentro de UGT el peso de la opinión de su dirigente Largo Caballero ha tenido una influencia decisiva. No se puede juzgar su dirección, cambiante y oportunista en bastantes ocasiones, como científica y rigurosa desde un enfoque marxista como era el suyo, lo que sí es innegable y nosotros se lo vamos a reconocer, es su capacidad para capitalizar las inquietudes y tendencias de las bases de su sindicato para hacer bandera de ellas y dirigirse por el camino que en cada momento le han marcado esas bases. Sin dudar de otros métodos ni de sus eficacias éste, cuando menos, puede decirse que es realista y eficaz para permitir que la dirección del grupo se guíe al gusto de las masas a las que está obligada a representar. Seguramente que Largo Caballero actuaba de este modo más como táctica que como convicción personal y, sobre todo, con el enfrentamiento de otros sectores de la dirección del partido y del sindicato, generalmente unidos y, en el caso que nos ocupa, especialmente identificados. Actuando así no hacía sino evitar que estas bases, en momentos de tensiones y dificultades, abandonasen sus filas y se unieran a los centistas, siempre dispuestos a todo tipo de métodos y manifestaciones más radicales y no hacía, en fin, sino actuar consecuentemente con su línea de moderación y progresividad no violenta, evitando todo tipo de enfrentamiento con un régimen que, seguramente, le sería negativo. Postura, en fin, no revolucionaria y que hemos de alabar como posibilista porque la historia no ha demostrado que, en aquel momento concreto tal postura estuviese equivocada.

De cualquier modo y seguramente ello no venga sino a apoyar - la postura en este momento de Largo Caballero, es que para las masas ugetistas, es desde estos años y en aumento a lo largo de la República un indiscutible líder.

Volviendo al año 1.929 en que, por causa de la no aceptación de los cargos que se ofrecen a UGT en el seno de la Asamblea Nacional Consultiva, se manifiesta expresamente el giro que ya están iniciando respecto a sus relaciones con la Dictadura, son suficientemente conocidas en el seno de PSOE y UGT. Tal propuesta de colaboración se había hecho en julio de 1.929 y ante tal ocasión se habían reivindicado conjuntamente -en el mes de agosto- los Comités Nacionales de ambos entes. Sabido es que Besteiro y sus allegados propugnan la aceptación y el nombramiento de los delegados, postura que - es claramente rechazada por la mayoría, ya que aquella crisis que - citábamos más arriba de la Dictadura se está manifestando en una - clara oposición de sectores tan significativos como los colegios - profesionales, el mundo intelectual y universitario y sectores que constituyen el verdadero soporte del régimen, como es el caso del - Arma de Artillería dentro del propio Ejército.

En tal sentido comienza Besteiro a perder posiciones ante el resultado de los citados congresos, que igualmente son conscientes y deciden aprovechar el mantenimiento intacto e incluso el crecimiento experimentado por los efectivos sindicales, de cara a los de más sindicatos menos organizados en aquella coyuntura.

El año 1.930 fué especialmente conflictivo y combativo por - parte de los sindicatos. Comenzaba la etapa de la denominada "dicta blanda" que, más por necesidad que por vocación, se veía obligada a abrir la mano y crear un clima mínimamente tolerante para conseguir la celebración de unas elecciones que, garantizando su limpieza, - sirvieran para afirmar y consolidar el sistema monárquico, que ya -

había agotado todas las demás vías para lograr su subsistencia. (9)

UGT, sindicato cuyo estudio nos viene ocupando, no podía quedar atrás de este movimiento reivindicativo renovado; aparte de las razones ya citadas de su dinámica hay, sobre todo, que anotar la fecha de abril de 1.930, en que se funda la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), sección del sindicato socialista que agrupa a los trabajadores del campo y que, por las tensiones y dificultades que en tal sector se viven, será desde su creación, una sección netamente combativa y una clara tendencia en el incremento de los movimientos reivindicativos en los que participa sistemáticamente ya desde su fundación.

Hará Tuñón de Lara un comentario de interés sobre la situación social-ugetista del inicio de los años treinta y etapa de transición hacia la República que ahora nos ocupa. Dirá concretamente que, "Si en el segundo decenio del siglo se criticó a los socialistas por ser "más republicanos que socialistas", en el tercero se produce el fenómeno contrario: son "tradeunionistas", defensores de objetivos profesionales sin otro fin ulterior, con una verdadera obsesión por evitar que sean rotas sus organizaciones o impedida su vida legal." (10)

Así que, "implícitamente queda denegada la función del partido, reducida su actividad a la estrictamente sindical". (11)

Serán los ya considerados Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, los que simbolicen aquellas tendencias minoritarias, los que están más vinculados a las clases medias republicanas que a las propiamente obreras y ven claro que la postura más conveniente es sumarse a la lucha por el régimen republicano.

Con tal estado de cosas se celebra en este año de 1.930 el llamado "Pacto de San Sebastián", del que ya se habla en otro lugar de este trabajo, que denota el momento en que se comienza seriamen-



te a plantear el posible nuevo régimen republicano en cuya preparación, naturalmente, están presentes los socialistas que, durante la etapa de la Dictadura, han actuado en la legalidad a través de su central sindical UGT.

Dentro del espacio temporal que abarca el presente epígrafe, final de la Dictadura de Primo de Rivera e inicio de los años treinta, pocos sindicatos que no fueran los dos mayoritarios que ya hemos considerado tuvieron un verdadero peso entre la clase obrera en el conjunto de la geografía nacional. No obstante, y con el fin de completar el panorama sindical español, habremos de citar alguna otra central sindical de importancia más limitada, sea por su escaso nivel de afiliación o por su implantación parcial en cuanto al ámbito territorial. Nos vamos a referir a los Sindicatos Católicos, a los Sindicatos Libres y al sindicato Solidaridad de Obreros Vascos (SOV).

El Sindicalismo Confesional Católico es una respuesta organizativa a nivel sindical que ofrece la Iglesia Católica ante el auge sindical mayoritario de las ideologías socialista y anarquista.

Los inicios de este tipo de sindicalismo datan del siglo XIX y se fortalecen considerablemente, obteniendo gran impulso, con la conocida e importante encíclica "Rerum Novarum" del Papa León XIII, que data de 1.891. Decididamente, la Iglesia se había lanzado a -- ofrecer una alternativa propia al problema social y ello tiene lugar en base a los documentos papales, principalmente desde la citada encíclica, desarrollándose a lo largo de los inicios del siglo XX y adquiriendo un sentido ascendente a lo largo de él.

Los inicios en España de este movimiento se manifiestan con la creación de unos Círculos Católicos que, más que un sindicato, parecen agrupaciones gremiales dedicadas al mutualismo y a la protección entre sí de sus diferentes miembros por vía de cajas, segu-

ros, cooperativas de consumo, etc.. Esta experiencia, no obstante, no fué muy extensa y se hizo aconsejable la constitución de verdaderos sindicatos. Así se expresa G<sup>a</sup> Escudero en este extremo: "El fracaso de los Círculos, con su anacrónico paternalismo, hacía inevitable la fórmula de los sindicatos, como organizaciones profesionales, independientes y de clase." (12)

En la definición de tales sindicatos habría de ir necesariamente incluida su condición de confesionales, lo cual les afectará de diferente manera en su evolución y desarrollo, según el medio en que se muevan y desenvuelvan. Así, en su evolución a lo largo del presente siglo y hasta llegar a la dictadura primorriverista y el inicio de los años treinta, se va configurando una pauta de crecimiento e implantación de estos sindicatos que demuestra cómo tienen éxito en las zonas rurales y pequeñas ciudades de provincias, mientras que su implantación en áreas de importante desarrollo del sector industrial y de fuertes núcleos de población, es considerablemente menor y sin comparación posible con la fuerza e incidencia de los grandes sindicatos de izquierda, UGT y CNT. Tal situación tiene clara manifestación en los Comités Paritarios, en los que domina netamente UGT y, según cita Tuñón de Lara, se da solamente el caso excepcional de que, "sólo en 1.928, en Bilbao, una coalición de Católicos, "solidarios" y "libres" pudo disputar los puestos a los "ugtistas". (13) Excepción esta que citamos porque no hace sino venir a confirmarnos la regla que acabamos de establecer.

Las áreas de mayor implantación de estos sindicatos que nos vienen ocupando son, concretamente, el País Vasco, el Norte de Castilla -Zamora, Palencia, Valladolid-, así como Valencia y Murcia. No obstante, es ostensible el hecho de que son unos sindicatos de importancia y representatividad secundaria ante la clase obrera si se compara con la fuerza e incidencia del sindicalismo socialista; a pesar de que "desarrollaban una labor constante de captación de -

nuevos afiliados, pero con un resultado prácticamente nulo por la - organización socialista de la UGT, que cosechaba los mayores triunfos en la geografía del país." (14)

Es de reconocer con Tuñón de Lara el hecho de las facilidades que podría ofrecer un régimen como la Dictadura a un sindicalismo - con las bases como las del que ahora nos ocupa. Asimismo hemos recogido de García Escudero el reconocimiento de que este sindicato con taba con el apoyo de la Asociación Católica Nacional de Propagandis tas y con otras destacadas instituciones y figuras del catolicismo español, tales como Herrera Oria, el diario "El Debate", etc. (15) Pero a la postre, cabe sostener que fué evidente la debilidad de es tos sindicatos católicos en una etapa que podría haberle resultado propicia, no sólo por los importantes apoyos con que contaba, sino por soportar una menor resistencia de parte de las organizaciones - de clase, muchas de ellas prohibidas y en la clandestinidad, así co mo por serle propicia la situación política.

El hecho cierto es que nunca representaron estos sindicatos - una fuerza verdadera, ni en aquel ni en el período subsiguiente y, entre los puntos y circunstancias que generalmente se analizan a la hora de explicar tal debilidad sindical, se encuentran: la labor so cialista de incesante actividad, a través y favorecida por la legalidad de la UGT, la propia conciencia de su independencia afectiva y sus divisiones internas, etc., explicaciones todas ellas evidente mente insuficientes por sí solas.

Otro de los sindicatos que nos merecerán una consideración es pecial individualizada, a pesar de que pueda ser considerado dentro del amplio campo del sindicalismo católico por su ideología, es Solidaridad de Obreros Vascos (SOV), cuya característica diferenciado ra es su limitación territorial al ámbito del País Vasco, lo cual - no impide su toma en consideración, dada su importancia en tan des-

tacada zona industrial y socio-política del territorio nacional.

El sindicalismo que nos ocupa se funda en 1.911, ante la evidente falta de implantación en aquel territorio del sindicalismo de ámbito nacional, demostrado fehacientemente por las bajas cifras de afiliación que allí se contaban. Será seguramente el especial sentimiento nacionalista vasco, cuyos puntos de apoyo diferían notablemente de los de otros movimientos autonomistas españoles, hacía que hasta aquellas fechas no hubiesen resultado atractivas en aquel territorio otras organizaciones sindicales.

El SOV-ELA, tenía como sustentación dos bases esenciales y de importante peso en el territorio vasco: el marco territorial estrictamente limitado al del País Vasco, así como su clara inspiración - cristiana. (16)

La etapa comprensiva de la Dictadura primorriverista, será importante para el posterior desarrollo de este sindicato por mor del propio desarrollo industrial de la zona, que en tal época se extiende a la provincia guipuzcoana. Ello hace que los años que transcurren entre 1.923 y 1.930 sean de incremento y fortalecimiento para el sindicalismo vasco, a pesar de la negativa etapa política que representa la Dictadura.

Son significativos los siguientes datos de afiliación, sin dejar de tener presente lo poco propicio políticamente de la etapa - que se vivía y que se podía hacer extensivo al campo sindical, así como la escasa tradición sindical de la zona. En 1.928, la cifra de afiliados a ELA-STV, ascendía a 10.832, según datos del mes de noviembre que recoge su órgano de prensa "Unión Obrera", que se comenzó a editar ese mismo año. Tales cifras, que continúan en auge los años posteriores, anuncian la situación de importancia ascendente - que manifestará este sindicato en los inicios de la IIª República y que se analizarán en su epígrafe correspondiente.

En cuanto a los Sindicatos Libres, consideramos oportuna una breve cita, ya que fué precisamente con la llegada del dictador Primo de Rivera al poder, cuando estos sindicatos pierden la relativa importancia que habían demostrado desde su fundación en 1.918, hasta 1.923.

Estamos ante unos sindicatos que, como sostendrá M. García Venero, "tenían mala prensa". Mala prensa en cuanto que se trataba de unas organizaciones amarillistas, con unos miembros de diversa procedencia pero que solamente estaban unidos por dos vínculos: su extraña conducta sindical y su común oposición a la CNT. (17)

Aunque la supuesta inspiración ideológica de estos sindicatos también se hallaba en la doctrina social de la Iglesia, los propios sindicatos confesionales católicos trataban de aclarar bien las distancias que de aquellos les separaban, rehusando a cualquier tipo de colaboración con ellos.

Según recoge el citado G<sup>a</sup> Venero, "los sindicatos libres surgieron en los Círculos Tradicionalistas de Barcelona (Jaimistas se llamaban entonces), formados por obreros de dicho núcleo político." (18) Tal connotación, junto con el hecho de que su constitución fue ra contemplada con buenos ojos por el General Severiano Martínez - Anido, Gobernador Militar de Barcelona de la época, y sus colaboradores, pone de manifiesto el dudoso talante de estos sindicatos.

En la obra del mismo autor que venimos citando puede contemplarse la ratificación de nuestra afirmación inicial, en el sentido de que, "El sindicato libre decayó inmediatamente del Golpe de Estado del 13 de septiembre de 1.923." (19) Por tal circunstancia, así como por la escasa importancia que tuvo en tanto que representación de los intereses del grupo social del trabajo, consideramos suficiente la breve referencia efectuada hasta aquí acerca del citado sindicato.

Terminado en este punto el análisis de las organizaciones representativas de los intereses de los trabajadores, los grupos sindicales, podemos proseguir, en esta etapa preliminar a la proclamación de la Segunda República Española, el estudio de aquellos grupos de interés y presión representativos de otras opciones e intereses.

## II.2.- LA BANCA Y LOS GRUPOS ECONOMICO-FINANCIEROS

Resulta obligada la referencia a la banca y a los grupos económicos y financieros cuando se trata de analizar las incidencias - de los diferentes grupos de presión en las transformaciones españolas de los años treinta en materia económica y fiscal.

Especialmente, aquí también nos puede resultar de gran utilidad el análisis de tales aspectos a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera, inicio de los años treinta, por cuanto que: de una parte, y lo mismo sucederá en casi todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, tiene una incidencia esencial en la conformación de la problemática económico-fiscal y hacendística que heredan los gobernantes de los primeros meses del régimen republicano que sucede al que ahora nos ocupa. De otro lado porque, en el seno mismo de la Dictadura de P. de Rivera, tiene mucha influencia este conjunto de grupos y fuerzas que van a configurar una política económica -en el aspecto bancario, industrial y del sector público en general- de tipo muy peculiar y novedoso, netamente intervencionista y en un proceso nacionalizador realmente considerable.

Probablemente, la falta de entidad de una burguesía industrial urbana no consolidada, en relación a un sector agrario y latifundista tradicional aún predominante, y la falta de confianza y fuerza de aquel sector en anuencia con este segundo, sean los que determinen la realización de una política económica con semejante grado de dependencia estatal.

No puede dejarse de tener presente el hecho de que los apoyos que tiene el régimen primorriverista tienen un fuerte componente financiero y agrario y que, desde estos sectores, tampoco será mal vista aquella política económica. Como indica el mismo Manuel Tuñón de Lara: "Ciertamente, en el bloque dominante se ha afirmado hasta ahora una hegemonía de tipo agrario-terrateniente. Pero no es

menos verdad que la imbricación entre grandes terratenientes y gran capital financiero e industrial es tan grande que hay, sobre todo, una especie de hegemonía oligárquica, la de esa cúpula del bloque - dominante." (20)

Se puede, por lo tanto, observar en la etapa de 1.923 a -- 1.930 una incidencia destacada de una serie de grupos que defenderán específicamente los intereses proteccionistas e intervencionistas poco típicos de un sistema capitalista evolucionado, no solamente en cuanto a su composición social y estructural sino, asimismo, ideológica y de valores.

Nos habremos de detener, básicamente, en dos tipos de grupos esenciales. En los bancarios y específicamente financieros, así como en los representativos de sectores monopolistas beneficiados de la política primorriverista, que comportan la evidente prueba del éxito de sus presiones ante el poder.

Tanto es así que se puede sostener, en la línea seguida por el profesor Velarde, pionero en el estudio de la política económica de esta etapa en profundidad, que la ordenación económica de la Dictadura de Primo de Rivera sería más el resultante de la incidencia de una serie de grupos de presión que una acción guiada racionalmente, "las fuerzas sociales que actuaban bajo la Dictadura eran capaces de dar al traste con un programa de esta índole de forma completa". (21)

En lo específicamente referido a la banca, la política primorriverista comporta una serie de cambios apreciables, aunque ninguno de ellos fue tomado con la idea efectiva y eficaz de superar el sistema bancario atrasado imperante en nuestro país.

No obstante, los cambios que se aprecian en esta etapa pueden ceñirse a los siguientes:



- Promoción y lanzamiento de organismos bancarios de naturaleza especializada y carácter oficial. En tal sentido se hallan las medidas tomadas con el Banco Hipotecario que, aunque su fecha de fundación data de 1.872 y su nacionalización sucederá varias décadas más tarde, es utilizado para la aportación de una buena parte de la base financiera que el Estado necesita a raíz de la etapa que nos ocupa.

- Se crean los siguientes bancos: Banco de Crédito Local, con fecha en el año 1.925 y el Banco Exterior de España, cuya fecha de nacimiento es el año 1.928, el Banco de Crédito Industrial, que ya existía al iniciarse el nuevo régimen, se relanza y promociona.

- Respecto de la banca privada, esta etapa comporta la siguiente política: robustecimiento del Consejo Superior Bancario que, a partir del Real Decreto Ley de 25 de mayo de 1.926, queda con nuevas y más potentes facultades punitivas y de control de la banca privada. Mayor vigilancia sobre esta banca privada en el sentido de procurar clarificar sus operaciones (balances, arqueos, régimen de depósitos, etc.) evitando la competencia desleal. Asimismo, se impone un límite a los dividendos emitidos por la banca, estableciendo un volumen mínimo de reservas obligatorias, que se fija en el 8% del pasivo total. Fomento de una mayor concentración bancaria que comporta un rápido crecimiento de los principales bancos de la época que, o bien absorben a otros más pequeños o incrementan su número de sucursales de manera ostensible. Esta última medida se refleja con nitidez en diferentes datos; la expansión geográfica de la banca privada en esta época no tuvo precedentes, mostrándonos ejemplos como el del Banco Español de Crédito que, solo en el año 1.926 inauguró 146 nuevas sucursales.

No obstante, aún había un considerable desfase entre las pretensiones de la banca en lo relativo a sus funciones en el contexto económico nacional y la captación de recursos que le posibilitaran

tal capacidad de maniobra. Pues, aunque la etapa primorriverista - contribuyó en gran medida a otorgar la confianza del ahorrador en - el sistema bancario, solo se logró progresiva y lentamente y de forma insuficiente para abarcar los proyectos bancarios en su gran ambición de dirigir y controlar la economía.

En tal sentido se inscribe el hecho de que muy pocas semanas después de la proclamación del régimen de Primo de Rivera, los más cualificados representantes de la banca española se dirijan al Gobierno para comenzar el ciclo de sus presiones y demostrar su peso específico. Así, "el 12 de noviembre de 1.923 (...), siete de los - principales bancos dirigen un escrito al Gobierno, en nombre de todos los empresarios nacionales, solicitando una emisión de Deuda - por valor de 5.000 millones de pesetas, destinadas a la realización de obras públicas." (22)

Puede sostenerse con apenas escaso margen de error que la - banca española de finales de la etapa de la Restauración fué una de las instituciones que más ejercieron sus presiones de cara a configurar las líneas fundamentales de la política económica de los años 1.923 a 1.930, en dos de sus aspectos esenciales.

Así pues, en el marco de la petición cursada al Gobierno tal y como se ha expuesto en la cita anterior, solicitan los principales bancos a que hacíamos referencia la adopción por parte del Gobierno de otra serie de medidas encaminadas al cierre de importaciones que vayan a incrementar la competencia interior, una serie de - medidas netamente proteccionistas que, consecuentemente, permitieran la absoluta necesidad de una producción nacional financiada y - patrocinada por las vías controladas por esos mismos bancos.

Y en segundo lugar, propugna que sea emprendido un plan nacional de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, etc.) que faciliten los intercambios comerciales e indus-

triales por el interior de la Península, pero que realmente beneficiarían en toda regla los intereses de estos grupos financieros al ser financiados aquellos proyectos mediante una política monetaria basada en fuertes emisiones de Deuda Pública.

Ello iba asimismo en contradicción con una política fiscal y presupuestaria racional, inicialmente esbozada y deseada por Calvo Sotelo, pero que no llegaría a plasmarse en realidades. Tal política, que se basaba en la financiación mediante ingresos procedentes de la tierra (de carácter real), de una sistematización de la imposición personal y de los gravámenes industriales, al quedar completa y absolutamente frustrada, legó íntegro el problema al régimen subsiguiente que será objeto primordial de nuestro estudio: la Segunda República.

Otra consecuencia evidente de esa política de séguimiento de los intereses financieros y bancarios, fué -entre 1.923 y 1.930- el constante cierre con déficit de las cuentas presupuestarias que, curiosamente, fué constantemente disimulado y presentado como un presupuesto equilibrado mediante la falacia de crear un presupuesto extraordinario en el que quedaba reflejada la Deuda Pública y los gastos del presupuesto ordinario dedicados a la financiación de obras públicas.

Como puede verse, esta política económica montada sobre una política monetaria expansionista del gasto encaminada a las obras públicas, aunque realmente fuese "uno de los primeros experimentos europeos de utilización de una política de dinero barato para financiar programas de obras públicas orientados a estimular la actividad económica" (23), no deja de suponer una evidencia de que venían a -dar satisfacción a las exigencias de la banca que, de esta manera, se constituía en un instrumento clave de la política económica primorriverista y, por ende, del sistema de la Dictadura.

Si aceptamos las afirmaciones que se derivan del contenido - de la obra coordinada por Gabriel Tortella (24), la banca española al inicio del primorriverismo no tenía un potencial ni un tamaño su ficientes para llevar a cabo la tarea que ella misma se había adjudicado en el contexto del sistema; de esto se deduce el que aque- - llas medidas más arriba consideradas y que van en dirección de la - reforma del sistema bancario para su potenciación, tampoco respon- dan a criterios de racionalidad sino que sean respuestas a presio- nes e intereses de este importante grupo bancario que, a la altura de aquellos años y con la excepción de la zona de Vizcaya principal- mente, no había logrado canalizar el ahorro popular procedente de - las clases humildes y ahorradores modestos que, ni tenían tales há- - bitos, ni encontraban incentivos para mantener cuentas de ahorro es tables.

En cuanto al Banco de España, la Dictadura tampoco entraría en reformas profundas que quedaran fuera del interés de los propios grupos rectores de este banco. En este sentido, éste mantendría su carácter privado y no cuajaría su nacionalización. Esta entidad se- guía siendo decisiva para el establecimiento del precio del dinero y, por ende, resultaba fundamental su importancia respecto de la - Deuda Pública -tan generosamente emitida y utilizada durante la épo ca- a través del proceso de monetización directa porque, además y - aparte del propio Estado, era el ente decisivo para determinar el - tipo de interés y el rendimiento de aquella. Era evidente que, - -- "puesto que el Banco podía fijar libremente el tipo de interés de - los títulos que poseía y estos representaban una elevada proporción de la deuda total, ese tipo de interés era generalmente el que de- terminaba el precio de la Deuda en el mercado de capitales." (25)

Ni que decir tiene que el Banco de España no era el único be neficiado en este sentido por cuanto que, a través del proceso de - monetización indirecta, también la banca privada participaba y eran

beneficiados sus intereses.

Al margen de esta política de financiación de inversiones en obras públicas y si salvamos algún caso excepcional como el citado de Vizcaya y la creación de nuevas modalidades bancarias de tipo industrial o mixtas en Cataluña, lo cierto es que la banca española no colaboró con entusiasmo a la financiación de la industria, frente a la importante promoción que imprimió al desarrollo del sector agrario. La explicación más oportuna a este extremo probablemente se nos clarifique del todo cuando, en el contexto del análisis de los grupos bancarios a lo largo de la etapa republicana, comprobemos la procedencia social de buena parte de los consejeros y dirigentes de la banca española, tan identificados con la nobleza. Clase que, por otra parte, será decisiva en cuanto a la posesión de la tierra y a la determinación de la situación del sector agrario y campesino, en el cual se hallan sus intereses materiales e ideológicos fundamentales.

Para darnos cuenta del potencial de captación de ahorros por parte de la banca española en los años que ahora nos ocupan, entendemos de gran interés la aportación de los siguientes datos que reflejan el Saldo Medio Anual por cuentas corrientes del Banco de España y de la banca privada (inscrita en el Consejo Superior Bancario, que acoge un 85% de la actividad bancaria): (26)

| <u>BANCO DE ESPAÑA</u> |                         | <u>BANCA PRIVADA</u> |                         |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <u>AÑO</u>             | <u>MILLONES DE PTS.</u> | <u>AÑO</u>           | <u>MILLONES DE PTS.</u> |
| 1.923                  | 1.028                   | 1.923                | 2.484                   |
| 1.924                  | 980                     | 1.924                | 2.196                   |
| 1.925                  | 1.120                   | 1.925                | 2.154                   |
| 1.926                  | 1.140                   | 1.926                | 2.317                   |
| 1.927                  | 1.027                   | 1.927                | 2.791                   |
| 1.928                  | 1.004                   | 1.928                | 3.185                   |
| 1.929                  | 982                     | 1.929                | 3.197                   |
| 1.930                  | 911                     | 1.930                | 3.425                   |

En cuanto al tema de la captación de ahorro particular, resulta evidente que es la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera - cuando se consolida la posición de la banca privada o, al menos, - inicia su proceso en este sentido, en detrimento del Banco de España.

La Dictadura en la línea de defensora de los intereses más - arriba considerados y siguiendo una política encaminada a tal fin - proteccionista y nacionalizadora, contempló en su seno un proceso - de monopolización y estatalización de diversos sectores que contribuye a la aglutinación de intereses y a la constitución de grupos - de presión tendentes al mantenimiento de derechos y privilegios adquiridos. Su incidencia trascenderá a la etapa aquí estudiada y llegará a la de la Segunda República, aunque en muchos de los aspectos el régimen republicano proseguirá la tarea realizada y fomentará - su potenciación.

Los sectores fundamentales afectados por estas medidas son:

- El hidráulico, con la aportación de las Confederaciones Hidrográficas que, de un proyecto fundamental del desarrollo - español, quedó en una serie de escasos logros positivos.
- El del transporte, iniciando un verdadero proceso estatalizador en el sector de ferrocarriles, así como una política - intensiva de expansión de la red vial por carreteras.
- El de las telecomunicaciones con la creación de la "Compañía Telefónica Nacional de España, que se encargará de la explotación de la red nacional y se otorgará por concesión a - la compañía americana International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), situación ampliamente contestada en la - etapa republicana en la cual esta compañía ejercerá sus presiones para hacer valer sus derechos adquiridos.

- Finalmente, en el sector energético-industrial, la nacionalización en el campo petrolero, creándose la CAMPSA.

De este conjunto de intereses se derivan la fuerza y potencial suficientes como para que en su entorno se constituyan importantes grupos de presión dispuestos a intervenir y capaces de contrarrestar aquellas medidas que se tomen y que vayan a favorecer diferentes intereses en detrimento de los suyos.

La finalización de la Dictadura de Primo de Rivera y la proclamación del régimen republicano será, como veremos, un momento de gran actividad en el sentido comentado. Comprobaremos en su momento el modo en que inciden sobre las transformaciones de los sectores - afectados los grupos aquí analizados.

### II.3. LA OLIGARQUIA TERRATENIENTE Y OTROS GRUPOS AGRARIOS

Del estudio del problema agrario al iniciarse la Segunda República, se deducirá el conocimiento de uno de los problemas más importantes que arrastró la historia española hasta aquella experiencia política. Puede decirse que, junto con el problema religioso y educativo, el tema agrario ha constituido la materia central alrededor de la cual se debaten de forma más aguda los intereses españoles, sobre todo en aquella etapa en que se plantea su definitivo intento de solución.

Se tratará en este apartado de conocer el estado de cosas, del ámbito agrario, tal y como se hallaba inmediatamente antes de la proclamación republicana; ello nos permitirá conocer la existencia de un fuerte núcleo problemático en este terreno de tal magnitud, que se habla con frecuencia de la "cuestión agraria".

Nos centraremos principalmente, como es el objeto principal de nuestra investigación, en el conocimiento y estudio de los más importantes grupos de presión e interés que, afectados por tal situación, son dominantes en ella y, a la vez, inciden para que los acontecimientos se desarrollen de aquella y no de otra manera y, a través suyo, podamos conocer el estado de la situación agraria española al inicio de los años treinta y final de la dictadura primmerista.

Se puede sostener que, hasta la llegada de la etapa republicana, no se produce en España intento alguno de llevar a cabo una reforma agraria modificativa de las estructuras imperantes.

La remota historia de España nos aclarará los orígenes de una problemática agraria aguda, aunque viva, y los acontecimientos más recientes del devenir histórico nos permitirán comprender por qué el sector campesino llegó a los años treinta mostrando esa imperiosa necesidad de reforma.



Con toda seguridad, y entre otros problemas menores aunque significativos, el centro fundamental y origen esencial del estado de cosas con que uno se encuentra cuando aborda estos análisis en -- la década de los treinta de nuestro siglo, radica en el problema -- del latifundismo o existencia de grandes extensiones territoriales poseídas por un único propietario. El problema del latifundio tiene en España su origen en la etapa de la Reconquista en que como premio por servicios prestados a la causa bélica y como necesidad de -- repoblación de tierras ocupadas y aún poco seguras y consolidadas, se fue otorgando la propiedad de determinadas y extensas zonas a la nobleza, la iglesia y las órdenes militares.

Este problema, que arranca del Medievo, no fue resuelto, -- como podría esperarse, por la revolución burguesa en España. Porque si partimos del concepto de revolución burguesa --referida y centrada en el tema de propiedad de la tierra, es decir, en el terreno -- agrario-- que nos ofrece José Acosta (27) y con el que en gran parte coincidimos, se trataría simplemente de una transformación de la -- propiedad feudal de la tierra en propiedad capitalista, tal revolución burguesa agraria se produce en España con la desamortización -- emprendida por Mendizabal, en la primera mitad del siglo XIX y al -- final del reinado de Fernando VII.

Esta revolución burguesa, que simplemente comportaría una -- transformación, un cambio de clase de la nobleza terrateniente que pasa, vía capitalización de las rentas de la tierra al salir al mercado las propiedades eclesiásticas en masa, a constituir una burguesía agraria o terrateniente; insistimos, esta revolución burguesa -- no comporta expresamente la división o el reparto de los grandes latifundios, que permanecen iguales o en diferentes manos pero sin dividirse, sólo que con la connotación específica de que pasaron a ser propiedad capitalista y no propiedad feudal, desarrollándose desde entonces un concepto de apropiación privada, libre y sin límites, -- de la tierra.

El mantenimiento de los latifundios no implica, desde esta perspectiva, que hayamos de pensar que ello comporte el fracaso de la revolución burguesa en este terreno, frente a los casos inglés o alemán; sí supone, en cambio, desde el enfoque de los grupos o de las mismas clases sociales, que aquellos campesinos que pensaban ser los beneficiarios de la desamortización, pasan de tener una dependencia semi-feudal de los antiguos propietarios (iglesia, nobleza feudal, etc.), a constituirse en jornaleros y asalariados de un propietario capitalista de aquellas tierras, que lo es por la nueva relación de propiedad que mantiene con la tierra más que, en muchos casos, porque sea una persona diferente, excepción hecha de la institución eclesiástica. En el sentido referido seguimos en identidad con las revoluciones burguesas europeas.

Con todo lo hasta aquí expresado podemos deducir que el latifundismo sobrevive, no tiene porqué ser de otro modo en una estricta concepción como la aquí considerada, a la revolución burguesa, que es el concepto hasta el momento estudiado. Hasta aquí no hemos hecho referencia para nada al concepto de reforma agraria que comporta una clara diferenciación respecto del anterior y que sí es la medida capaz de modificar la estructura latifundista del agro español, principal causante del panorama socio-económico que se contempla al proclamarse la IIª República.

En el tema de la reforma agraria sí que se produce una clara diferenciación del caso español respecto de los países de la Europa occidental. Diferenciación que implica el hecho de que hasta la década de los años treinta del siglo presente, no se aborde una reforma agraria en nuestro país, experiencia que, como más tarde veremos, supondrá un serio fracaso al final de la etapa política en que se emprende, léase la IIª República.

El concepto de reforma agraria intentado a lo largo de tan efímera etapa, coincidirá con el que desarrolle el autor más arriba

citado, sin que deje de reconocerse que algunos grupos que nunca -- mantuvieron capacidad ostensible de decisión en la República, defendieran una "revolución agraria" netamente diferenciable de la -- concepción republicana de reforma agraria. Tal concepto es el siguiente:

"Un plan emanado del Estado dirigido a modificar la estructura de la propiedad capitalista de la tierra, no para su transformación en propiedad social, sino para el reparto de los latifundios entre el campesinado proletarizado durante el proceso de la transformación de la propiedad feudal de la tierra en propiedad capitalista" (28)

Se trata, por lo tanto, de un fenómeno que implica sencillamente la modificación de la propiedad de la tierra, aunque manteniéndola en los márgenes privados del sistema capitalista, lo que comporta meramente un reformismo pequeñoburgués. Con esto hemos querido conceptualizar con precisión el fenómeno que será emprendido a raíz del 14 de abril de 1.931 pues, si se había producido en España la revolución burguesa agraria en cuanto a la propiedad de la tierra, la situación general del tamaño de las fincas y de los grupos dominantes en la agricultura, eran los típicos de una reforma agraria pendiente.

A diferencia de lo acaecido en los países industriales, tales como Inglaterra y Alemania, en nuestro país tampoco ayudó a la realización de tal reforma un proceso de industrialización, aquí mitigado y tardío, que hubiera absorbido a importantes cantidades de mano de obra campesina sobrante como consecuencia de la apropiación privada capitalista de la tierra. Estas masas campesinas sin tierra difícilmente constituían esa clase idónea que sirviera de soporte a tal reforma y, al permanecer en el sector rural, reivindican con fuerza una solución revolucionaria para el campo que, en todo caso, dificulta un reparto de la propiedad en unidades viables de pequeño

tamaño.

Será precisamente tal situación socio-económica de una reforma agraria por hacer y de una revolución industrial por llegar, la que posibilite que quien domine en nuestro país su peculiar revolución burguesa, sea una burguesía agraria más acorde con el sistema feudal que ha venido a sustituir que con la burguesía industrial modernizadora en Europa.

Institucionalización política en nuestro país de este estado de cosas será el Estado de la Restauración que, apoyándose sobre las desvirtuaciones del sistema liberal-parlamentario puro (infraestructura caciquil y sistema electoral censitario y restringido), -- sirve a las clases sociales citadas, a esa oligarquía rural y a su sistema de latifundios. Este sistema no podía ser el artífice de la reforma agraria porque supondría la desaparición de su clase social fundamental y de su entramado económico, supuesto que, sólo podía hallarse una burguesía de corte industrial y europeo en la región catalana.

Será precisamente la etapa final de aquel período monárquico, la Dictadura primorriverista, la que ponga involuntariamente -- los medios para desarticular el régimen de la Restauración y, ensayada la solución de recambio republicana --única posibilidad viable al inicio de los años treinta--, aparecerá con ella el único régimen que se halle en condiciones de intentar llevar a cabo la pendiente y fundamental reforma agraria en España.

Obvio resulta pensar que tal tarea no iba a ser fácil, a la vista de la situación que se podía contemplar en la etapa inmediatamente anterior a la proclamación republicana en lo referente a la situación agraria. Situación previa ésta, que nos habremos de ocupar de diseñar ahora para, posteriormente, analizar con mayor detalle -- las dificultades que implicaba la reforma agraria republicana, a la vista de la fuerza de los grupos de interés que en ella jugarían.

Al inicio de los años treinta de nuestro siglo y finales de la etapa primorriverista, se seguía contemplando un total predominio de aquellas clases y grupos sociales que habían ido perpetuándose durante el período restaurador. Ello suponía que la principal característica que presentaba la agricultura española era la existencia de importantes zonas en las que dominaba el latifundismo y sus secuelas económico-sociales con carácter de escándalo.

Pero esta característica, con ser la dominante y la que mayor problemática acarrearía, no sería la única que presentase el sector agrario español; tampoco esos grupos sociales grandemente desequilibrados en cuanto a su tamaño y recursos económicos eran los únicos puesto que, siguiendo la documentada obra de Malefakis (29), estamos de acuerdo con él en afirmar que:

"la propiedad de la tierra presenta en España dos características muy notables: a) el predominio de valores extremos por lo que se refiere tanto al tamaño como al valor de las parcelas... b) marcadas diferencias regionales, por lo que hace referencia al tipo de valores extremos (grandes propiedades o pequeñas propiedades) que predominan."

En suma, y como síntesis de todo ello, habremos de hacer una afirmación evidente, al estar claro que eran relativamente escasas aquellas propiedades medias que pudieran permitir la existencia de una explotación familiar viable, como las que representarían el modelo a conseguir a tenor del espíritu de la reforma agraria republicana. Según la citada fuente, viniendo en apoyo de nuestra afirmación, y si se considera en España como propiedad mediana la comprendida entre las 10 y 100 hectáreas, ésta ocuparía aproximadamente una cuarta parte del suelo agrícola total de nuestro país siendo más abundantes, sin llegar a dominar, en Cataluña, Alava y Navarra y resultando prácticamente insignificantes (menos de la cuarta parte) en el centro y el sur.

En apoyo de esta falta de racionalidad en el tema de la propiedad de la tierra con que se encuentra la República a su llegada, habrá que destacar el dominio de la gran propiedad en el sur, así - como en Extremadura y la Mancha. Tal fenómeno clave en la problemática que nos ocupa y cuyo origen radica en la época de la Reconquista, agravado incluso durante la desamortización, es aún más acusado en cuanto que, a la altura de los años treinta del presente siglo, se mantenía en condiciones semejantes a como se originó en la Baja Edad Media.

Con tal fenómeno convive un significativo minifundio, pequeña propiedad insuficiente a nivel social e inviable en términos económico-productivos, que en 1.930 ocupaba alrededor de la mitad de las tierras españolas y produce casi las tres cuartas partes del líquido imponible, siendo predominante en Galicia y la zona Cantábrica.

Para explicar fehacientemente la situación de los niveles - de propiedad de la tierra en España al finalizar 1.930, año previo a la proclamación de la República, aportaremos los siguientes cuadros: (30)

Una primera consecuencia cabe destacar de la situación presentada, aparte de la incidencia que tenga sobre el desarrollo y actuaciones de los diferentes grupos, desde el punto de vista económico. Una estructura de la propiedad de la tierra como la existente - en España al inicio de los años treinta comporta una deficiente y - antieconómica explotación de los recursos. En lo relativo a los latifundios, las principales consecuencias de este orden van referidas a que el gran propietario mirará poco de practicar una agricultura intensiva, puesto que el conjunto de su propiedad le reportará una producción suficiente y carecerá de estímulos para emplear mejoras técnicas, nuevas inversiones en nuevas puestas en cultivo de -- tierras y, por ende, mayor empleo de mano de obra.

## DISTRIBUCION SUPERFICIE FINCAS

| EXTENSION DE LAS<br>FINCAS<br>% MEDIOS<br>REGIONALES<br>REGION                   |              |                    |                     |                   |
|--|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|  | HASTA 10 Ha. | DE 10 A<br>100 Ha. | DE 100 A<br>250 Ha. | MAS DE<br>250 Ha. |
| CASTELLANO-LEONESA<br>Valladolid, Palencia,<br>Avila, Zamora,<br>Segovia, Soria. | 66'08%       | 14'05%             | 5'44%               | 14'42%            |
| LEVANTE<br>Castellón, Valencia,<br>Alicante.                                     | 51'36%       | 24'12%             | 9'95%               | 14'56%            |
| MANCHEGA<br>C. Real, Toledo<br>Albacete.   | 34'78%       | 18'18%             | 8'24%               | 38'80%            |
| EXTREMEÑA<br>Cáceres, Badajoz,<br>Salamanca.                                     | 27'40%       | 21'40%             | 15'20%              | 36'00%            |
| BETICA<br>Jaén, Sevilla, Cádiz,<br>Huelva, Córdoba.                              | 22'44%       | 20'34%             | 11'19%              | 46'03%            |
| PENIBETICA<br>(Granada-Málaga)   | 26'43%       | 19'17%             | 11'06%              | 43'34%            |

FUENTE: PASCUAL CARRION

DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA RUSTICA  
CATASTRADA ENTRE LOS PROPIETARIOS

| REGION                | HASTA 1.000 pts.<br>PEQUEÑOS<br>PROPIETARIOS | DE 1.000 A<br>5.000 pts.<br>MEDIANOS<br>PROPIETARIOS | MAS DE 5.000 pts.<br>GRANDES<br>PROPIETARIOS |
|-----------------------|--|--|--|
| CASTELLANO<br>LEONESA | 39%  | 29%  | 31%  |
| LEVANTE               | 56%  | 27%  | 16%  |
| MANCHEGA              | 38%  | 26%  | 35%  |
| EXTREMEÑA             | 20%  | 22%  | 58%  |
| BETICA                | 21%  | 22%  | 56%  |
| PENIBETICA            | 29%  | 29%  | 42%  |

FUENTE: PASCUAL CARRION



Por el contrario, el minifundio dominante en muchas zonas - permite escasa rentabilidad económica al tratarse, sencillamente, - de explotaciones agrarias inviables.

De este estado de cosas en la agricultura española se derivará la existencia de una serie de clases y grupos sociales, en cuyo estudio nos vamos a centrar a partir de este punto, aprovechando igualmente para suscitar algunos temas de interés paralelo al social en lo relativo al problema y efectos de una mala distribución de la tierra.

Inicialmente, por su fuerza e influencia decisivas a la hora de incidir en el modelo político, social y económico anterior a la IIª República, habrá que hacer referencia a la oligarquía latifundista rural, que es protagonista en la dirección política de la Restauración.

Frente a ellas hallaríamos situado al que representa a esa masa de campesinos sin tierra, dando la réplica como grupo al anterior. Se trata de un grupo netamente proletarizado, bien sea como - braceros o jornaleros, en unas condiciones de vida ciertamente difíciles. Junto a ellos y en situación muy próxima se hallan aquellos que, sin tener una relación de asalariados con el proletariado, padecen igualmente las consecuencias del latifundismo. Se trata de -- aquellos arrendatarios y, sobre todo, subarrendatarios que, con - - unos arrendamientos a corto plazo y unas condiciones de vida penosas, son consecuencia de una característica de aquella oligarquía - terrateniente: su excesivo grado de absentismo y su no cultivo como empresarios directos de las tierras, como más tarde tendremos ocasión de comprobar.

Finalmente, en este somero primer diseño del estado de los grupos sociales antes del inicio de la República, están los pequeños y medianos agricultores, cultivadores y propietarios a la vez -

de sus tierras y que, como ya apuntábamos, son escasos los segundos y los primeros difícilmente cuentan con tierra suficiente, en su -- gran mayoría, para permitirles una situación de vida decorosa.

Profundizando más en el intento de análisis de aquella oligarquía terrateniente esbozada cabe destacar, "a priori", que se -- trata generalmente de propietarios individuales más que instituciones o colegiados, en plena coherencia con la afirmación realizada -- de que la revolución burguesa había comportado ese nuevo cambio de titularidad en la propiedad que, por ejemplo, hacía que la Iglesia pudiera ya ser considerada como insignificante terrateniente y, asi mismo, como insignificante grupo de presión en el terreno agrario, al menos de manera directa.

Como ya hemos dicho, la desamortización cumplió con su finalidad de desposesión de la Iglesia, aunque por ello no lograrse --ni pretendiera-- la distribución de aquella propiedad.

A partir de aquel momento la Iglesia no volvió a interesarse por reconstruir su antiguo "status" de gran propietaria y :

"las pocas propiedades que continuaban en poder de las órdenes religiosas a comienzo de los años treinta no representaban más de un 1 por ciento de la superficie nacional." (31)"

De tal manera que, si hemos logrado nuestro propósito, habremos demostrado que, a la hora de estudiar los grupos de interés en el terreno específico agrario al iniciarse la etapa republicana y, especialmente, a la hora de estudiar la oligarquía terrateniente y latifundista, habremos de mirar hacia otros sectores y no hacia -- el eclesiástico.

Pasamos ahora al análisis de la posible importancia de la -- nobleza como grupo diferenciado y componente de esta oligarquía de terratenientes. Este grupo constituía un colectivo de fuerza importante más que por su número de miembros, por la escandalosa canti-

dad de hectáreas de tierra que poseían concentradas en tan escasas manos. Todo ello, naturalmente, ciñéndonos casi exclusivamente a -- las regiones de la mitad sur españolas, que es donde más se concentra este fenómeno que ahora nos ocupa del latifundismo, único susceptible de dar lugar a una oligarquía rural y terrateniente importante.

Puede decirse, no obstante, que aún con esa característica de constituir un impresionante grupo de terratenientes, no constituían un grupo dominante en el contexto de la vida rural española -- en su conjunto. Según datos que pueden obtenerse de las diversas e importantes aportaciones de Pascual Carrión, en la etapa precedente a la Segunda República española, la propiedad agraria en manos de -- la nobleza constituían poco más del 5% de la tierra total cultivable con una extensión cuantitativa de, aproximadamente, 1.300.000 -- hectáreas de terreno.

A pesar de que las propiedades de la nobleza estaban sujetas a las leyes impuestas por la revolución burguesa y a pesar de -- que se habían abolido con un siglo de antelación instituciones como el mayorazgo, estas propiedades no habían sido afectadas por la desamortización y, con unas leyes hereditarias aún favorables al mantenimiento de su concentración, existían propietarios con una superficie realmente impresionante. Si el mercado había funcionado en muchos casos y habían pasado muchas hectáreas a manos de otros esta-mentos, ello no quita para que determinados miembros de la nobleza poseyeran propiedades como para continuar siendo expresión de fuerte poderío en el ámbito rural. Las cifras y datos que a continua-ción vamos a aportar no hacen sino servir de apoyo a las afirmaciones aquí realizadas:

Antes de emprenderse la reforma agraria republicana y, en -- consecuencia, como expresión de la situación agraria previa a la Répública, 65 propietarios de entre los que, como mínimo, poseen 1000

hectáreas, alcanzan ellos solos la propiedad de 562.528 hectáreas y, entre los más significativos, ocupan los diez primeros puestos los siguientes: (32)

| <u>Titular</u>                  | <u>Hectáreas</u> |
|---------------------------------|------------------|
| 1.- DUQUE DE MIDENACELI.....    | 79.147           |
| 2.- DUQUE DE PEÑARANDA .....    | 51.016           |
| 3.- DUQUE DE VILLAHERMOSA ..... | 47.203           |
| 4.- DUQUE DE ALBA .....         | 34.455           |
| 5.- MARQUES DE LA ROMANA .....  | 29.095           |
| 6.- MARQUES DE COMILLAS .....   | 23.720           |
| 7.- DUQUE DE FERNAN NUÑEZ ..... | 17.733           |
| 8.- DUQUE DE ARION .....        | 17.667           |
| 9.- DUQUE DEL INFANTADO .....   | 17.171           |
| 10.- CONDE DE ROMANONES .....   | 15.132           |

De los datos hasta aquí obtenidos respecto de la iglesia y de la nobleza como grupos latifundistas y grandes propietarios de tierra, cabría concluir que la mayor parte de la propiedad de estos latifundios, que nos permiten hablar de la existencia de tal oligarquía rural, pertenece a propietarios individuales no integrantes de la aristocracia ni de la nobleza.

Como puede fácilmente colegirse, aunque estos propietarios individuales, que obtienen sus propiedades como consecuencia de la desamortización y, en buena medida, también acceden a ella a raíz de la crisis colonial, pudieran denominarse propietarios burgueses, tal condición no pasa de ser meramente nominal en cuanto que, unida tal política de adquisición de tierras a una táctica de tipo matrimonial y familiar, tales propietarios individuales adquieren una importancia y una entidad asemejable a la nobleza antes citada, de ella toman el mimetismo de su comportamiento y actuación a pesar de tratarse de un modelo aristocrático en decadencia y de suponer el coste de no constituir, verdaderamente, una clase burguesa



propietarios.

Otra nota característica de esta oligarquía latifundista -- pseudoburguesa es su agrupamiento y concentración endogámica, ello da origen al hecho de que sean solamente unas pocas familias las -- que, representando a este estamento, ostenten la propiedad de la ma yor parte de las zonas latifundistas españolas ya citadas. Apoyaremos esta serie de afirmaciones con la opinión convergente de Malefakis cuando afirma que,

"la realidad subyacente de una intensa concentración de la propiedad se había conservado hasta tal punto parecida, que oscurecía el hecho de que el principal beneficiario del orden social existente no fuese ya la nobleza o la iglesia si no una nueva clase de propietarios burgueses." (33)<sup>31</sup>

Tales grupos vinieron a representar un diseño de los que, -- básicamente, sustentaban los intereses de los terratenientes a la -- hora de emprender cualquier reforma que implicase alteraciones en -- el "status quo". Componen todos los que se denominan comunmente oli garquía rural y que, por su reconocida importancia en la España de los inicios de los años treinta, suponían un serio acicate para la reforma agraria republicana. Pero, dada la estructura de la propiedad de la tierra en España, constituyen un grupo que, si bien tiene unas delimitaciones territoriales concretas, representa la característica más acusada de la problemática agraria española: la gran -- propiedad latifundista.

La propia experiencia de este grupo implica una estructura agraria tan obviamente desequilibrada, que ha de dar como consecuencia el desarrollo de una serie de grupos con caracteres antagónicos al anterior, tanto en su forma de vida y existencia, como en el sen tido en que se desarrollarán sus intereses y presiones. Nos estamos refiriendo, naturalmente, al campesinado rural de la mitad sur de --

España y, en concreto, a los temporeros, braceros, obreros y subarrendatarios, que aparecen como consecuencia de la estructura social y económica derivada del latifundismo.

Estos grupos, en progresivo proceso de autoconcienciación, son de gran interés para la comprensión de la problemática social y económica que se originará en la República, por cuanto que las condiciones en que se presentan al inicio de los años treinta, hacen de ellos unos gérmenes verdaderamente revolucionarios que, como se podrá observar, explican la difícil viabilidad de unos intentos reformistas moderados como los emprendidos por parte de los primeros gobiernos republicanos, así como la dificultosa posibilidad de alineamiento de tales sectores en grupos y partidos que no sean de los del anarquismo radical y revolucionario.

Recalquemos que la existencia de tales grupos no se puede explicar si no es como consecuencia del fenómeno original: el propio latifundismo. Este acarrea básicamente una subutilización del terreno agrario ya que, al encontrarse la tierra acaparada, el gran propietario carece de estímulos para producir más y mejor, en el sentido de que su interés particular se satisface plena y sobradamente con la producción conseguida.

Consecuencia asimismo de la posesión latifundista es, con demasiada frecuencia, el absentismo del propietario, que suele vivir alejado de los lugares próximos a las propiedades y, además, es difícil que reinvierta en aquellas mejoras mecánicas y técnicas necesarias para el incremento de los cultivos de su propiedad. Ello trae como consecuencia la existencia del fenómeno del arrendamiento con, a su vez, la corruptela del subarriendo del arrendatario principal a pequeños subarrendados que, con contratos a corto plazo susceptibles de ser ascendidos con demasiada frecuencia, hacen de ellos una clase tan depauperada como la de los propios jornaleros.

No es muy difícil deducir de todo ello las consecuencias -- que implica tal situación para estos grupos que ahora nos ocupan; -- aquellos afectados negativamente por un sistema que difícilmente -- puede ofrecer trabajo estable a cifra importante de mano de obra y que sólo alcanza a un trabajo eventual en su mayoría, aumentado en determinadas épocas del año, ya que se dedica prioritariamente a -- cultivos herbáceos extensivos.

Según estima P. Carrion,

"normalmente el jornalero andaluz o extremeño no logra más de 700 a 900 pesetas de ingresos al año, pues hay que descontar de 120 a 150 días de paro forzoso, y de los días de trabajo, 120 a 160 jornales pueden valorarse de 3 a 3'50 pesetas, y 60 a 90 días, de 4 a 6 pesetas". (34)

Si se consideran como gastos eminentemente indispensables -- para este campesinado alrededor de las 2.000 pesetas/año, sólo el -- hambre y las privaciones, el malestar y los ánimos de desesperado -- revolucionarismo cubrirán ese déficit.

Puede, por lo tanto, considerarse que más de un 70% de la -- población de las áreas latifundistas constituía estos grupos a que nos referimos que, según cita Malefakis, constituyen unos grupos diferenciados, difícilmente unidos, cuyo principal nexo de desunión -- lo constituye el hallarse permanentemente ocupados (la minoría), o la situación eventual (la mayoría ya referida). Estos últimos, en -- base al autor citado, se hallaban en una situación de inseguridad y miseria "suficientemente grandes como para convertirles en el único grupo inherentemente revolucionario de la sociedad rural española" que, como

"eran aproximadamente tres veces más numerosos en el sur -- que en cualquier otra región de secano (...) sin su presencia, la agitación revolucionaria del sur no habría podido adqui-

rir proporciones masivas". (35)

Aunque, estas divisiones reales y artificiales que incidían en el seno de estos grupos derivados del sistema latifundista español, conseguían verdaderamente crear diferenciaciones e imposibilitar la constitución de un único grupo aglutinante de intereses semejantes. Aunque, igualmente, aquellos factores económicos fueran ayudados por otros de tipo cultural para construir falsa conciencia,-- entendemos que, por la proximidad de los jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios y subarrendatarios en su problemática cotidiana, por su pertenencia a una clase social exclusiva y aún próximos en sus perspectivas, podemos afirmar que constituyen todos ellos un grupo asemejable, que pudieran constituir la base del anarcosindicalismo que, difícilmente y con diversas alternativas se aglutina como fuerza sindical que será estudiada en otro apartado de este -- trabajo y que integra los intereses de los grupos aquí analizados ahora.

Puede decirse, nuevamente con Malefakis, que

"hasta el trienio bolchevique, la historia de las reivindicaciones rurales españolas siguió siendo, en la práctica, -- la historia del anarquismo rural". (36)

Durante la dictadura primorriverista, el intento de marginación de éste movimiento frente a la colaboración con el ugetista, -- no consiguió su neutralización y, al no resolver las causas que lo motivan, puede decirse que, al inicio de la IIª República, una importante masa campesina depauperada solicitaba radicalmente y con -- urgencia una profunda reforma de aquella situación.

Son poco significativos, finalmente, en el conjunto español, aquellos grupos agrarios que estando constituidos por pequeños y su -- ficientes y medios propietarios, supusieran una clase media amortiguadora de conflictos de los extremos. Pero la estructura esbozada del sector agrario español, nos permite concluir que la mediana pro



piedad no constituyó una característica significativa del agro español, su cifra cuantitativa y porcentual no comportó, en el conjunto comparativo de todo el territorio español al iniciarse la República, un saldo suficiente para evitar escandalosas diferencias entre los dos grupos (grandes propietarios, con cifras porcentuales que oscilaban alrededor del 1'5% y pequeños propietarios, cifras que superan el 90%), ya que se movía alrededor del 5% en cifras redondas para el conjunto nacional.

Entendemos fundamental la consideración de ese problema básico y de los grupos que engendra a la hora de analizar la situación previa a la de la Segunda República, que vendrá a emprender las transformaciones agrarias más fundamentales que demandaba la España de los años 30. No se olvide que la etapa republicana abordará estas transformaciones y que, como resultaba obvio,

"el problema de los latifundios aparece, por ello, en primer término, cuando se quiere acometer seriamente la reforma agraria". (37)

Y no se olvide tampoco que, el juego, las presiones y los intereses de los grupos que ya quedan definidos en los años anteriores, serán decisivos para la suerte que corra la reforma y, asimismo, la propia República.

#### II.4.- EL EJERCITO Y LOS GRUPOS MILITARES

En un trabajo que pretenda analizar, desde un enfoque político-social, las transformaciones llevadas a cabo en nuestro país a lo largo de una etapa comprendida dentro de la década de los años treinta y la incidencia de los diferentes grupos en tales transformaciones, no puede faltar un espacio dedicado al estudio del Ejército.

Resulta inevitable su inclusión porque, desde los inicios del siglo XIX, se configura en España el estamento militar con una incidencia decisiva en los eventos políticos; incidencia que perdura claramente y, adentrándose en el siglo XX, se manifiesta en la etapa que ahora nos toca considerar: la IIª República y sus prolegómenos.

Pero para entender en su debida dimensión su actuación, así como el estado en que se hallaba nuestro instituto armado entre los años 1.931-1.936, habrá que remitirse a su historia pasada que, en lo remoto, arranca de la guerra de la Independencia y, en lo inmediato, se contempla como ocupante del poder a través del Directorio Militar encabezado por el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera.

Este epígrafe, previo a la consideración de la etapa republicana, entendemos que ha de ser el más idóneo para el estudio de la evolución del estamento militar, que nos permita conocer su talante en el momento de la proclamación de este régimen.

Puede decirse que, la larga etapa de estabilidad constitucional monárquica que venimos dando en llamar "Monarquía de la Restauración", relevada finalmente por la IIª República, nace y muere como consecuencia de dos actuaciones militares (el de Pavía en 1.874 y el de Primo de Rivera en 1.923). Como consecuencia de dos "pronunciamientos", término tipificado por y específico de la vida política.

co-militar española que, al ser citado en idiomas diferentes al - - nuestro, no necesita de traducción dada su acuñación hispana.

El pronunciamiento puede definirse como "un levantamiento militar, que suele ser incruento -o, al menos, no da lugar a una guerra seria- y se hace en favor de algún partido político o grupo social." (38)<sup>34</sup> Tal tipo de fenómenos tienen su inicio en 1.814, con el llevado a cabo por Elío, siendo su última manifestación en agosto - de 1.932 con el de Sanjurjo; ello a salvo de las diferencias de matiz que pueda darse de unos a otros.

Tales diferencias de matiz puede decirse que se agudizan en - dos etapas distintas de la vida española, que el citado autor las - diferencia claramente. Así, nos habla de una primera época, que - - abarcaría desde el citado 1.814 hasta 1.874, y de una segunda que - lleva desde esta última fecha hasta la década de los treinta en el presente siglo.

Aquella primera etapa de pronunciamientos tiene la destacada característica de corresponder "al afianzamiento del liberalismo" y, en tal sentido, se produce la coloración política de todos ellos. - La segunda "coincide con la agonía de la monarquía liberal y el auge de los sistemas nacionalista y socialista..." (39)<sup>35</sup>

Siguiendo la documentada obra del citado autor, que en el momento de su publicación es miembro activo de la oficialidad del - - ejército español y profesor de sociología, siendo en la actualidad diputado socialista; a cualquiera de las dos etapas a que pertenezcan, se trata de unos fenómenos cuya causalidad está repartida entre varios determinantes, tales como:

- Las circunstancias derivadas de la guerra de la Independencia, en la que proliferó una extracción popular de los componentes de la milicia y, sobre todo, de la "guerrilla" -forma típica de - - plantear el combate cuando el enemigo es desproporcionadamente su-

perior, modalidad, por otra parte, de raíz genuinamente española-, en la cual la disciplina no es una virtud precisamente dominante.

- La politización derivada igualmente de aquella guerra, así como del contacto con las ideas de los afrancesados y de la inciden  
cia ideológica de un romanticismo "glorificador de la idea de libertad".

- La aparición de figuras militares de fuerte raigambre, que tienen su origen en las guerras carlistas, acompañado de un gran - particularismo también innato en este carácter, que hacía anteponerse a sus propios intereses y credos a los del conjunto nacional.

- Hay también una serie de razones de tipo político-social; - concretamente, la debilidad del poder civil y la corrupción dominan  
te en los sistemas electorales, con la existencia del fenómeno caci  
quil como una constante de la vida política española. Igualmente fa  
vorece el hecho de la existencia de un fuerte subdesarrollo y sus -  
secuelas (incultura y pobreza), así como "la proliferación de socie  
dades secretas", que incluídas dentro del seno del ejército, inci-  
den en la preparación de conspiraciones y golpes. (40)

Todas estas connotaciones hacen que sea innegable la inciden-  
cia en el cuerpo social español y en su élite política del ejército.  
Pero tal influencia, conviene precisar, a efectos de delimitar cla-  
ramente el problema en el marco cronológico que ahora nos ocupa, -  
que varía ostensiblemente en una y otra de las dos épocas considerada  
das por Busquets. Es decir, el ejército se "pronuncia" en un senti-  
do muy diferente hasta 1.874 a como lo hace a partir de esa fecha y,  
especialmente, a como lo hace desde la primera década del presente  
siglo.

En los inicios del siglo XIX y en sus tres cuartas partes, es  
indudable que el matiz de los pronunciamientos militares es de cor-  
te liberal, se hacen a favor de los partidos de esa tendencia ideo-

lógica. Los militares más destacados de aquella etapa histórica militan del lado de posiciones liberales, tales son los casos de Riego, Espartero, Prim, O'donnell, Mina, Torrijos, Serrano, etc.

No es extraño este alineamiento de las principales figuras militares en el bando liberal, en cuanto que esta ideología, acompañada de un fuerte sentimiento nacionalista, no solamente era la ideología dominante en la mayor parte del citado siglo, sino que resultaba coherente con las premisas esenciales de la ideología de la institución militar.

Como ya afirmábamos, se produce una clara inflexión en el tema que nos ocupa a raíz de la consolidación de una etapa de estabilidad política que arranca de la Restauración. El hecho de que se afiance un modelo de monarquía liberal que, aunque sea "sui géneris", tiene validez para la mayoría de las fuerzas políticas del país, al menos en los primeros años de su puesta en marcha, permite que cese la actividad militar en el terreno político y vuelvan a sus cuarteles al menos por unos años. Pero tal recesión en los pronunciamientos no significará su punto final, sino simplemente un punto y aparte.

Cuando el ejército reaparece en este terreno, comienza a demostrar síntomas evidentes de una gran transformación en cuanto a su ideología esencial y en cuanto a su comportamiento político. Tal transformación tiene, en nuestra opinión, una doble motivación. De un lado, se debe al cambio de la situación política española a medida que se deteriora el modelo canovista restaurador y va poniéndose en cuestión su validez y viabilidad. De otro, es debida a las mutaciones sentidas en el propio seno del ejército, como consecuencia de su diferente relación con la sociedad y gobiernos españoles y a causa de sus campañas coloniales, que devienen en fracasos continuos.

En cualquier caso, las consecuencias están interrelacionadas, supuesto que un ejército humillado y vencido en sus diferentes campañas bélicas, habrá de afrontar, así mismo, una desolada realidad interior española a principios del presente siglo, con lo que la - desconfianza mutua se agiganta y podrá obviamente hablarse de un - cuerpo extraño en la sociedad española, principalmente al referirnos a aquel que proviene de las campañas coloniales.

Son suficientemente conocidas las "quiebras" del sistema canovista a medida que nos adentramos en el siglo presente, y han sido estudiadas en otro apartado del trabajo que nos ocupa. Nos interesa ahora profundizar en cuales sean las modificaciones que se han producido en el seno del ejército y cuales han sido sus causas, supuesto que aquellas connotaciones que nos presentaba Busquets respecto de los pronunciamientos típicos, quedan alteradas conforme nos adentramos en la segunda etapa a que él mismo se refiere.

Según recoge el estudioso en temas militares españoles Stanley G. Payne (41), entre los años 1.906 y 1.923, con la progresiva decadencia de la validez del sistema canovista, existen una serie - de causas concretas que motivarán las transformaciones del comportamiento militar a que nos queríamos referir:

1) El "desarraigo institucional y el malestar psicológico de los - propios militares españoles". Ejército de gran tamaño, sin fuerza - ni eficacia, con gran peso de quienes ocupan puestos meramente burocráticos y, todo ello, incluso, con bajos niveles de retribución salarial

2) El desarrollo de los movimientos regionalistas catalán y vasco - que, según las rígidas concepciones respecto de la unidad política y cultural de España poseídas por el estamento militar, se convertían automáticamente en enemigos capaces de provocar una fuerte - - reacción del citado estamento.

3) El crecimiento e importante desarrollo de los movimientos obreros revolucionarios a lo largo de la segunda década del presente si glo, conllevó, por insuficiencia e impotencia de los medios guberna mentales, la utilización del ejército como fuerza directamente re-  
presiva en huelgas y manifestaciones, así como el incremento de sus atribuciones en materia de gobierno, con la excesivamente utilizada proclamación de leyes marciales. Ello causó, lógicamente, un enfren tamiento físico cotidiano que distanciaba las posturas y agudizaba los choques e incomprensiones.

4) Finalmente, la "humillación y frustración consiguientes a una lu cha de veinte años por ocupar y pacificar el protectorado español - en el norte de Marruecos", quizá esta última causa citada fuera un desencadenante fundamental en la actividad conservadurizante del - ejército, del mismo derrocamiento del régimen civil en 1.923, así - como de la creación o constitución de uno de sus grupos más netamen te reaccionarios, los "africanistas", que tanta incidencia han tene do en el período estudiado y sobre los que volveremos a insistir.

En definitiva, nos reencontramos ahora con un ejército que, - luego del importante paréntesis en que no interviene en la vida política española activa, resurge como fuerza con la que hay que contar a la hora de la toma de decisiones políticas. Un ejército que, a la hora de tal resurgimiento, aparecerá con un signo diferente y cambiado de aquel que tenía cuando era fuerza esencial en el engranaje de la política decimonónica española. Signo político el de aho ra, conservador y a la defensiva de los movimientos de la sociedad española en años de abierta crisis, frente a aquella institución li beral que otrora representara.

Pero no solamente vienen dados los problemas desde la diferen te óptica con que se pueden contemplar las relaciones del ejército con la sociedad española en las primeras décadas de la presente cen turia. Es que tal estado de cosas hace ciertamente difícil el con-

trol del propio ejército en cuanto a su estructura y organización - internas. En otras palabras, las fuerzas armadas españolas, a parte de tener unas difíciles y conflictivas relaciones con el cuerpo social al que naturalmente pertenecen y al que obviamente han de servir, resultan inadecuadas en su estructura numérica y organizativa a las funciones que están llamados a cumplir.

Es decir, como consecuencias de aquel estado de cosas, puede afirmarse que el ejército español de los primeros años del presente siglo es inoperante para la misión defensiva que está llamado a realizar. Se deduce de ello que su mantenimiento en tales condiciones, sólo y exclusivamente beneficiará su tarea de grupo de presión interior política y socialmente. En tal sentido, y según mantiene Salas Larrazábal -igualmente miembro activo del ejército e historiador- - (42), la mutua desconfianza habida entre el ejército y la sociedad en aquella etapa española, contribuyó a que aquel se cerrase sobre sí mismo (formando un fuerte espíritu corporativo y de casta cerrada) y reaccionara impidiendo incluso, "que se llevaran a efecto reformas estructurales en la composición del ejército que eran de imperiosa necesidad después de la desaparición de los ejércitos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas."

Ello traía naturalmente consigo el mantenimiento de un pesado ejército numéricamente hablando, costoso y caro de mantener, aún a costa de su no renovación técnica y material, convirtiéndose en una pesada e ineficaz máquina burocrática. La explicación dada por Salas a este respecto tiene mucho de razonable y nos sitúa el problema en su justa dimensión, al sostener que "Esta hipertrofia de cuadros militares venía siendo denunciada desde antiguo, como consecuencia nefasta de la Guerra de la Independencia, primero y de las Guerras Carlistas, después; pero la triste realidad es que su raíz era fundamentalmente política y sus culpables indudablemente, los Gobiernos que desde mucho tiempo atrás buscaron en el ejército un -



instrumento mas o menos dócil del que servirse para alcanzar o sostenerse en el poder." (43)

Si tal situación resulta grave, aún se va a agudizar mas a medida que se emprenden las campañas de Africa de las primeras décadas del siglo XX, "lloviendo sobre mojado" y agudizándose los problemas debido a que, aquellos militares procedentes de las Colonias Marroquíes ahora, se consolidarán como grupo cohesionado y diferenciado que, bajo el nombre genérico de "africanistas", constituirán un grupo dentro del propio grupo que ya constituye el ejército español.

Serán tales circunstancias las que hagan de él "un formidable grupo de presión, que no gobierna, pero que impone directivas a los gobernantes" (44). Esto nos plantea la necesidad de sostener una doble afirmación, que más tarde desarrollaremos en el momento de referirnos al ejército en el período concreto de la IIª República - - - (1.931-1.936). Por una parte, la consideración de la institución - militar en su conjunto como un formidable grupo de presión, cerrado y con espíritu corporativo, capaz de incidir sobre el sistema político-social español, apoyándose en ser el brazo armado del Estado, legítimo monopolizador de la fuerza. Por otro lado, ello no quita - para que podamos considerar ciertas diferencias en su propio seno y seamos capaces de distinguir grupos diferenciados dentro de él, que se mueven conforme a móviles distantes y que poseen un peso distinto en los diferentes sectores del cuerpo militar.

En resumen, la necesaria consideración de las fuerzas armadas en su incidencia sobre la transformación de la España de los años - treinta -especialmente en el período republicano, tema que más nos ocupa- ha de pasar por su análisis como gran e importante grupo de presión respecto de toda la sociedad española, así como por su estudio diferenciado en los grupos y sectores que componen su propio seno, que apuntan netamente en distintas direcciones.

Vista la influencia fundamental que va a tener en su conjunto como grupo de presión a través del análisis de los pronunciamientos en sus distintas etapas y en sus distintas modalidades y variaciones, digamos que dentro de su seno pueden distinguirse dos sectores o grupos bien diferenciados y que nacen con distintos determinantes y diferentes finalidades. Podemos hablar, pues, de dos grupos de presión en el seno del ejército en las primeras décadas de este siglo y, exactamente, hasta la proclamación de la República.

Nos vamos a referir a los Africanistas y a las Juntas de Defensa.

El grupo que damos en denominar de los Africanistas, es el resultado de la cohesión, causada como consecuencia de las campañas llevadas a cabo por nuestro ejército en Africa, entre los oficiales que participan en ellas y sufren las consecuencias de la derrota y la desorganización evidente de nuestros organismos militares. El desarrollo de las acciones bélicas de Marruecos iban distanciando cada vez más a las fuerzas militares que en ellas participaban, tanto de las fuerzas políticas y sociales españolas, como de sus propios compañeros de armas de la Metrópoli; máxime si se piensa en la necesidad que aquellas campañas originaron de crear unas fuerzas de choque que suplieran la inoperancia e ineficacia de las fuerzas ordinarias.

No es extraño que a estas nuevas fuerzas de choque, que actuaban en las campañas y combates coloniales mas comprometidos, acudieran los oficiales más preparados, con más espíritu y mas deseosos de salir del estancamiento profesional y de prestigio en que se encontraban. Entre otras cosas, estas nuevas fuerzas de choque eran las mejor preparadas de material y técnicamente y no son otras que las de Regulares y del Tercio (Legión), contribuyendo decisivamente a la formación de un espíritu alejado abismal y peligrosamente del cuerpo social peninsular.

Tales grupos de élite, consolidan a su alrededor el espíritu necesario para recobrar la moral corporativa y llegar a consolidarse a modo de pilares básicos del estamento militar, llegando en algún momento a ser los inspiradores de aquellos movimientos tendentes hacia la crítica del poder político establecido y a su posterior desplazamiento y ocupación. Algo en esta línea es lo que ocurriría con la consolidación, de la mano de Primo de Rivera, de un Directorio Militar que se instala en el poder a la manera de los clásicos pronunciamientos, como no tardaremos en comprobar.

El otro de los grupos que conviene considerar en esta etapa y que es demostrativo de un espíritu e intereses bien diferente al de los antedichos africanistas, es el que se agrupa en torno a las Juntas de Defensa, que denotan fehacientemente la gran dinámica existente en el seno de las fuerzas armadas españolas en la etapa que consideramos.

Son definidas como "especie de sindicalismo militar establecido para defender los intereses de cuerpo y que adquirió un desarrollo creciente que, iniciado en 1.914, llevó el triunfo de las Juntas sobre el Estado en junio de 1.917". (45)

Busquets reconoce igualmente su similitud con un sindicato, básicamente por sus actividades políticas y por sus reivindicaciones profesionales; apoyándose también en su nacimiento en Barcelona -él cita la fecha de 1.916- que es el foco clásico del sindicalismo y la descentralización. Porque, abundando en sus características, añade que, "las Juntas fueron la voz del provincialismo militar, frente a los generales de Madrid y al ejército de Africa. Tuvieron una organización fuertemente descentralizada: en cada guarnición había una Junta y sobre todas ellas existía una Junta suprema ubicada en Barcelona." (46)

Su auge puede situarse en el año 1.917 en que numéricamente -

llegan a contar, según Busquets, con casi 9.000 oficiales, lo que - constituye aproximadamente la mitad de la oficialidad total española; en tal año fueron capaces de provocar una segunda crisis gubernamental después de la que, en junio de este mismo año, hiciera que dimitiese el Gobierno y ascendiese a su jefatura Eduardo Dato.

Resultó evidente en los años de su existencia, que las Juntas de Defensa estaban en clara contradicción con el grupo de militares africanistas, pero tolerantes con el espíritu reivindicativo y sindical de las Juntas. La desaparición de éstas acontece el 14 de noviembre de 1.922, fecha en que es leído en el parlamento, con la correspondiente aprobación de éste, el decreto de disolución. Estas - organizaciones, activas hasta las vísperas de la Dictadura y la IIª República, mantendrían su influencia y su espíritu vivo en tales - etapas, como pasaremos a estudiar en su apartado correspondiente.

La situación general del país, así como la definitiva crisis en que estaba sumido el modelo político español, todo ello ayudado por el estado de cosas interno del propio ejército que, por las circunstancias citadas, estaba concienciado de la necesidad de su intervención redentora, producen la proclamación del Directorio Militar de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1.923. Con él se volvía a producir uno de aquellos viejos fenómenos de intervención militar, otro pronunciamiento, en este caso con las variables ya establecidas respecto del típico modelo de los de los tres primeros - - cuartos del siglo XIX.

Este pronunciamiento de Primo de Rivera tiene unas connotaciones peculiares que permitirán a S.G. Payne, aún reconociéndole algunas de sus típicas características de antaño, calificarlo como "la primera dictadura militar propiamente dicha en la historia de España", ya que, anteriormente nunca "había asumido un directorio militar la responsabilidad directa de los asuntos de gobierno", limitán

dose sencillamente a incluir figuras militares dentro de un gobierno civil al que previamente habían ayudado a consolidarse o ascender. (47)

Será precisamente éste, el ejército que se agrupa en torno al Directorio Militar Primorriverista, el que habrá que considerar a la hora de su estudio como grupo que incide en el advenimiento y posteriores transformaciones de la IIª República española; entre otras cosas, porque es la institución a la que habrá que desbancar del poder cuando se intente, como consecuencia de las elecciones del 12 de abril de 1.931, reestablecer un poder civil democráticamente constituido.

Este ejército, en sus primeros años de ocupación del poder, cumplirá decorosamente las tareas de unificación y pacificación que se le había encomendado, pero no tardará en ir faltando a ellas y deteriorando su imagen. Ello está en la línea de la afirmación de Payne de que, "en 1.930 la idea de Dictadura Militar estaba desacreditada incluso entre los propios militares" que, por los mismos "manejos del dictador", comienzan a desconfiar del sistema, principalmente el estamento de oficiales, que, encontrándose en una desigual e incómoda situación, llegará a ver afectada su propia economía y estabilidad familiar por causa de la crisis económica sufrida por nuestro país como consecuencia de la Iª Gran Guerra.

El ejército, en su conjunto, en el momento de la proclamación de la República, tuvo con ella lo que podríamos llamar una colaboración pasiva, en el sentido de que se inhibió de cualquier tipo de actuación que pudiera haber redundado en beneficio del régimen monárquico. Tal contribución por pasiva al advenimiento del nuevo régimen podría valorarse positivamente, en el sentido de que, inclinado hacia posturas mayoritariamente conservadoras, dejara correr el curso de los acontecimientos que, muy posiblemente llevarían, vía

electoral, a un sistema más avanzado y progresista que el que con--cluía y el cual, bien es verdad, tan poco claramente se había comportado con su estamento militar.

Por lo tanto, el ejército renuncia por una vez a participar - en un cualificado cambio político, cediendo así la única tarea para la que, dada su situación, podía ser válido: su influencia política interna, al estar francamente inutilizado para la tarea esencial pa-ra la que está concebido; es decir, para la defensa nacional dentro de los límites y condiciones establecidos constitucionalmente.

Concluyamos con la siguiente cita que vendrá a servirnos de - puente con el que enlazar el estudio del ejército ya en la etapa re-publicana, su actuación, sus grupos y, sobre todo, la gran necesi-dad de una reforma en profundidad que requerían sus estructuras y - que, al menos se intentó. Dice así: "Al caer la Dictadura y la Mo-narquía pudo verse que España carecía de Ejército. Pese a los 800 - generales, en activo y en reserva, a los 21.000 oficiales que hacía el promedio de un mando por cada seis soldados, la potencia de nues-tro ejército era minúscula." (48)

De los factores que influyan en la resistencia a tan impres-cindible reforma trataremos igualmente en el correspondiente capítu-lo, pues resultó indudable que, lejos de resultar eficaz aquella y cubrir los objetivos buscados, no impidió que el ejército pasara a constituirse en actor fundamental de las transformaciones del régi-men español y, sobre todo, del desenlace final del sistema republi-cano.

### II.5.- LA IGLESIA

El conocimiento de la Iglesia Católica y de su posición al final de la era dictatorial primorriverista, nos permite contemplar - una situación de gran interés acerca de esta institución; alrededor de la cual tanto jugaron los intereses y las presiones de la etapa republicana que estudiaremos como centro de nuestro trabajo.

El objeto fundamental de este análisis será la observación de la posición de la Iglesia Católica tal y como se nos presentaba a lo largo de la Restauración, puesto que su situación durante la Dictadura y primeros meses de los años treinta, no será sino el punto de partida del que arrancan todas las luchas y tensiones tendentes a transformar la posición tradicional de influencia y privilegios - mantenida por esta institución religiosa, a lo largo de los siglos en España.

En definitiva, durante la etapa de Primo de Rivera e inicio - de la década de los treinta, la Iglesia española se nos ofrece con las mismas prerrogativas e incidencia social, política, económica e ideológico-cultural, con que se había mantenido desde varios siglos atrás. De tal importancia es su incidencia que, entendemos, ha de - ser objeto especial de estudio, como grupo específico y delimitado de opinión, interés y presión, a lo largo de la parte concreta de - historia española que nos proponemos analizar en sus facetas económico-sociales.

Hará falta solamente que avancen los años por la conflictiva década española de los treinta, para demostrar fehacientemente cómo, alrededor de la Iglesia española, van a jugar los más importantes - intereses del proceso de transformación que se inicia con la proclamación republicana de abril de 1.931. Veremos cómo se planteará una alternativa concreta por los responsables del nuevo régimen: acabar con la situación de preeminencia social que venía detentando la - -

Iglesia en el sistema monárquico. Ello ocasionará la inmediata reac  
ción eclesiástica que, en demostración de su evidente poder, pondrá  
en funcionamiento amplios sistemas de presión para evitar que cual-  
quier transformación que se intente, pudiera afectar a sus intere-  
ses.

Con el análisis de las vicisitudes acaecidas en el terreno de  
la lucha Iglesia-Estado a lo largo de la Segunda República, que es-  
tudiaremos en posteriores capítulos, habremos explicado suficiente-  
mente la razón de ser de la inclusión en estos capítulos dedicados  
al estudio de las fuerzas sociales, económicas y grupos de presión,  
de una institución como la Iglesia Católica que, en principio, pue-  
de ser entendida como excluida del ámbito temporal y con misiones -  
de orientación espiritual que cumplir.

Su análisis en este capítulo pretende ser el pórtico del más  
profundo que se realizará más adelante, y tiene como misión presen-  
tar la situación eclesiástica en el panorama español, al proclamar-  
se la Segunda República, que no será sino una síntesis actualizada  
de su propia situación a lo largo de los últimos siglos de la histo-  
ria española, en que "la Iglesia había ejercido (...) el papel di-  
rector de la sociedad, marcando la pauta de las conductas públicas  
y privadas y controlaba de manera directa servicios como la enseñan-  
za y la beneficencia." (49)

Si, en el resto de Europa, el gradual desarrollo de los acon-  
tecimientos históricos, desde la Reforma a la Revolución Liberal, -  
pasando por las ideas de la Ilustración, habían ido haciendo perder  
progresivamente posiciones a la Iglesia respecto de la sociedad ci-  
vil, en España, las peculiaridades en relación con muchos de los mo-  
vimientos socio-políticos habidos en Occidente, impidieron que la -  
Iglesia fuese quedando relegada progresivamente a su función espi  
ritual, sino que mantuvo y acrecentó su plena influencia en los asun  
tos temporales, tanto como para poder sostener que, el siglo XIX es



pañol, contempló unas conquistas del poder civil respecto del poder religioso, que hubieran sido típicas de los albores de la conformación del Estado Moderno.

A lo largo de todo el pasado siglo, la lucha de los ideólogos del liberalismo contra la Iglesia se mantuvo tenazmente en nuestro suelo, al no aceptar ésta la cesión de sus privilegios tradicionales; lucha que, si trajo como consecuencia la pérdida de parte del poder económico-territorial de la Iglesia a través del proceso desamortizador, -cabe recordar aquí lo que se sostenía en una orden que se insertaba en el "Boletín Oficial de la Provincia de Gerona" el - 17 de agosto de 1.843: "el Gobierno de la nación, al proclamar la - desamortización, tuvo como objetivos el económico y el de la Justicia, el desarrollo de la riqueza y la distribución de las cargas entre todos los españoles..." "...pero no lo fué ni pudo ser jamás el dejar de atender el culto ni a sus ministros cual exige los deberes de una nación católica, y aconsejaría siempre la moral y la quietud pública en todo país civilizado..."- (50), quedó irresuelta, manteniendo la Iglesia todos sus privilegios, en cuanto al sistema educativo y de presión cultural, que le permitía tener un peso decisivo en la conformación del pensamiento e ideología de la gran mayoría - de un pueblo español, altamente analfabeto y con escaso nivel de civilidad en su pensamiento y costumbres.

Tal posición se mantuvo incólume hasta la Segunda República, que es el primer régimen español que se ocupa de desmontar alguno - de aquellos privilegios, intentando un proceso de profunda transformación en este terreno aunque, en determinadas ocasiones, el nivel de modernidad demostrado en esta lucha fuera poco brillante, llegándose a poder sostener que se trataba de "un acto más, en determinados aspectos, de esa lucha que se mantuvo durante más de un siglo - entre la Iglesia incapaz de evolucionar y los grupos liberales sin fuerza suficiente para imponer el cambio." (51)

Ya veremos cómo, al inicio de la Segunda República, muchos de esos ideales liberales, ciertamente trasnochados cuando ya se ha superado el primer tercio del siglo XX, se mantienen en el debate con la Iglesia. Si ello es cierto, y habrá que computarlo en el pasivo de la República a la hora de resolver tan inaplazable tema, no será menos cierto que la Iglesia de aquellos años tiene una estructura - arcaica, aparte de que, "se había mostrado en abierta colaboración con la Monarquía y la Dictadura de Primo de Rivera. El hecho no ha sido negado -sigue sosteniendo M. Ramírez- y, en general, la jerarquía española se sentía mucho más cercana a una Monarquía respetuosa con los privilegios que a una República que anunciaba revisar- los." (52)

Durante la Dictadura de Primo de Rivera y, por supuesto que a lo largo del régimen monárquico, la Iglesia había sido un pilar fundamental del sostenimiento de tales sistemas, había habido una total identificación de objetivos y propósitos y es muy difícil deslindar en determinados terrenos, dónde empezaba una institución y - dónde acababa la otra. Ello significaba que había en muchas capas - de la sociedad española una absoluta penetración del sentimiento religioso, la población femenina se incluía casi totalmente en este - aserto, como modo de dominación de los regímenes monárquicos, in- - cluída la forma dictatorial que adoptó en sus últimos años y ocupan- do con creencias religiosas, superficiales y tergiversadas en mu- chas ocasiones, el vacío cultural en que era mantenida la población española.

Como se ve, un mutuo sistema de favores en el que la Iglesia cubría un campo absolutamente necesario para el mantenimiento de la Monarquía, mientras que ésta otorgaba a aquélla una posición preeminente de ámbito temporal.

Tal posición de la Iglesia naturalmente se mantuvo, y no sólo

eso, sino que se fomentó a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera, pero tal incremento de su presencia hemos de tratarla no solamente en los ámbitos de tipo ideológico o superestructural, sino - igualmente en los puntos concretos en que se plasmaba materialmente esa incidencia de la Iglesia y su presencia real.

Además de otro tipo de instituciones, son las dedicadas a la enseñanza, en las que la Iglesia mantenía un importante control a lo largo de la Dictadura, continuando así la pauta de crecimiento - de la enseñanza confesional e impartida por las órdenes religiosas a todo lo largo de los primeros años del siglo XX.

Prueba evidente de tal incremento, en la etapa de excepcionalidad constitucional de la Dictadura, son los datos siguientes, que nos ponen de manifiesto que, si en 1.920 existían en España 51.120 religiosas y 16.700 religiosos, en el año 1.930 era la cifra de las primeras 60.695, mientras la de los segundos 20.467, según se recoge de Pérez Galán, que igualmente afirma que, exactamente para el - año 1.923, en que comienza el gobierno de Primo de Rivera, "las comunidades dedicadas a la enseñanza se convertían: para los religiosos en el 56,5% y para las religiosas en el 41,5%." (53)

Pero no solamente estos datos son significativos de la incidencia del tema que nos ocupa, sino que, tampoco podemos olvidar cómo jugaban los intereses eclesiásticos en el avance de la enseñanza de matiz confesional durante la Dictadura, en casos como el reconocimiento de los estudios universitarios del centro de Deusto, regido por los Jesuitas, así como los del centro Agustino de El Escorial, y anécdotas de menor importancia, como la declaración de fiesta escolar obligatoria para todos los estudiantes de la de los estudiantes católicos, Santo Tomás de Aquino.

Merece la pena igualmente destacar que la fuerza eclesiástica desarrollada en España a lo largo de estos años, no solamente tiene

lugar a través de las Instituciones del clero oficial y jerárquico de la propia Iglesia, sino que ésta desarrolla su labor por otros - medios y grupos, que defienden y comparten sus intereses. Ello no - es sino una adaptación progresiva de la Iglesia al transcurso de -- los acontecimientos, un "aggiornamento" que si, en cuanto a la equi- paración con la realidad social, se produce un cierto retraso, se - va adaptando con mayor fluidez en lo relativo a organización de en- tidades, instituciones y grupos próximos, que pueden llevar a cabo con mayor flexibilidad la defensa de sus intereses.

Evidentemente, ya durante la Dictadura, la Iglesia cuenta con organización en el mundo sindical, grupos universitarios, cultura- les, etc., que analizaremos ahora someramente y que contemplaremos con mayor detalle en su desarrollo y actividades durante la IIª Re- pública.

Así, por ejemplo, en el tema concreto del mundo laboral, la - Iglesia está presente a través de unos sindicatos confesionales que, bajo la advocación de la doctrina social emanada de los Pontífices preocupados por el tema, especialmente León XIII, son analizados en otro apartado de este trabajo que se destina precisamente a los sin- dicatos. Pero no podemos dejar de señalar aquí la fuerte incidencia que ejerció la Iglesia en el mundo laboral, defendiendo y dejando - reflejados sus intereses y sus doctrinas en sectores, como el agra- rio principalmente (la Confederación Nacional Católica Agraria fué una organización de peso) y en regiones como la Vasco-Navarra, don- de tuvo una fuerza decisiva el "Sindicato de Obreros Vascos" tam- - bién de inspiración cristiana, así como en las dos Castillas, Reino de León y Levante.

En cuanto a otro tipo de grupos que, al margen de las agrupa- ciones patronales que también están netamente incluídas en el terre- no de las relaciones laborales, sirven a los intereses y opiniones de la propia Iglesia, podemos considerar otros dos, que aparecerán

en la Segunda República como tales, y de los cuales emergerá un grupo político alrededor del cual se constituirá el primer partido español de la derecha confesional en la Segunda República.

Pero a lo largo de la Dictadura, ya pueden contemplarse aquellos dos grupos que sin una específica dedicación política directa, realizan su labor en el terreno formativo y propagandístico y que son: Acción Católica y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

La primera de ellas, Acción Católica, fué un poderoso grupo - laico al servicio de la Iglesia, cuya misión es la de difundir y - propagar el pensamiento básico de la Iglesia, a través del pensamiento del pontificado y la Jerarquía oficial, al margen de los cauces políticos y sindicales, de los que es autónoma esta organización.

Se trata de un grupo que, por tales circunstancias, tendrá todo el apoyo de la Jerarquía Eclesiástica Oficial y tuvo una especial potenciación a lo largo de la Dictadura, en que comienza la publicación (1.928) del "Boletín Oficial de la Acción Católica Española", afrontando la nueva situación republicana, en su día, con un - fuerte nivel de organización, que le permite una defensa de los intereses confesionales en los momentos más críticos para ellos.

Otro grupo que hay que encuadrar al lado del anterior, es la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que igualmente, bajo una sumisión total a la línea jerárquica eclesiástica oficial, - tiene como finalidad, según se recoge en sus propios estatutos: "La propaganda católica en el orden social" (art.1), que en sus actividades: "estará informada del espíritu cristiano y sumisión filial a la jerarquía eclesiástica." (art. 2) (54)

De la utilidad y del servicio que esta Asociación prestaría - en estos años finales de la Dictadura e iniciales de la Segunda República a la causa de los intereses eclesiásticos, da idea el hecho

de que su presidente, Angel Herrera, fuese el principal inspirador de la doctrina que permitiría al catolicismo político mantener una vida legal, activa y hasta ascendente a lo largo de la República, - hasta llegar a ocupar el poder en el segundo bienio, partiendo de - la nada como partido solo dos o tres años antes; nos referimos a la doctrina de la "accidentalidad" de las formas políticas cuando se - tratase de realizar la defensa de ideas e intereses más primordiales.

Tal es la labor fundamental de este grupo que ya organiza sus propios núcleos juveniles y universitarios, pero no olvidemos que, muchas otras actividades de muy distinto orden vamos a ver realizadas e inspiradas por este núcleo de Propagandistas (Centros Educativos, Prensa, etc.).

En definitiva, se ha tratado de poner de manifiesto que la - Iglesias Católica va a ser una fuerza importante con la que habrá - que contar a la hora de la realización de una política republicana que afecte a sus intereses; porque según se nos presenta al inicio del nuevo régimen, se trata de una poderosa y arraigada institución, fortalecida a través de varios siglos y poco dispuesta a la acepta ción de transformaciones que alteren su posición.

No se olvide, en ningún momento, que la religión o los inter ses religiosos constituyeron el núcleo fundamental de la política - de los partidos de derechas, contribuyendo ello al fortalecimiento de sus intereses e implantación. Cabe decir con R. Robinson, que - "La definición básica de un partido de derechas como aquel que en - primer lugar defenderá a la Iglesia y después otras causas es en - mi opinión la más adecuada, y en relación con la España de los años 30, la más correcta." (55)

Hemos visto como su influencia de tipo social y su dominio en el terreno de la enseñanza van a ser los pilares del asentamiento

de su poderío. Cuando entienda que la legislación republicana vaya a transformar su "status" y disminuir su presencia, pondrá poderosos grupos al frente de la defensa de sus intereses y alrededor del tema se planteará uno de los más graves contenciosos republicanos - que, incluso, llegarán a ser determinantes a la hora de la liquidación del nuevo y efímero régimen.

## CAPITULO II

Relación de Citas

- (1) José Luis GUINEA: "Los movimientos obreros y sindicales en España". Edit.: Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1.978.
  - (2) José Luis GUINEA: op. cit., pág. 38
  - (3) José Luis GUINEA: op. cit., pág. 38, recogiendo datos de los Boletines de UGT y de sus Congresos XVI y XVII.
  - (4) Manuel TUÑON DE LARA: "El movimiento obrero en la historia de España". Edit.: Taurus. Madrid, 1.972, pág. 775.
  - (5) Paul PRESTON: "La destrucción de la democracia en España". Edit.: Turner. Madrid, 1.978, pág. 22.
  - (6) Manuel TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 778.
  - (7) Paul PRESTON: op. cit., pág. 27.
  - (8) Paul PRESTON: op. cit., pág. 39.
  - (9) Ver, según datos de José Luis GUINEA: op. cit., pág. 46 y Manuel TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 790, la serie de huelgas, número de huelguistas y jornadas perdidas de trabajo, que se producen en 1.930 respecto de los años inmediatamente anteriores, correspondientes a la Dictadura de Primo de Rivera. Anotemos que, en nuestra opinión, tales huelgas no solo tienen lugar por las mayores facilidades que encuentran en la transición de la Dictadura a la "dictablanda", sino porque la situación económica se ha deteriorado respecto de los primeros años de la Dictadura y este régimen en sí no ha aportado la solución, aflorando en 1.930 los conflictos latentes y ya improrrogables. Los datos referidos son los siguientes:
- | <u>Año</u> | <u>Huelgas</u> | <u>Huelguistas</u> | <u>Jornadas Perdidas</u> |
|------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1.930      | 402            | 247.460            | 3.745.360                |
| 1.929      | 96             | 55.576             | 313.065                  |
| 1.928      | 87             | 70.024             | 771.293                  |
- (10) Manuel TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 798.
  - (11) Manuel TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 798.
  - (12) José M<sup>a</sup> GARCIA ESCUDERO: "Historia política de las dos Españas". Editora Nacional. 2<sup>a</sup> edic., Madrid, 1.976.
  - (13) M. TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 789.
  - (14) José Luis GUINEA: op. cit., pág. 42.
  - (15) José M<sup>a</sup> GARCIA ESCUDERO: op. cit., pág. 563 y 566.



- (16) José Luis GUINEA: op. cit., pág. 43.
- (17) José Luis GUINEA: op. cit., pág. 42.
- (18) Maximiano GARCIA VENERO: "Historia de los movimientos sindicalistas españoles" 1.840-1.933. Ediciones del Movimiento. Madrid, 1.961, pág. 382.
- (19) Maximiano GARCIA VENERO: op. cit., pág. 390.
- (20) Manuel TUÑON DE LARA: "En torno a la Dictadura de Primo de Rivera". Cuadernos Económicos de I.C.E. Nº 10. 1.979, pág. 25.
- (21) Juan VELARDE FUERTES: "Política económica de la Dictadura" - Edit.: Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1.973.
- (22) Nicholas BELFORD: "El sistema bancario durante la Dictadura de Primo de Rivera". Cuadernos Económicos de I.C.E. Nº 10. Madrid, 1.979, pág. 227.
- (23) Nicholas BELFORD: Ibid. pág. 229.
- (24) Gabriel TORTELLA (ed.): "La banca española en la Restauración". Edit.: Servicio de Estudios del Banco de España. Madrid, 1.974.
- (25) Nicholas BELFORD: Ibid. pág. 238.
- (26) Fuente: Juan VELARDE FUERTES: op. cit., pág. 206.
- (27) Vid.: José ACOSTA SANCHEZ: "El desarrollo capitalista y la democracia en España. Aproximación metodológica". Edit.: DIROSA. - Barcelona, 1ª edición, mayo 1.975.
- (28) José ACOSTA SANCHEZ: op. cit., pág. 32.
- (29) Edward MALEFAKIS: "Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX". Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic., sept. 1.972. pág. 29.
- (30) Fuente: Pascual CARRION: "Los latifundios en España". Edit.: - Ariel. Barcelona, 2ª edic., 1.975.
- (31) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 88
- (32) Pascual CARRION: "La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española." Edit.: Ariel, Barcelona, 1.973, págs. 121 y ss.
- (33) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 100.
- (34) Pascual CARRION: "Los latifundios en España", pág. 342.
- (35) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 125.
- (36) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 188.

- (37) Pascual CARRION: "Estudios sobre la agricultura española". - - (1.919-1.971) Ediciones de la Revista de Trabajo. Madrid, 1.974. pág. 249.
- (38) Julio BUSQUETS: "El militar de carrera en España". Edit.: Ariel, Barcelona, 2ª edic., enero de 1.971, pág. 45.
- (39) Julio BUSQUETS: op. cit., pág. 46.
- (40) Julio BUSQUETS: op. cit., pág. 54-55.
- (41) Stanley G. PAYNE: "El Ejército. La República y el estallido de la Guerra Civil." en "Estudios sobre la República y la Guerra - Civil española" Edit.: Raymond CARR. Edit.: Ariel. Barcelona, - 2ª edic., febrero de 1.974, págs.: 107 y 108.
- (42) Ramón SALAS LARRAZABAL: "Las fuerzas armadas españolas en el si glo XX" en "Historia social de España siglo XX". Edit.: Guadia-  
na de Editores. Madrid, 1.976, pág. 342.
- (43) Ramón SALAS LARRAZABAL: op. cit., pág. 343.
- (44) Ramón SALAS LARRAZABAL: op. cit., pág. 345.
- (45) Ramón SALAS LARRAZABAL: op. cit., pág. 345
- (46) Julio BUSQUETS: op. cit., pág. 77.
- (47) S. G. PAYNE: op. cit., pág. 108 y ss.
- (48) Manuel RAMIREZ: "Las reformas de la IIª República". Edit.: Tu-  
car. Madrid, 1.979, pág. 49.
- (49) Mariano PEREZ GALAN: "La enseñanza en la Segunda República espa-  
ñola". Edit.: Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 2ª edic. corre  
gida. 1.977.
- (50) Recogido de: Francisco SIMON SEGURA: "Contribución al estudio -  
de la Desamortización en España. La Desamortización de Mendizá-  
bal en la provincia de Gerona". Edit.: I.E.F. Madrid, 1.979.
- (51) Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 10.
- (52) Manuel RAMIREZ: "Los grupos de presión en la IIª República". -  
Edit.: Tecnos. Madrid, 1.969, pág. 194.
- (53) M. PEREZ GALAN: op. cit., pág. 31.
- (54) Recogido de M. RAMIREZ: "Los grupos de presión...", pág. 155.
- (55) Richard ROBINSON: "La República y los partidos de la derecha",  
en "Estudios sobre la República y la Guerra Civil española", -  
edit.: Ariel, Barcelona, 2ª edic., febrero de 1.974.

C A P I T U L O   I I I

LAS FUERZAS POLITICO-SOCIALES  
DURANTE LA IIª REPUBLICA

C A P I T U L O   I I I  
FUERZAS POLITICO-SOCIALES DURANTE LA  
SEGUNDA REPUBLICA

El experimento Monárquico-Constitucional, que había sido restaurado en España en la persona de Alfonso XII y que había tenido - como artífice fundamental a D. Antonio Cánovas del Castillo, había tocado a su fin. La suma de circunstancias y errores que fueron concurriendo en aquella época histórica, que empezará siendo el régimen constitucional más estable conocido en España, propiciaron su caída.

El último gestor de sus días, el Almirante Aznar, al frente - de un gobierno de "concentración monárquica", proporcionó la única salida viable: la convocatoria de un proceso electoral celebrado en un cierto clima de libertad y tolerancia. Este proceso, aún celebrándose en el orden que se adivinaba más idóneo para los intereses de la institución monárquica, supuso la cancelación de la propia Monarquía. Fueron las elecciones de ámbito municipal, las que abrieron la posibilidad del cambio, con un resultado que, aunque discutido y reflejado con diferentes valoraciones, según enfoques ideológicos y de intereses, trajo a nuestro país su segunda experiencia republicana.

Esta experiencia, cuya fecha oficial de nacimiento es la de - sólo dos días después de las citadas elecciones, el 14 de abril de 1.931, constituyó una etapa controvertida de nuestra reciente historia supuesto que, a lo largo de su corta existencia, dió lugar a - que salieran a la luz pública las más diversificadas tendencias e - ideologías, teniendo la ocasión de permitir reflejar en la arena política, todas las tensiones y contradicciones acumuladas en la sociedad española durante muchas décadas anteriores.

Todo un movimiento revonador hubo de enfrentarse, en lo polí-

tico, lo social y lo jurídico, con un movimiento de reacción por - parte de quienes entendían que la mejor forma de defender sus posiciones e intereses era la inmovilidad, en todo caso, el "status" más aproximado posible al que prevaleció durante la vieja Monarquía ya desaparecida.

La mejor manera de analizar cuáles fueron los principales - protagonistas de esta dinámica etapa republicana, así como los intereses y posiciones que defendieron en cada caso concreto, será la - de considerar los medios naturales de expresión y acción en la vida política: los partidos políticos.

Bien sabemos que no solamente se hacen jugar los diferentes intereses a través de los cauces partidistas, también existen otras vías que igualmente se prodigan abundantemente; nos referimos a los sindicatos, agrupaciones patronales, profesionales, instituciones - culturales y todo tipo de grupos de presión. Pero, toda esa serie - de protagonistas de la historia, tendrán su lugar en otro capítulo; en el actual momento, nos limitaremos esencialmente al análisis de los partidos políticos, con lo que habremos cubierto el conocimiento de los sujetos activos más importantes del entramado político-social de la etapa que nos interesa estudiar.

### III.1.- LOS PARTIDOS POLITICOS: CAMBIOS Y ALTERNATIVAS

Vale la pena hacer un inciso para aclarar que se produce una gran dinamización de los grupos y partidos políticos en la etapa -- que estudiamos.

Ya habíamos considerado una visión de conjunto, destacando -- los principales partidos políticos que tienen vigencia en la realidad española inmediatamente anterior a la proclamación del Régimen Republicano que ahora nos ocupa. En base a tal dinamismo, hemos de añadir ahora que nos detendremos detalladamente en aquel mismo análisis a la altura del período republicano, pero advirtiéndolo previamente que se han producido algunos cambios; que algunos grupos ya -- existentes variarán, en uno u otro sentido, sus líneas e importancia de la etapa anterior; que otros, sencillamente, desaparecerán y, finalmente, que irrumpirán otros nuevos, ratificando la fuerza dinámica y bullidora de la sociedad española republicana, de la que estos partidos políticos no son más que un mero reflejo, ya que, particularmente, consideramos que un partido político si bien cuenta -- con una dirección, cuya misión principal radica en la guía de sus -- bases, no puede desenvolverse al margen de la realidad, y su fuerza política más estimable será precisamente aquella que le proporcione la dinámica social de aquellas bases, en las que necesariamente tiene que apoyarse. De ahí que entendamos que sea la realidad de los -- acontecimientos sociales y políticos la que condicione el nivel de importancia e, incluso, la existencia misma de los partidos políticos, más que al revés; lo contrario nos permitiría hablar de grupos de cuadros o grupos de presión.

Comenzaremos, siguiendo un orden semejante al reflejado en -- el primer capítulo, con la inclusión de las nuevas fuerzas presentes, entonces no consideradas.

### III. 2.- PARTIDOS REPUBLICANOS

La constante más destacada que presentan los partidos republicanos españoles en el momento en que se produce en nuestro país la principal de sus definiciones programáticas, la existencia de un régimen republicano, es la de su variedad y división en pequeños grupos. Más de media docena de partidos poseen la connotación de "republicanos" el 14 de abril de 1.931, ello si consideramos únicamente a los que extienden su implantación a todo el territorio nacional, dejando al margen a aquellos que tienen un ámbito y aspiraciones regionalistas.

Es por todo ello, por lo que podemos adelantar alguna de las características que se dan en tales partidos en el momento que nos ocupa y que nos servirá, como aproximación a la tarea emprendida de un detenido análisis de los partidos políticos durante la Segunda República.

Por lo tanto, afirmamos esquemática y sistemáticamente, que los partidos republicanos son:

- Una pluralidad, aunque con cierta similitud.
- No constituyen, por ello, un fuerte partido unitario.
- Están, además, obligados a coaligarse para obtener las mayorías que les permitan la tarea del gobierno.
- Tales coaliciones habrán de hacerse, en muchos casos, con partidos no específicamente republicanos, situados, por ello, a extramuros del grupo cuya afinidad principal es la de su republicanismo.

En este sentido, y antes del paso a la consideración de cuales sean todos y cada uno de los partidos incluidos en este grupo, hemos de analizar dos cuestiones previas:

- a) Tratar de contestarnos a la pregunta de porqué el republi

canismo no contó con fuerza suficiente, para constituir un grupo - unitario y fuerte, una vez conseguida la primera misión para la que se habían puesto en funcionamiento: la existencia de un régimen republicano en España.

b) Plantearnos con quién forman la coalición necesaria para obtener la mayoría gubernamental y, una vez conocido ese punto, analizar cuáles fueron las causas de que tal coalición se resolviera - con aquéllas y no con otras fuerzas, que podrían resultar más afines.

Intentemos la contestación ordenada a estas dos cuestiones - planteadas.

a) ¿Porqué el republicanismo no constituyó una fuerza unitaria e importante en nuestro país?. Varias son las razones que contestan a este interrogante. Una elemental, aunque de fuerza innegable; se basa en el hecho de que la estructura social y económica - del país, al inicio del período republicano, no era la óptima para el nacimiento de un pretendido régimen liberal, burgués y mesocrático. España presentaba, en tal sentido, una estructura social y económica desequilibrada, que tenía su punto de partida en su propia - demografía y distribución poblacional pues, mientras que la población urbana, más proclive a un régimen como el que se trataba de - consolidar en España, se situaba alrededor de tres millones y medio de personas, la población rural (aquella que se asentaba en poblaciones de menos de diez mil habitantes), se situaba por encima de - los trece millones. Todo ello con la base comparativa de que España, según el censo de población de 1.930, tenía una población algo superior a los veintitrés millones y medio de personas.

Hemos de reconocer, no obstante, que la tendencia que se acusaba en los años de la República, era en el sentido de mejorar la - proporción a favor de la población urbana.



Tendía igualmente a mejorar la población en lo concerniente a su distribución sectorial, puesto que, por primera vez, la población activa agraria no superaba la mitad del total de la población activa. Así pues, para el año 1.930 que nos está sirviendo de referencia y con idéntica fuente de información a la de los datos anteriores (1), se ocupaba en el sector primario o agrícola el 45,51% - de la población, al 26,51% daba ocupación el sector secundario o industrial y el sector de servicios o terciario, alcanzaba la cifra - del 27,98%.

Aparte de estos datos poblacionales y de su distribución, podremos apoyar igualmente la tesis del insuficiente soporte que el - régimen republicano burgués tenía en la estructura social española, específicamente en el sector agrario. En tal sentido, nos será útil saber que sólo el 0,97% de los propietarios de fincas rústicas, poseían la suficiente tierra como para representar el 42,05% del total del líquido imponible correspondiente a la Contribución Territorial Rústica. Por otra parte, aquellas otras tierras que eran poseídas por mayor número de propietarios, fallaban por su baja mecanización y productividad, así como por circunstancias como el absentismo de sus propietarios y formas onerosas en exceso de los arrendamientos. Todo ello traía como consecuencia una estructura social - particularmente variada y diferenciada, con la existencia de grandes contrastes.

Contrastes tales como la sola existencia de 12.000 grandes - terratenientes que paguen más de 5.000 pesetas de cuota de contribución, mientras la cifra de asalariados superaba los cuatro millones, aproximándose a su mitad -cerca de los dos millones- la de los que trabajaban en la agricultura, según la citada obra de T. de Lara.

Es sabido, a tenor de estos datos, que las condiciones de vida del sector agrario eran particularmente difíciles, dada la ines-

tabilidad de su contratación, la tradicional menor subida de los salarios del campo y precios de los productos agrarios, el conocido - paro estacional, así como los bajos niveles comparativos de vida, - en aspectos tan fundamentales como: acceso a la cultura, habitat, - vivienda, nivel de consumo, etc.. Recordemos un dato bien significativo en el hecho de que, a la altura de 1.931, el grado de analfabetismo se calcula en torno al 30-40% de la población agraria que, como ya dijimos, era la más numerosa del país. Ante tal porcentaje hemos de recordar un hecho de elemental aceptación, que no es sino - que la constatación de que esos niveles de analfabetismo están en - contradicción profunda con un régimen parlamentario burgués, del - corte del que podían traer los partidos republicanos ahora estudiados.

A todo ello se une una estructura económica que reúne unos - rasgos sobresalientes, también poco propicios: (2)

- Subdesarrollo, atraso económico y social de orden precapitalista, por lo que, "la sociedad burguesa no constituye un patrón generalizado".
- Escasa entidad del sector capitalista de la economía, "que no alcanza a ser un sector claramente dominante en el juego de intereses de clases ni en los modos de organización de la base económica".
- Heterogeneidad interna de la economía española, que comporta una diferente problemática económica y social, difícilmente compatible con una uniformidad en la estructura jurídico-política.
- Concentración oligárquica del poder económico en un contexto socialmente atrasado.

En definitiva, y esta es una conclusión a la que esperábamos llegar, una estructura social y económica poco favorecedora de una república burguesa y liberal, dado que habrá de dar lugar a un electo

torado poco proclive a soluciones moderadas en lo político y, por ende, poco potenciador de los partidos más típicamente republicano burgueses, que ocupan este apartado.

Pero es que, además, considerando aquellos otros sectores - que, aunque no mayoritarios ni concluyentes, podrían pensarse como seguros en el apoyo del republicanismo, podemos decir con Malefakis que, "En contraste con otras naciones europeas, las regiones industrializadas de España constituían una fuente de apoyo incierto a la izquierda debido a que aquellas estaban más preocupadas por su autonomía regional que por la política nacional como tal." (3)

El problema que aquí se suscita, entendemos que fué vital a la hora de la configuración de una clase media burguesa en España. Los asentamientos industriales más importantes del país, Cataluña y País Vasco -sin que puedan identificarse las dos regiones en su problemática y autonomismo- contaron con unas clases burguesas, que centraron sus ardores políticos en la lucha por la autonomía regional de sus respectivos territorios -insistimos en sus diferentes motivaciones-, como forma de mejor defensa de sus posiciones frente a un gobierno central que entendían incapaz de representar sus intereses, máxime desde que la serie de errores de aquel gobierno habían propiciado la pérdida de las últimas Colonias, en las que los intereses comerciales de la burguesía catalana se habían asentado fuertemente.

Por ello, si hay que buscar el apoyo social a aquellos partidos republicanos, no habrá que hacerlo en aquellas regiones que, si bien pueden contar con una estructura socio-económica adecuada, tienen otra problemática e intereses regionales que desvían su atención política; de ahí que el núcleo fundamental del republicanismo haya que buscarlo en zonas como Madrid, Levante y algunas capitales de provincia de segundo orden, de donde se deduce que, tanto este -

grupo de partidos que ahora analizamos, los "partidos republicanos", como el modelo de República que propugnan, contaban con una base - ciertamente limitada, que explica el rumbo que hubo de seguir el pe ríodo republicano en su desarrollo práctico.

A todo lo dicho hemos de unir el carácter tradicionalmente - personalista del republicanismo español, que conlleva una serie de importantes luchas intestinas por el protagonismo de una u otra ten dencia y hace que, al final, quede todo convertido en una agrupa- - ción de pequeñas entidades autónomas, aglutinadas en torno a una - personalidad prestigiosa. Si además consideramos el importante fac- tor de enfrentamiento que supuso el tema clerical, entre las capas izquierdistas y moderadas (bases naturales de lo que estamos llamanan do genéricamente "republicanismo"), habremos accedido al conocimiento de las principales razones por las cuales el republicanismo espa ñol no se impuso de forma nítida y clara, cuando pareció llegado el momento de su definitivo triunfo o, al menos, cuando se hizo más - propicio el viento de sus circunstancias.

Así pues, tenemos una República burguesa en su definición y planteamientos, pero sin unas clases medias ni una burguesía tan - fuertes como le hubiera sido necesario para constituir un régimen - homogéneo y fuerte. Vendrá bien, llegado este punto y en apoyo de - tales asertos, recoger el párrafo en el que se sostiene, por los au tores Broué y Temime que, "uno de los dramas de los republicanos y de los liberales españoles es que la falta de acabamiento de la na- ción española, la persistencia de las tendencias separatistas hayan impedido, a pesar de la existencia de una burguesía vasca y de una burguesía catalana, la constitución de una verdadera burguesía espa ñola." (4)

Llegados a este punto, nos será preciso adelantar el segundo apartado de aquellas consideraciones previas, que nos habíamos pro-

puesto analizar en el contexto de los partidos republicanos:

b) La consideración de aquellas fuerzas que hayan de servir de aliados a estos republicanos para lograr esa mayoría que posibilite la gobernación de la República.

Los diferentes autores considerados nos permiten llegar a la conclusión de que, fundamentalmente, habían dos hipotéticas posibilidades de alianzas, una vez desechada aquella que propugnaba la unificación de todas las fuerzas que poseían el sello común de su republicanismo y en vista de la debilidad estructural del modelo deseado para la república española, en su sentido liberal-burgués.

Las dos posibilidades a que nos referimos son las siguientes:

1.- Buscar la alianza de la izquierda republicana y de su derecha, excluyendo la posibilidad de apertura más a la izquierda hacia los socialistas.

2.- Alianzas hacia la izquierda, produciéndose la colaboración de los republicanos de izquierda con los socialistas, en detrimento del republicanismo moderado y de derechas, en definitiva, del modelo republicano burgués en su estado puro.

Sabido es de sobra que fué esta última solución la adoptada, que venía a reanudar la ya ensayada conjunción republicano-socialista. Tal vía de solución comportaba el reconocimiento de varias cuestiones evidentes:

La primera de ellas era la falta de cohesión interna de un republicanismo que presenta diferencias insalvables para ofrecer un gobierno estable.

La segunda, el reconocimiento de que, ante tal debilidad de los partidos burgueses, el único sector que podría proporcionar una amplia base de masas era la clase trabajadora, representada por el mayor de los partidos unitarios existentes en aquel momento, el Par

tido Socialista Obrero Español. Además, esta alternativa estaba favorecida por el momento de auge por el que estaban atravesando estas organizaciones obreras en los inicios del período republicano - y, sobre todo, por la tendencia al desplazamiento hacia la izquierda que se había generalizado en la sociedad española, como rechazo de la Monarquía recientemente destituida, incluso por aquellas clases sociales de posición ambigua, que esperaban obtener de la República un cambio ordenado y moderado, pero que apuestan por ella, - aunque sin tardar mucho en replantearse la situación.

Nos enfrentamos, pues, con el estudio de una República burguesa y liberal, que ha de depender del apoyo de la clase obrera y de su principal partido que, solventadas sus diferencias en el seno de su propia directiva, adoptará una postura de seria colaboración con el nuevo régimen, en sentido fundamental y en primera instancia, de contribuir al fortalecimiento y consolidación de su sentido democrático y parlamentario.

Pero ya, sin mayores preámbulos, por necesarios que estos hayan sido, recuperemos nuestra línea argumental originaria, luego de haber realizado tales consideraciones, pasando al análisis específico de los partidos republicanos, que estudiaremos clasificados en diferentes grupos que, básicamente, serán:

- Partidos Republicanos de Derecha.
- Partidos Republicanos de Izquierda.
- Partidos Republicanos Regionalistas.

Partidos Republicanos de Derecha

Situándonos en la fecha de 1.931, comienzo de la etapa que nos ocupa, se puede sostener que el ala derecha de los partidos calificados como republicanos está ocupada, básicamente, por dos formaciones:

- Derecha Liberal Republicana, a cuya cabeza figura la ilus-

tre personalidad de D. Niceto Alcalá Zamora y

- Partido Radical, dirigido por D. Alejandro Lerroux.

En cuanto a Derecha Liberal Republicana, podemos decir que se trata de un partido de creación reciente; hemos de recordar que quedó incluido entre los que denominamos "nuevos partidos republicanos" y su base fundamental se sostiene en la agrupación en torno los dos personajes más destacados que lo constituyen: Alcalá Zamora y Miguel Maura.

La idea de su principal impulsor al fundar este partido, e grosando las filas republicanas, era la de lograr una República e orden, moderada y de derechas, respetuosa con los valores tradicionales españoles. Alcalá Zamora, bajo el signo de la honradez, pens que tales características habría de tener una República para ser viable en nuestro país.

En agosto de 1.931, este partido cambiará su denominación, pasando a denominarse Partido Republicano Progresista, su program ideológico tendrá como puntos esenciales, los siguientes:

- Régimen políticamente democrático y bicameral
- No confesional, pero respetuoso con el sentimiento religioso
- Mesocrático y reformista en lo social (5)

Dada la personalidad de su máximo dirigente y con la finalidad de conceder mayor credibilidad a la República entre sectores derados o quizá algo reticentes, fué promovido A. Zamora a la Presidencia de la República, hecho este que, lejos de lo que pudiera parecer, debilitó al partido, al no contar con su jefe de fila todo lo intensamente que hubiera permitido su libertad de movimientos fuera de aquel cargo, máxime si tenemos presente cómo la entidad estructural de este partido, era débil e iba poco más allá de lo que daba de sí el prestigio de sus líderes.

El Partido Radical de D. Alejandro Lerroux, había pasado de un republicanismo radical y profundamente anticlerical en el pasado, a ocupar durante la Segunda República, por pleno derecho, la - margen derecha del republicanismo, actitud que se irá pronunciando más acusadamente a lo largo de los años de la experiencia de 1.931 a 1.936.

Contó con un importante éxito electoral en las elecciones - constituyentes, que le configuró como el partido de más escaños, de entre los republicanos. Tales votos quizá provengan, como opina G<sup>a</sup> Escudero, de aquellos sectores de la derecha republicana que no con fía en Azaña y que busca la potenciación de un partido propio.

Son varias las tendencias diferenciadas que se agrupan en es te partido, en razón de su largo recorrido por la vida nacional y - las diferentes alternativas electorales que contempla. Tales tenden cias son: la desacreditada "vieja guardia", el grupo blasquista de Valencia y el grupo de Martínez Barrio, procedente del sur.

Será de gran importancia la figura de D. Diego Martínez Barrio, en los primeros tiempos del partido, al lado de la del líder Lerroux. Posteriormente, sin embargo, se producirá el distanciamien to y la escisión, cuando Lerroux se separa de la coalición de Azaña y "se perfilan decididamente como partido alternante frente a la - coalición de republicanos de izquierda y socialistas." (6)

El grupo de simpatizantes de Martínez Barrio, sale del parti do y, en mayo de 1.934, funda el Partido Radical Demócrata, cuya vi da autónoma no será muy larga, al pasar a integrar con posterioridad la Unión Republicana.

Siguiendo con el Partido Radical, hemos de decir que, en su composición y estructura, consta de unas bases sociales de funciona rios y profesionales liberales, ciertamente lejanos a las masas tra bajadoras que forman en la conjunción republicano-socialista propi ciada por Azaña, con quien las diferencias son ostensibles.



El momento de más alta situación del partido que nos ocupa se producirá con las elecciones de noviembre de 1.933, de las que sale fortalecido y obtiene el poder, acusando un giro hacia su derecha que le lleva a un cambio de alianzas, colaborando y coaligándose con la CEDA durante este segundo bienio republicano. Tal comportamiento le hizo perder crédito ante la opinión republicana y le acarreó el abandono de buen número de sus seguidores anteriores -- pues, recordemos que este partido en su largo recorrido, acusó con relativa frecuencia tales cambios de alternativa, que le hicieron -- mutable en cuanto a sus bases sociales y su apoyo electoral.

Llegadas las elecciones de febrero de 1.936, aquellas elecciones denominadas del "Frente Popular" en esa línea de simplificación terminológica de la que a veces se abusa en los mismos trabajos científicos, el P. Radical fué ignorado y desapareció prácticamente del mapa electoral español, pasando del centenar de diputados con que contaba en el año 1.933, a los sólo cuatro con que quedó en febrero de 1.936.

Tal fué el final de un partido ambiguo, caracterizado tanto por su anticlericalismo como por su antisocialismo, así como por su reticencia al autonomismo regional y en el que, al lado de miembro cuya honradez no podía ponerse en duda, aparecían elementos de dudosa reputación, como lo demuestra la implicación que tuvieron en el caso del "estraperlo", poco antes de las elecciones de 1.936, que fué una de las circunstancias que acabó de derrotar electoral y políticamente a este viejo partido republicano.

Siendo, a nuestro entender, demasiado prolijo el análisis de otros partidos de la derecha republicana, cuya incidencia en la vida política nacional fué realmente escasa, así como su misma importancia intrínseca, damos aquí por finalizado el apartado presente, pasando al desarrollo del siguiente, según el esquema trazado.

## Partidos Republicanos de Izquierda

Siguiendo con el análisis de los grupos republicanos que pue-  
blan el marco político de 1.931 a 1.936, siguiendo igualmente la -  
evidente ratificación de lo ya constatado en lo relativo a plurali-  
dad y fraccionamiento de los grupos republicanos, consideraremos en  
tre la izquierda republicana dos principales grupos, tras de los -  
cuales mencionaremos a aquellos otros de menor entidad que también  
merezcan ser agrupados en este mismo apartado.

Aquellos dos grupos más importantes que citamos, son:

- Acción Republicana y
- Partido Republicano Radical Socialista.

Acción Republicana, es el partido cuya identidad principal -  
deriva de la personalidad de su primer dirigente y líder indiscuti-  
ble, D. Manuel Azaña. Ya dijimos cómo su fundación, que proviene de  
los años de la Dictadura de Primo de Rivera, está enmarcada dentro  
del proceso de reorganización y aproximación republicana, a medida  
que se va observando el declive del sistema monárquico, a través -  
del propio declive de la Dictadura que vino a sostenerlo.

Si recordamos a este partido durante la corta historia que -  
posee, no tenemos más remedio que representárnosle organizando y -  
tratando de unir las dispersas fuerzas republicanas. Aparte de ello,  
fué un partido de gran dinamicidad y fuerza a lo largo del bienio -  
en que su jefe ocupa la presidencia del Consejo de Ministros de la  
República.

Posteriormente, ante la crisis de la coalición republicano-  
socialista de este primer bienio, no deja de intentar la agrupación  
del republicanismo cercano, ante el eventual abandono socialista -  
del poder, que no se llega a producir. En tal dirección se mueve su  
aproximación a los partidos O.R.G.A., Esquerra y Radical Socialis-  
ta, coalición que no llega a cristalizar hasta que no se ha produci

do el gran revulsivo de su fracaso electoral de 1.933, consecuencia de haber concurrido separadamente a aquellas elecciones, en las que el sistema electoral primaba considerablemente la formación de coaliciones.

Será pues, en 1.934, cuando haya caído del poder y haya sufrido un buen descalabro electoral la agrupación republicano-socialista, cuando se ponga en marcha aquel proyecto, que da lugar, a partir de Acción Republicana y las citadas fuerzas (ORGA y Radical-socialista), a la nueva formación denominada Izquierda Republicana, cuya línea programática está marcada por el propio Azaña, que se mantiene de líder. El programa de esta nueva formación contendrá la orientación azañista, inspirada en su experiencia gubernamental de los primeros años republicanos.

Serán puntos esenciales del programa citado, los siguientes:

- Negación del carácter de verdaderos republicanos de los Radical-Cedistas, que en aquel momento ocupaban el poder - - (1.934).
- Se pronunciaba contra la Iglesia y el Ejército, por su excesiva influencia ejercida en la política nacional.
- Favorable a las autonomías, con lo que tendía hacia el apoyo de los regionalistas.
- Búsqueda del apoyo de los socialistas.

El partido unificado bajo la denominación de Izquierda Republicana, tuvo una decisiva incidencia y participación en la formación y en el gobierno del Frente Popular, en febrero de 1.936, estando entre los que ocupan los puestos gubernamentales hasta el fin de la etapa republicana, alcanzando Manuel Azaña la Presidencia de la República, luego de su etapa de Jefe del Gobierno.

El Partido Republicano Radical Socialista, es el segundo de los citados dentro de este grupo de los republicanos de izquierda y

se caracteriza, frente a aquellos que simplemente sobreviven como - grupo alrededor de una figura personal y que se constituye en líder indiscutible y alma del partido, por su mayor funcionamiento orgánico y menor personalismo; si bien y quizá por esta razón, ha sido un partido que ha sufrido diferentes escisiones, que han tenido el denominador común de tratarse de abandonos por la izquierda. Una de - estas escisiones, quizá la que mayor importancia posee, es la protagonizada por Marcelino Domingo y su grupo de allegados, que se separa en junio de 1.934, siempre con posterioridad a la derrota electoral de noviembre de 1.933, integrándose poco después en Izquierda - Republicana, cuya composición ya hemos analizado.

El grupo que permanece en el partido contará con el encabezamiento de Gordón Ordás, que mantiene igualmente una línea futura de agrupamientos en uniones republicanas pues, junto con el Partido Radical Demócrata que dirige Martínez Barrio y que procede de la escisión del partido Lerrouxista forman, en septiembre de 1.934, la - Unión Republicana. Movimientos estos que, obviamente, responden a - que el sistema electoral invita a las coaliciones, así como a la mala experiencia tenida con el resultado de las últimas elecciones para los partidos republicanos de izquierda.

El Partido Republicano Radical Socialista es calificado por Ballester Gonzalvo, "testigo de la época" como le denomina M. Ramírez, como "partido que pudo constituir uno de los más firmes baluartes de la República", en el caso de que hubiera permanecido con la cohesión y unidad con que nació.

La ruina de este partido se pone claramente de manifiesto si consideramos que contaba con 50 diputados en 1.931, quedando solamente con cuatro en 1.933.

Ya dijimos que este partido no se caracterizó precisamente - por su subordinación a una determinada personalidad, pero hemos de

decir que tampoco quedó exento del "mal republicano" de las luchas internas que hicieron de él, lejos de aquel partido protagonista del republicanismo que algunos vaticinaron, un partido dividido en dos ramas principales, que hubieron de integrarse, a su vez, en otras dos agrupaciones de partidos republicanos para afrontar el último tramo de aquella etapa. El grupo de Marcelino Domingo termina integrado en Izquierda Republicana con Azaña, mientras que el de Gordón se integró en Unión Republicana con Martínez Barrio.

Citados tales partidos y agrupaciones como los más importantes de la izquierda republicana, así como sus sucesivas divisiones y reagrupamientos digamos que, entre los partidos republicanos a lo largo de la Segunda República, merece igualmente la pena destacar algún otro grupo de menor entidad, pero sin los cuales no quedaría completo este apartado que nos ocupa.

Pasaremos, por lo tanto, al análisis más breve de grupos y partidos políticos como los siguientes:

Partido Republicano Federal, cuyo carácter principal es su herencia "Pimargalliana", pero que en estos momentos históricos era un partido en recesión y no con demasiada audiencia, que sólo pudo mantenerse en Cataluña y no de forma masiva, aunque allí el federalismo mantenía un cierto arraigo; cabe decir, no obstante, que la falta de un líder indiscutible le afectó negativamente y que su existencia se prolongó mientras que mantuvo representación parlamentaria, durante la legislatura de las Constituyentes. La pérdida de tal representación, que aconteció en noviembre de 1.933, hace que las dificultades agudicen su crisis más fuertemente.

La Agrupación al Servicio de la República, que tuvo una importante labor en la inspiración del advenimiento de la República, estaba compuesta por una serie de intelectuales, que aportaron sus grandes dotes e importantes niveles de entusiasmo al proyecto repu-

blicano.

Este grupo, a medio camino entre partido político o grupo no partidista, funcionó como partido en las Constituyentes, en las que obtuvo catorce actas de diputado, ocupando estos escaños las personalidades siguientes: (7)

- Justino de Azcárate y Florez (Abogado). León.
- Juan Díaz del Moral (Notario). Córdoba.
- Alfonso García Valdecasas (Catedrático). Granada.
- Bernardo Giner de los Ríos. (Arquitecto). Málaga.
- José González Uña (Abogado). Cáceres.
- Vicente Iranzo Enguita (Médico). Teruel.
- Gregorio Marañón Posadillo (Catedrático). Zamora.
- José Ortega y Gasset (Catedrático). León.
- José Pareja Yébenes (Catedrático). Granada.
- Ramón Pérez de Ayala (Publicista). Oviedo.
- Manuel Rico Avelló (Abogado). Oviedo.
- Juan Santacruz Garcés (Ingeniero). Granada.
- Publio Suárez Uriarte (Abogado). León.
- Manuel Varela Radío (Médico). Pontevedra.

En las Cortes Constituyentes forman candidatura con el Partido Socialista, para luego emprender diferentes caminos sus ilustres miembros una vez producida la disolución, dado que la finalidad principal de su existencia ya estaba conseguida: traer a España un régimen republicano.

Desde aquel Manifiesto fundacional que publicara el diario "El Sol" el 10 de febrero de 1.931 y que fuera firmado por Marañón, Pérez de Ayala y Ortega, en que se recogían sus propósitos fundamentales:

- 1) "Movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y de-

fensores de la República Española..."

2) "Con este organismo de avanzada, bien disciplinado y extendido sobre toda España, actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa histórica que es la República española y preparando su triunfo en unas elecciones constituyentes, ejecutadas con las máximas garantías de pulcritud civil."

3) "Pero al mismo tiempo, nuestra Agrupación irá organizando, desde la capital hasta la aldea y el caserío, la nueva vida pública de España en todos sus haces, a fin de lograr la sólida instauración y el ejemplar funcionamiento del nuevo Estado Republicano." (8),

hasta su disolución, de manera acorde con la idiosincrasia propia - del intelectual, los altibajos e irregularidades del desarrollo del régimen republicano, hacen que el desencanto no tarde en correr por entre sus filas.

Algunos de sus miembros se apartan de la política activa en la fecha señalada como la de su disolución y retornan a sus originales labores intelectuales, mientras que otros permanecen en la actividad política, al lado de diferentes grupos o partidos. Estamos hablando de un prestigioso grupo formado por alguna de las más insignes figuras científicas e intelectuales españolas que, en su mayoría, habían estado decididamente en contra de la Dictadura y, por ende, habían apostado con plena decisión por el nuevo régimen al considerar útil para la comunidad su concurso. Tales figuras, normalmente, al ver finalizada la labor constituyente de la República, entendieron que su misión había terminado.

#### Partidos Republicanos Regionalistas

Un grupo de entre los republicanos que conviene analizar por menorizadamente, es el de aquellos en los que destaca de manera especial su característica territorial; es decir, su ámbito territo-

rial es limitado y no abarca a toda la geografía nacional. Además, dentro de sus ideologías y programas, aparece su reivindicación nacionalista o regionalista del territorio en que se asienta.

Puede que tengamos que matizar expresamente el hecho de que no todos los partidos regionalistas fueran, total e inequívocamente republicanos; reconocemos que hubo excepciones y situaciones ambiguas, pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, la mayoría de los partidos que fundamentan su existencia de forma básica en su carácter regionalista, son de los que aquí encuadramos entre los republicanos.

Hay una segunda explicación que ofrecer a este detalle de la republicanidad de los autonomistas y es que, el primer documento programático que recogía las características que presentaría la futura República antes de su nacimiento formal, el "Pacto de San Sebastián", reconocía la personalidad y autonomía de aquellas regiones españolas de mayor conciencia y reivindicación en tal sentido, esto es, Cataluña, País Vasco y Galicia.

Tal explicitación en el que sería programa básico del Gobierno Provisional Republicano, viene a suponer un reconocimiento de la realidad de tales movimientos autonomistas, que se habían agudizado debido a la intolerancia que sobre ese particular había especialmente demostrado la etapa final de la Monarquía Alfonsina, a través de la Dictadura Primorriverista.

Todo ello traería algún problema a una República que no especificaba en su definición el alcance de tal movimiento autonomista dentro de su seno, al no declararse, en concreto, como federal o unitaria. Bien es cierto que tal reconocimiento autonómico iba a suponerle un fundamental apoyo a su posición y estabilidad, al permitirle contar con la adhesión de unos partidos republicanos, pero fundamentalmente autonomistas que, como ya expresamos con anteriori



dad, demostraron una base social mas favorable al modelo de régimen que se ensayaba en España por segunda vez en su historia, que cualquiera de las demás fuerzas políticas y sociales predominantes en el resto del país.

De los partidos autonomistas o regionalistas a considerar hemos de decir previamente, que son los representantes de las regiones catalana, vasca y gallega, con la valenciana en menor medida, - los que tienen mayor incidencia en el período que nos ocupa; aventurándonos a decir que será la autonomía catalana, la que tenga mayor fuerza reivindicativa en la IIª República.

Los más destacados de los partidos regionalistas, analizando en concreto alguno de ellos, son los siguientes:

- Esquerra Republicana de Catalunya, que será la agrupación - republicana autonomista más destacada de Catalunya en este período, sin duda alguna, por encima de la derechista "Lliga". La Esquerra - todavía no esta constituida cuando, el 17 de agosto de 1.930, se produce la reunión de San Sebastián; pero allí están representadas importantes fuerzas del catalanismo autonomista que, no sólo defienden su posición, sino que serán núcleos alrededor de los cuales se produzca el nacimiento de este partido.

Su origen fundamental se sitúa al final de la Dictadura, - cuando el catalanismo abandona la línea conservadora de Cambó, colaborador de Primo de Rivera, y se dirige en una dirección más radical, hacia el movimiento creado por Maciá, allá por el año 1.922, - llamado "Estat Catalá", que sería fuerza impulsora de la Esquerra.

La génesis de este grupo hay que buscarla en la agrupación - de las dos fuerzas catalanistas anteriores, que habían concurrido - separadamente al Pacto de San Sebastián en representación del autonomismo de aquella región; se trata de "Acció Catalana" y de "Acció Republicana de Catalunya".

El primero de estos grupos ("Acció Catalana"), reconoce el - liderazgo de Lluís Nicolau d'Oliver, que procede de una escisión de la "Lliga", de la que había formado parte hasta 1.922. Este grupo - está representado en San Sebastián por Manuel Carrasco Formiguera y su líder, d'Oliver, fué ministro de Economía con el Gobierno Provisional Republicano.

El segundo ("Acció Republicana"), estuvo en aquella ocasión representado por Matías Mallol y se produjo su fusión con el primero, dando lugar al Partido Catalanista Republicano, cuya importancia decae al producirse su fusión en torno a la nueva agrupación catalana, la Esquerra, a la que llega para constituirse en su forma definitiva la formación antedicha de Maciá, resultando éste el líder indiscutible de la nueva formación debido a su trayectoria de reivindicación y lucha por el catalanismo.

Maciá, fué la figura que arrebató a Cambó el protagonismo y liderazgo del autonomismo catalán que, en la figura de aquel, recorrió la pureza de su significado en cuanto fué aspiración de la mayoría de la población, frente a los pactos y cesiones desilusionadores del partido de Cambó, que le habían llevado a una postura excesivamente derechista, en escasa concordancia con las demandas de la sociedad catalana de los inicios y, en fin, de todo el período de la Segunda República.

Las elecciones Municipales de 1.931 suponen un claro éxito - para la Esquerra Republicana, cuyo líder declara inmediatamente el Estado Catalán en el marco de una República Federal Ibérica, lo que no deja de representar una primera y excesivamente precoz fuente - problemática para el Gobierno central del nuevo régimen.

Este partido que analizamos tuvo en la figura de su líder - una fundamental importancia en la preparación y en el apoyo del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1.932, que fué el primero -

que se aprobó, siendo elegido Maciá como primer presidente del gobierno autónomo de Cataluña, la Generalidad.

La pronta desaparición del líder no quitó fuerza ni implantación al partido, pues ocupó su puesto un próximo colaborador suyo y también destacada figura del catalanismo, Lluís Companys, desde - - 1.933. Este, frente a la mítica figura luchadora por el catalanismo de aquel, representó la preocupación social, conectándose igualmente con el campesinado a través de la "Unió de Rabassaires", lo que otorgó una considerable fuerza a este partido incluso cuando, llegando el segundo bienio, sus partidos afines del resto del país se encontraban en franca crisis y decadencia. Pues bien, aún entonces y con posterioridad a las elecciones de noviembre de 1.933, tuvo arraigo e importancia la Esquerra lo que, en la opinión de G<sup>a</sup> Escudero, que nos será útil en esta ocasión por su precisión, será debido a - que, "su base social más amplia, la vinculación campesina, el ningún sentido político de los anarquistas, el poco arraigo del socialismo en Cataluña y el que la derecha estuviese representada allí - por una formación desprestigiada como la Lliga, y no pudiese participar por ello del vigoroso movimiento que la vitalizó e infundió - espíritu en el resto del país." (9)

Companys tuvo como máxima de su comportamiento catalanista, la consecución del máximo desarrollo de las posiciones autonomistas que ofrecía el Estatuto Catalán de 1.932. El segundo bienio republicano no ofrecía precisamente oportunidades favorables para tal desarrollo de forma que, llegado el movimiento revolucionario de octubre de 1.934 que tuvo su máximo exponente en la región asturiana, - el nuevo líder de la Esquerra se une decididamente a tal experiencia revolucionaria proclamando el "Estado Catalán de la República - Federal Española". No pasó de un vano intento infructuoso que, además, supuso un perjuicio para el desarrollo autonómico, dando pie - al Gobierno para el cierre de actividades de la Generalidad y para

reprimir todo intento de evolución en el sentido regionalista.

Además de todo ello, el núcleo principal de apoyo al movimiento de 1.934, en Cataluña, estuvo a cargo de la pequeña burguesía y grupos afines situados en torno a la Esquerra, no teniendo excesivo eco en las clases trabajadoras y no habiéndose llegado a señalar los objetivos concretos buscados, a parte de esa declaración del Estado Catalán, cuyo fracaso y represión son de sobra conocidos.

Tales acontecimientos de 1.934 han de afectar necesariamente a la Esquerra, llevando a Companys a prisión, de la que saldrá cuando se produzca el triunfo frentepopulista del que formó parte su partido, respondiendo a la tendencia de unidad de las fuerzas republicanas y de izquierda que se va potenciando con el transcurso del año 1.935, volviendo a dirigir la política del ente autonómico catalán a lo largo de la etapa del Gobierno del Frente Popular.

En el ámbito territorial de Cataluña, sólo podemos reiterar la mención de un partido, la Lliga, que no fué un serio competidor de la Esquerra en cuanto a la disputa del terreno político del catalanismo durante la Segunda República y que, en todo caso, presenta las suficientes dudas, como para poder abordar su estudio también en el capítulo dedicado a "Partidos Dinásticos", debido a su colaboración y prestación de apoyos a la Monarquía; si bien, no podemos afirmar que el partido de Cambó fuese un partido de los que, de manera ortodoxa, podamos calificar de monárquico.

El segundo de los partidos republicanos regionalistas que consideramos, pertenecerá al autonomismo gallego. Nos referimos a la:

Organización Regional Gallega Autónoma (ORGA).

Reconozcamos que Galicia, por su especial estructura, no podía presentar un sentimiento autonomista tan desarrollado como Cataluña y, de hecho, fué más tenue. No obstante, hay que darle la im-

portancia que merece a este fenómeno galleguista y afirmar que el - partido mas representativo del autonomismo gallego durante la República fué este que citamos, la ORGA, fundado en octubre de 1.929; - si bien, hemos de citar la importancia que desde la perspectiva de un galleguismo más puro y esencial tuvo el Partido Galleguista, aun que con menor resonancia en la vida política nacional.

El principal promotor y figura más representativa de este - partido fué Santiago Casares Quiroga, que ya fuera firmante del Pacto de San Sebastián en representación y apoyo de los intereses galleguistas.

La característica principal de este partido podemos decir - que es la de que, en su seno, representa con tanta o mayor intensidad que su postura autonomista sus posiciones republicanas. Sin - - abandonar su posición autonomista hay que analizar el hecho de que este partido, por la figura de su máximo líder, Casares Quiroga, cu ya relación con la figura republicana de Manuel Azaña fué importante, tuvo aspiraciones y actuaciones de ámbito nacional. Demuestran tal afirmación varios factores que conviene tener en cuenta, uno de los cuales será definitivo:

En primer lugar, hay que tener presente que Casares Quiroga ocupó los Ministerios de Marina, durante el Gobierno Provisional, y de Gobernación hasta el final del bienio primero, en el que Azaña - ocupó la Presidencia del Gabinete. Igualmente, hay que recordar que fué Jefe del Gobierno Frentepopulista en mayo de 1.936, cuando Azaña pasa a ocupar la Presidencia de la República. Además, y ello es totalmente concluyente, antes de las elecciones del Frente Popular, durante el año 1.935, se une con Azaña e integra a la ORGA en el - partido de ámbito nacional Izquierda Republicana.

Por lo tanto, el advenimiento de la etapa gubernamental del Frente Popular, si bien supuso la posibilidad de ocupar la jefatura

del Gobierno para el jefe de fila del partido que nos ocupa y la consabida influencia a ese nivel en favor del nacionalismo gallego, lo que realmente significó fué la desaparición del máximo exponente del autonomismo gallego como partido independiente, aunque con ello no digamos que no hubiera otros representantes del galleguismo, -- sino que desapareció el partido más mayoritario e influyente, con lo que se demuestra que en el partido que nos ocupa, ORGA, el sentimiento galleguista estuvo mezclado con el deseo de consolidación republicana en su conjunto.

Así las cosas, hemos de referirnos al otro partido eminentemente galleguista, que nunca subordinó tal interés a ningún otro, -- pero cuya implantación a nivel nacional fué considerablemente menor.

Se trata del "Partido Galleguista", cuya constitución data -- del mes de diciembre de 1.931 y se debe a la inclinación del partido de Casares Quiroga hacia posturas más acordes con la problemática republicana de alcance nacional, en detrimento de su línea puramente galleguista.

Este partido se caracteriza porque mantiene de forma más pura su posición nacionalista, aunque sus compromisos son ciertamente menores con el proyecto republicano en su conjunto. Es un partido -- heredero de las antiguas "Irmandades da Fala", que son las primeras agrupaciones que manifiestan el galleguismo en torno al fenómeno común de la lengua, su estudio y su mantenimiento. Tales agrupaciones datan de principios de siglo y constituyen una importante fuente de cohesión galleguista con sentido cultural, tantas veces aglutinante del nacionalismo.

El "Partido Galleguista" buscaba la consecución de la autonomía gallega dentro de la República española, siendo prioritario el primer punto (autonomía) sobre el segundo (republicanismo), contrastando con el verdadero sentimiento republicano que profesaba la --

ORGA.

Los diputados del Partido Galleguista componen en las Cortes el mismo grupo parlamentario que la ORGA, cuya denominación es la de Federación Republicana Gallega, quedando posteriormente al margen con ocasión de la fusión del citado partido con los republicanos para la constitución de la ya citada Izquierda Republicana. (10)

El "Partido Galleguista" no está entre los firmantes del pacto que constituye el Frente Popular, pero no tarda en adherirse, llegando a su completa integración una vez cumplimentados sus propios requisitos de régimen interno.

Su labor durante el período del gobierno del Frente Popular se dirigió, fundamentalmente, a realizar una tarea de presión en favor del desarrollo autonómico gallego, tal y como estaba previsto en la Constitución. Según comenta J. Vilas en su referido trabajo: "Fruto de ello fué la campaña conjunta de todos los partidos del Frente Popular bajo el impulso del Partido Galleguista, de propaganda del proyecto de Estatuto y la aprobación de este por el cuerpo electoral regional el 28 de junio de 1.936". (11)

Según la línea considerada hasta el presente punto pensamos que, si bien el "Partido Galleguista" dedicó mayor intensidad a su lucha autonómica, su incidencia e implantación nacional fué escasa; de ahí que el grupo que realmente se cite con mayor frecuencia entre los autonomistas gallegos durante la Segunda República sea la ORGA, ya que, su actividad favorable a este nuevo régimen fué de gran importancia desde el principio, al participar en el Pacto de San Sebastián llevando por delante su reivindicación y encontrarse próximo a Azaña y al poder republicano de nivel estatal, sin renunciar en ningún caso a su autonomismo.

A continuación, pasaremos al estudio de otro de los importantes partidos que denominamos autonomistas o regionalistas, si bien,

en el caso que nos va a ocupar, se producen unas connotaciones diferenciadoras que harán que se pueda considerar como un caso particular. Se trata del máximo esponente del autonomismo del País Vasco - durante la Segunda República. Nos referimos ahora al:

Partido Nacionalista Vasco.

Existen muy fundadas reservas para incluir a este partido entre los autonomistas republicanos, ya que fué muy dudoso su republicanismo y es ello una cuestión que nos vemos obligados a plantear - "a priori". No obstante, le hemos de incluir en este apartado por - su indudable autonomismo, por su destacada incidencia a nivel nacional y por su protagonismo casi exclusivo en el ámbito del País Vasco.

Hemos de iniciar nuestros planteamientos considerando que - los orígenes del nacionalismo vasco, le confieren unas características muy netamente diferenciadas respecto de las fuerzas principales que sostienen la República a nivel nacional: El republicanismo de - izquierda y el socialismo. Tales características diferenciadoras, - que arrancan ya de su aparición allá por 1.876, se pueden concretizar en las dos siguientes tesis explicativas:

1ª.- El nacionalismo vasco nace "como reacción ante la amenaza que para la entidad cultural vasca supusieron la industrialización y la inmigración masiva de trabajadores no vascos."

2ª.- El nacionalismo vasco, como cauce político de "la inquietud de las católicas clases medias vascas ante la - conflictividad laboral, la aparición de un fuerte movimiento socialista y la honda alteración social producida por la presencia de amplios núcleos de población ajenos a la mentalidad, la educación, la religiosidad, las formas de vida y los hábitos vascos". (12)



Tales connotaciones le alejan de una posible participación activa en el advenimiento de la Segunda República, siendo un hecho coherente y lógico su no asistencia a las reuniones de San Sebastián de agosto de 1.930, a las que acuden dos vascos que se pronunciarán a favor de la línea autonomista para el País Vasco, pero desde sus respectivas posiciones republicana y socialista; en ningún caso actuaron aquellos en nombre o representación del P.N.V. que, en su definición posible como "autonomista, católico y democrático" (13), planteaba importantes distancias de los antedichos.

El arranque de las posiciones de este partido al inicio del período republicano y dados los supuestos citados en diferenciación, se dirigirá por unas líneas de acción plenamente derechistas al formar, junto con los reaccionarios y antirrepublicanos Tradicionalistas, la minoría Vasco-Navarra, que les acarreó aún mayores recelos por parte de las fuerzas republicanas y de izquierdas a la hora de plantearse el Estatuto de Autonomía. Cuando este momento fué llegado, según quedaba recogido en la Constitución, las dificultades no tardaron en aparecer debido a:

1º.- Los recelos republicano-socialistas a dejar en manos peñevistas la conformación del Estatuto.

2º.- El impedimento del clericalismo, que el PNV pretendía imponer al Estatuto, que chocaba frontalmente con el laicismo establecido constitucionalmente en la propia Ley Fundamental Republicana.

El curso de la República hizo que se aproximaran las posiciones de cara a la consecución del Estatuto de Autonomía, pudiéndose sostener que el PNV, a lo largo de la Segunda República, había acusado una seria evolución hacia posiciones más democráticas y menos integristas en lo religioso, movido por la constatación de que la consecución de su autonomía, punto principal de su programa, sería más viable del lado de aquellos que se aproximaban a tales posturas.

Recordemos que, por parte de las fuerzas republicanas, existió la convicción de que era necesario un Estatuto para el País Vasco del mismo modo que se había otorgado para Cataluña; pero en el caso que ahora nos ocupa las dificultades eran ciertamente mayores; ya que, si no hubo Estatuto hasta 1.936 -y ello es buena prueba de tales dificultades-, fué "porque no existió un acuerdo básico y fundamental entre sus fuerzas políticas y sociales acerca del concepto geográfico e histórico de Euzkadi y acerca de la naturaleza y funcionamiento de las instituciones políticas que debían administrar - la autonomía de la región". (14)

Aunque dentro de su línea moderada, el PNV antepone sus intereses autonomistas a cualesquiera otros; en concreto, busca la consecución del Estatuto, lo que le hace posible su desvinculación de los Tradicionalistas y el hecho mismo de que Navarra quedase fuera del Estatuto.

Se dice que el republicanismo del PNV, o al menos su nivel de aceptación, se fué incrementando paulatinamente; no es menos - cierto que parte de la raíz del problema se hallara en que la República pretendió capitalizar para sí la autonomía, que tenía mayor carta de naturaleza en el seno del Partido Nacionalista Vasco.

Igual que había logrado la Esquerra con la "Unió de Rabassaires", salvando todas las distancias, el PNV logró una importante fuerza al contar con un arraigado sindicato, Solidaridad de Obreros Vascos, que agrupó a la clase obrera autóctona, frente al obrerismo emigrado, que tenía conexiones y filiación en el sindicato socialista UGT, aprovechando tales bases sociales en apoyo de su causa y de su proyecto nacionalista, que para ello, generalmente, fué predominante frente a su concepción de la conciencia de clase. Podemos tener un válido ejemplo en la coyuntura del levantamiento obrerista - de Octubre de 1.934, que no sólo no fué secundado, sino claramente condenado por el PNV.

Tal condena y comportamiento en aquella crucial coyuntura, - pudo suponer un intento del PNV de alcanzar un entendimiento con el gobierno de centro-derecha del segundo bienio republicano, que tampoco proporcionó un estatuto deseado y provocó, en cambio, la marcha peneuvista del Parlamento.

No sería hasta el Gobierno del Frente Popular el momento en que los nacionalistas tendrían su Estatuto e, incluso, habría que - matizar bien tal afirmación, en el sentido de que el Estatuto no fué propiamente obra del PNV, sino que llegó en el programa de los republicanos vascos que formaban parte del Frente Popular, aunque quedará en manos del partido vasco la presidencia de la nueva autonomía.

Hasta aquí hemos tratado los principales partidos regionalistas durante la Segunda República que, o bien fueron decididamente - republicanos, o acabaron aceptando de buen grado el nuevo régimen. Pertenecen, como era de esperar, a las zonas del territorio español donde tiene un auge mayor la tendencia nacionalista y donde las condiciones objetivas lo posibilitan. Hubo, además de las citadas, - - otras regiones que también conocieron la existencia de movimientos de este tipo; no podemos olvidar a la Región Valenciana, ni dejar - de citar aquí a su Unión Republicana Autonomista.

También hemos de reconocer la existencia de otros partidos - de entidad que siguen la línea regionalista de manera acusada; tales partidos tienen, sin embargo, una dudosa aceptación del modelo republicano e, incluso, los hay cuya colaboración con la Monarquía es un hecho cierto. No obstante, los ejemplos de estos últimos son escasos, si exceptuamos el caso de la "Lliga", el partido de Cambó, representante de una alta burguesía catalana que mantiene sus relaciones con el centro por razón de sus intereses y que ha de contemplar temerosa el ascenso en su detrimento de la republicana de izquierdas "Esquerra".

Si no le concedemos aquí mayor espacio a la "Lliga" se debe a que, en el período republicano, vivió una profunda crisis en beneficio de la citada "Esquerra", sin que por ello dejemos de reconocer su gran incidencia en la vida política nacional de los años de la Monarquía y la Dictadura de Primo de Rivera; así como su apoyo a la aprobación del Estatuto de 1.932, que otorgaba a Cataluña su -- autonomía y que contó con una cartera ministerial en el segundo binio republicano. Prueba evidente de lo dicho anteriormente fué el -- hecho de su escaso peso y representatividad en la Generalidad catalana durante la IIª República.

En el ámbito valenciano y de parecido estilo al del partido citado, se encuentra el partido denominado Derecha Regional Valenciana que, de cara a las elecciones de noviembre de 1.933 y dado el "premio" electoral que concedía a las coaliciones la vigente legislación, se fusiona con Acción Popular para la constitución de la -- Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). De este grupo -- queremos adelantar el hecho de que, situado a la derecha del espectro político republicano presenta, sin embargo, una equívoca posición en cuanto a su encuadramiento como partido republicano o dinástico, tal y como hemos estructurado nuestros esquemas. Aunque, ya -- de antemano, pueda ser calificado de dudoso en cuanto a su adscripción, consideramos, aún con alguna reserva, más oportuno realizar -- su estudio en el apartado relativo a los partidos dinásticos, debido a que, en sus inicios, tuvo integradas formaciones inequívocamente monárquicas; además, a lo largo de su existencia, muchos de sus miembros fueron de tal adscripción y el partido en sí rehusó proclamar su republicanismo.

Por lo tanto, dados los caracteres citados, es por lo que -- nuestra decisión se ha inclinado por incluirle entre los monárquicos con algún matiz, debido a que, de haberle incluido en el presente apartado de los republicanos, los matices debieran haber sido incomparablemente mucho mayores.

### III.3.- PARTIDOS OBREROS

Durante la Segunda República española, las fuerzas políticas representativas del proletariado están representadas por: socialistas, comunistas y anarquistas. En el presente apartado no analizaremos a los anarquistas pues, como es sabido, son contrarios a su organización política partidista, de donde entendemos más oportuno su análisis en el apartado correspondiente a las organizaciones sindicales, dentro de las cuales ocuparon uno de los primeros lugares en importancia a través de su organización, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Por lo tanto, nos limitaremos a estudiar en el presente capítulo los partidos de matiz socialista y comunista, como más representativos de entre los de la clase obrera.

La proclamación de la República dió pie para que pasaran a la actividad política legal toda esta serie de partidos, que habían estado prohibidos en la última etapa de la Monarquía y que, salvo excepciones aisladas, no habían pasado a desempeñar un papel importante en cuanto a la posesión del poder en la moderna historia de España. Este experimento republicano, no obstante, fué utilizado para que estos partidos que nos ocupan retomasen su actividad planteando sus diversas actitudes y proyectos de sociedad. Así, mientras que para unos pareció llegado el momento propicio de iniciar el camino hacia su proyecto de revolución, para otros representó el momento propicio de colaborar en la consolidación de los supuestos que traía consigo la República.

Lo que sí podemos afirmar con carácter general y de forma completamente segura, es que tales partidos acusaron un importante auge en su organización y niveles de militancia, con motivo de la apertura del ciclo republicano. No se olvide que venían a representar las aspiraciones de unas clases sociales, que no habían tenido voz ni fuerza política destacada en ninguna institución de la gober-

nación del Estado hasta aquel momento y que, por otra parte, tales clases obreras y campesinas que tenían su lugar natural de expresión en estos partidos obreros, esperaban conseguir la resolución de algunos de sus múltiples y graves problemas que se habían ido acumulando a lo largo de los años.

Recordemos que en el momento de la proclamación de la República, sus más definidos caracteres y el proyecto conjunto que se intentó organizar, sintonizaban claramente con los de una República burguesa; ahí está el documento programático del Gobierno Provisional que recogía: "El reconocimiento de las libertades de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad eran piezas esenciales de este documento, así como el sometimiento de los actos gubernamentales al fallo de las Cortes Constituyentes, que fueron inmediatamente convocadas." (15). Pero tampoco debemos olvidar el hecho de que tal República, por la serie de debilidades de aquellos grupos y estructuras, incapaces de sostener un régimen de tales características, hubo de necesitar el apoyo y la ayuda de, precisamente, estas clases obreras, a través de su principal partido político. Ello, entendemos, era lógico que así sucediese, traería como consecuencia la alteración de sus características iniciales y la conformación de un período republicano, que osciló entre las tensiones del modelo deseado por algunos y de la realidad que se evidenció.

De entre los partidos obreros a que hacemos referencia en el presente punto, comenzaremos con el que tuvo una incidencia fundamental en el período republicano. Nos referimos al

#### Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Es una afirmación comúnmente aceptada por los historiadores en su casi totalidad y contenida en la literatura que trata acerca de este período histórico, que el Partido Socialista Obrero Español

fué la formación política más importante como partido de entre todos aquellos que comparten el terreno político español. Quizá ello sea posible debido a que este partido, cuyo proceso de formación y consolidación ha sido lento y trabajoso, pero firme desde su fundación, fué capaz de atravesar y superar la etapa de la Dictadura Priomorrerista sin merma apreciable en su estructura y organización, debido a que, no solamente no padeció una fuerte persecución dada - su postura un tanto ambigua y oportunista de colaboración con la Dictadura en alguno de sus períodos, sino que mantuvo en la legalidad al importante sindicato, próximo a su ideología y control, - -- Unión General de Trabajadores, tras del cual se mantuvo su organización política en los tiempos en que peores fueron sus relaciones - con el Dictador y en los que amenazaba el peso de la prohibición o la persecución para todas las formaciones políticas.

Así pues, es lógico afirmar que, con toda seguridad, el Partido Socialista fué una fuerza con importante presencia y decidida actuación el 14 de abril, momento en que se proclama la II<sup>a</sup> República española.

No obstante, hemos de recordar, contra lo que a veces se ha afirmado con tintes exagerados de que la Segunda República fué un - proyecto socialista, que los socialistas sólo asistieron en la persona de dos de sus miembros destacados al "Pacto de San Sebastián"; Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que lo hicieron a título - meramente particular y personal. Posteriormente, el 20 de octubre - de 1.930, la Ejecutiva del PSOE decide su futura participación en - el futuro Gobierno Provisional republicano. Pero, bien entendido, - que tal participación, que ya de por sí causa tensiones y discrepancias entre su directiva, se ofrece como apoyo de un movimiento republicano y revolucionario, que se organiza como embate final a la Monarquía en crisis y nunca como centro y eje de tal movimiento.

Llegado el 14 de abril, el Gobierno Provisional de la Repú-

blica contará con tres ministros socialistas: Largo Caballero ocupará la cartera de Trabajo, Indalecio Prieto se hará cargo de Hacienda y Fernando de los Ríos de Gracia y Justicia. Pero, antes de pasar a posteriores análisis, consideramos interesante recalcar el hecho de que la participación en el Gobierno republicano traería consigo importantes crisis en este partido, así como la apertura de series de debates entre sus principales dirigentes.

Tal circunstancia de la participación gubernamental del PSOE, que se producirá por primera vez en la historia española, produjo la aparición en el partido de dos tendencias y líneas de opinión en frentadas al respecto:

- La de aquellos que sostienen la no conveniencia de la aceptación ministerial. Es la postura defendida por Besteiro, que ocupa la presidencia en aquel momento del PSOE y UGT, y que resultó minoritaria y propugna un apoyo a la República y la conveniencia de mantener tal régimen, pero con un compromiso sólo limitado, que permita la autonomía e independencia suficiente para la evolución del partido en su línea programática.

Frente a tal posición, está la que resultó mayoritaria:

- La de aquellos que pensaban que era aconsejable tal colaboración con una República que, aunque presidida por los principios liberales y burgueses lejanos al credo socialista, había que consolidar, aunque aquello comportara la renuncia provisional a alguno de los principios esenciales del socialismo. Estamos ante la postura mantenida por Largo Caballero, Indalecio Prieto, de los Ríos, etc...

En síntesis, estamos en el punto en el que el PSOE decide su actitud favorable respecto a la participación en el Gobierno de la República. Cuestión esta suficientemente clara hasta este momento. Pero, conviene insistir en un aspecto que ha sido polémico igualmente.



te entre alguno de los autores que han aportado sus investigaciones sobre la materia: se tratará de considerar si realmente aquella participación gubernamental de los socialistas fué con un ánimo de colaboración real con el proyecto republicano ya en marcha, o si se trató de una maniobra de penetración en el Gobierno republicano para la realización de sus proyectos revolucionarios de matiz marxista. En este último sentido se explican algunas fuentes la evolución posterior de la línea moderada del socialismo en los inicios de la República.

En el primer momento republicano, Gobierno Provisional y Cortes Constituyentes, no tenemos más remedio que reconocer como de gran utilidad la actuación socialista en el Gobierno y en el conjunto del régimen republicano. Hay que partir del hecho innegable de que hubiera sido imposible prescindir del concurso del principal partido político español, además de constituir el más numeroso grupo parlamentario de las Cortes Constituyentes, con 116 diputados.

Tal colaboración, leal y conforme a los principios del republicanismo español, tiene diferentes explicaciones; quizá por la historia moderada del socialismo español con componentes socialdemócratas junto a los núcleos marxistas, quizá igualmente por la coyuntura favorable en lo económico de los primeros años republicanos que permitieron tal estilo político de colaboración y, a la vez, de satisfacción de alguna de las demandas más urgentes para las bases obreras del partido. Lo que es un hecho aceptado es "el enorme entusiasmo y la identificación de los socialistas con la República" que se manifiesta en los inicios de esta experiencia. (16) En tal sentido, nos parecen algunas opiniones bien representativas; así M. Ramírez dirá: "lo primero a destacar es la indiscutible aceptación del juego parlamentario de que pudo hacer gala el Partido Socialista. - Iríamos más lejos: la indiscutible necesidad de contar con dicho partido para efectuar toda la labor reformadora del primer bienio -

republicano y el grave error que supuso su olvido en las etapas posteriores". (17) También G<sup>a</sup> Escudero reconoce la esencial colaboración de los socialistas en el advenimiento de la República.

Así pues, tenemos al Partido Socialista Obrero Español en los inicios de un período republicano como:

- Un partido fundamental en la vida nacional, por ser el mayoritario y el más importante de todos, izquierda o derecha.
- Partido esencial en la consolidación de la República con su participación en el Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes.
- Partido con diferencias internas de las que triunfa mayoritariamente aquella que defiende la línea del punto anterior.
- Partido, finalmente, respetuoso con el sistema parlamentario y democrático, que no pretende ser protagonista de aquellos momentos, sino colaborar a la consolidación del sistema aportando una línea legislativa socialmente avanzada, en defensa de las bases sociales a las que representa.

Pero si, además de las características citadas, tenemos que destacar algunas otras del presente partido, será la de su cambiante posición a lo largo del período republicano. Es notoria la línea evolutiva radicalizante que se pudo observar en el seno de este partido a medida que se alteraban los supuestos iniciales políticos, sociales y económicos de la II<sup>a</sup> República; lo cual se manifestó desde la segunda mitad del año 1.933 y, sobre todo, desde el resultado de las elecciones de noviembre de aquel mismo año y tuvo su máximo exponente en 1.934.

De las características de tal evolución, así como de sus principales causas, nos ocuparemos a partir de aquí, tratando de analizar al Partido Socialista Español en el segundo bienio y hasta el final de la II<sup>a</sup> República.

Si a lo largo de todo el primer bienio el Partido Socialista colaboró en la política gubernamental de forma necesaria y a instancias de los propios "republicanos históricos", si este partido prestó sus mejores hombres al juego parlamentario burgués, "pese a la certeza de que en España no advenía una República socialista" si, - así mismo, sin su colaboración, ni el texto constitucional, ni la política autonómico-regional, la reforma agraria, la política laboral, etc., "posiblemente no habrían sido nada, casi no habrían sido sencillamente", como puntualiza el prof. M. Ramírez (18); si todo - esto, en fin, fué consecuencia de la importante colaboración del - PSOE, llegado el segundo bienio, la situación fué muy de otra manera.

Desde la fecha que hemos citado, se produce un virage del - PSOE hacia su radicalización, que hemos de analizar cuáles sean las causas que la motiven y qué consecuencias pueda tener para la Segunda República.

Sabemos que se habían derivado dos consecuencias esenciales de su colaboración en el primer bienio:

- 1ª.- Su contribución a la racionalización e institucionalización de un sistema democrático-parlamentario.
- 2ª.- La mejora de las condiciones de existencia y de trabajo de importantes capas sociales de la sociedad española.

En definitiva, y en términos actuales, el PSOE había seguido una forma progresista de actuación y de reforma social, bajo una metodología no específica ni netamente marxista y en la línea que podríamos llamar "socialdemócrata", en el sentido de aceptación de la democracia parlamentaria y del sistema capitalista, para conseguir desde esos supuestos una mejor distribución y reparto de las posibilidades productivas del sistema.

Sabemos que tal política es solamente posible bajo unas de-

terminadas condiciones de exigencia. Así, por ejemplo, fué posible en aquellos países de la Europa Central que cuentan con una situación social y económica mínimamente equilibrada pero, como es sabido, no pudo haber sido posible de ninguna forma en la Rusia Zarista del año 1.917, que presentaba una sociedad totalmente desintegrada. Pues bien, en España, el PSOE, que había actuado de esa forma "socialdemócrata" que antes citábamos en el primer bienio, cambió en el segundo motivado por unas cuantas razones de peso. La primera de ellas, la Depresión Mundial, que afecta en los primeros años de la República a España y se empiezan a dejar de sentir las mejoras iniciales conseguidas, volviéndose a aquellas tradicionales dificultades de existencia; las clases más afectadas, asalariados y campesinado, juzgan aquellas primeras reformas como excesivamente escasas y limitadas.

En relación con ello, se produce en el propio seno del sindicato socialista UGT, un gran ascenso de la más radical y problemática de sus federaciones: la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que se convierte en su fuerza más numerosa y decisiva y que aporta un tinte de especial virulencia reivindicativa, reflejo de las duras condiciones de vida de los sectores a que representan.

Todo ello plantea a la directiva del partido un grave problema a resolver dado que en su seno, como es sabido, siguen conviviendo diferentes tendencias.

Se tratará de ponerse a la cabeza de los movimientos que propugnan y sienten las bases para encabezar como vanguardia sus protestas o, sencillamente, de taponar tales impulsos y tratar de sujetar o "educar" a aquellas masas. Bien sabido es que se optó por la primera posibilidad que, si bien ha sido criticada duramente por algunos autores, tiene una base de realismo, dado lo absolutamente difícil y arriesgado que supone para la cúspide de un partido tratar

de frustrar, sujetar o moderar los impulsos reivindicativos de unas bases que atraviesan grandes y profundas crisis, máxime, sabiendo - de la existencia de los siempre rivales miembros del anarquismo, - dispuestos a capitalizar cualquier reivindicación por violento que pueda ser su método.

Por otra parte, dentro de los móviles que incitan a la toma de uno u otro camino, para la Ejecutiva socialista habrá de pesar - decisivamente el ascenso de los totalitarismos que se prodigan en - europa y que afectan singularmente a países con modelos de socialismo democrático en sus gobiernos. 1.933 es el año en que Hitler asciende al poder. Es más, dentro de nuestro propio país, la derecha, que había estado desorganizada y desprevenida en abril de 1.931, - aunque en ningún caso desarticulada o definitivamente vencida, comienza a acusar síntomas de recuperación política, apoyada por importantes capas sociales que retoman el camino dejado a causa de varias de las circunstancias que, a lo largo de la Segunda República, afectan a sus intereses o sentimientos: el problema religioso, la - errada solución a la necesaria reforma militar, el verbalismo exagerado, etc., un conjunto de graves errores en el tratamiento de algunos problemas especialmente sensibles para aquellos sectores.

Todo ello no hace sino reorganizar a las fuerzas de la derecha de cara a las próximas elecciones, que ya se vislumbraban para finales de 1.933.

Así las cosas, aquella estrecha colaboración con el régimen republicano en sus inicios empieza a dejar de ser viable, al haber variado sensiblemente la situación y encaminarse la sociedad española hacia una salida con la que los socialistas no podían seguir colaborando.

La salida que toma el socialismo español es la de la más radical de sus tendencias pues, ante la situación en que se encuentra

la República de cara a su segundo bienio, aparecen hasta tres posiciones en su seno:

- La primera de ellas está representada por Julián Besteiro. Según Malefakis, "Consistía en lo que podemos llamar un aislamiento pasivo de los socialistas del gobierno. Esta política plantea la conveniencia de abandonar la actividad política en sí misma, regresar al plano de la actividad sindical e influir en el gobierno desde fuera para cualquier reforma - que pudiera conseguirse." (19)

- La segunda, más próxima a la primera que a la siguiente, - es la seguida por Indalecio Prieto y pretende, dado el ascenso derechista, tratar de mantener la coalición republicano-socialista, aunque hubiera que admitir un ritmo más lento en la realización de las reformas sociales.

- La tercera, en fin, es la comandada por Largo Caballero - que, tendiendo hacia el abandono de la coalición republicano-socialista, planteaba una salida más radical, tendente hacia la revolución social, la conquista del poder y la búsqueda de la dictadura proletaria.

Es bien conocido el hecho de que, dadas las condiciones que citamos con anterioridad, esta última salida sería la que más apoyo encontró en el seno del partido y la que, finalmente, se decidió a seguir.

Ya desde mediados de 1.933 la situación socio-económica parecía propiciar una salida de este tipo, pero cuando realmente se comienza a emprender es a raíz del descalabro electoral que suponen - las elecciones de noviembre de aquel mismo año, en que el socialismo descende en su fuerza electoral a casi la mitad de la obtenida en las constituyentes de 1.931; buena parte de cuya explicación la tiene el que, al ir individualmente a las elecciones, el sistema -

electoral les resultó muy perjudicial frente a los beneficios que le concedía a las grandes coaliciones.

Mucho más aún se vislumbra una posible salida radicalizada del socialismo español, en cuanto que el principal partido derechista, la CEDA, tiene un fuerte desarrollo y está rodeado a veces de unas formas totalitarias, principalmente en sus sectores juveniles, y más todavía a medida que el Gobierno radical-lerrouxista emprende un giro a la derecha y camina hacia su entendimiento con la CEDA.

El momento más cusado de tal revolucionarismo socialista se produjo con los hechos acaecidos en octubre de 1.934, cuyo éxito queda limitado a la región asturiana y a un período de tiempo limitado, no fructificando en las demás regiones españolas. Tal fracaso y la poco acertada actuación gubernamental en su solución y represión, que no fué capaz de organizar un proyecto de convivencia común y consensual por encima de las consecuencias acaecidas por la citada etapa revolucionaria, reanimó el radicalismo socialista que, bajo el total predominio de la línea largocaballerista, enfoca su actividad, a lo largo de 1.935, hacia unas tareas de reagrupación y entendimiento con todas sus fuerzas próximas de la izquierda y del republicanismo, propiciando grandemente la conformación del futuro Frente Popular, del que formó parte destacada.

No obstante, dentro del socialismo seguía existiendo la tendencia más moderada que, aunque minoritaria, estaba representada por los citados Besteiro y Prieto; lo que ocurre es que, el ambiente de bipolarización y tensión que preside la vida española del final de la Segunda República, años 1.935 y principios de 1.936, no propicia otra salida en el socialismo español que no sea la más extrema y radicalizada, la del conocido con el sobrenombre del "Lenin español", la de Largo Caballero, "que cuenta con el apoyo de la mayor parte de la UGT, ciertos sectores del PSOE, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, las Juventudes Socialistas, la re

vista "Leviatán" dirigida por Luis Araquistáin, el semanario -más - tarde diario- "Claridad", etc...". (20)

El citado Frente Popular, es la última de las etapas del período republicano y, a la vez, la última en que la izquierda accede al poder merced a un pacto o alianza realizado por todas las fuerzas afines republicano-socialistas de izquierda. Este período de gobierno no fué tampoco muy afortunado y, por supuesto, ya no fué nada parecido a aquella otra conjunción del primer bienio. Ahora, el radicalismo se apoderó de este bando, que sería una de las partes - contendientes en la inminente guerra civil en que acabó la experiencia republicana, radicalismo que demuestra que la tendencia de Largo Caballero prevalece hasta el final a costa de la moderación de - la otra tendencia que, no obstante, no planteó escisión alguna y - permaneció en el seno del partido. La consecuencia de ello fué la - unificación de la derecha que, alrededor del miedo y del temor al - radicalismo y verbalismo socialista, se unió como jamás se pensaba podía haberse unido en ninguna otra condición, aunque posiblemente se conozcan mejor las motivaciones de la derecha en esta actuación cuando sea estudiado específicamente este sector.

No se debe olvidar tampoco, a la hora de repartir responsabilidades, que la derecha había tenido su parte, al emprender una gobernación del país totalmente excluyente de cualquier interés que - no fuese el suyo y de obstrucción de toda política anterior reforma dora llevada a cabo durante el primer bienio.

La constitución, pues, del Frente Popular, aparte de las con secuencias que comportaría, arranca ya de la derrota de la revolución de octubre de 1.934, en que no parecía existir otra salida para los socialistas. Además, diciembre de 1.934, señala el comienzo de la vinculación con los comunistas, será la "bolchevización" que dirá Artola, "que promueven los comunistas, y que encuentra una favorable acogida en la UGT y las Juventudes Socialistas que dirige -



Carrillo, en tanto Prieto controla el partido y promueve la coalición con las fuerzas burguesas de izquierda." (21)

El partido se encamina dividido hacia las elecciones de 1.936 pero, a su vez, cada una de sus ramas propiciando la coalición con un determinado sector (comunistas y republicanos de izquierda), con lo que se constituye el centro neurálgico de aquella coalición que obtuvo los votos suficientes para alcanzar el poder.

Se intenta resolver con posterioridad el problema de las diferentes tendencias socialistas y para ello, se planteará la necesidad de la celebración de un Congreso Extraordinario. La fecha de su celebración será la del 27 de julio de 1.936. Por razones obvias este congreso no llegó a realizarse y la guerra civil encubrió cualquier otra tensión o matiz interno en el seno del mayor partido de la izquierda obrera española.

#### Partido Comunista de España

Sería más exacto considerar este segundo grupo en un contexto más amplio y referirnos a los comunistas en general, pues, como es sabido, si bien el PCE fué el más potente y representativo del comunismo en España, no fué el único partido, al existir algunos otros, producto de rupturas y disensiones con el principal.

No obstante, cuando tenemos que analizar estos partidos comunistas, será mediante el análisis del PCE la mejor manera de ocupar el espacio a ellos reservado.

Si al inicio de la Segunda República, al referirnos a los partidos obreros, decíamos que el Partido Socialista era el partido más importante del país, tanto de izquierdas como de derechas, todo lo contrario cabe decir de los comunistas pues, al inicio del período republicano, eran un partido apenas insignificante.

Digamos primeramente, que quizá se deba ello a su reciente -

creación, entre otras motivaciones. Es sabido que el comunismo español es un partido que surge del seno del socialista cuando se plantea la necesidad de pronunciarse, en el seno de este partido, acerca de la constitución de la Internacional Comunista o IIIª Internacional. Son primero las Juventudes Socialistas las que deciden -- transformarse en Partido Comunista Español, sucede ello en abril de 1.920. Posteriormente el Partido Socialista, previo informe de la comisión enviada al efecto a Moscú con carácter informativo, queda dividido en dos sectores, el sector que propugna la anexión a la Internacional Comunista se escinde y forma el Partido Comunista Obrero Español, que no tarda mucho tiempo en anexionarse al ya creado -- en torno a las Juventudes Socialistas. Así: "el nuevo partido unificado constituido durante una asamblea que tuvo lugar del 7 al 14 de noviembre de 1.921, tomó el nombre de Partido Comunista de España -- que todavía conserva hoy." (22)

La debilidad de sus inicios se acrecentó por la serie de tensiones y luchas internas de los primeros momentos. Fué igualmente -- un período difícil la etapa de la Dictadura, en que fué perseguido y sus dirigentes en el exilio. Tal prohibición no cesó en los últimos tiempos de aquel régimen, en que se produce una mayor liberalización y tolerancia para con los partidos políticos, de cara a la salida de la situación post-dictatorial.

Así pues, llegado el 14 de abril, los comunistas españoles -- "no tenían verdadera fuerza. Su concepción de la realidad era torpe" (23), como indica el mismo Ramón Tamames, y tal concepción y torpeza se enfoca hacia una total negativa a reconocer que el nuevo régimen vaya a suponer cambio alguno en sentido positivo. De ahí, -- el hecho de que desde el primer momento se dedique a "combatir la república burguesa, en nombre de una revolución proletaria que no -- estaba en condiciones de realizar." (24)

En realidad, el problema fundamental que tiene este partido en aquel momento, aparte de su mínima entidad, y que le impide analizar con realismo la coyuntura política del país, es su total sucursalismo y dependencia en las decisiones de la Komintern. Aproximadamente hemos de estar de acuerdo con G<sup>a</sup> Escudero cuando viene a afirmar que el problema del PC español es que se considera como una sucursal soviética, que pensaba que las condiciones españolas eran idénticas a las que se daban en la Unión Soviética en el año 1.917.

No obstante, este partido evolucionó desde aquellas posturas a otras a lo largo del período republicano. Tales cambios se van a empezar a producir con la sustitución en la Ejecutiva de agosto de 1.932, en que entran a la dirección José Díaz y Dolores Ibarruri. - La posición empezará a hacerse notar a partir de 1.933, en que los comunistas tratan de aproximarse a los partidos cercanos en vista - del poco éxito de su línea inicial. La versión que sobre tal giro - nos dará G<sup>a</sup> Escudero será la siguiente: "Se abandona la quimera de la revolución y se establece un principio que dará mucho juego: el del parasitismo; actuar sobre los dirigentes de otras organizaciones para conseguir el control directo de sus masas." (25) Realmente, lo que ocurre a la altura de esta fecha, es una primera proposición a los dirigentes socialistas para realizar una aproximación que sería un primer contacto tendente a la constitución del Frente Popular. No obstante, a la altura de 1.933, tal posición no tiene éxito y habrá de ser posteriormente, "en caliente", durante la rebelión - de Asturias, en octubre de 1.934". (26)

Tal táctica comunista será valorada de forma diferente por - Artola, que no explicita el calificativo de "parasitismo", tal y como hiciera el autor antes citado. M. Artola dirá exactamente, que - los objetivos que realmente perseguía el PCE en estos años serían: "la expansión de las organizaciones comunistas y, abandonando su - hostilidad originaria contra socialistas y anarquistas, la negocia-

ción de alianzas tanto para fines revolucionarios -octubre de 1.934- como para la conquista del poder a través de las elecciones -Frente Popular de 1.936-. (27)

En definitiva, para el cambio del comunismo español desde un total ostracismo y desconocimiento hacia un incremento de su importancia y peso entre la clase obrera española, aparte de razones de táctica y cambio en su ejecutiva, influirán los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1.934 en Asturias donde, aparte del fra caso de la intentona, esta organización saldrá a la luz, cobrará - prestigio y difusión entre la clase obrera. Además, ello es importante de recordar, potencia el acercamiento entre partidos afines a la clase obrera que, hasta entonces, habían sostenido una rivalidad absoluta y total.

Estamos viendo cómo se va produciendo en el interior de España una dinámica que irá a concordar con la situación a nivel internacional, todo lo cual va a posibilitar el ascenso comunista en - - nuestro país y la conformación del Frente Popular. No se olvide que, desde 1.933, empieza a preocupar en todos los sectores de izquierda y democráticos del mundo la ascensión de los sistemas fascistas. An te ello, la Internacional Comunista reunida en Moscú en agosto de - 1.935 (VII Congreso), "consagrará e impondrá de forma definitiva la política de frentes populares, experimentada y adelantada el año an terior en Francia y de la que a España habían llegado algunos elementos mezclados todavía con las directrices de las políticas anteriores". (28)

Es indudable que esta política frentepopulista permitió que el Partido Comunista Español, siempre fiel a los mandatos de Moscú, se potenciara al lado de todas las fuerzas que constituyeron esta - coalición y que giran alrededor de las dos tendencias de los socialistas españoles, ya que, mientras el ala de Indalecio Prieto entra ba en relaciones para recuperar la conjunción republicano-socialis-

ta, el ala izquierdista o largocaballerista, es proclive al entendi-  
miento con los comunistas.

Prueba evidente de los efectos favorables que para este partido que nos ocupa tuvo el Frente Popular fué que, habiendo logrado un sólo escaño en las elecciones de noviembre de 1.933, llegó a con-  
seguir 16 en las de febrero de 1.936, cifra que muy probablemente, sin el ambiente electoral frentepopulista y sin la mejora en la dis-  
tribución de escaños a favor de las grandes coaliciones, nunca hu-  
biera sido posible.

La guerra civil fué el momento de mayor apogeo de este parti-  
do, en el que predominaban su orden y disciplina internos, frente -  
al inestable desorden demostrado por otras organizaciones de iz- --  
quierda, de cara a la etapa belicista de 1.936 a 1.939.

Para citar otras fuerzas comunistas españolas durante la Se-  
gunda República, no tenemos más remedio que recordar las disiden- -  
cias que, con cierta frecuencia, se producen en el seno del comunis-  
mo español, debido principalmente a que la rígida disciplina de los  
ortodoxos y su dependencia respecto de Moscú, hacen que su democra-  
cia interna brille por su ausencia y, en fin, que se ofrezca un te-  
rreno abonado a este tipo de abandonos y disidencias.

Es de destacar el Partido Obrero de Unificación Marxista - -  
(POUM), que es de tendencia trotskista e ingresa en la IVª Interna-  
cional, integrada por organizaciones de su mismo matiz. Son sus - -  
principales dirigentes Andrés Nin y Joaquín Maurín, viéndose tal -  
partido, que tiene su mayor implantación en Cataluña, finalmente -  
obligado a la aceptación de su entrada en el Frente Popular para no  
encontrarse aislado de la dinámica situación unitaria del momento.

Destaca igualmente el Partido Socialista Unificado de Catalu-  
ña (PSUC) que, aún en la línea ortodoxa del comunismo de la IIIª In-  
ternacional, al igual que el PCE, tenía su autonomía respecto del -

partido central y se asentaba geográficamente en Cataluña, siendo - su origen la agrupación de varios otros entes de ideología similar, dispersos y menores, que quedaron fuera de la tendencia unitaria a la hora de constituirse el Frente Popular en el año 1.935. Este partido se constituye formalmente después del 18 de julio de 1.936 y, en el futuro, desarrollará su política junto a la de los comunistas ortodoxos del partido del resto de España.

Consideramos, en conclusión, que estos son los partidos más importantes que conviene tener en cuenta, a la hora de considerar - los partidos específicamente obreros en la IIª República. Reiteramos el aplazamiento de nuestra consideración del anarquismo al momento en que estudiemos las organizaciones sindicales, puesto que, en rigor, no se puede agrupar a los integrantes de la ideología - - ácrata entre los partidos políticos, a cuyo modo de organización y funcionamiento eran reacios por principio.

### III. 4.- PARTIDOS DINASTICOS

A la hora de confeccionar el esquema mediante el cual hubi--  
mos de organizar el estudio de los partidos políticos a lo largo de  
la Segunda República, que ahora estudiamos, preferimos consiente--  
mente evitar su consideración en los dos tópicos grandes bloques, --  
ya tradicionales pero de impreciso contenido, de partidos de dere--  
chas y partidos de izquierdas, por entender que los núcleos esencia--  
les alrededor de los que se iba a mover la actividad política duran--  
te la República, serían los de monárquicos frente a republicanos. --  
No obstante, y esto ya lo vimos a la hora de analizar a los parti--  
dos republicanos, sería conveniente determinar la posición, a uno u  
otro lado del espectro, que ocuparían los distintos partidos, a pe--  
sar de su connotación común de republicanismo o monarquismo.

Ahora nos toca analizar específicamente los Partidos Dinásti--  
cos.

Si entre los republicanos podíamos distinguir de izquierda o  
de derecha, si los partidos obreros apostaron unánimemente por la --  
carta republicana, a pesar de que en ellos hubiese distintas concep--  
ciones de lo que debiera ser la República, así como del contenido --  
que pugnasen por otorgarle; podemos decir que, a la hora de estu--  
diar a los partidos de corte dinástico, nos estaremos refiriendo a  
partidos localizables en el ala derecha del terreno de juego políti--  
co casi sin excepciones, si bien, únicamente, se podrán establecer  
matizaciones que, en definitiva, no van a alterar esencialmente --  
nuestra afirmación fundamental.

Únicamente de la derecha, hemos dejado al margen de este --  
apartado y ocupando un grupo particular, a aquellos partidos cuyo --  
carácter fundamental es el de su totalitarismo e ideología de corte  
fascista, por encima de su condición de monárquicos o de su proximi--  
dad a los intereses de este bloque.

Es sabido que los principales partidos derrotados con el advenimiento de la República fueron los monárquicos, al ser eliminada la institución que inspiraba el núcleo fundamental de sus programas: la Monarquía. Además, uno de los caracteres más acusados que contemplan la última etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y de los meses iniciales de la Segunda República, es el declive y el franco período de crisis por el que atraviesan los partidos defensores del monarquismo, en particular, los de la vieja etapa de la Restauración y, en general, todos los que se inclinan por una solución política coronada.

No obstante, desde el momento mismo de la proclamación del nuevo régimen, estos partidos que ahora nos ocupan comienzan una labor de reorganización y nueva puesta en funcionamiento, para intentar volver a recuperar su espacio perdido en la sociedad española.

Los núcleos fundamentales en torno a los cuales se agrupa esta corriente que nos ocupa son, básicamente, dos:

- Los Tradicionalistas que, bajo diferentes denominaciones, son los herederos del Carlismo.
- Los Alfonsinos, que constituyen el nuevo partido monárquico, bajo la denominación de "Renovación Española".

Los Tradicionalistas, a la llegada del año 1.931, se hallan divididos en tres ramas diferentes, aunque procedentes del mismo tronco común del Carlismo. Se trata de los Jaimistas, de los Integristas y de los Tradicionalistas, los cuales, unidos por un común afán de lucha antirrepublicana, comienzan su proceso de aproximación e intento de reunificación.

Asimismo, por su afán unitario de lucha contra la República llegarán, una vez unificados en el Tradicionalismo, a realizar un enterdimiento con los Alfonsinos de Renovación Española, salvando viejas distancias.



Recordemos que del original Partido Carlista, a la muerte de D. Carlos, su principal mentor, se hace cargo su hijo D. Jaime, de cuya mano prosigue idéntica línea; pero será con motivo de la Primera Contienda Mundial, cuando se produzcan las primeras disensiones internas por causa de la alineación de simpatías del lado germanófilo o del contrincante. Así, la facción germanófila de Vazquez de Mella, toma la denominación de Tradicionalista, mientras que la de D. Jaime, adquiere la de su principal figura: Jaimista.

El tercero de los grupos de esta ideología que contemplamos a la llegada de la República es el de los Integristas, que se habían separado del tronco Carlista original en 1.888, cuyo programa original "refleja una concepción estrictamente confesional de la política y el poder, según la cual todas sus actividades habían de estar subordinadas a la norma religiosa y a la institución eclesial." (29)

En definitiva, estos tres partidos que luego se reunificarán constituyendo el Tradicionalismo, aparte de su monarquismo, tendrán un denominador común ideológico, que será su confesionalidad ultraconservadora y no constitucionalista. Tal reunificación se efectuó de forma inmediata a la proclamación republicana, frente a la tardía reorganización de los Alfonsinos, que hubieron de superar diferentes alternativas para constituirse en un partido autónomo e independiente.

Los contactos a nivel local entre los diferentes grupos tradicionalistas comienzan de inmediato, agilizando tal proceso unitario la muerte de D. Jaime, que supone la supresión de un importante obstáculo por su indiscutible protagonismo. Tal es la forma en que se llega a la constitución de la Comunión Tradicionalista o Carlista.

Este partido agrupado tuvo una importante conexión con el na

cionalismo vasco en los primeros meses de la República, formando en tre ambos la minoría Vasco-Navarra en las Cortes Constituyentes -re cuérdese que el Tradicionalismo tuvo su principal implantación geo- gráfica en aquella zona de Navarra-, ya que, entre ambos grupos - - existían conexiones programáticas en lo relativo a su confesionali- dad y tendencia autonomista que, en un primer momento y ante los in centivos de un enemigo común a batir, encubrieron las diferencias - que luego aparecerían entre ellos. Así, como reconocerá con gran - precisión el prof. Artola, la diferencia entre estas posiciones de los Tradicionalistas respecto "de las formulaciones democráticas - del nacionalismo vasco explican la ruptura de un acuerdo inicial, - que pudo mantenerse en tanto se limitó a unas abstractas reivindica- ciones de autonomía y a la defensa de la Iglesia, para romperse de- finitivamente en cuanto se intentó definir un común modelo de orga- nización política." (30)

Cuando se comprueba que los vínculos del tradicionalismo y - del nacionalismo vasco no se asientan sobre bases firmes, la deci- sión por parte de la Comunión Tradicionalista se dirige hacia la - unidad de acción con aquellos con los que comparten un punto común destacado, su monarquismo; aunque tengan que limar las diferencias clásicas que les separan de los Alfonsinos, por ahí dirigen sus pa- sos.

La posibilidad de una unión Tradicionalistas-Alfonsinos, se hace más propicia en cuanto que, entre otras cosas, este monarquis- mo alfonsino actual no es ya aquel constituido en aquellos partidos clásicos del período de la Restauración y, sobre todo, porque duran- te el primer bienio de la República (republicano-socialista), la le gislación anticatólica, el laicismo mismo de la Constitución, etc., les incentiva para la acción común por los fines que les unen.

Así, en marzo de 1.933, se constituirá el organismo común, - que va más allá de una simple coalición electoral y que adoptará la

denominación de TYRE (Tradicionalistas y Renovación). Tal agrupación dejó de servir a las aspiraciones más autoritarias de los tradicionalistas cuando, no conformes con la línea derechista que la República adopta en su segundo bienio, deciden romper todo tipo de alianzas pacíficas y comenzar su preparación de la lucha armada. Se le reconocen contactos con Mussolini y, la tradicional tendencia de ciertos españoles a "tirarse al monte", se manifiesta con gran nitidez en estos, que serán piezas claves de la participación en la Guerra Civil de 1.936 a través de su organización militar "los requetés", tan útiles y tan próximos al General Franco.

Los últimos tiempos de la República, y antes de tomar aquella decisión, contemplaron la bipolarización de las fuerzas políticas españolas que, en el lado derecho, contaron con la personalidad aglutinante de Calvo Sotelo que pretende la conformación de un Bloque Nacional que oponer al Frente Popular. En tal bloque están integrados los monárquicos y, concretamente, los Tradicionalistas que ahora nos ocupan, manteniendo sólo hasta las elecciones su alianza, para luego recuperar su posibilidad autónoma de acción.

#### Los Alfonsinos

Necesitan más tiempo para su reorganización después de la proclamación de la República, pues hay que recordar que fueron estos partidos los más directamente afectados por la catástrofe que acompañó a los últimos años de la Restauración y que realmente, quzá por desorganización interna, o bien por la sorpresa de la rápida proclamación republicana, tardaron en reaccionar y prácticamente se muestran impotentes para evitar el aluvión republicano que se avecina.

La primera intención de estos partidos, intentando recuperar su actividad política, es la de introducirse en el partido Acción Nacional, que mantenía sus actividades bajo una dudosa definición

de sí mismo en cuanto a monarquismo o republicanismo -tema este del que hablaremos posteriormente- y desde tal partido, ocuparlo y dirigirlo conforme a su ideología. La figura fundamental de este partido fué Goicoechea, que pronto reacciona contra la indefinición de -Acción Nacional y abandona el partido mediante una declaración pro monárquica, en cuyo texto figura la denominación del nuevo partido que surgirá en torno suyo y que se nutrirá de monárquicos alfonsinos que abandonan las filas de Acción Nacional y que proceden de -aquel invento con pretensiones de partido político que hiciera Primo de Rivera y al que llamó Unión Patriótica. Tal denominación será "Renovación Española".

La definición de las esenciales características de este partido se contienen igualmente en el manifiesto de Goicoechea, en el que se dice: "en lo religioso, somos católicos, en lo político, monárquicos; en lo jurídico, constitucionalistas y legalistas, y en lo social, demócratas." (31) Tal aparición independiente del partido, así como la publicación de su programa, se realiza a la altura del mes de marzo de 1.933, luego de haber intentado la aproximación y el control del partido Acción Nacional.

Lógicamente, este partido, recientemente constituido y sin -resquicios de la estructura del monarquismo alfonsino de la Restauración, pues, si acaso, algunos de aquellos hombres sólo se mantienen como figuras personales (caso de Romanones) o se han pasado al republicanismo, necesita también de ayudas a través de las coaliciones; de ahí que estén dispuestos a llevar a cabo la citada unión -con los Tradicionalistas que se denominará TYRE.

Junto con Goicoechea, destaca la aportación al partido de -Calvo Sotelo, ya citado, al que se adhiere en representación de la postura más autoritaria y extrema de las habidas en su seno, siendo una personalidad decisiva hasta el momento de su muerte, pocos días antes de declararse la rebelión militar que dará lugar a la Guerra

Civil. No obstante, a principios del segundo bienio republicano, el carlismo había abandonado la coalición con los alfonsinos para destacarse más a la derecha de estos y preparar la lucha armada, integrando una de las fuerzas de choque más importantes de la Guerra Civil.

Puede decirse, sin embargo, que la integración en un Bloque Nacional que aglutinase las fuerzas de la derecha en un frente parecido al que se estaba constituyendo por parte de las fuerzas populares, fué el empeño en que se ocuparon estos partidos en los últimos meses de la República, por encima de las diferencias que entre -- ellos se significaban.

Otros grupos próximos a la derecha dinástica fueron también invitados a participar en aquel Bloque, concretamente la CEDA que, sin embargo, no accede a su constitución.

Ello nos dará pie para estudiar este nuevo grupo que, si lo incluimos en este apartado relativo a Partidos Dinásticos, ha sido más bien por razón de oportunidad esquemática, más que porque entendamos que se trate de un caso de excesiva claridad pues, como ya indicamos más atrás, resultaba menos claro aún su republicanismo. Nos referimos, naturalmente, a la:

#### Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

Ya comentábamos al inicio de este apartado que existía un -- partido de gran importancia durante la República que, agrupando los intereses sociales y económicos de la derecha, fué reticente a autodefinirse en sentido monárquico o republicano. Ello nos daría problemas a la hora de clasificarle, pero finalmente nos decidimos por incluirle dentro de los dinásticos porque, puestos a realizar una -- comparación de la proximidad a uno u otro de los bloques en cuestión, entendemos que se halla ciertamente más próximo a los que -- aquí hemos estudiado como Partidos Dinásticos; ello, insistimos, --

con las reservas que sea preciso puntualizar, pero con la base de apoyo de que, por ideología e intereses, está inmerso en el bloque monárquico, aunque su imprecisa definición pretendía, precisamente, moverse con holgura y ser aceptado en el campo de la República.

Partiremos de la base de que, el 14 de abril de 1.931, no existe el partido que ahora nos ocupa como una confederación de derechas y será justamente en aquel momento, cuando se pongan la primeras piedras organizativas para la formación de un embrión de partido, que sería el precedente de la gran coalición de "derechas autónomas" que más tarde se formaría.

Pero habíamos quedado anteriormente con la cuestión pendiente de dar una definición a la línea que se marcaría alrededor de este partido: si no podemos calificarle, en rigor, entre los partidos dinásticos y tampoco entre los republicanos, ¿qué definición podrá dársele a esta especie de "tercera vía" entre las derechas?.

La propia definición que sus mismos mentores originales le dan al partido, tratando de buscar esa vía media que no comprometa excesivamente su situación, es la del "Accidentalismo". La doctrina del accidentalismo de las formas de gobierno, fué una vía inteligente de obviar polémicas y enfrentamientos y dedicar la actividad principal del partido a la defensa de los intereses a los que representaba. El planteamiento era el siguiente: las formas de gobierno son accidentales, secundarias; por ello no habrá inconveniente en acatar pasivamente la forma republicana, con tal de afrontar los problemas más fundamentales con todo su esfuerzo, sin perder energías y tiempo en la discusión o planteamiento de la validez de una u otra forma.

En realidad, alrededor de este que sería gran partido de derechas -la CEDA- y de su origen, Acción Popular, existía un elemento de definición por encima de su monarquismo o de su republicanis-

mo y que era el elemento aglutinador máximo de su ideología e intereses: en puridad, se trata de un partido confesional, su componente religioso y católico es el mayor integrador alrededor del cual - gira el partido y hacia cuyos fines se encamina, aunque en tal empeño haya que dejar al margen la consideración de las formas de gobierno, en un momento poco propicio para definiciones anti-republicanas tal y como ya estudiábamos al considerar el capítulo de los partidos republicanos.

Digamos que, en nuestra opinión, la doctrina del "accidentalismo" significaba, por encima de todo, una manera de no definirse antirrepublicano aún siéndolo en buena medida, ni definirse monárquico, aún también siéndolo en parte, con tal de defender aquellos intereses confesionales prioritarios para el partido en un momento proclive al republicanismo y de hostilidad al monarquismo. Bien sabido es, y en esto hablamos por boca del prof. Artola entre otros, lo cercanos que estaban los intereses clericales con los monárquicos.

Lo que es indudable es la originalidad de este planteamiento y el gran acierto político que en aquel momento tuvo tal decisión. En este punto concreto hemos de reconocer que, mejor que nadie, puede servirnos como fuente bibliográfica José M<sup>a</sup> García Escudero. A él nos vamos a remitir para analizar estos momentos embrionarios de los partidos accidentalistas, origen de la futura CEDA, así como - las personas o fuentes de donde procede tal línea política y doctrinal.

Para el estudio de la CEDA hará falta primeramente analizar el grupo Acción Popular y su proceso de formación y, sobre todo, la persona de Angel Herrera que durante cierto tiempo fué presidente del partido, así como la fuente inicial de donde sale toda esta doctrina: estamos hablando del diario "El Debate" y a su editorial del 15 de abril de 1.931. (32)

Este editorial, "Ante un poder constituyente", estaba directamente inspirado por Angel Herrera y, según reconocerá G<sup>a</sup> Escudero, se trató de "la decisión política más importante de su vida" (33). En él se planteaba todo el arranque de lo que sería una postura diferente de la derecha ante la II<sup>a</sup> República y, por supuesto, la más beneficiosa para aquella misma derecha: se trataba de considerar a la República como una realidad inamovible, un gobierno de hecho al que había que acatar y a partir de tal acatamiento se sentarían las bases para la defensa de sus intereses. Tal decisión fué importante además, en cuanto que se propagaba desde un periódico que, como "El Debate", en aquellos años representaba a una importante masa de lectores y de opinión de derechas, católicos y moderados. La incitación a seguir la vía legal, a no "echarse al monte" como secularmente había sucedido, fué un hecho muy importante para la historia española de aquel momento.

Bien entendido que no se trató de una entusiástica aceptación de la República, sino más bien de una vía pacífica y razonable de resistencia y defensa de intereses.

Esta tendencia a la que nos referimos, puede ser considerada y definida como la del "catolicismo social" y así lo ha sido por numerosos autores al tratar el tema. Si un clásico aglutinante de la derecha era y seguía siendo la religión, en este partido que se irá conformando desde aquel editorial de "El Debate" será su fundamental razón de ser.

Recordemos que eran los inicios de la República y que subyacía en la derecha española aquel gran grupo de cohesión católico-social, que había que aprovechar como núcleo de unión. Recordemos igualmente que no valían aquellos desgastados valores del caído régimen monárquico, mucho menos los tradicionalistas, que tienen un reducido espacio en la realidad española.



Así pues, quedará netamente evidenciado el dominio de los - grupos de cohesión católico-sociales en el sentido de que, en los pri- meros momentos, convergen en él todas las fuerzas de la derecha: mo- nárquicos alfonsinos y tradicionalistas, como se verá en la formación del grupo Acción Nacional, que tiene lugar en mayo de 1.931, antes - del mes de haberse proclamado la Segunda República.

Este grupo Acción Nacional cambiará luego de denominación - por la de Acción Popular, que será el núcleo de cuya evolución surgi- rá la CEDA, como veremos a continuación.

La constitución de este grupo de Acción Nacional, que ya se inicia en aquel editorial de "El Debate" del mismo día siguiente al - 14 de abril, viene apoyada directamente por la Jerarquía Eclesiástica, partiendo de la Secretaría de Estado Vaticana y dirigiéndose al Nun- cio Apostólico en España, Mons. Tedeschini, y al Cardenal Primado de España y Arzobispo de Toledo, Mons Segura.

Dado que se opta por la vía pacífica, será fundamental su - participación en las elecciones y ante las convocadas a Cortes Consti- tuyentes, es el único grupo de la derecha legalmente constituido, que parecía participar con cierto éxito en ellas, a pesar de que no obtie- nen unos resultados halagüeños, consiguiendo sólo seis diputados.

A partir de aquel momento se va produciendo un incremento en la implantación de este grupo en la geografía española, mayormente en aquellas regiones que no tenían una mínima base de organización por - parte de la derecha.

Tal implantación se va a producir a lo largo del primer bie- nio de gobierno de los republicano-socialistas y a medida que se va - produciendo la salida a la luz de una legislación que atenta contra - los intereses clericales; pero no solamente eso, sino a medida que la legislación constituyente atenta contra puntos como la propiedad pri- vada, Ley de Bases de la Reforma Agraria, familia, relaciones Iglesia-

Estado, legislación laboral progresiva, etc. Con ello se ratifica un punto esencial, como es el hecho de que la cohesión existente entre este grupo, no radica primordialmente en sus intereses en torno a la religión, sino en intereses materiales de otro tipo, que llegan a ser más fuertes aunque se escondan bajo el manto religioso.

Esta dinámica por los intereses materiales de estos grupos - acogidos en torno a Acción Nacional, luego Acción Popular, se ve fortalecida con el abandono de los diputados derechistas cuando se aprueba el artículo 26 de la Constitución, relativo a Ordenes Religiosas, que recuperan fuerzas para volver a la carga en el momento de la discusión de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, "en la que radicaba su interés real" (34)

Este incremento del potencial derechista durante el primer bienio, tiene su culminación con el frustrado intento de golpe antirrepublicano de Sanjurjo, en agosto de 1.932, que provocó una fuerte reacción gubernamental contra estos grupos. Tal reacción, que se manifiesta en un movimiento represivo del Gobierno Azaña contra grupos como Acción Popular, que nada habían tenido que ver directamente con el levantamiento de Sanjurjo, hace que Gil Robles, a la sazón líder principal de Acción Popular en sustitución de Angel Herrera que había dejado su lugar en pocos meses, se planteara la organización formalmente estructurada de un partido político homogéneo. (35)

Ya dijimos que los inicios de los partidos de derechas que se oponen a la IIª República, digamos desde fuera, se producen con una unidad total alrededor de Acción Popular, tanto de los de obediencia específicamente monárquica (tradicionalistas y alfonsinos), como de aquellos que no expresaban una obediencia específica a las formas de gobierno (los accidentalistas). Con el fortalecimiento antes citado de los partidos de derechas se van matizando mucho más sus posturas, que se comienzan a manifestar de forma independiente. Habían sido los tradicionalistas los primeros en abandonar un grupo que como -

Acción Popular había nacido bajo el signo del posibilismo y ello era lógico, ya que, representaba el tradicionalismo la postura más extrema y violenta entre la derecha.

Serán los monárquicos alfonsinos los siguientes en salir del grupo accidentalista, ante la necesidad de Acción Popular de constituirse como una posible alternativa política dentro de la República - y, por ello, definirse en un sentido no beligerante con la propia República. Ello se realiza mediante la asamblea de todas las entidades de Acción Popular, que se celebra en Madrid en octubre de 1.932; en tal asamblea que plantea obvias dificultades y problemas, se produce la definición accidentalista de forma expresa, que había sido propagada por el grupo más fuerte y representativo de tal partido: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, el diario "El Debate" y el líder indiscutible Gil Robles.

Igualmente se rompe en dos grupos la fuerza de derechas allí representada hasta entonces, ya que, el grupo Goicoechea se desprende y pronto pondrá en funcionamiento el partido Renovación Española que citamos en su correspondiente apartado, partido en el que destaca su monarquismo alfonsino, con el apoyo del diario "Abc".

Por el contrario, Gil Robles y su grupo, quedan con las manos más libres para llevar a cabo el proyecto deseado: el aprovechamiento del régimen establecido para alcanzar el poder dentro de él, - sin conflictos por poner en cuestión la forma que la cúspide de tal - gobierno haya de tener; lo interesante es alcanzar el poder por la - vía de menor resistencia.

Con el grupo Acción Popular dominado por aquella sola tendencia, se plantea para Gil Robles la necesidad de dar una estructura orgánica y única a todas aquellas fuerzas dispersas que estaban adheridas a Acción Popular. Ello se lleva a cabo entre finales de febrero y primeros de marzo de 1.933, de donde saldrá el programa y constitu-

ción de la futura CEDA. De la fuerza con que se inicia tal constitución da idea el hecho de que a tal asamblea asistan quinientos delegados de cuarenta y dos partidos (adscritos casi todos ellos a Acción Popular), que representaban a 39 provincias españolas con 735.058 miembros. (36)

Queda, pues, constituida la CEDA, fuerza más importante de la derecha española durante la Segunda República, que tendrá su apogeo a partir de las elecciones de noviembre de 1.933, que abrirán el segundo bienio de la etapa republicana. No obstante, a pesar de ser la fuerza mayoritaria en tales elecciones, no llega directamente al poder hasta octubre de 1.934, por carecer de apoyos suficientes (recuérdese que sólo era la mayor de las minorías), así como por los recelos que su falta de definición republicana suscitaba entre las fuerzas de la izquierda obrera y burguesa republicana.

La CEDA, según Artola, tenderá hacia la defensa de dos puntos fundamentales:

De una parte los intereses agrarios, buscando el situarlos de forma anterior a como estaban antes de haber sido reformados en el primer bienio.

De otra, los confesionales, tendentes a dejar a la Iglesia en la misma situación de privilegios y dominios en que se encontraba antes del advenimiento de la República, lo cual suponía el mantenimiento de otros intereses, como los relativos al campo de la familia, enseñanza, propiedad privada.

Según el mismo G<sup>a</sup> Escudero: "Tenía mucho la CEDA, pues, de conglomerado de derecha, pluralidad de elementos heterogéneos unidos sólo por la oposición a la política anticlerical de la República y muchos de los cuales sólo aceptaban la legalidad mientras no pudieran acabar con ella." (37)

Recogido por este mismo autor, el Ministro Gimenez Fernández,

destacado miembro de la CEDA, reconoce la existencia en su seno de - tres tendencias:

- Un centro "formado por la burguesía media que vivía sólo - el problema político y seguía a Gil Robles como "salvador de España"."
- Un ala derecha, "de latifundistas, conservadores e incluso reaccionarios, fronterizos de los agrarios."
- Un ala izquierda nutrida "de las ideas sociales de los - - "Propagandistas" y "El Debate"."

Si bien, el mismo Gimenez Fernández considera que no predominó este ala pues, si en 1.935 el partido contaba con 135 diputados, - no más de 35 podían considerarse auténticos demócratacristianos. Prueba evidente fué la propia caída de Giménez Fernández del Ministerio - de Agricultura, promovida por el ala derecha de su propio partido.

Realmente se hace preciso llegar a la conclusión de que la - CEDA no fué esa vía media que pretendía en sus inicios, puesto que, - los apoyos interiores con los que contó no llegaron a creer siquiera en aquella posibilidad y más bien la utilizaron para llevar a cabo un más fácil acceso al poder, que permitiera realizar una política restitutiva respecto de los intereses que habían sido afectados por la política republicana del primer bienio.

También puede añadirse el hecho negativo para sus posibilidades de que, tanto la coyuntura internacional de aquellos años, como - la propia coyuntura interna de nuestro país, tendían hacia una bipolarización intensa, que también se dejó sentir en el seno de la propia CEDA con las manifestaciones extremas de su propia ala juvenil (Juventudes de Acción Popular).

Una cuestión subyace del análisis de tal partido y es la duda, expresada por algún autor y que nosotros hacemos nuestra, de que la CEDA realmente llegara a ser el partido de derechas que, situado -

dentro de la República, necesitaba este régimen para su estabilidad y supervivencia. Más bien parece que se tratara de un partido empeñado en utilizar la menor resistencia posible para organizar una alternativa al régimen republicano, que tratase de abandonar el régimen bur- - gués parlamentario y reformista que la República había ensayado. Probablemente a la República, para haber sido viable le hubiera faltado precisamente un partido de las características del que nos ocupa, pero cierta e inequívocamente republicano.

De ahí nuestras dudas a la hora del encuadramiento de este - partido entre los republicanos o entre los monárquicos. Hemos optado por incluirle al final de estos últimos con las reservas que ya se expresaron.

### III. 5.- PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA Y FASCISTAS

Una vez considerados aquellos partidos que, bien sean de izquierdas o derechas, pueden ser agrupados dentro del esquema de republicanos o monárquicos, hemos de considerar aquellos otros en los que domina su ideología autoritaria o fascistizante y que, por lo tanto, consideramos como de extrema derecha. Estos partidos, que en los meses iniciales de la Segunda República tienen una importancia prácticamente nula, van constituyéndose y adquiriendo fuerza a medida que -- avanzan los años y, principalmente, en la segunda mitad del período republicano, época esta en la que se van consolidando en el resto de Europa unos regímenes que concuerdan con las líneas de tales partidos y que sirven para afirmar y animar el crecimiento de sus homónimos españoles.

Analizando el origen y la razón del nacimiento en España de tales partidos, Ramón Tamames dirá lo siguiente, que recogemos por entender que se aproxima básicamente a la realidad: estos partidos españoles "No es ninguna casualidad que naciesen coincidiendo con la expansión del fascismo italiano, con la consolidación del corporativismo luso y con la subida al poder del nacionalsocialismo en Alemania, con la semidictadura de Dollfus en Austria, y con otra serie de movimientos de análogo carácter en Polonia, etc.". (38)

Aparte de sus orígenes ideológicos y filosóficos de todos conocidos y que, básicamente, tienen como denominador común el desprecio por las formas democráticas y parlamentarias de organización política en favor de otras autoritarias, es allá por los primeros meses de 1.931, cuando aparece en España el primero de los grupos de estas características en torno a "La Conquista del Estado" y Ledesma Ramos, si bien, no puede decirse que por su entidad pueda ser equiparado a un partido político importante y estructurado.

Igualmente se da la existencia de otro pequeño núcleo de es-

tas tendencias en Valladolid, en torno a la publicación del periódico "Libertad" y a la figura de Onésimo Redondo.

Se observará meses después el potenciamiento de ambos grupos en el momento en que se produce su acercamiento mutuo y la constitución de las denominadas "Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas", - que tiene lugar en octubre de aquel año de 1.931. Esta agrupación será la primera que, luego de etapas anteriores en que se produce una - definición equívoca y variada de su proyecto de Estado y de partido, defina de forma única su modelo de Estado, definición que será posteriormente válida unitariamente: se trata de su Estado "Nacional Sindicalista", que enfrentarán con el modelo burgués parlamentario, así como con el antagónico de los países socialistas de dictadura proletaria.

No pasaron estas manifestaciones de los primeros años de la República, de ser ejemplos testimoniales. Sería justamente el año - - 1.933, el que marcará el auge mayor de estos movimientos y de estos - partidos. Y sería tal año porque él fué el que señaló la llegada de - Hitler al poder y, además, porque la situación española enfrentada a las elecciones de noviembre, basculaba netamente hacia posturas más - derechistas, que no era extraño que tuviesen alguna ramificación de signo totalitario ante los ejemplos europeos que, como tantas veces - se ha dicho, tan poco ayudaron al feliz desarrollo del proyecto republicano.

Será todavía un grupo más, el que complete el catálogo de - partidos españoles de extrema derecha: se trata del núcleo que se forma en torno a José Antonio Primo de Rivera. Su partido será denominado "Falange Española" y su constitución tiene lugar en torno al discurso fundacional que pronunció José Antonio en el teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de aquel año de 1.933. "El parlamento de José Antonio contiene, como formulaciones más precisas, la afirma-



ción del nacionalismo español -"una irrevocable unidad de destino"-, cierta confesionalidad -"queremos que el espíritu religioso... sea - respetado y amparado como merece"- y la aspiración a sustituir el sis tema demoliberal vigente -"que desaparezcan los partidos políticos"- por un Estado totalitario organizado corporativamente sobre la base - de las "unidades naturales": familia, municipio, corporación." (39)

La definición, pues, de los grupos hasta aquí citados es pa- recida y, lógicamente, el terreno en el que debían moverse tanto ideo lógicamente como en su reclutamiento, era semejante. Ante tal comple- mentación, la postura más lógica es la tendente a la unificación de - ambos grupos, que llegará el 30 de febrero de 1.934 en que queda - - constituida la "Falange Española de las JONS", celebrándose el Primer Congreso Nacional en octubre de este mismo año.

La línea programática de este grupo se manifiesta en un pro- grama de 27 puntos, que definirá los elementos básicos del modelo de Estado Nacional Sindicalista que se propugna. Los tres elementos esen ciales de este Estado, que se incluyen en los citados 27 puntos pro- gramáticos, son:

1º.- Un modelo de organización del Estado, que se entiende - como: "Un instrumento totalitario al servicio de la integri- dad de la patria." Ello se plasma en la negación de las auto nomías regionales españolas, así como de la lucha de clases que se anulará, según ellos, con la constitución de una orga- nización sindical de carácter vertical. Igualmente, se elimi na todo vestigio de democracia inorgánica, tendiendo a la - participación ciudadana de forma orgánica a través del sindi cato, familia y municipio, con la supresión de los partidos políticos.

2º.- Aquel programa igualmente incluye un modelo de organiza- ción económica ciertamente precario, inspirado en el modelo

agrario que ya contuviera el programa del grupo de Onésimo - Redondo. En economía la tendencia propuesta por este programa será grandemente intervencionista por parte del Estado.

3º.- Finalmente, aquellos puntos programáticos de la Falange, contienen también su proyecto de organización social, - que parte del reconocimiento de la propiedad privada, con el ya citado intervencionismo estatal.

La formación del Bloque Nacional de Calvo Sotelo supuso el - abandono de algunos miembros y la crisis de la Falange pero, por el - contrario, hizo que se potenciara e hiciese indiscutible el liderazgo de José Antonio Primo de Rivera, que en marzo de 1.935 comienza a publicar el primer periódico que expresaba la línea de pensamiento falangista. Se trata de "Arriba". Desde aquel año 1.935, José Antonio - ve con desagrado la evolución política española y, del mismo modo que se aleja del gobierno radical-cedista impulsado por la creciente oposición izquierdista que se consolida y organiza, abandona toda posibilidad de seguir la vía legal de acceso al poder y comienza a prepararse para su toma por la fuerza.

Participa en las elecciones de febrero de 1.936, en las que triunfa ampliamente el Frente Popular y, al no haber logrado formar - coalición con ningún otro grupo fuerte, ha de presentarse en solitario este partido falangista, haciéndolo en ocho circunscripciones en las que obtiene una derrota estrepitosa.

A partir de aquel momento, la preparación de grupos de lucha armada será la finalidad principal de este partido que se juega la baza del asalto por la fuerza al poder; según reconoce Artola: "a partir de febrero -de 1.936- los manifiestos de Falange no serán sino - una incitación a la lucha armada." (40) Pero no solamente se trata de una incitación, sino de una verdadera organización material para tal lucha armada, que la constituye en aquellos meses de la primavera de

1.936 como primera organización de milicias y fuerzas de choque, que luego, ya durante la Guerra Civil y desaparecido su jefe, que fué fusilado en Alicante, tuvo una actuación destacada en la lucha contra la República, siendo conocida su influencia posterior en la configuración del régimen surgido de la antedicha Guerra Civil.

Llegados a este punto, consideramos suficientemente tratados los partidos políticos españoles que actuaron en la arena política española a lo largo de la Segunda República, a los efectos que nos interesan en el contexto general de este trabajo.

### CAPITULO III

## Relación de Citas

- (1) Manuel TUÑON DE LARA: "La IIª República". Edit.: Siglo XXI. 3ª - edic. Madrid, dicbre. 1.976. Vol. I, pág. 2.
- (2) Xosé M. BEIRAS: "La Economía Española durante la Segunda Repúbli- ca", en "Estudios sobre la IIª República Española", selecc. de - M. RAMIREZ. Edit. tecnos. Madrid, 1.975, pág. 157.
- (3) Edward MALEFAKIS: "Los Partidos de la Izquierda y la Segunda Re- pública" en "Estudios sobre la Segunda República y la Guerra Ci- vil Española". Edic. de Raymond CARR. Edit. Ariel. Barcelona, 2ª edic., febrero de 1.974, pág. 33.
- (4) Pierre BROUE y emile TEMIME: "La Revolución y la Guerra de Espa- ña". Edit.: F.C.E. México, 1ª Reimpr. de la 1ª Edic. Española, - 1.971, pág.44.
- (5) Miguel ARTOLA: "Partidos y Programas Políticos. 1.808-1.936" - - Edit.: Aguilar. Madrid. 1ª Reimpr. de la 1ª Edic., 1.977, pág. - 628.
- (6) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 630.
- (7) José Luis Gª de la SERRANA: "Los Intelectuales en la IIª Repúbli- ca", en "Estudios sobre la IIª República". Edit.: Tecnos, pág. - 135.
- (8) José Luis Gª de la SERRANA: op. cit., pág. 134.
- (9) José Mª Gª ESCUDERO: "Historia Política de las dos Españas". Edi- tora Nacional. Madrid, 2ª edic., 1.978, pág. 939.
- (10) José VILAS NOGUEIRA: "El Autonomismo Gallego en la IIª Repúbli- ca" en "Estudios sobre la IIª República Española". Madrid, 1.975, pág. 177.
- (11) José VILAS NOGUEIRA: op. cit., pág 179.
- (12) Juan Pablo FUSI: "El Problema Vasco en la IIª República". Edit.: Turner. Madrid, 1.979, pág. 28.
- (13) Juan Pablo FUSI: op. cit., pág. 29.
- (14) " " " " " ": " " , pág. 61.
- (15) Manuel TUÑON DE LARA: "La España del Siglo XX". Edit.: Librería Española. París, 1.973, pág. 239.
- (16) Edward MALEFAKIS: "El Movimiento Socialista durante la Segunda - República" en "Historia Social de España. Siglo XX" Edit.: Gua- diana. Madrid. 1.976, pág. 202.

- (17) Manuel RAMIREZ: "Cesión y Reacción en las Cortes de la Segunda - República Española" en "Historia Social de España. Siglo XX", - pág. 176.
- (18) Manuel RAMIREZ: "Cesión y Reacción...", op. cit., pág. 179.
- (19) Edward MALEFAKIS: "El movimiento Socialista durante la IIª Repú- blica", op. cit., pág. 208.
- (20) M. CONTRERAS CASADO: "El PSOE: La Trayectoria de un conflicto In- terno." en "Estudios...", op. cit., pág. 213.
- (21) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 666.
- (22) Guy HERMET: "Los Comunistas en España". Edit.: Ruedo Ibérico. - Edic. española. París, 1.972, pág. 14.
- (23) Ramón TAMAMES: "La República. La Era de Franco". Col. Alfaguara. Alianza Editorial. Madrid, 1ª Edición. pág. 28.
- (24) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 684.
- (25) José Mª Gª ESCUDERO: op. cit., pág. 963.
- (26) Guy HERMET: op. cit., pág. 23
- (27) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 691.
- (28) Santos JULIA: "Orígenes del Frente Popular en España". Edit.: Si- glo XXI. Madrid, 1.979.
- (29) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 545.
- (30) " " " " : " " , pág. 608.
- (31) " " " " : " " , pág. 611.
- (32) José Mª Gª ESCUDERO: op. cit., pág. 975.
- (33) " " " " " " : " " , pág. 975.
- (34) J.R. MONTERO GIBERT: "La CEDA: El partido contrarrevolucionario hegemónico de la IIª República" en "Estudios sobre la IIª Repú- blica". Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.
- (35) Richard ROBINSON: "La República y los Partidos de la Derecha" en "Estudios..." Editor: Raymond CARR. pág. 67 y ss.
- (36) J.R. MONTERO GIBERT: op. cit., pág. 109.
- (37) José Mª Gª ESCUDERO: op. cit., pág. 983.
- (38) Ramón TAMAMES: op. cit., pág. 48.
- (39) Miguel ARTOLA: op. cit., pág. 623.
- (40) " " " " : " " , pág. 626.

C A P I T U L O   I V

LAS FUERZAS SOCIOECONOMICAS Y LOS GRUPOS DE PRESION:  
EVOLUCION E INCIDENCIAS DURANTE LA IIª REPUBLICA

C A P I T U L O   I V  
LAS FUERZAS SOCIOECONOMICAS  
Y LOS GRUPOS DE PRESION:  
EVOLUCION E INCIDENCIAS DURANTE  
LA SEGUNDA REPUBLICA

IV.1.- LAS FUERZAS SINDICALES

Cuando en una época determinada se estudian las fuerzas sindicales como fuerzas eminentemente dedicadas a la defensa y encuadramiento de los intereses de la población trabajadora, al margen de los partidos políticos, hay que tener presente la evidente dificultad que entraña esa tarea, ya que, se produce una existencia casi constante de interrelaciones importantes entre tales fuerzas sindicales y determinados partidos políticos.

No suele ser extraña, no obstante, la aparición de trabajos y publicaciones que se ocupan del análisis de tales organizaciones sindicales como entes autónomos y al margen de los partidos. En este apartado concreto de nuestro trabajo y por razones de ordenación y método también nosotros lo hemos intentado.

No por este intento deben faltar estas explicaciones que manifiesten "a priori" el hecho incuestionable de que, muchas veces, cuando se habla de sindicatos, no se está hablando de simples organizaciones para la mera e inocua defensa de los intereses laborales del trabajador; sino de verdaderas organizaciones directamente conectadas con ciertos partidos o grupos políticos o de interés, a los que sirven como paralela organización de masas, como fuerza de ejecución y presión de las decisiones de la dirección de tales partidos y, en definitiva, como "correas de transmisión" de tales organizaciones esencialmente políticas; de donde se deduce la dificultad de tratar unos sin relacionarlos con los otros.

No nos vamos a pronunciar ahora valorativamente sobre ese te

ma; por otra parte, existen opiniones suficientes en uno u otro sen tido; lo que sí es cierto es que se ha repetido a lo largo de la - historia sindical tal relación de dependencia sindicatos-partidos y que, una de esas veces, ha sido la correspondiente a la Segunda República Española que ahora estudiamos. En tal etapa no cabe duda al guna de la mutua relación existente entre el PSOE y la UGT, entre - el PCE y la CGTU, el PNV y ELA-SOV, así como el sindicalismo católi co de ámbito nacional y otros grupos políticos y de interés no sin dicales, como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas o - de la misma jerarquía eclesiástica nacional y vaticana.

En el análisis de las fuerzas sindicales concretas a lo lar go de la etapa republicana vamos a abarcar, desde los sindicatos ma yoritarios y de matiz anarcosindicalista y socialista, CNT y UGT - respectivamente, hasta el sindicalismo católico e independiente, pa sando por el de matiz comunista.

Comenzaremos, precisamente, por una organización sindical - que posiblemente suponga una de las pocas excepciones conocidas a - esa regla de la dependencia grupos sindicales-grupos políticos cita da con anterioridad.

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que es un sindi cato que se define como "apolítico" en el sentido, no solo de su in dependencia respecto de cualquier partido político, sino de su man tenimiento al margen de cualquier táctica política de partidos obre ros afines, partidos progresistas o partidos republicanos.

Tal apoliticismo no significa, sin embargo, que en su seno - no se hayan producido pugnas entre distintas opiniones y tendencias que, tratando de capitalizar este movimiento sindical, buscasen la obtención de su hegemonía y control. Su historia está cargada de - ejemplos de este tipo tal como la expulsión del grupo de los trein ta, partidarios de una línea sindicalista pura, o la existencia del



grupo "faísta", tendente a dominar el sindicato según los presupuestos fundamentales del anarquismo.

De cualquier modo, el sistema de organización de esta central, desde su aparición, ha sido calificado como de verdadera innovación: "apoliticismo", que "significó para la CNT una verdadera actitud revolucionaria de negación de la utilidad para el proletariado de la actividad política", (1) y "anarcosindicalismo", que será la ideología dominante en tal organización, son los puntos esenciales en que se apoya tal innovación.

Ante la Segunda República, a la Confederación Nacional del Trabajo se le plantean una serie de problemas de los cuales destacan fundamentalmente dos: uno de orden interno, de actuación hacia dentro de la propia organización; el segundo, relativo a su actuación externa ante el nuevo fenómeno del régimen republicano.

Es sabido que a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera la situación de la Confederación fué de clandestinidad y persecución, con lo que ello supone de desorganización y debilidad, lo cual ha de incidir necesariamente en su situación ante el inicio de la República, que supondrá para esta central el comienzo de una etapa de expansión que la llegará a colocar por encima del millón de afiliados.

Ante tales circunstancias, el primer problema importante a resolver por este sindicato es el de su propia organización interna, una vez terminada la represión hacia ellos del anterior régimen.

El segundo problema y, naturalmente inmediato, era el de su actuación y posición ante la nueva coyuntura histórica que supone para España la implantación del régimen republicano.

Ambos temas fundamentales son tratados y objeto de análisis profundo en el III<sup>o</sup> Congreso Extraordinario de la CNT, que se cele-

bra en Madrid a partir del 10 de junio de 1.931 y que reúne, según cifras de Tuñón de Lara, (2) a 418 delegados que representan a 511 sindicatos y 535.565 afiliados.

En cuanto al aspecto interno, ante la celebración de este - congreso aparecen dos tendencias en la Confederación que habrán - - igualmente de representar dos tendencias diferenciadas ante el proceso constituyente republicano que se inicia. Por un lado, está la tendencia sindicalista, también llamada "posibilista", que resulta más proclive a la adopción de una postura moderada capaz de llegar a una cierta sintonía con el régimen republicano, partidarios, incluso, de mantener una colaboración con el régimen republicano. Es la tendencia que en aquel momento representa al Comité Nacional y - en ella aparecen nombres como los de Angel Pestaña, Peiró, Moix, - Fornells, etc... Por otro lado aparecen los anarquistas más extremos, la tendencia representada por la ya citada FAI, cuya pretensión fundamental se encamina hacia la consecución de los logros de la revolución social y entre los que podemos encontrar a Durruti, - García Oliver, Ascaso, Cipriano Mera, Federica Montseny, etc.

La postura del sindicalismo posibilista es la que sale triunfante del citado congreso, ya que, ejerce su dominio en el Comité - Nacional, con Pestaña como Secretario General, partidario con los - suyos de un desarrollo constitucional democrático, aunque fuese como paso previo o provisional hasta la llegada de la verdadera revolución. Pero este éxito de la que podíamos llamar "ala moderada" - dentro de la CNT, no será muy duradero, ya que la dinámica de los - primeros meses de la proclamación de la República hace que se produzca un masivo acceso de trabajadores hacia su afiliación a las - centrales sindicales y, concretamente, dentro de la CNT se fortalece por este medio el ala "faísta", que obtiene los mayores apoyos y aumenta su potencial en el seno confederal.

No es extraño este movimiento de afiliación a este sindicato,

debido a que las condiciones de vida entre la clase trabajadora española al inicio del período republicano, eran lo suficientemente problemáticas como para que este sector diese una posible salida a su situación en la alternativa de sindicación y militancia que le ofrecía el nuevo sistema; principalmente ocurre esto en los sectores agrarios y campesinos, donde aflora una mayor radicalidad. Igualmente, tampoco es extraño este fortalecimiento del ala "faísta" dado que, buena parte del incremento de afiliación en el sindicato cenequista, procedía de aquellos sectores decepcionados por el ritmo lento y gradualista con que la República emprende su reformismo en el terreno social y laboral; "la CNT se encontraba exasperada por la política monopolizadora de los socialistas en el Ministerio de Trabajo". (3)

Por todo ello es por lo que, aunque en junio de 1.931 haya salido del Tercer Congreso una postura favorable a los "posibilistas", el ritmo de los acontecimientos les vaya siendo cada vez más desfavorable y comiencen a perder posiciones en la organización -- siempre en favor de los más radicales de la FAI. Son tales circunstancias las que motivan que, en agosto de 1.931, se produzca la publicación de un manifiesto contra el creciente aumento de la tendencia faísta en el seno confederal por parte de los "posibilistas" o moderados, en el que se denuncia tal ascensión y en el que, ostensiblemente, se puede apreciar el enfrentamiento interno. Estamos ante el conocido y denominado "manifiesto de los treinta".

Es conveniente recordar, simultáneamente, cómo acontecimientos como la huelga de telefónica de julio de 1.931, van poniendo un abismo de separación entre esta central y el gobierno republicano. Esta huelga, fuertemente reprimida por el a la sazón Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, "dejó un legado considerable de acritud entre la República y la CNT". (4)

Esta huelga de telefónica comienza a marcar el inicio de una

etapa ofensiva o insurreccional de la CNT frente a la República que, a nivel interno, sigue demostrando la fuerza creciente del faísmo - en su seno. Prueba fehaciente de todo ello será la pérdida de la dirección del organismo de prensa oficial de la CNT, "Solidaridad - - Obrera", por parte de Peiró y, fundamentalmente, el Pleno Regional de Sabadell, celebrado en enero de 1.932, donde es sustituida la dirección de esta importante federación (contaba, según Tuñón de Lara con veinte mil afiliados) por otra de matiz faísta, llegando la crisis hasta la Secretaría General, que es perdida por los posibilistas, pasando a ocuparla Manuel Rivas de la línea revolucionaria. Salen del Comité Nacional el grupo de los Pestaña, Peiró, etc. y queda la CNT, a nivel de dirección, en manos del grupo de los Ascaso, - Durruti, Montseny, etc.

Nos hallamos, pues, ante el momento de máximo distanciamiento entre la República y el anarcosindicalismo, así como entre estos y los sindicatos socialistas de UGT, más comprometidos con la línea política del Partido Socialista, que ocupaba parcelas de poder. No obstante, es esta una situación propiciada por la burocracia sindical de UGT dada la rivalidad tradicional con la CNT, más que emanada de la base, que "no siempre compartió esta visión egoísta de los burócratas pagados, sintiendo una solidaridad de clase básica". (5)

En definitiva, esta posición ofensiva de la CNT, que llegaría hasta el año 1.934, tiene mucho que ver no solo con la difícil situación por la que atraviesan sus bases y sus masas de afiliados que, según diferentes fuentes, se contabilizan en alrededor del millón; sino que igualmente puede ser entendida como una respuesta ante la sistemática represión y marginación del propio poder de la República hacia este sindicato. Marginación, que no solamente se manifiesta con la fuerte represión con que es contestado por el Gobierno cada movimiento huelguístico promovido por la CNT, mientras la - tolerancia resulta ciertamente mayor hacia sectores opuestos a la -

República por su derecha, sino que igualmente se manifiesta mediante un sistemático boicot a las iniciativas anarquistas en el mundo del trabajo, por parte de los responsables socialistas del Ministerio de Trabajo, a cuya cabeza está Largo Caballero y que pretenden mantener la hegemonía de su sindicato sobre este que ahora nos ocupa, haciendo todo lo posible porque fuera favorecida la táctica reformista y lenta del socialismo, así como reprimida toda reivindicación del anarquismo. Por ejemplo, un punto que dió origen a fricciones y a enconadas protestas anarquistas, está originado por la constitución de los "Jurados Mixtos", como vía de solución y arbitraje de los conflictos y reivindicaciones laborales, que iban manifiestamente en contra del sistema de acción directa proclamado por la CNT. La promulgación de la Ley de Jurados Mixtos, del 27 de noviembre de 1.931, "Fué considerada por los anarquistas como una verdadera agresión." (6)

Simultaneando el análisis de su relación con la República y el de su situación interna, aspectos íntimamente ligados, del ámbito de la CNT son expulsados los integrantes del grupo "treintista", firmantes del conocido manifiesto contra la radicalización faísta y "contra la violencia por la violencia", ello se producía a raíz del pleno regional de abril de 1.932 ya citado y se materializaba en - septiembre de ese mismo año, manteniéndose separados del seno de la Confederación hasta el difícil y dramático año para la vida española de 1.936.

Desde finales de 1.932 y los inicios de 1.933, el predominio dentro de la CNT será absoluta y claramente de la línea más dura y revolucionaria: la FAI. Estamos en la fecha en que, posiblemente, se alcancen las cotas más altas de afiliación en los sindicatos españoles a lo largo de la etapa republicana, llegando a darse cifras que hablan de un número superior al de 1.200.000 en la CNT; - aunque, según recoge M. T. de Lara: "La estimación hecha por Pesta-

ña en "Leviatán" (dos años más tarde pero refiriéndose a 1.932) de un millón de afiliados parece bastante cercana a la realidad." (7)

Esta táctica definitivamente revolucionaria de la CNT hará - que se ponga en funcionamiento la lamentable dinámica acción-represión que tan pocos beneficios trajo a sus dos protagonistas: el sin dicato anarquista y la propia República. Ahí están, valgan como - - ejemplo, los levantamientos libertarios de enero de 1.933, que producen los sucesos de Casas Viejas y que tan graves consecuencias - traerían para el propio Gobierno Azaña y para la coalición Republicano-Socialista. Así pues, no es extraño que, desde el socialismo y desde la izquierda republicana, se viera a la CNT como colaboradora de la derecha al provocar, por el lado izquierdo, una inseguridad y un desorden que, contra la misma República, se estaba provocando - por su flanco derecho. Eran, al fin y al cabo, tácticas eminentemente distintas sobre la manera de resolver la salida republicana y - unos intereses y ópticas diferentes sobre la consolidación del joven régimen.

Este año de 1.933 será especialmente conflictivo, marcando - la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones que en el mes de noviembre serían ganadas por las fuerzas de derecha. Tal convocatoría electoral es abordada por la CNT desde su posición más extremista y revolucionaria, que no está ajena a los conflictos que rodean a la pérdida del poder por la izquierda republicana, ni es ajena al descalabro electoral sufrido por las fuerzas progresistas al propugnar una activa propaganda a favor del abstencionismo electoral, bajo unos lemas que hacen hincapié en la escasa evolución que ha supuesto para los intereses de la clase trabajadora, según su óptica, la proclamación de la República.

Tales elecciones de 1.933 denotan en sus resultados la incidencia de la propaganda abstencionista del sindicato ácrata, ya que

se observa claramente en las cifras electorales un mayor índice de abstención en aquellas áreas de mayor presencia anarquista. Las cifras de abstención en algunas provincias, según datos coincidentes obtenidos de T. de Lara y J. Luis Guinea, son los que siguen:

|             |        |            |        |           |        |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| Sevilla:    | 50,61% | Cádiz:     | 62,83% | Málaga:   | 49,37% |
| Pontevedra: | 44,50% | La Coruña: | 41,76% | Zaragoza: | 45,11% |
| Barcelona:  | 39,85% | Lérida:    | 39,67% |           |        |

Tales cifras, el resultado electoral de noviembre de 1.933 y el ambiente general del país, demuestran que la República no estaba consolidada en el sentido progresista que se esperaba de ella por - muchos sectores sociales, luego del primer bienio Republicano-Socialista y reformador: y el auge de la CNT, su posición y su actitud, tienen una explicación si se piensa que "las masas proletarias se - veían solas, insatisfechas y frustradas por una República burguesa de la que hasta ahora no habían recibido mas que represión y promesas; por otra parte, se sentían traicionados por un partido pretendidamente proletario que no supo aprovechar su paso por el poder en favor de la clase que representaba. Sólo el anarquismo ofrecía constantemente a las masas la alternativa revolucionaria que, cada vez con mayor insistencia ansiaban". (8) Y es que, al llegar las elecciones de 1.933, pocos habían sido satisfechos, quedando en pie casi todos los problemas económico-sociales que ya existieran al iniciarse el período republicano.

No obstante, y ello le ha sido recriminado a la CNT desde - sectores progresistas, su principal problema en aquel momento consistió en que su postura fué impulsiva y poco científica en muchas ocasiones; llegando a sostener autores como T. de Lara, que "su - praxis había sido siempre la acción violenta de grupos minoritarios y conspirativos" y que así "no tuvieron tiempo ni ocasión de auscultar los latidos del cuerpo laboral a través de múltiples conflictos". (9)

Tal táctica revolucionaria y ciertamente poco posibilista -- continuó inmediatamente después de conocerse el resultado electoral de 1.933, lanzando una nueva ofensiva comunista libertaria el 8 de diciembre de ese año semanas después de las elecciones que, al ser duramente aplastada, origina un importante número de represiones y víctimas, con lo que la CNT entra en una fase de regresión al tener fuera de su seno a sus elementos más posibilistas, que quizá pudieran haberse entendido con la República y al estar en prisión, en el exilio o en la clandestinidad sus elementos faístas radicales. Así lo explica el antes citado autor -Bar Cendón- cuando, situándose en los inicios de 1.934, nos dice cómo: "Dividida y carente de sus más claras cabezas dirigentes, no podía ser otra su actitud -que la defensiva-. El sindicalismo puro, los treintistas, única facción que podía haber conectado con la República, o con otros sectores del -proletariado más afines a la misma, hacía ya tiempo que caminaba só lo por otras vías. Los sectores anarquistas de la FAI más exaltados estaban ahora en prisión." (10)

Esta situación en el seno de la CNT al iniciarse el año - -- 1.934, viene a seguir demostrando el distanciamiento existente entre esta importante fuerza sindical y la propia República pues, si tenemos en cuenta este período regresivo-defensivo del anarcosindicalismo español veremos cómo, primeramente, es debido a unas consecuencias de enfrentamiento y represión anteriores causadas por la - no aceptación por parte del sindicato de las vías republicanas y, - en segundo lugar, contrasta vivamente con la dinámica que van a adquirir, en el seno de la República y por sus principales fuerzas políticas, los acontecimientos a lo largo del año 1.934.

En tal sentido, mientras la CNT ve en su propio seno la aparición de una etapa regresiva y de defensa en la actitud de sus luchas y de sus posiciones, las fuerzas de derecha e izquierda más - participativas en la dinámica republicana se radicalizan y preparan



un enfrentamiento revolucionario de considerables proporciones. Tal sucede con el socialismo y la CEDA, ante la pretensión de este último partido de entrar directamente en el gobierno republicano, luego de haber sido el partido materialmente triunfante en las elecciones de 1.933 y haberse mantenido al margen de la participación directa en el poder por las dudas que ofrecía respecto de su inequívoco republicanismo y aceptación de los presupuestos fundamentales de este régimen.

Será, como es sabido, en el mes de octubre de este año cuando se desencadene este movimiento revolucionario de contestación a la entrada de la CEDA en el gobierno que, con el protagonismo y apoyo esencial de los socialistas, se desarrolla en Asturias y Cataluña, con incidencia fundamental en la primera de las regiones citadas.

Es un hecho la no participación directa inicialmente en este movimiento revolucionario del anarcosindicalismo español, hasta el punto de que, en Asturias, se producen contactos entre UGT y la Regional Asturiana de la CNT, que "había dado muestras con frecuencia a lo largo de su historia de ser uno de los sectores más conscientes y formados del anarcosindicalismo español" (11) y, tales contactos, se entablan al margen de la disciplina cenetista estatal.

En el caso de Cataluña, incluso, y siguiendo con la dinámica coherentemente diferenciada de la CNT, este sindicato no participó en el movimiento revolucionario pues, aparte de considerarlo como - un movimiento separatista de carácter burgués, este grupo anarcosindicalista había sido perseguido duramente con frecuencia por el gobierno de la "Generalitat" en manos de la Esquerra, que ahora les - llamaba a colaborar en su movimiento.

El año 1.935, con los efectos de la represión de la revolución de octubre por el gobierno cedista y republicano de derechas -

en el poder, los acontecimientos se precipitan hacia esa polarización radicalizada que conduce al país al nefasto año de 1.936. Ante tales circunstancias, lógicamente la CNT ha de reaccionar modificando esa etapa defensiva y de desorganización por la que atraviesa y se ocupa de su propia reorganización y fortalecimiento interno antes de pasar nuevamente a ocupar un puesto relevante en la vida socio-política del país. Tal reorganización, para ser verdaderamente el origen de un futuro fortalecimiento, habría de pasar por el intento de reunificación y nueva entrada de los elementos escindidos y expulsados de su seno. Así mismo era vital y así resultó posteriormente, la postura a adoptar ante las nuevas elecciones que se convocarían en 1.936 y que fué muy diferente a la adoptada ante las de 1.933, produciéndose ahora un abstencionismo "más formal que real", que fué en realidad un apoyo a las candidaturas del Frente Popular.

Tal situación se resuelve en el Congreso de mayo de 1.936 celebrado en Zaragoza y que, presidido por las fuertes tensiones generales que lo circundan y que son los prolegómenos de la guerra civil, priman sobre las diferencias internas y hacen que estas sean mitigadas. Así pues, se llega a la "síntesis cenetista" del final de la etapa republicana, luego de una autocrítica por la línea seguida durante la etapa republicana; autocrítica que esencialmente incide en: "el jacobinismo, la inconsciencia, la inoportunidad, el exceso de honor y valentía, y el individualismo, son los graves defectos de la propia CNT". (12)

Vamos a terminar nuestro análisis del anarcosindicalismo en la etapa republicana con unas consideraciones que, primeramente, serán las del propio cenetista J. Peirats, en las que realiza una importante autocrítica de la acción del sindicato en aquel período: - "No se puede abusar impunemente de la huelga general, del motín, de la insurrección,, a menos que se sea una fuerza decisiva. Ignoro si existen fuerzas decisivas en lo que estamos tratando. Lo incuestio-

nable es que nosotros no lo fuimos nunca. Hemos sido una gran fuerza determinante, pero no decisiva. Y ahí está el detalle. Ser capaces de provocar fuertes acontecimientos e incapaces para rematar la jugada equivale a trabajar para el diablo. El diablo es la dictadura." (13)

Por tales circunstancias, también coincidimos con M. Tuñón - de Lara cuando realiza un análisis sobre el utopismo cenetista reflejado en la lectura de las actas de sus congresos, en las cuales "el análisis de la coyuntura es siempre sustituido por juicios de valor"; afirmando que fué la contrapartida del socialugetismo de conocida moderación, que atrajo una considerable parte de la clase trabajadora, pero que claramente "al proyectarse en la práctica del movimiento obrero, frustra el consenso mínimo laboral, hace inviable un bloque de poder capaz de llevar a cabo una empresa de transformación radical y mayoritaria." (14)

En definitiva y para pasar al análisis de otro grupo sindical mayoritario, es evidente que la CNT tuvo su apoyo a tal postura utópica y radical en bases sociales importantes, acuciadas por una situación insoportable en lo social e impacientes ante la lentitud de las reformas sociales republicanas pero que, a la larga, fué contraproducente su actitud ante un régimen republicano débilmente consolidado y que, en todo caso, siguió dominado por controles e intereses de la derecha tradicional que, como se demostró, ni siquiera estuvo dispuesta a admitir mínimos cambios graduales que afectaran a sus intereses.

La Unión General de Trabajadores, en contraste con el movimiento sindical de carácter libertario que acabamos de analizar, es una fuerza que está históricamente unida a la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español, con el que tiene una profunda relación organizativa y muchas veces táctica a lo largo de la etapa re-

publicana. Por lo tanto, el estudio que se haga de este sindicato - tendrá que ir inexorablemente relacionado con el ya citado Partido Socialista y ello será fácilmente comprobable cuando veamos aparecer los mismos nombres entremezclados o alternantes en sus respectivas ejecutivas y cuando las actividades políticas del partido, en el gobierno o en la oposición, sean seguidas con paralelismo por la fuerza sindical en determinados períodos de aquella época.

Ello no quiere decir que hubiese identificación total y constante entre personas e ideas en el partido y en el sindicato. Tan es así, que ni siquiera había unicidad de criterios dentro de cada una de las organizaciones y son suficientemente conocidas las discrepancias y corrientes existentes en el seno socialista español, - no siendo una excepción a tal regla, anterior y posterior a la etapa que nos ocupa, su situación a lo largo de la Segunda República Española.

Es evidente que, aún con las diferencias fundamentales que les separan, son los dos sindicatos hasta aquí citados, CNT y la presente UGT, los que aglutinan la representatividad de la gran mayoría de los intereses laborales de la población trabajadora en sus diversos sectores de la producción a lo largo de esta etapa.

Con la proclamación del nuevo régimen el 14 de abril, se abre una nueva etapa para el movimiento sindical ugetista, en que habrá de cumplir unas funciones vitales en la consolidación e intento de desarrollo del régimen republicano. Ocupaba el puesto de Secretario General de UGT en aquella fecha histórica, Francisco Largo Caballero, que tan destacado papel estaría llamado a cumplir a lo largo de todo este período, no solamente desde su puesto de Ministro de Trabajo en los primeros meses, dando a los inicios del régimen un intento de legislación social acorde, en todo caso, con la coherencia del republicanismo orientador de esta nueva etapa y con un programa mínimamente favorecedor de los intereses de la clase -

trabajadora a la que representaba y en la que, inexorablemente, se había tenido decisivamente que apoyar el nuevo régimen para su propio nacimiento.

Si hasta el final de la etapa de Primo de Rivera el movimiento socialista había sido básicamente un movimiento de tipo sindical, que se había acogido al seno de la UGT ante las dificultades derivadas de la situación de la Dictadura para las formaciones políticas partidistas, es decir, la central sindical había sido el núcleo organizativo de todo el movimiento, dadas las condiciones adversas en otros terrenos; a partir de la implantación del régimen republicano y con la total apertura de participación en los cauces políticos, - será el propio partido el que adquiera el protagonismo político y - pasará el sindicato a una situación de relativa autonomía, quedando clara en el aspecto organizativo en que ya no se ve obligado a servir de cobertura al partido, y en el táctico, a una posición de una cierta subordinación que para nosotros es clara, al menos en los primeros tiempos del período republicano, en el sentido de ser utilizado como fuerza de apoyo de la política del partido y resultando importante, por el creciente grado de afiliación de trabajadores, - para llevar a cabo las decisiones y posibilitar las reformas emprendidas desde el gobierno.

Nos parece importante comenzar en estos términos el análisis de la Unión General de Trabajadores en esta etapa concreta, ya que, si se analizan las cifras de afiliación del sindicato en comparación con la de aquellos que poseen carnet y están al corriente del pago de las cuotas del partido, se verá que estos no llegan a representar ni el 10% del número de aquellos, poniéndose así de manifiesto la fuerza de convocatoria y de control de las masas trabajadoras del sindicato frente al partido, lo cual es un incentivo aún mayor para la existencia de esa relación de dependencia sindicato-partido.

Para apoyar esta afirmación de que para el partido era un -

asunto fundamental la existencia de UGT al servicio de sus actuaciones políticas, vamos a utilizar las cifras ofrecidas por diversas fuentes, que suponen pocas variaciones en los datos, en lo relativo a la militancia afiliada a una y otra organización.

Según indica Tuñón de Lara (15), en los momentos de mayor auge, probablemente el partido no pasará de los 60.000 a 80.000 afiliados; de ahí que, según el mismo autor, no se pueda obtener el verdadero alcance de la proyección socialista sino a partir de UGT; lo cual es un importante aserto a la hora de entender la parte que corresponde a cada organización en la responsabilidad de la situación del movimiento socialista y de su evolución a lo largo de la Segunda República, añadiendo por nuestra parte que dependerá del sindicato la conexión con las masas y el que la línea política del partido, sobre todo en su etapa gubernamental, sea capaz de producir un verdadero eco social.

En contraste con la escasa afiliación política, aparecen los datos de la que posee la Unión. Son varias y contrastadas las fuentes que coinciden en ofrecernos tales cifras, cuyo origen inicial se halla en el "Anuario Estadístico de España" (1.930-1.931), así como en el "Anuario Español de Política Social" (1.934-1.935), según recoge Manuel Ramírez (16) y también nos ofrecen, contrastados y admitidos, otros autores, tales como T. de Lara y J. Luis Guinea (17).

Así, la Unión General de Trabajadores, tiene en las fechas que se indican las siguientes secciones y el siguiente número de afiliados:

| <u>Fecha</u>       | <u>Secciones</u> | <u>Afiliados</u> |
|--------------------|------------------|------------------|
| Diciembre de 1.930 | 1.881            | 287.333          |
| Diciembre de 1.931 | 4.041            | 958.451          |
| Junio de 1.932     | 5.107            | 1.041.559        |

Tales cifras probablemente se siguieran viendo aumentadas -

con el constante incremento de las federaciones de obreros del campo que se contempló a lo largo de esta etapa, así como por el proceso de unificación llevado a cabo mediante el ingreso en su seno de la CGTU, de inspiración comunista y que se produce en el otoño de 1.935, aunque tampoco hay que otorgar a este hecho un decisivo peso cuantitativo, ya que el peso sindical autónomo del comunismo no llegó a ser muy importante.

También podemos afirmar que el campo de implantación de la UGT en los diferentes sectores laborales era bien variado, con lo que tenemos argumentos para apoyar el desmentido de que, frente a la CNT que llenaría su afiliación de sectores más deprimidos y desfavorecidos del arco laboral, la UGT aglutinaría a los que podríamos dar en llamar obreros de "élite". Así, según los datos que poseemos y reconociendo que las masas más deseosas de agruparse en torno a proyectos sociales avanzados y revolucionarios se aproximaron en gran medida a CNT, al no existir en España un partido político de fuerte peso específico que recogiera tales impulsos revolucionarios, según opinión de C.M. Rama (18); podemos afirmar que la UGT tenía fuerte implantación en diferentes sectores laborales españoles, tales como: el 25% de todos los trabajadores agrícolas del país, que muy probablemente alcanzasen esa cifra sus afiliados en la sección de trabajadores de la tierra (FNTT). Asimismo, quizá más de 1/3 de todos los mineros estaban afiliados a la correspondiente sección del sindicato socialista que, en tal terreno, era claramente hegemónico. Hegemonía que era también tradicional en sectores como la metalurgia y la construcción, de los cuales no puede sostenerse precisamente que fueran privilegiados en cuanto a su tipo de actividad y trabajo en la escala social.

Igualmente y según las fuentes bibliográficas y estadísticas a nuestra disposición, que han sido ratificadas por los citados autores Tuñón, Guinea, Ramírez y otros en sus principales obras, la -

organización sindical ugetista estaba integrada por trabajadores -- pertenecientes al sector terciario (sector servicios) en aproximadamente un 21%. Así pues, M. Tuñón de Lara puede textualmente afirmar que, "La UGT llegaba a ser una central sindical de toda suerte de asalariados y trabajadores." (19) Afirmación que nosotros, básicamente, aceptamos y compartimos.

Partiendo de esta base, queda posibilitada la delimitación de las causas que motivan la actuación ugetista a lo largo de la Segunda República, en el sentido de poderse eliminar todas aquellas explicaciones que tratan de fundamentar su inicial moderación en razón a la estructura de sus bases y no de las tácticas y el dominio de determinados grupos en su ejecutiva, orientados en uno u otro sentido dentro de la Unión. Así pues, queda claro que, cuando menos, la Unión General de Trabajadores es un sindicato plenamente representativo de todos los sectores y estratos de la clase obrera, tanto como pudo serlo la central anarcosindicalista, su rival más importante en aquella etapa. Igualmente, entendemos, que las diferencias ideológicas y tácticas existentes entre ambas, responden a causas y circunstancias de naturaleza diferente.

Es evidente que la situación y funciones llevadas a cabo por el sindicato social-ugetista al inicio del período republicano habían sufrido ya un importante proceso de transformación desde la etapa primorriverista pues, si en aquel momento histórico destaca en su seno el ánimo consensualista y un predominio de las actividades netamente sindicales o "tradeunionistas" frente a las políticas y reivindicativas, en la etapa republicana el grupo sindical va a actuar como verdadera correa de transmisión del partido socialista, participante en el poder.

Si a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera la misión fundamental del socialismo en su conjunto había radicado en evitar



todo enfrentamiento con un régimen de autoridad, netamente superior y ante el cual había que abdicar de toda controversia que quedase fuera de la estrecha legalidad, pretendiendo sobre todo el mantenimiento de la organización y cohesión del socialismo a la espera de lograr una situación política más favorable para conseguir la puesta en marcha del proyecto de sociedad que ellos propugnaban, el inicio del régimen republicano supuso sólo la posibilidad de alcanzar la legalidad y desde ella, seguir una táctica que tampoco estaba encaminada hacia el logro directo de objetivos puramente socialistas para España.

Así, la táctica seguida y que generalmente se estudia cuando se trata de analizar la línea política del partido, sin considerar la labor fundamental del sindicato, se centró ante todo en buscar la consolidación y afirmación de un Estado liberal parlamentario, mínimamente democrático y reformista en lo social, puesto que en aquel momento no se consideraba oportuno abordar la batalla por la consecución de la sociedad socialista sin resolver lo anterior, que tantas veces había sido objeto de vanos intentos y controvertidas polémicas acerca de su prioridad.

Así, celebradas las elecciones que darán lugar a la iniciación del segundo régimen republicano en toda la historia española e instituido su primer gobierno, se producirá en él una participación directa del partido socialista al conseguir para sus miembros tres carteras ministeriales. Pero igualmente se producirá una participación indirecta del grupo sindical porque, como ya hemos comentado en este mismo capítulo, la fuerza de masas y el grado de afiliación del sindicato era diez veces superior a la del partido en sus momentos de mayor auge y era decisivo su apoyo a la hora de refrendar masivamente y en los puntos fundamentales de la producción agraria, industrial y en los servicios, la política socialista. No se olvide que, en aquel abril del año 1.931, había una identificación total -

entre las líneas propugnadas por las directivas y ejecutivas de las dos organizaciones.

Consecuentemente, las masas sindicales adictas a UGT van a ser utilizadas en una tarea política que consistirá en consolidar a cualquier precio el recién instaurado régimen liberal-republicano - que, lógicamente, partirá de unos supuestos distantes del modelo de sociedad socialista recogido en el programa e ideario del socialismo español. Solamente se pretendía compensar las deficiencias de ajuste entre un modelo y otro, consiguiendo para las masas una serie de reformas sociales que aliviaran en parte la tradicional precariedad de la forma de vida de las clases trabajadoras en la España del siglo XX; tiempo habría, en todo caso, de variar las tácticas cuando fuese visto que la vía no era aplicable o sus resultados insatisfactorios.

Sí podemos sostener, vista tal situación, que lo que empezaba a perfilarse claramente era la bipolarización y crecimiento de rivalidades entre los máximos grupos aglutinantes de la clase obrera a nivel sindical, que se derivaría de tales posturas ante la situación inicial del régimen republicano; pues, mientras las masas socialistas encuadradas en la Unión General de Trabajadores eran llamadas a la moderación, a la colaboración con la política reformista gubernamental (Gobierno Republicano-Socialista pero programa republicano burgués apoyado por el socialismo sin lo cual, con plena seguridad, hubiera sido inviable), las masas anarcosindicalistas eran progresivamente llevadas lejos de aquel proyecto del que, sin cesar, seguían desconfiando ante la evidencia de que no vendría a resolver los graves problemas que les aquejaban, ni tan radical, ni tan rápidamente como ellos demandaban; aparte de que la metodología empleada por el Ministro de Trabajo republicano, Largo Caballero, - para la resolución de la problemática laboral correspondía tanto a la lógica del Estado burgués, en la que se enmarcaba, como se opo-

nía a la ideología y métodos propuestos por el anarquismo.

Así pues, no es extraño contemplar a lo largo de los primeros años de la experiencia republicana, enfrentamientos entre las propias bases de ambos sindicatos mayoritarios, porque si los anarquistas pedían más y más deprisa del ritmo de reformas republicanas y no llegaron en ningún momento a aceptar ser colaboradores de un proyecto de consolidación de Estado burgués, las bases ugetistas estaban constantemente siendo utilizadas como sostén y freno frente al sindicato "rival" y como apoyo incondicional a las decisiones políticas del partido, así como a las acciones de sus miembros que tenían participación activa en el gobierno y en la estabilización del Estado republicano liberal-burgués.

Luego se demostrará, con la propia dinámica de los acontecimientos políticos y del cuerpo social, que tal postura de contención y dirigismo al servicio de lo que hoy se suele definir como una política "socialdemócrata" del partido, desgastó sensiblemente al sindicato ugetista e hizo que se produjese un giro copernicano en su situación; no obstante y en estos primeros años de la República, es indudable que la UGT se benefició de su estrecha relación con un partido partícipe del poder.

Pasados los primeros 18 meses de la experiencia republicana, en octubre de 1.932, se convocan con aproximadamente una semana de diferencia los Congresos XIII y XVII del Partido Socialista y de la Unión General, respectivamente, en los que se va a producir una insólita situación hasta la fecha: el triunfo de diferentes líneas políticas o tendencias en las directivas de ambas organizaciones pues, mientras el Partido Socialista Obrero Español queda con su ejecutiva en manos de la línea que podríamos llamar revolucionaria o progresista con mayor precisión a aquella altura; la Unión General de Trabajadores permanecerá con el grupo de Julián Besteiro ("derechis

tas" o moderados) a la cabeza, ello fundamentalmente "gracias sobre todo a los votos de las potentes federaciones de Trabajadores de la Tierra y Ferroviarios, presididas, respectivamente por los "dere- - chistas" Lucio Martínez y Trifón Gómez". (20)

No obstante, la dinámica general de la situación española va a presionar hacia la izquierda en los meses sucesivos y, dentro de la propia organización sindical socialista, se produce un empuje de las bases que va a proporcionar un ascenso de la línea más izquierdista en el sindicato, que tiene todavía en su seno el predominio - de los moderados. No es de extrañar que el año 1.933 sea decisivo - en ese sentido, pues la colaboración gubernamental está desgastando la fé de las bases socialistas en las líneas marcadas por sus dirigentes, que se manifiestan en una insuficiente reforma agraria, en unas leyes represivas quizá más selectivas y duras con la propia izquierda que con la derecha que no tarda en plantear su absoluta negativa a las vías reformistas, por moderadas que sean estas.

Así pues, si todos los factores de presión hasta aquí citados son decisivos y pertenecen a circunstancias interiores de nuestro propio país (agravación de la crisis económica, tensión agraria, etc.), no menos decisivos van a ser aquellos factores externos determinados por una coyuntura internacional en que Hitler sube al poder y preocupa seriamente a las bases socialistas españolas.

La potente e influyente Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (por algún autor consultado, v.gr. M. Ramírez, considerada como un grupo sindical aparte, consideración que nosotros no - hemos estimado por su encuadramiento a todos los efectos en el seno de UGT) incrementa sus efectivos a medida que se abandona la vía colaboracionista y entiende que habrá de hacerse eco de las tensiones sentidas por su propia base y colocarse a la cabeza de cada huelga que se produce en los centros de trabajo, de nivel local y provincial. Esto es un síntoma más de que no es posible frenar los impul-

sos justamente sentidos por unas bases que se han sometido durante varios meses a la disciplina de sus dirigentes, a pesar de su difícil situación laboral y personal tendente a agravarse y de los enfrentamientos y tensiones que surgen a diario con los afiliados del sindicato anarquista. Será Francisco Largo Caballero el dirigente - social-uguetista con mayor capacidad para variar las tácticas directivas, a medida que observa una variación en el pulso de sus bases motivado, entre otras cosas, por su vigilancia constante del anarco sindicalismo, eternamente rival y al que no deja de controlar por - si llegara a suponer un atractivo para las bases ugetistas desengañadas.

Por todo ello, el ala largocaballerista va a cimentar una escalada de recuperación de la hegemonía en la directiva del sindicato por el rumbo que marcaban las tendencias de las bases, consiguiendo simultáneamente que vayan cediendo, regresando a su normal situación de partida, las diferencias existentes entre las direcciones del partido y del sindicato a todo lo largo del año 1.933.

Al inicio de 1.934, Largo Caballero ya posee a su favor las federaciones más potentes de la Unión General: Trabajadores de la - Tierra, Banca, Transportes, Metalúrgia y Enseñanza. A tales apoyos no son ajenos ni la comentada capacidad de este dirigente para ponerse a la cabeza del sentir de sus bases, ni el resultado de las - recientes elecciones de noviembre de 1.933, que abriendo el período de gobierno derechista dentro de la República (bienio "restaurador" o "radical-cedista" e, incluso, "bienio negro", citado por algunos autores aunque nosotros consideramos mayor exactitud definitoria en cualquiera de las dos primeras definiciones), comienzan una etapa - de legislación restitutiva de los privilegios que se habían tratado de abolir o mitigar, al menos tímidamente, por la legislación reforma mista del bienio republicano-socialista con que se inaugura la Segunda República.

Por tanto, la situación comienza a hacerse insostenible para las masas trabajadoras, que tienden hacia la radicalización, comprensible desde la óptica de quienes esperan pacientemente la solución por el nuevo régimen de los graves problemas estructurales, de tipo social y económico, que les vienen aquejando desde antiguo.

En 1.934 y ya con el control ugetista en manos de Largo Caba<sup>l</sup>lero y sus allegados (ha sido elegido Secretario General de la UGT el 27 de enero), el sindicato socialista ya sin contradicciones con su partido hermano que, ni tiene participación en el gobierno, ni - impedimentos derivados de diferentes líneas en sus ejecutivas, sigue siendo la primera fuerza obrera del país aunque, bien es verdad, a no mucha separación del anarcosindicalismo. Este año de 1.934 y con la política gubernamental en las manos reales del binomio CEDA-Partido Radical (aunque el primero de estos grupos políticos, como ya es sabido, no participase directamente en un principio en el gobierno por los recelos que suscitaba ante las fuerzas republicanas de - izquierda su poco entusiasmo por la forma republicana de Estado), - se producen una serie de intentos unitarios por parte de las fuerzas obreras, en las que participa decididamente la UGT. Se trataba de la constitución de unas "Alianzas Obreras" cuyos intentos más - significativos son los de Asturias, que se constituyen "para trabajar de común acuerdo hasta conseguir el triunfo de la revolución social en España" (21) en la que participará la correspondiente Federación Provincial de la CNT; así como la de Cataluña, constituida - en Barcelona en el mes de diciembre de 1.933 y que contó con menores posibilidades al no haberse adherido aquí la potente Federación Catalana de la CNT; en este caso, "La Alianza, según su documento - constitutivo tenía carácter defensivo frente a la progresión reaccionaria y fascista". (22)

Esta tendencia unitaria se verá complementada con la adhesión, ya avanzado el año 1.935, de los comunistas que, si bien son

numéricamente escasos, aportan la integración de su sindicato, Confederación General del Trabajo Unitario, a UGT, lo cual es significativo de la tendencia emprendida en el sentido de la unidad, favorecida por la férrea disciplina de este pequeño y nuevo grupo, que hará que se incremente su peso e importancia en la esfera nacional a medida que se avecinan circunstancias más difíciles y problemáticas.

Las dos declaraciones recogidas acerca del espíritu que preside la constitución de las citadas Alianzas Obreras, sirven para ponernos de manifiesto la orientación del espíritu de la clase obrera española en general y de la UGT en particular, que es el sindicato cuyo estudio ahora nos viene ocupando, en aquel año de 1.934 tan decisivo para los inmediatos hechos históricos españoles y para la resolución final del segundo ensayo republicano de la historia española.

Evidentemente, tenemos presentes dos cuestiones vitales: de un lado, el carácter unitario para la consecución de una vía revolucionaria hasta entonces no explicitada por el movimiento socialista en esta etapa, ante la imposibilidad demostrada por las vías pacíficas antes intentadas para el logro de las reivindicaciones de las masas trabajadoras. Por otro, el carácter defensivo ante una potente reacción, que cada vez adquiere mayor consolidación, del fascismo, que progresa en Europa y que, en España, demuestra disposición de terminar con los logros conseguidos por el régimen republicano y de volver a la etapa anterior a su vigencia.

Este año de 1.934 suficientemente conocido por el movimiento revolucionario que se desarrolla en el mes de octubre y que tiene - su máximo exponente de crudeza y violencia en Asturias es, curiosamente un año en que, según recoge T. de Lara con datos procedentes del Ministerio de Trabajo, se produce menor número de huelgas que -

en el precedente. Así:

| <u>AÑO</u> | <u>Nº DE HUELGAS</u> | <u>Nº DE HUELGUISTAS</u> | <u>JORNADAS PERDIDAS</u> |
|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.933      | 1.046                | 843.303                  | 14.440.629               |
| 1.934      | 544                  | 741.878                  | 11.115.358               |

A todo ello hay que añadir que en 1.934 los resultados de las huelgas son sensiblemente menos favorables a los trabajadores que en años anteriores y, continuando con las cifras que nos ofrece este mismo autor en la misma fuente (23), ofrecemos el siguiente cuadro:

RESULTADO DE LAS HUELGAS DECLARADAS DE 1.932 A 1.934

| <u>AÑO</u> | <u>GANADAS</u> | <u>TRANSACCION</u> | <u>PERDIDAS</u> | <u>SIN RESULTADO PRECISO</u> |
|------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.932      | 22%            | 37%                | 26%             | 15%                          |
| 1.933      | 40%            | 31%                | 22%             | 7%                           |
| 1.934      | 29%            | 33%                | 33%             | 5%                           |

Tales cifras pueden servirnos para comprender cómo es explicable que ese movimiento revolucionario de Asturias, donde fragua la Alianza Obrera con participación ugetista y cenetista, respondiera en buena medida a lo que se refleja en los pactos constitutivos de tales Alianzas: un movimiento de carácter revolucionario y unitario de la clase obrera, pero también defensivo ante una situación de acoso social insostenible por sus condiciones de vida y por la escalada reconstitutiva y reaccionaria del gobierno radical-cedista. Ante ello, resultó evidente que hubiera sido de todo punto imposible mantener la postura reformista y transigente adoptada por los dirigentes ugetistas en los primeros meses de la República y, en todo caso, esta radicalización no pasó de tener caracteres verbales y teóricos aparte de los episodios de 1.934, hasta el año 1.936.

No vamos a entrar en detalles relativos al fuerte grado de represión subsiguiente a los hechos revolucionarios en Asturias en octubre de 1.934, pues desbordaría los límites del presente capítulo



y seguramente de todo nuestro trabajo; no obstante, aquella represión vino a ratificar fehacientemente la distancia insalvable que separaba a los defensores de las concepciones sociopolíticas en li-za en nuestro país, así como la "irreversible tendencia a la uni-dad", que se va acentuando a lo largo de 1.935, de todas las fuer-zas de la izquierda. Tal situación conducirá al país a una bipolari-zación inevitable que determinará una situación prebélica ante la -siguiente convocatoria electoral, que tendrá lugar en febrero de -1.936, momento en el que concluirá el segundo bienio de la etapa re-publicana y en el que se abrirá el período que dará paso a los pro-legómenos del enfrentamiento bélico final que liquidó la República; ello cuando las fuerzas de la izquierda, ante unas bases sociales -cuyas condiciones de vida son difíciles de soportar, deciden emprender una reforma más rápida, concluyente y en profundidad que la in-tentada en 1.931, tal y como desde entonces la demandaban aquellas bases y las fuerzas de la derecha, considerando cualquier intento -de reforma como una explosiva revolución, no aceptan ni una cesión más de sus privilegios seculares y consideran oportuna su defensa -por las armas, que tienen propicias y dispuestas en buena cantidad; todo ello a pesar de que aquellas reformas estuvieran respaldadas, no solamente por la legalidad de unos resultados electorales favora-bles a los partidos del Frente Popular, actores de la reforma, si-no por la fuerza moral de aquella situación social, que puede tener una simple muestra en Preston, cuando afirma que: "La combinación -de la crisis económica y de la política revanchista de los terrate-nientes contra los trabajadores sindicados hizo llegar, a finales -de febrero de 1.936, el desempleo a 843.872, el 17% de la población activa". (24)

Consideramos oportuno, siguiendo con las importantes aporta-ciones al tema del citado autor, traer a colación un interesante pá-rrafo que, en nuestra opinión, va a poner de manifiesto claramente

cual será el error fundamental del socialismo español a la hora de montar su entramado táctico en aquella hora histórica y, por ende, el error de la Unión General de Trabajadores que encuadraba a las masas socialistas, a la hora de afrontar su apoyo al modelo político liberal-burgués para su consolidación, como paso previo al establecimiento de una sociedad basada en los postulados socialistas.

El error básico del social-ugetismo durante los años treinta, error que se ratifica con evidencia al participar el partido socialista en el gobierno para la defensa de un modelo de sociedad - que no era el suyo y con unas bases que no eran susceptibles de tolerar tal colaboración, radica según P. Preston, en la creencia de que sería posible el logro de tal sociedad burguesa moderna al faltarle, precisamente, a la España de aquellos años una poderosa clase burguesa modernizante y con ánimo de progreso.

Ello tuvo su manifestación en dos puntos concretos: de un lado, esos sectores burgueses que estaban participando en el gobierno republicano con la denominación de "partidos de izquierda republicana", no pasaban de pertenecer "simplemente a la intelectualidad pequeñoburguesa urbana"; mientras que la oligarquía poderosa no había quedado anquilosada, sino que había integrado en su seno y según - sus formas a sectores de la burguesía cuyo impulso había sido débil y, en lugar de imponerse como clase dominante, había claudicado en formas oligárquicas. Así, "La clase que los socialistas esperaban - que fuese progresista se encontraba ya ligada a la vieja oligarquía. Los latifundios se habían convertido en parte del sistema capitalista y no eran vestigios feudales, como creían los socialistas". (25)

En conclusión de este mismo autor, esencialmente válida para comprender cómo se produce por parte de las fuerzas derechistas esa absoluta reacción conservadora ante todo intento, por leve que este sea, de reformismo de la situación tradicional y arcaica, como el - que conlleva el proyecto republicano-socialista, sostendrá que "en

gran medida el desarrollo del movimiento socialista durante los -- años treinta estuvo influido por la importancia de un análisis histórico esencialmente incorrecto de lo que estaba sucediendo en España. Los cálculos de los tres sectores del PSOE, se basaban en la -- certeza de que iba a ocurrir una revolución progresista dirigida -- por la burguesía." (26)

Así pues, frente a tal resistencia absoluta ante cualquier -- movimiento reformista aun leve, las clases sociales más acuciadas -- no estaban para esperar las lentas marchas de las necesarias reformas. No obstante, el PSOE se iba a comprometer "públicamente en la defensa y protección de la República". (27)

En tal sentido, nos conviene destacar aquí que la UGT fué un grupo fundamental para tal empeño por su gran identificación con -- esa línea partidista del más importante partido de la época y que, si al final de la etapa republicana se puso a la cabeza de los movimientos revolucionarios haciéndose eco del sentir de sus bases (revolucionarismo más teórico que real), comenzó entusiásticamente y -- con verdadera fé democrática la defensa del proyecto republicano, -- abordando esta tarea explícitamente con su apoyo a las leyes laborales socialistas salidas del Ministerio de Trabajo, tales como las -- de Jurados Mixtos, Términos Municipales, presión favorable a la Reforma Agraria, así como a otras medidas liberalizadoras y reformadoras del Estado en lo relativo a su estructura territorial, política religiosa, cultural, etc., etc... Demostrando con tal postura que -- no solamente variaba su táctica en función de la línea defendida -- por sus dirigentes en cada cambio de sus ejecutivas, sino igualmente en función de los intereses y orientaciones de sus bases lo cual fué, aún sin ocultar sus errores en otros puntos, una considerable virtud.

Debido a que se ha citado en el transcurso del análisis del sindicato socialista, en cuyo ámbito se acaba integrando al final - de la etapa republicana, consideramos ahora, antes de pasar a las - organizaciones sindicales de diferente matiz ideológico, este sindicato (CGTU) de neta inspiración comunista.

Aunque hayamos hecho en este mismo trabajo una referencia al comunismo como partido político, es sabido que al implantarse en España la Segunda República era casi insignificante el peso del PCE, pero se va afianzando progresivamente y ocupando una cierta posi- - ción entre la clase obrera, principalmente en Andalucía, Asturias y Madrid, que se ve fomentada por la aparición, a finales del mismo - año de 1.931, de su órgano de prensa "Mundo Obrero".

El problema que tenía planteado este partido para poder continuar ejerciendo su influencia e incidir sobre la clase obrera era que, a diferencia del socialismo, no contaba con un movimiento sindical que apoyase su línea y le diera aquella considerable fuerza - que tal organización paralela suponía. La primera intentona de los comunistas españoles a nivel sindical consistió en tratar de situar se con posibilidades de decisión en el seno del sindicato anarquista CNT; pero tal intento no pudo ser consumado por los que, propugnando su teoría autoritaria, quedaban tan lejos de la filosofía mayoritaria que inspiraba a la CNT: el anarcosindicalismo, la tesis - libertaria.

Fué precisamente de tal expulsión de la que se constituye el núcleo de trabajadores comunistas del que saldría, ya en el año - - 1.934, este sindicato con la denominación ya citada y que pasa a - ser correa de transmisión del Partido Comunista de España, en situa ción semejante a la mantenida por el PSOE y UGT, con las distancias que separan una de otra organización y con la diferencia numérica - abrumadoramente superior en la fuerza sindical de los socialistas.

La implantación sindical comunista tiene mayor entidad en aquellos puntos de la geografía nacional en que ya la tenía el partido y, numéricamente, los afiliados a esta central sindical serían unos 100.000, según datos tomados del "Anuario Español de Política Social" de los años 1.934-1.935 y que recogemos, tanto de J. Luis - Guinea (28), como de M. Ramírez (29). De tales cifras de afiliación discrepa M. T. de Lara, considerando temporalmente los datos del momento de su constitución, abril de 1.934, especificando que en tales fechas (25 al 29 de abril de 1.934) se reúnen para su puesta en marcha oficial 135 delegados, que representan a 180.000 afiliados y aclara que la cifra ofrecida por el citado "Anuario de Política Social", se limitaba solo a su implantación en Andalucía y Asturias, sin tener en cuenta los núcleos de Bilbao y Vigo-Pontevedra. (30)

Según recoge M. Ramírez en el trabajo que citamos, este sindicato tenía como principios inspiradores básicos los de la dictadura del proletariado y la lucha constante contra la burguesía; sencillamente se trataba de la táctica política del PCE trasplantada al ámbito sindical.

Resulta suficientemente conocido que este sindicato no estuvo considerado en ningún caso entre los mayoritarios de la etapa objeto de nuestro estudio y, por ende, su influencia no llegó a ser decisiva, aunque haya de ser necesariamente considerado entre los grupos que, en alguna medida, representan los intereses y la opinión de la clase trabajadora. No obstante, como es sabido, su final fué el de integrarse en el seno de UGT cuando, en noviembre de -- 1.935, empieza a dejarse claramente sentir la tendencia unitaria de las fuerzas de izquierda obrera y republicana, de cara a la futura constitución del denominado Frente Popular.

El Sindicalismo Católico.

Una vez analizados estos grupos sindicales que pueden ser de

finidos como "de clase" y entre los que hemos considerado particularmente a aquellos dos que aglutinan la representación de la gran mayoría de la clase trabajadora a lo largo de la IIª República, vamos a considerar aquellos otros que, teniendo también una relativa importancia en esta etapa histórica, cuentan con unos soportes ideológicos radicalmente distantes del sindicalismo marxista o anarquista. En este punto, sobre todo por su entidad numérica de cierta consideración, habremos de tratar del sindicalismo católico en el ámbito de toda la geografía nacional y, en especial, sin abandonar estos límites ideológicos pero considerando su limitación espacial, - el sindicato denominado Solidaridad de Obreros Vascos, que tiene - gran importancia en las provincias vascas y es una buena muestra - del proyecto sindicalista católico llevado a una práctica que resultó acompañada por el éxito en esta etapa.

El sindicalismo católico en su conjunto que, como ya considerábamos en otro capítulo de este trabajo, puede hallar su precedente filosófico remoto en la figura del pensador Jaime Balmes, se solidifica y entra en vías de organización con el desarrollo de la - Doctrina Social de la Iglesia emanada de la jerarquía eclesiástica desde la publicación de la encíclica "Rerum Novarum" del Pontífice León XIII, que supondrá el definitivo espaldarazo ideológico a este tipo de organización social.

A lo largo de la etapa cuyo estudio nos viene ocupando, puede decirse que este movimiento sindical tuvo una implantación bastante poco significativa, ante la fuerza de ugetistas y cenetistas, si exceptuamos el caso exclusivo del SOV que, en el territorio de - las provincias vascongadas, pudo mantener rivalidad en su implantación con la propia UGT.

Frente a la mayor protección oficial que pudo haber tenido - en otros momentos, fueron considerables las dificultades con que se encontró este sindicato por parte del mismo Gobierno y, sólo tardía

mente, emprende la línea paralela del catolicismo político de Acción Popular y la CEDA, organización que le servirá de apoyo decisivo.

Podemos calificar a estos sindicatos, por hacerlo inicialmente con austeridad y exactitud de términos, con los de confesionales y profesionales, lo que no implica la ausencia en ellos de politicismo, estando claro ante todo que en ellos está ausente totalmente cualquier consideración de clase agrupando, por lo tanto, preferentemente, a los trabajadores antimarxistas, calificación que les sirve con bastante precisión a sus miembros.

Venimos tratando en plural a estos sindicatos, en el sentido de que no fueron exactamente un movimiento sindical único, sino que, bajo su genérica denominación y común confesionalidad, se produce la existencia de sindicatos diferentes en las distintas ramas de la producción, así como un asentamiento territorial desigual.

Con una breve referencia al grupo Acción Obrerista, que por inspiración de Angel Herrera Oria ya se había constituido en 1.931 y que, contando con el apoyo del diario "El Debate", se constituye en filial de Acción Popular y luego de CEDA; conviene analizar alguno de estos grupos de importancia posterior. En tal sentido, hemos de reparar nuestra atención en:

La Confederación Nacional de Sindicatos Católicos Obreros, - que había iniciado su andadura en 1.919 como consecuencia de la agrupación de diversas organizaciones anteriormente constituidas, todas ellas de signo católico y que, en diciembre de 1.932 celebra su V - Congreso, reuniendo en tal ocasión a los representantes de unos - - 60.000 afiliados, cifra que aproximadamente se confirma para el año 1.934, en el "Anuario de Política Social" 1.934-35, que recoge la - misma cifra de miembros, agrupados en 250 sindicatos.

El tema de su confesionalidad, que naturalmente queda ratifi

cada en este Congreso, es discutido por alguno de sus asistentes - que entienden que, al recogerse expresamente tal declaración, se podría perjudicar sus niveles de afiliación. No obstante, los postulados fundamentales de este sindicato son los recogidos por la ideología social-cristiana en la que estaban apoyados: concepción del trabajo como derecho y deber, reconocimiento de la propiedad privada, libertad de sindicación y rechazo de la lucha de clases.

Esta Confederación Española, estaba adherida a la Confedera-  
ción Internacional de Sindicatos Cristianos, aunque no pueda por -  
ello sostenerse que llegara en ningún momento a los niveles de im-  
plantación y afiliación de sus homónimos europeos de este mismo cor  
te ideológico.

En octubre de 1.934 se constituye un comité de enlace de sin  
dicatos no marxistas, que viene a suponer un intento de refuerzo -  
unitario ante los acontecimientos revolucionarios de aquella etapa.  
Tal comité anunció la formación de un Frente Nacional del Trabajo,  
que se convertirá en "un organismo unitario que aglutina a todos -  
los sindicatos antimarxistas, organismo que recibirá el nombre de -  
Confederación Española de Sindicatos Obreros (CESO), que dice cons-  
tituirse con más de 275.000 afiliados en diciembre de 1.935". (31)  
No obstante, tal cifra parece exagerada para más de un autor, como  
para T. de Lara; si bien, para otros, puede tener explicación en ba  
se a que la política derechista realizada por aquellas fechas desde  
el gobierno favorecía este tipo de organizaciones sindicales, desin  
centivando las que, por su matiz de clase, habían sido las más pro-  
tegidas en el primer bienio desde instancias oficiales, especialmen-  
te UGT.

Una de las connotaciones con que solía definirse esta Confe-  
deración es la de su "apoliticismo", que es la autodefinición pro-  
pia de quienes se sitúan a la derecha de un espectro político, por



contraposición a la actividad política de la izquierda. Tal autodefinición también se producía en este caso, aunque "sin renunciar a militar en el bloque de derechas". (32)

Otra organización sindical católica, cuya especificidad radica en su implantación y radio de acción ceñidos al terreno agrario, es la Confederación Católica Agraria, que a la altura de 1.934 llegaba a contar con unos 196.255 afiliados, asentados fundamentalmente en Levante, Navarra y Castilla la Vieja, feudos tradicionales de este tipo de fuerzas políticas y sindicales.

Como señala M. Ramírez, este movimiento sindical católico no tuvo prensa propia contando, no obstante, con el apoyo de diarios - como "El Debate", "Abc", "La Nación" e "Informaciones", cuyo trato informativo era ciertamente favorable. Del mismo autor hemos recogido unos párrafos que pueden servirnos de síntesis acerca de este movimiento sindical. En ellos sostiene que, "con todo, los sindicatos católicos desempeñaron una gran labor de presión en defensa de los intereses laborales, la visión católica de los problemas sociales y las elecciones que dieron en 1.933 la victoria a las fuerzas de la derecha". (33) Este apoyo electoral se produjo a través de Derecha Regional Valenciana, que luego se integraría en la CEDA y con la - que este sindicalismo tendría gran relación.

Yendo más allá en el apoyo político prestado por este sindicalismo a las fuerzas de derecha, se nos ofrecen por Juan José Castillo una serie de documentos en base a los cuales considera oportuno afirmar que, "los sindicatos católicos no solo apoyaron y secundaron el alzamiento militar de julio de 1.936, sino que colaboraron activamente en su preparación." (34)

En todo caso, no son demasiado de extrañar tales afirmaciones, en cuanto que tales organizaciones se alineaban del lado de - aquellas fuerzas de la derecha que se situaron del lado de quienes

emprendieron por las armas el asalto al régimen republicano pudiéndose destacar, finalmente, que los Sindicatos Católicos Españoles - no llegaron a tener una implantación de masas decisiva.

La excepción más importante a las afirmaciones anteriores - dentro del sindicalismo católico español, lo constituye en esta etapa, por su fuerza e influencia, así como por una serie de connotaciones bien diferenciadoras que le asisten, el sindicato católico del País Vasco, Solidaridad de Obreros Vascos (SOV-ELA), cuyo mayor éxito se debe a la conjunción en su seno del confesionalismo católico con el nacionalismo vasco, ideologías ambas fuertemente arraigadas en la historia de aquel territorio y que marcan una frontera diferenciadora acusada entre este sindicato y sus homólogos del resto del país.

El apoyo confesional y social de este grupo le viene dado - tanto por la doctrina dimanante de la encíclica "Rerum Novarum", como por toda la línea posterior de su desarrollo, aunque resulta evidente que su confesionalidad estuvo más mitigada que la que se plasmaba en los sindicatos de la Confederación Nacional y se basaba, en mayor medida, en un sentimiento naturalmente arraigado en el pueblo vasco, que en un arma de combate contra la ideología sindical marxista, como en la práctica sucedía en el resto del territorio nacional, a pesar de su gran rivalidad mantenida con el sindicato socialista, UGT, dada su importante implantación en las provincias Vascas.

Se observa un incremento importante de la implantación de - tal sindicato desde el inicio mismo del período republicano, que le viene dado por el hecho mismo de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera. Tal expansión permite que, en febrero de 1.933, se amplíe su campo de actividad con la aparición de su federación agraria, cuyos objetivos básicos se centran en el intento de la creación de una clase de campesinos propietarios de sus tierras trabaja

das, mediante la obtención de créditos y subvenciones.

El SOV celebra su IIº Congreso en Vitoria en el año 1.933, - manifestando en él su mayor potencialidad y a partir del cual, queda dividido en cinco federaciones: Vizcaya, Guipúzcoa, Agrícola, - Pescadores y Transportes Marítimos.

Los principios tácticos esenciales en los que se apoya este sindicato son el cooperativismo y el mutualismo, no siendo, por el contrario para ellos la huelga, un método de reivindicación y acción del que gusten recurrir, prueba de lo cual es su permanencia - al margen de los movimientos de octubre de 1.934.

En cuanto a los datos numéricos de afiliados a este sindicato, podemos contar con las cifras que nos ofrece J.L. Guinea y que están recogidas del propio servicio de documentación de este sindicato. Cifras que están referidas a finales de 1.935 y que son las - siguientes:

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| <u>GUIPUZCOA</u> : Total: 28.100:  |        |  |  |
| Obreros .....  | 16.000 |  |  |
| Empleados .....  | 2.000  |  |  |
| Agricultores .....   | 8.100  |  |  |
| Pescadores .....   | 2.000  |  |  |
| <br><u>VIZCAYA</u> : Total: 27.600: Obreros, empleados y pescadores.. 25.000 |        |  |  |
| Agricultores .....   | 2.600  |  |  |
| <br><u>ALAVA</u> : Total: 3.100: Obreros .....                               |        |  |  |
| Empleados .....  | 350    |  |  |
| Oficios Varios .....   | 550    |  |  |
| <br><u>NAVARRA</u> : Total: 6.000: Obreros .....                             |        |  |  |
| Agricultores .....   | 1.800  |  |  |

Tales cifras, ofrecidas en su desglose provincial, suponen - un total de 64.800 afiliados que ponen de manifiesto no sólo la estructuración sectorial de la organización y su auge, sino su considerable incremento de efectivos si se relaciona con los 10.832 miembros con que contaba en 1.928, en pleno período dictatorial.

Llegados a este punto de los análisis de los grupos sindicales, tanto de los mayoritarios y que dimos en denominar "de clase", como de los de inspiración católica que, considerablemente de menor entidad, también merecen un análisis destacado comparativamente, - nos queda únicamente hacer una breve referencia a un minúsculo sindicato, de escasa influencia e implantación, cuyo interés se centra en sus muy diferentes resortes ideológicos respecto de los estudiados hasta aquí. Nos referiremos a:

La Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS), que no fué - sino un intento de organizar una fuerza sindical por parte del recién formado grupo político de Falange Española, para utilizarlo como su correa de transmisión.

Es sabido por otros epígrafes de este trabajo que la fundación de Falange por J. A. Primo de Rivera tiene lugar en octubre - de 1.933 y que, en febrero de 1.934, se produce su fusión con el - grupo previamente organizado por Ledesma Ramos y O. Redondo, las - J.O.N.S., dando lugar a Falange de las JONS. Poco después de su fusión, en agosto de 1.934, es cuando aparece la presente central sindical, que debe su patrocinio por entero a tal grupo político, quedando bajo la concreta dirección de Ledesma Ramos que había cedido la jefatura del grupo político unificado a José Antonio, en un trueque de cargos.

Este sindicato mantuvo su actividad individual sin aceptar - la entrada en ningún tipo de ente unitario, a pesar de que se le - ofreció tal posibilidad respecto del Frente Nacional del Trabajo, - constituido por los sindicatos de carácter confesional, con los que tenía el nexo de unión de su común antimarxismo. En tal actitud individualista contó con pocas posibilidades en esta etapa y centró - su actividad en la captación de los trabajadores en paro para intentar su reinserción laboral; tarea que no tuvo, ni mucho menos, el - éxito esperado.

La característica aglutinadora básica de este sindicato fue su antimarxismo como única connotación definitiva particular, añadiéndosele una táctica fuertemente demagógica, al tomar como suyas las reivindicaciones obreras de sus principales enemigos UGT y CNT, con la única salvedad de adaptarlas a sus particulares credos y estilos nacionalistas.

Según sus propias fuentes, llegó a contar con unos 15.000 - afiliados en el verano de 1.934, de donde es fácil deducir su escasa representatividad. Además, tal y como se planteó la organización del "Nuevo Estado" surgido de la sublevación militar que puso fin al régimen republicano en lo relativo a su sistema sindical, no tuvo cabida la CONS, que como organización desapareció.

#### IV.2.- GRUPOS BANCARIOS Y ECONOMICO-FINANCIEROS

En este apartado nos corresponde el análisis de aquellas instituciones que durante la Segunda República española constituyeron grupos capaces de incidir en el curso de las transformaciones de tipo económico y fiscal que intentó poner en práctica el nuevo régimen.

Se tratará, en contraste con aquellos que inciden en las reformas de tipo agrario y rural, de unos grupos de matiz urbano, financiero e industrial. Haremos referencia, principalmente, a los grupos bancarios, a los comerciales e industriales, así como a los de tipo monopolista.

Los grupos que se mueven en el terreno de la industria y el comercio han de ser tratados en primer lugar para distinguir entre ellos dos sectores fundamentales. Unos grupos tienen finalidad eminentemente de lo que aquí venimos llamando "de presión", de forma directa tienen una especial dedicación a la defensa de intereses gremiales y sectoriales. Otros buscan mayoritariamente la explotación comercial o industrial en el ámbito específico de su actividad pero igualmente, y en la medida de sus posibilidades, buscan la presión para hacer crecer sus rendimientos en el contexto de una mejor coyuntura económica.

Sería la diferencia que separe a aquellos grupos que trasladan su propia actividad específica para la realización de sus presiones, mientras que otros la realizan específicamente en su propio campo de actividad.

Vista la primera diversificación de estos grupos, hay que decir que los que mas pueden interesarnos ahora, por responder con mayor concreción al ámbito y pretensiones de este apartado, son los segundos. Aquellos que desempeñan su actividad de presión en el terreno económico, buscando incidir sobre las decisiones económicas -

del Estado -sobre las del Sector Público-, para beneficiarse de las decisiones que en estos sentidos se vayan a tomar por los centros - de decisión republicanos. Se tratará de conseguir situaciones ventajosas y privilegios respecto a la competencia para sacar beneficios sectoriales.

Tenemos que decir que hemos encontrado dificultades para - - aportar documentalmente y con datos las actividades como grupo de - presión de sociedades mercantiles, en el sentido de que no son esos sus fines fundamentales y que existen pocas entidades industriales y comerciales con fuerza y entidad suficiente para tener implantación nacional y llevar a cabo tales presiones. Ello, considerando - que el sector Monopolios será considerado como una variante específica.

Inicialmente, como destaca el estudioso de los grupos de presión de aquella época Manuel Ramírez, no existían en España en este terreno grupos organizados con fuerza por ramas y con ámbito nacional para la defensa de los intereses industriales y comerciales, - tal y como sucedía coetáneamente en Inglaterra, Alemania y Francia.

En nuestro país sólo se podían encontrar agrupaciones de ámbito regional y no entraban en funcionamiento en el sentido que - - aquí nos interesa hasta que las circunstancias, por su especialidad o dificultad, impulsaran a ello. Será precisamente la etapa republicana el primer momento de la vida española en que se acusen los movimientos iniciales en el sentido que nos ocupa. La tendencia más - progresista y socializadora de las medidas legislativas que comienza a tomar el nuevo régimen y que afectan a los sectores ahora estudiados, en contraste con la situación media precedente, son la base fundamental de la explicación del inicio de los movimientos organizativos de estos sectores de cara a constituirse en grupos de presión. En definitiva, la tónica va a ser semejante a la de los diferentes sectores en el período republicano. Coincidiendo con esta -

afirmación, recogemos la de Tuñón de Lara cuando dice que: "La nota característica de estos organismos al inicio del decenio de los - - treinta es su tendencia a agruparse, a lograr la máxima unión como medio de conseguir la máxima eficacia." (35)

Probablemente, el grupo más destacado de los aquí considerados sea la Organización de Enlace de Entidades Económicas de España. Su fuerza le viene de su composición de entidades diversas que, así unidas tienen el ámbito estatal necesario para su eficacia.

El año 1.933 es el que contempla los últimos pasos de su - - constitución a base de patronos españoles que consideran este Comité de Enlace como un primer paso para la obtención de una Unión General de Patronos de España, que llegaría a englobar a más de 1.500 patronos y entidades patronales del mundo de la economía. (36)

Para darnos idea de la envergadura de esta organización, digamos que en ella se agruparon las que a continuación se relacionan: Confederación de Entidades Libres y Círculos Mercantiles de España, Confederación Gremial Española (que, a su vez, agrupaba a industria les y comerciantes de pequeña entidad de toda España), Confederación Patronal Española, Estudios Sociales y Económicos de Cataluña, Unión Económica, Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, Asociación General de Ganaderos, Unión Nacional de la Exportación Agrícola y Asociación de Agricultores de España.

Si consideramos que sus bases fundamentales son el respeto a la propiedad privada, la justa distribución de la producción y la - riqueza nacional, entenderemos el sentido de sus presiones en cuanto que encaminadas a superar los estorbos fiscales, jurídicos y administrativos que se establezcan en su camino.

Aparte de otros grupos de estas características y organizados en torno a diferentes ramas de actividad, transportes, agricultura, etc., hemos de considerar, también en el terreno industrial y comer



cial, aquellas empresas que disfrutaban de una situación que puede ser denominada de Monopolio. Son "aquellas empresas que disfrutaban de una situación de privilegio que les permitía presionar y controlar grandes sectores de la economía del país", según la aportación del citado M. Ramírez y de Ramón Tamames en sus diferentes obras. (37)

En base a estas aportaciones y aparte de las entidades monopolísticas de ámbito estatal potenciadas durante la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera, tal como el Monopolio de Petróleos -CAMP SA-, caben destacar dos variedades de monopolios en el mundo de la industria y el comercio, según que tal situación dependiera de una concesión legal o, por el contrario, se derivase de circunstancias coyunturales o estructurales de la propia economía.

Por todo ello, podemos considerar que entre los grupos económicos y de interés que presionan durante la IIª República y se incardinan en una situación de monopolio, se diferencian: los Monopolios Legales (aquellos que se derivan de una concesión legal) y los Monopolios Naturales.

En el campo concreto de los Monopolios Legales se puede observar el predominio de aquellos que ocupan su actividad en el terreno de la industria azucarera, destilerías alcohólicas y refinerías.

Podemos destacar, concretamente, en la etapa republicana los siguientes: (38)

Sociedad Industrial Castellana que, con asentamiento en Valladolid, se dedica a la explotación de la industria azucarera, aunque realizaba otras actividades diversas, tales como la explotación ferroviaria, de canales, etc.

Compañía de Industrias Agrícolas, asimismo dedicada a la industria azucarera, también a las destilerías, y con sede en Barcelo

na; fué importante la ascensión cuantitativa del volumen de sus negocios a lo largo de la etapa de la Segunda República.

Azucarera Castellana, con sede en Madrid.

Sociedad Azucarera Larios, con sede en Málaga y perteneciente a un rancio grupo de presión malagueño en torno a la familia de los Larios. También era conocida su explotación de las industrias - de destilerías alcohólicas.

Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes, dedicada a la explotación remolachera.

Destaquemos asimismo, en un sector bien diferenciado, la importancia de la Compañía Telefónica Nacional de España, que debe su fundación a la etapa de Primo de Rivera y que tiene como misión la instalación y explotación de las redes y servicios telefónicos para todo el territorio peninsular, en exclusiva desde aquella fecha de 1.924 en que data su fundación.

La Compañía Telefónica fué un grupo que suscitó diferentes - iniciativas de presión y fué objeto de fuertes polémicas y debates por los distintos grupos políticos de la Segunda República, así como por el mismo Gobierno. Tengase en cuenta que el monopolio de Telefónica se había otorgado a la Multinacional americana I.T.T., cuyos intereses habían de chocar con los de aquellos grupos que demandaban de la República unas transformaciones profundas en la vida - económico-social española. A tal estado de presiones y juego de intereses contribuye el éxito floreciente de la explotación telefónica, que aportaba a la compañía interesada pingües beneficios que, - en el año 1.935 se cifran en 119.812.476 pesetas.

Es muy conocida la importancia que tuvo la huelga del sindicato de los trabajadores de esta Compañía pocos meses después de - proclamada la República, en julio de 1.931, que pondría de manifies

to la lucha de intereses y las presiones contra el contrato de - - arrendamiento constitutivo de ese monopolio y, en contraposición, - demostraba la fuerte implantación en España de los intereses de la ITT que enfrentó a UGT, a su favor, contra los obreros anarcosindicalistas, partidarios de proseguir la huelga.

El mismo Gobierno reformista del primer bienio hubo de justificarse por el mantenimiento de la concesión del monopolio puesto - que miembros destacados de tal Gobierno habían criticado severamente su constitución en la etapa dictatorial de la monarquía alfoncina, ello da idea de la dureza de la defensa de sus intereses.

La realidad resultante fué que el "status" del monopolio de Telefónica se mantuvo como al inicio de la República, siendo el resultante de las fuerzas de presión a su favor más poderoso -incluída una intervención de protesta del Gobierno americano-, que las voces de quienes reclamaban la modificación del contrato y la toma de medidas para su anulación.

En cuanto al análisis de aquellos grupos que se contemplan - bajo la forma de Monopolios Naturales, tendremos que considerar durante la República los siguientes:

Fábrica de Mieres, dedicada a la producción minera y siderometalúrgica, principalmente en el sector del carbón.

La Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, con sede en Madrid y que, aunque fundada en el año 1.900, ve crecer su potencial económico de forma considerable en la época que nos ocupa. Sus campos de actividad son los del hierro y el acero.

Igualmente en este campo de la producción industrial y sector sidero-metalúrgico y minero son de tomar en consideración, por su potencial e incidencia, entidades como las que se relacionan a continuación:

Sociedad Anónima "Echevarría", con sede en Bilbao, fué crea-

da con fecha de febrero de 1.920, especializada en el sector del - acero y con un volumen creciente de negocios en los años iniciales de la década de los treinta.

Altos Hornos de Vizcaya, producto de la fusión de empresas - sidero-metalúrgicas independientes de la región vizcaína, da idea - de su potencial el fuerte nivel de incremento de su volumen de nego - cios si se piensa que, en el año de su fundación el capital funda - cional es de 32.750.000 pesetas, mientras que en 1.918 era ya de - cien y en 1.920 de 125.000.000. El hierro y el acero son sus produc - tos esenciales, así como el suministro de minerales. Baracaldo, Ses - tao, Sagunto y Echevarri son sus puntos de explotación mas importan - tes.

La Sociedad Industrial Asturiana "Santa Bárbara", igualmente dedicada a la siderometalurgia y a la explotación de la minería del carbón, así como la "Nueva Montaña Quijano" de Santander (hierro y acero), son entidades que también conviene citar por su importancia en la época.

Al margen de estos sectores específicos de lo que hemos veni - do denominando "Monopolios Naturales", hay que considerar entre es - tos algunos otros de importancia sectorial considerable. Hablamos - de los grupos de interés constituidos por:

La Papelera Española, de Bilbao, que tiene una actividad es - pecífica en la producción de papel y cartón, multiplicando por cin - co la cifra de su volumen de negocios a la altura de la etapa repu - blicana en relación a su fecha de fundación.

Cristalera Española, con sede en Bilbao al igual que la ante - riormente citada y ocupándose del sector del vidrio.

Cementos Rezola S.A. de Madrid, con la fabricación y venta - de Cementos Portland.

En el panorama de conjunto que se nos ofrece durante la Se-

gunda República respecto de los grupos que presionan por sus intereses industriales y comerciales, bien sea sujetos al libre mercado o a prácticas monopolísticas, pone de manifiesto que en poco variaron sus posiciones a lo largo de la etapa republicana, y la fuerza de sus intereses se hizo valer para desmentir por completo la idea de que la República fuese una etapa de socialización profunda en ninguno de estos terrenos. Solamente la etapa de la guerra civil y por razones excepcionales obvias, contempló la realización de nacionalizaciones en los diversos sectores aquí considerados de forma significativa y algo más que episódica.

Se puede decir que la etapa republicana no comporta una política novedosa en estos terrenos y hay que reconocer que: "no se procedió a la creación de nuevas y fuertes empresas públicas, sino que más bien se consolidó la situación establecida al término de la Dictadura. (...) Las actuaciones en el campo de las obras públicas, -- servicios públicos y política industrial siguen el camino establecido en la Dictadura." (39)

En definitiva, la incidencia de estos grupos sobre las transformaciones económicas y fiscales de la IIª República, que analizaremos conforme al esquema de este trabajo, ha resultado lo suficientemente importante para que prevalezca en parte el modelo idóneo para la defensa de sus intereses, en el ámbito del conflicto social -- que se desarrolló a lo largo de una etapa en que las fuerzas sociopolíticas presentes en los organismos representativos apuntaban a posiciones más reformistas que el resultante final.

Pero probablemente aún nos quede pendiente el análisis del más importante de los grupos económicos que inciden en la política económica republicana y en su configuración. Se trata de la banca.

Es indudable la incidencia de la banca española en el conjunto de la economía y, por ello, resulta innegable que es un grupo

a tener en cuenta en el contexto del análisis que nos ocupa, supuesto que a los mismos responsables de la política republicana preocupó, desde los primeros meses de la existencia del nuevo régimen, la postura que ante él pudiera adoptar este grupo. Hay que pensar que la banca española participa en la financiación y control de la economía de manera intensa a través de dos vías: la que podíamos denominar vía ordinaria de las operaciones de crédito y la vía extraordinaria de su constitución en verdadero accionista fundamental de numerosas entidades, al adquirir importantes paquetes de acciones de grandes empresas y constituirse en base esencial del sistema de su financiación.

Al inicio de la etapa republicana este régimen se encuentra en nuestro país con la existencia de las siguientes instituciones bancarias, agrupadas en función de su consideración de privadas u oficiales.

Así, se incluyen dentro de la banca oficial española las siguientes instituciones:

- Banco de España
- Banco de Crédito Industrial
- Banco Hipotecario de España
- Banco Exterior de España.

La banca privada de ámbito nacional tiene, por el contrario, la siguiente nómina de bancos:

- Hispano Americano (Madrid)
- Español de Crédito (Madrid)
- Vizcaya (Bilbao)
- Bilbao (Bilbao)
- Central (Madrid)
- Urquijo (Madrid)
- Santander (Santander)

de Aragón (Zaragoza)  
Zaragozano (Zaragoza)  
Popular (Madrid)  
Mercantil e Industrial (Madrid).

Como ya recogíamos al referirnos a la banca durante la etapa primorriverista, existía asimismo el Consejo Superior Bancario, que había visto incrementadas sus competencias e importancia, constituyendo un verdadero elemento representativo de los intereses bancarios. No es extraño que las opiniones emitidas por esta Corporación, relativas a la postura de la banca respecto a la República, fuesen tomadas muy en consideración por los responsables del Gobierno Provisional; prueba de ello es el caso del primer ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, que saludó con exagerado optimismo la pronta declaración de este Consejo Superior Bancario respecto de su adhesión al nuevo régimen.

No obstante, esa adhesión verbal vendría aparejada a las de otros muchos sectores económico-sociales diversos al proclamarse la República, que mostraron una adhesión meramente formal y expectante en tanto que no fueran alterados sus intereses en lo más mínimo, y, exactamente, aquellas declaraciones no eran sino presiones previas para condicionar las previsibles transformaciones en sus respectivos sectores.

No fué, evidentemente, ninguna excepción el caso bancario, - que nada más conocer los primeros proyectos que venían a alterar su "status" y el de sus intereses conexos, comienzan a hacer funcionar sus mecanismos de presión. En concreto, tal situación se desataría con el Proyecto de Ordenación Bancaria (presentado a las Cortes - con fecha 9 de octubre de 1.931); que recibe las más duras críticas del Consejo, así como del Banco de España, que celebra expresamente una Junta General Extraordinaria para analizar y manifestar su opinión ante tal evento.

Prueba evidente de la fuerza de este sector es la relación - existente -así es aceptado, entre otros, por Ramos Oliveira- entre las presiones citadas y la salida de Indalecio Prieto del Ministerio de Hacienda en diciembre de 1.931, pasando posteriormente a - - Obras Públicas.

Son igualmente conocidas las presiones de la banca en aspectos legislativos tan fundamentales para la República como la reforma agraria que, como se verá, al tener gran importancia su aspecto financiero en el tema de las indemnizaciones, por una serie de presiones bancarias se aborta la creación del Banco Agrario, oficial y especializado en aportar los fondos necesarios para la viabilidad - de la reforma.

Como indica el mismo Manuel Ramírez en su obra, "la banca tu vo en todo instante sus protectores en el Gobierno... Carner estaba en contacto con la Banca Catalana, Portela Valladares fue consejero del Banco Central, Barcia perteneció al Consejo Superior Bancario, Marraco estaba unido a la banca y Pita Romero era asesor del Banco de Crédito Local, etc." (40)

Aparte de esta eficaz política de introducir a personas rela cionadas con las diferentes instituciones bancarias en el Gobierno, es evidente la existencia de interrelaciones entre los diversos ban cos que, asimismo, posibilitan la realización de una política de - presiones comunes y coordinadas. Así, de los quince bancos relacio nados en la nómina de la banca oficial y privada, diez de ellos te- nían consejeros comunes y el número total de consejeros del conjunto de todos los bancos era de 246, siendo el Banco de España el que más consejeros comunes posee al contar con diez.

De la nómina de consejeros de la banca española en la etapa republicana se deduce la existencia de una importante cantidad de - familias pertenecientes a la nobleza o, al menos, de abolengo noble



en su seno. Ello pondrá igualmente sobre el tapete el sentido de - las presiones realizadas por ellos respecto de la política fiscal, agraria y económico-social republicana en su conjunto. Veamos de - forma significativa los nombres siguientes:

|   |             |      |        |
|---|-------------|------|--------|
| Juan A. Gamazo (Conde de Gamazo)                            | Pertenece a | dos  | bancos |
| Ignacio Herrero (Marqués de Aledo)                          | " " " "     | tres | " "    |
| Estanislao de Urquijo (Marqués de Urquijo)                  | " " " "     | tres | " "    |
| Alfonso Martos (Conde de Heredia Spinola)                   | " " " "     | tres | " "    |
| Ramón de Rivero y Miranda (Conde de Limpias)                | " " " "     | dos  | " "    |
| José Varela de Limia (Vizconde de San Alberto)              | " " " "     | dos  | " "    |
| Manuel García Prieto (Marqués de Alhucemas)                 | " " " "     | dos  | " "    |
| Arsenio Martínez de Campos (Marqués de Viesca de la Sierra) | " " " "     | dos  | " "    |
| Luis de Urquijo y Ussia (Marqués de Amurrio)                | " " " "     | dos  | " "    |

Puede concluirse con la afirmación de que los intereses bancarios, industriales y económico-financieros estuvieron representados por una serie de grupos de considerable fuerza en la etapa que nos ocupa, como para poder afirmar inequívocamente que incidieron - de manera notoria en los resultados del balance de las transformaciones fiscales y económicas de la Segunda República en el sentido mas conveniente a sus posiciones, ello mediante la utilización de - las vías necesarias para acceder a los diferentes centros de poder y decisión, la mayoría de los cuales tenían en su seno representantes de estos grupos.

#### IV.3.- GRUPOS AGRARIOS Y LATIFUNDISTAS

A raíz del conocimiento de la situación agraria española al iniciarse la Segunda República, podemos hacernos una primera idea - de los graves problemas y tensiones que iban a desencadenarse en el momento en que el Régimen republicano intentase una serie de transformaciones de importancia en aquella situación.

El problema agrario, en el contexto de la problemática social de la IIª República, nada mas plantearse por los primeros gobiernos del nuevo régimen, desencadenará todo el juego de los parti y grupos de interés que tienen relación, directa o indirecta, con - este tema.

Previo al análisis de las transformaciones concretas que -- aportó la República en este sentido, habremos de efectuar el de -- aquellos grupos que intervienen en la dinámica agraria del 1931 a 1936, supuesto que es desde la perspectiva de los grupos que intervienen en los diferentes procesos desde donde más nos interesa el - estudio de éstos.

Digamos como especie de preámbulo y como necesaria orientación antes de entrar en el centro de este epígrafe, que los grupos que intervienen en los temas de tipo social y en los concernientes al derecho de propiedad, caso del tema agrario, al igual que los -- que juegan en torno a los otros grandes problemas republicanos (fig cal, religioso-educativo y autonómico), que no sólo son grupos que específica y concretamente tengan relación directa con el tema en - sí, sino que, al ser problemas de interés general los que se juegan, son muchos los grupos que, aún con una relación indirecta con el te ma, influyen y luchan ~~en~~ en diversos terrenos aún ajenos al que normal mente pudieran dedicar su mayor atención por serles más próximos.

Este ejemplo lo tenemos en la cuestión agraria republicana que, si bien interesa y preocupa a aquellos sectores técnicos, pro

fesionales y afectados propiamente, es objeto de general atención -- por partidos, sindicatos y grupos de índole diversa, al jugarse en torno a tal problemática intereses de muy diferente índole.

Destacada esta primera característica digamos que, como se comprobará fehacientemente cuando se analicen las transformaciones agrarias de la República, estas reformas se realizarán de forma irregular y sufrirán diversas alternativas a medida que predominen -- en los gobiernos republicanos unas u otras tendencias políticas. Estas alternativas permitirán comprobar la importancia que se le otorga a la cuestión agraria, que constituirá un fiable termómetro del estado de las reformas republicanas en general.

En cuanto a una posible clasificación válida de los grupos e intereses que pueden estudiarse en su relación directa o indirecta con la problemática agraria republicana, digamos que, básicamente, las posturas se agruparán en dos polos bien diferenciados. Primeramente, están aquellos que se oponen a todo tipo de modificación en la situación heredada por la República en materia agraria y de -- distribución de la propiedad de la tierra. Estamos, en este caso, -- ante grupos políticos como es el partido Agrario de Martínez de Velasco o la minoría Vasco-Navarra del primer bienio; estamos, igualmente, ante aquellos grupos que representan los intereses de propietarios terratenientes y latifundistas que, de espaldas a una realidad problemática causada en buena medida por el mantenimiento de su "status", se oponen a toda reforma que vaya contra sus intereses y, como se verá, pocas alternativas reales existían para la resolución del tema que no pasasen por un reparto de aquellas tierras que no -- eran cultivadas productivamente.

En segundo lugar, encontraremos a aquellos grupos que ven -- la necesidad de la reforma de la situación preexistente respecto de la "cuestión agraria". Pero estos grupos aquí encuadrados no pode-

mos sostener que mantengan posiciones unívocas respecto del tipo de salida que dar al problema agrario y así, mientras unos apoyan una reforma moderada pero eficaz tendente al reparto de grandes latifundios previa indemnización, otros entienden que la situación se ha hecho tan sumamente extremada y que las condiciones de vida de las clases agrarias son tan desesperadas, que no caben soluciones eclécticas ni moderadas y que nada que no sea la revolución campesina -- puede venir a solventar los graves problemas agrarios. En el primero de los subgrupos aquí considerados están aquellos grupos políticos, sindicales y de presión, que pudieran alinearse con el proyecto de República diseñado por los republicanos de izquierda y socialistas que gobiernan a lo largo del primer bienio. En el segundo, -- hallaremos a quienes oponiéndose a la República por su izquierda, y considerando estériles sus esfuerzos por falta de contundencia, propugnan soluciones drásticas que, poco posibilistas, no dejan de hacer daño a la República y favorecer a quienes la atacan por la derecha. Encontraremos en este grupo a los que siguen las posturas del anarco-sindicalismo, tan influyente en muchos sectores del mundo trabajador de aquella etapa.

Entendemos que en el primer bienio dominaron la situación -- los del primero de los dos subgrupos considerados en segundo lugar con la oposición de todos los demás, unos por la derecha y otros -- por la izquierda. En el segundo bienio llevaron la pauta los primeros, con los otros dos enfrente pero sin una unidad efectiva. Finalmente, en los últimos meses de la República, soluciones más radicales marcaron la pauta con los reformistas apuntados a ellas y los -- primeros antedichos en franca oposición, ofreciendo un contexto de polarizado enfrentamiento.

Con el inicio mismo de la República comienzan los debates, las presiones y los ataques en torno a la cuestión agraria para, al final, quedar pocos satisfechos por motivaciones diferentes: unos,

por haber llegado demasiado lejos el proceso reformista, otros, por haber sido excesivamente parco. El caso es que si el primer bienio centra sus afanes en la aprobación de una reforma agraria, el segundo no pasará sin realizar una reforma de aquella primera ley de reforma, dando lugar a una contrarreforma agraria que deja los casos muy cerca de como se hallaban antes del 14 de abril de 1931.

Ya hemos dicho que la derecha permanece al margen de la reforma emprendida por el primer bienio pero nunca de forma pasiva, -- sino aprovechando toda ocasión para mostrar su desagrado y oponerse a ella. Igualmente hemos esbozado cómo los grupos que podíamos calificar de extrema izquierda se muestran hostiles a la reforma. Pero lo que conviene matizar es que aquellos que propugnan la reforma -- desde la coalición gubernamental y que igualmente coinciden en la -- vía mediante la cual llevarla a cabo, tienen diferentes concepciones del modelo agrario al que acceder. Así, mientras que los republicanos ofrecen un enfoque netamente burgués, tratando de crear -- una clase de pequeños propietarios a quienes extender tal condición de propietarios a costa de las grandes extensiones de latifundio y con ello tratar de lograr una base social adicta a tales planeamientos políticos, los socialistas buscan un reformismo agrario tendente a la constitución de explotaciones de tipo colectivista.

Los síntomas de preparación de la batalla agraria comienzan a dejarse sentir desde el momento mismo en que se hace cargo del poder republicano su primer Gobierno Provisional y, considerando que la ley de Bases de la Reforma Agraria data de 15 de sept. de 1932, puede así observarse lo dura que sería tal batalla.

Va a ser muy diferente la consideración que nos merezca la -- política agraria republicana de su primer bienio en relación con la del segundo. El juego de los grupos y las presiones de los diferentes sectores interesados se va a producir de distinta manera porque,

evidentemente, el desequilibrio de fuerzas queda orientado en otro sentido.

El conjunto de los grupos políticos que, arrancando de la firma del acuerdo de San Sebastián, dirigen los momentos iniciales de la segunda República, denotan la preocupación fundamental en el terreno agrícola y campesino: la puesta en marcha de una reforma -- agraria. Esta tarea les parecía inalcanzable a la luz de la situación real de la agricultura española y del sector campesino y, no solamente comienzan a dar los primeros pasos tendentes a la estructuración jurídica de tal reforma sino que, utilizando la vía urgente del decreto-ley, comienzan ofreciendo unas primeras medidas preparatorias o complementarias de la futura reforma agraria, que posibilitarán la resolución de las más perentorias necesidades del campesinado.

Adelantándonos a los acontecimientos, digamos que el transcurso del régimen republicano contemplaría importantes alteraciones de tal situación, bien entendido que será la distinta correlación de fuerzas en el poder, la causante de tales alteraciones que supondrán una seria detención de aquellos procesos reformistas en consonancia con el predominio de unos nuevos intereses en los alrededores del poder republicano.

Estaba claro que, a la luz de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno Provisional, el principal de los problemas que implicaría la reforma agraria --la redistribución de tierras-- no sería abordado de inmediato y, con el acuerdo básico de toda la coalición republicano-socialista, se acepta por todos que el tema clave de la reforma no sea emprendido hasta que no se elijan y reúnan las Cortes Constituyentes. Ello haría que se produjeran retrasos adicionales en su aprobación por cuanto que el tema agrario habría de discutirse en el seno y a simultáneo de un Parlamento cuya principal actividad sería la de elaborar una Constitución. Ello, igualmente,

nos pone sobre el tapete la importancia que se concedía a tan necesaria reforma estructural en el ordenamiento y, sobre todo, en la realidad española.

Así pues, un conjunto de medidas complementarias --sobre las que concretaremos más en su lugar oportuno--, son tomadas bajo la --inspiración del Ministerio de Trabajo, que era ocupado por Largo Caballero, denotando asimismo el hecho en otros sectores constatado --de que, el único partido seriamente estructurado y que contaba con programas para diversos sectores de la vida española, era el Socialista. Las presiones no van a ser muy fuertes en estos puntos concretos, no habrá gasto de "pólvora en salvas"; todas las fuerzas se guardarán para cuando se tomen medidas que afecten a puntos más sensibles: concretamente, al derecho de propiedad.

Las fuerzas en liza, no obstante, preparan su ofensiva en --defensa de sus respectivos intereses desde el momento mismo de la --proclamación de la República porque, aún con carácter secundario, --afirmaremos con Malefakis que: "En su totalidad, los decretos agrarios del gobierno provisional representaron una revolución sin precedentes para la vida rural española. Por primera vez el peso favorable de los derechos legales se desplazó de los propietarios al --proletariado rural" (41).

La gravedad de la afirmación sirve para anunciarnos hasta --que punto era necesaria la reforma y, asimismo, hasta que punto iban a encontrar enconada oposición los reformistas en los tradicionales detentadores exclusivos de derechos y no de obligaciones.

Aquellos primeros decretos agrarios fueron suficiente como para provocar la reacción de aquellos grupos conservadores, que habían aceptado el advenimiento de la República de forma sólo pasiva, y se hallaban a la expectativa de cuales serían las primeras actuaciones del nuevo régimen en relación con sus intereses.

Continuando situados en los límites del primer bienio republicano y, conocida ya la decisión de entrar en el fondo esencial - de las reformas agrarias sólo cuando se haya conocido la relación - de fuerzas parlamentarias en el seno de las Cortes Constituyentes - (cuyas elecciones se realizan en el mes de junio de ese mismo año - de 1931), digamos que muy poca fuerza parlamentaria van a tener - - aquellos sectores representativos de los fuertes intereses agrarios y terratenientes. Ha sido referido en numerosas ocasiones que el am biente social y político que reinaba en España en las semanas poste<sup>r</sup>iores a la proclamación de la República, era excesivamente presidi<sup>d</sup>o por motivaciones al margen de la fuerza real de los grupos de in<sup>ter</sup>és del conjunto de los sectores económico-sociales del país.

Tal situación de euforia pro-republicana de, incluso grupos y sectores sociales claramente encuadrables en el espectro político de la derecha, hizo que el cuadro de fuerzas representadas en aquellas Cortes Constituyentes, no recogiera determinados intereses que, agudizada su contradicción con aquel marco legal a medida que entraban en disensión fuertes intereses materiales, habrían de realizar su juego de presiones por otras vías. Por vía de grupos de presión, instituciones extraparlamentarias, etc.

En materia específica de los intereses agrarios, al plantearse la profunda reforma republicana a raíz, sobre todo, de la -- elección de las Constituyentes, resultaría la profunda contradic-- ción de que aquellos intereses que iban a ser más afectados por las medidas de reforma, contaban sólo con un escaso 10% de representati<sup>vi</sup>dad parlamentaria. Sin cuestionar la validez de conjunto de la re<sup>pre</sup>sentación de aquellas Cortes, resulta evidente que aquel pequeño porcentaje era mínimo en comparación con el fuerte entramado de intereses económicos y financieros que rodeaba a la clase de los gran<sup>des</sup> terratenientes españoles.

Se puede sostener que los únicos grupos realmente represen-



tativos de aquellas fuerzas de derechas afectados en sus intereses por la reforma agraria, que se podían contemplar en el parlamento - constituyente, eran los siguientes: (42)

- Minoría Agraria (24 diputados)
- Minoría Vasco-Navarra (6 del PNV; 4 tradicionalistas; 4 - católicos independientes; 1 independiente): 15 diputados.
- Lliga Regionalista (Catalana): 4 diputados.
- Monárquico liberal (1 diputado)

De todos estos grupos, como consecuencia de la dispersión - de atenciones en función del abanico de problemas diferentes que hu bieron de abordar en la etapa republicana, sólo la Minoría Agraria puede decirse que, por su composición de propietarios campesinos -- castellanos principalmente, tenía como tarea fundamental la defensa de los intereses de los terratenientes afectados por la reforma - - agraria.

Tan minoritaria representatividad fue, a la larga, perjudicial para el propio proceso reformador republicano en cuanto que, al no representar la instancia parlamentaria la fuerza "de facto" que, en la realidad, constituían aquellos grupos de interés agrario, éstos hubieron de elegir otros terrenos extraparlamentarios para su actuación.

En consonancia con esta afirmación se halla la actuación -- parlamentaria seguida por este minoritario grupo agrario en las - - Constituyentes. Su tarea, más que ser la típica de un grupo parlamentario, se dirigió a un constante obstruccionismo de la labor le-+ gislativa de la Cámara que, si bien compensaba la escasa fuerza que representaría en cualquier votación su nómina de diputados, minaba constantemente el normal funcionamiento de la instancia legislativa y, en definitiva, corrosionaba la esencia misma del sistema parla - mentario en que se apoyaba la IIª República.

Innumerables enmiendas, larga intervención tras otra en la discusión de cada artículo, son las actuaciones que jalonan la existencia de la minoría agraria a lo largo de todo el proceso de elaboración de la reforma agraria republicana.

Con esta política retardadora y obstruccionista, la minoría agraria intentaba conseguir dos finalidades fundamentales: de una parte, retrasar lo imposible la marcha legislativa de la reforma. - De otra, dar tiempo y lugar a la organización de los grupos agrarios por otras vías más propicias que el Parlamento. Tal fue, efectivamente, la táctica seguida.

Considerando que el potencial de los grupos agrarios respondía a una situación tradicional de fuerte implantación, la lucha en favor de sus intereses se realizó simultánea y externamente, con mayor eficacia, a la actuación de los grupos parlamentarios agrarios.

El estudio de aquellos grupos de interés y de presión que actúan en defensa de los terratenientes y latifundistas a lo largo de la etapa republicana, cuya importancia venimos destacando hasta aquí, habrá de corresponderse con el de aquellos otros que, al margen asimismo de las fuerzas parlamentarias propulsoras de la reforma en sus diferentes acepciones, en este caso mayoritarias aceptan este terreno de juego para apoyar sus diferentes posturas e intereses.

En tal sentido, habremos de analizar también las instancias de tipo oficial que, encargadas de materializar técnicamente la reforma, constituyen igualmente entidades alrededor de las cuales se agrupan intereses diversos. Nos referimos, concretamente y entre otros, al Instituto de Reforma Agraria. Asimismo, habrá que hacer constar el juego de intereses llevado a cabo por grupos que, en apoyo de posturas reformadoras -no siempre unívocas-, aceptan esa vía de luchas y presiones al margen del Parlamento, tan típica de aquellas fuerzas minoritarias que tienen mas fe en su poder "de facto"

que en el "de iure" en el seno de las Cortes.

Así, no haremos sino ratificar la afirmación previa que -- efectuábamos al referirnos a la problemática agraria de la República en el sentido de que, las batallas por los intereses agrarios en esta época, se libran en muy diferentes terrenos y con muy distinto armamento.

Si decíamos que la prevención contra las medidas previas a la reforma agraria decretada por el Gobierno Provisional fue la -- reacción de los grupos agrarios afectados; no queda más remedio que afirmar que entre estos mismos grupos cundió el pánico cuando empezaron a conocer los primeros textos elaborados por la comisión técnica encargada de preparar la reforma agraria.

Simultáneamente a este pánico generalizado comenzaron a funcionar los mecanismos de defensa y presión, todos ellos de forma coordinada: grupo agrario en las Cortes, grupos de presión y prensa -- conservadora.

Una táctica empleada en ocasiones sucesivas fue la de convocar grandes concentraciones de propietarios afectados, para actuar sobre el Gobierno y que éste rechazase aquel primer aviso.

Alrededor de tales presiones y de aquella primera "Gran -- Asamblea" que se preparaba, está la recién creada "Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas", cuya razón principal de -- ser radica en la cohesión nacida del miedo de los propietarios agrarios a lo contenido en ese primer proyecto de la Comisión Técnica Agraria, que propugnaba la expropiación de extensiones superiores a 300 hectáreas o que superasen 10.000 pesetas de líquido imponible, independientemente de que se tratase de fincas bien o mal cultivadas o que su propietario fuese noble o burgués. Como se verá al analizar el alcance concreto de las transformaciones agrarias, estas -- primeras presiones fueron efectivas a tenor del contenido del texto

definitivo de la Ley de bases de la Reforma Agraria.

Otros grupos agrarios que igualmente agrupan los intereses de los terratenientes y que, por ende, tienen como función esencial oponerse a las medidas de reforma agraria emanadas del primer bienio republicano, para así hacerlas más acordes con sus intereses básicos y reconducir la legislación hacia parámetros más moderados - son, por ejemplo: la Confederación Española Patronal Agrícola, cuya fecha de fundación es posterior a la de la Ley de Bases de la Reforma Agraria y que, agrupando a patronos agrícolas y ganaderos busca su defensa y asesoramiento, encaminándose a lo largo de la etapa republicana sus presiones, a la derogación de leyes laborales, como la de Términos Municipales y Jurados Mixtos. Su nivel de presiones trasciende de la oposición a esas leyes y contribuye a propiciar el ambiente que conduzca al segundo bienio, con todo un cambio global de la situación política en sentido favorable a sus tesis. Así, varias de sus federaciones provinciales, realizan una declaración, en mayo y junio de 1933, en la que amenazan anunciando su decisión de "abandonar las tierras a su suerte antes de seguir soportando la anarquía que a la sazón reinaba en el campo español". (43)

En línea semejante hemos de considerar a la Asociación de - Agricultores de España, que es una reunión de patronos agrícolas y de sociedades de patronos agrícolas. Acoge entre otros, fines de tipo cooperativista y mutualista ya desde su constitución en 1912. En la etapa republicana, es una organización más para la defensa de los intereses de los patronos terratenientes, ante los efectos de la reforma agraria.

Los Bloques Agrarios se encuadrarán, asimismo en este apartado concreto, con la peculiaridad de su estrecha relación con la - Minoría Agraria asentada en el Parlamento. Ello nos permite comprender fácilmente su actividad a lo largo de la etapa republicano-socialista, que se centra en la lucha contra las reformas agrarias re

publicanas, en un contexto ideológico de proximidad a las doctrinas católicas y de antisocialismo pronunciado; su alineamiento igualmente en defensa de las posturas eclesiásticas cuando esta institución tuvo enfrentamientos con el Estado republicano, vino a ratificar la existencia de identidades en cuanto a los grandes intereses que se movieron a lo largo del período español de 1931-36.

Otros grupos se alinean en la defensa de estos intereses -- aún sin pertenecer a los terratenientes o empresarios agrícolas. -- Tal es el caso de la Confederación Nacional Católica Agraria, que, -- habiendo sido tratada en el apartado correspondiente a organizaciones sindicales, merece encuadrarse en este campo concreto por la especificidad de su ámbito de actuación.

Tal Confederación representa las funciones de un sindicato de clase, con un basamento en la Doctrina Social Católica y sumisión a la jerarquía eclesial romana. Tiene características asemejables a las del verticalismo, con sus correspondientes organizaciones económicas de Cajas Rurales, entidades de crédito, mutualismo, etc.

Dada la tensa situación de la época y, al representar como organización sindical unos valores tales como el principio de autoridad, la familia, la propiedad privada y la caridad cristiana, no puede augurársele una seria importancia de masas. No podía ocupar un lugar de peso del lado de los terratenientes, representando a -- las bases genuinas de un movimiento sindical.

Desde el 10 de mayo de 1932 en que se empieza a discutir en las Cortes el proyecto de Ley de Bases, se agudiza la campaña parlamentaria de retención del proyecto, así como las presiones desde la prensa, la propaganda y la crítica de los diferentes grupos. A aquella fecha se había llegado luego de la presentación de diferentes modelos de proyectos, desde el más radical que probablemente fuese el primer proyecto de la Comisión Técnica, hasta el definitivo que

pasaba a discutirse. Entretanto, el mismo Presidente de la República Alcalá Zamora, hubo de tomar personalmente la elaboración de uno nuevo porque, en este caso, las presiones y desavenencias de los -- afectados se combinaban con los desacuerdos en el propio seno de la coalición gubernamental.

El proyecto de Alcalá Zamora presentaba matizaciones moderadoras respecto del primero, pero tampoco llegó a ser el definitivo. Sí coincidía con el que pasó a ser discutido en cambio, en dos puntos esenciales: Su limitación a fincas mal cultivadas y no a todas las mayores de 300 hectáreas, y la existencia de indemnización como norma general.

A partir del problema de la indemnización, ya constante en todo el proceso de reforma agraria, se crea una problemática importante que, de paso que resulta un serio escollo para los reformadores, será un punto de incidencia y eficacia de los grupos de presión de terratenientes y latifundistas.

La reforma agraria, tal y como se planteó por el gobierno -- republicano-socialista, tendría un punto débil que, si bien daba un valor añadido a su moderación, propiciaba su vulnerabilidad. Al ser necesarios los fondos para llevar a cabo tales indemnizaciones en -- cuantías considerables, en función de las tierras a expropiar y de los asentamientos a efectuar, dependía seriamente de tales fondos -- el éxito de la reforma y, además, dependería también la orientación y el control del sentido de la reforma por quienes aportaban tales fondos.

Nada menos que la banca privada constituiría la fuente de -- la financiación de la reforma. Si esta estaba siendo hostigada desde los sectores afectados, suponía algo así como encomendarse al -- diablo el hecho de depender de la banca para la viabilidad de tal -- reforma. Ya explicitábamos en el apartado II.3. de nuestro trabajo,

que el especial modelo de desarrollo económico español durante la revolución burguesa, hacía que no existiese una clase burguesa industrial fuerte en nuestro país y que la oligarquía terrateniente - fuese la que se adaptase a los cambios, dirigiendo aquel proceso y transformando su posición dominante en la economía española, sin re ciclarse como burguesía industrial a la manera de aquellos países - que contemplan una revolución industrial en regla.

Ello era coherente con la existencia en nuestro país de hechos, como por ejemplo que la banca estuviera dominada por los grupos precisamente afectados por la reforma agraria y sería de tales grupos -contradicción fundamental- de los que dependiera la viabili dad de tal reforma, que requería dinero para indemnizaciones y no - contaba con suficiente cobertura de financiación pública ante la evi dencia de un sector público débil en un Estado democrático poco fir me y consolidado.

Sólo en este sentido puede comprenderse el fracaso de la -- creación del Banco Agrario, que sería el ente financiero especializado de la reforma agraria. En este banco, a través de su consejo, está representado el Gobernador del Banco de España así como otros 4 representantes de otras tantas entidades que aportaban a él sus - participaciones. Tales entidades no eran otras que: Banco Hipotecario, Consejo Superior Bancario, Instituto Nacional de Previsión y - Cajas de Ahorro.

Ante el hecho cierto de que en el Banco de España "se sienta una copiosa e idónea delegación de la grandeza absentista no nos será muy difícil adivinar el futuro de la reforma agraria republica na, calificada por algunos de "pesadilla" para este régimen. En tal sentido, nos basta la aportación de Ramos Oliveira que, recogida -- por Ramirez afirma en síntesis: "a esta nobleza territorial, expropiada en un tres por dos como consecuencia de los sucesos de agosto, confiaba la República, en la práctica, la salvación financiera de la

reforma agraria. Entregada el arma crediticia a ese capitalismo financiero primitivo -enemigo pertinaz de toda la Banca oficial-, los campesinos beneficiados por la reforma agraria quedarían atados de codos y pies a merced, justamente, de los terratenientes expropiados." (44)

El mantenimiento de grupos como el bancario que ahora nos ocupa en manos de las clases tradicionales opuestas a la idea misma de la República, pone de manifiesto la exageración de aquellos testimonios que dan en considerar a aquel régimen, principalmente en su primer bienio, como una etapa revolucionaria. Si este régimen no llega a controlar ni siquiera aparatos político-económicos tan importantes como la banca, si no es capaz de controlar una banca oficial que le permita realizar las transformaciones estructurales necesarias, ni siquiera vía indemnización previa a la expropiación, difícilmente podremos obtener una imagen de una República revolucionaria más allá de en lo meramente verbal o aparente, demostrando al menos grandes dosis de ingenuidad al pretender una reforma agraria sin controlar sus fuentes de financiación, dejando éstas en manos de grupos bancarios relacionados con la oligarquía terrateniente más hostil.

La consideración de estas fuerzas opuestas a la reforma agraria no quita para que el gobierno que emprende la transformación del sector, cuente con grupos organizados favorables a tal reforma. No solamente se trata de que apoyen estas medidas todos aquellos sectores que, real o potencialmente, vayan a ver con ellas mejorada su posición, sino que sin el empuje y colaboración de grupos organizados y entidades interesadas en ella, la reforma sería mucho más impensable y de mucho menos alcance aún de lo que realmente fue.

Hay que comenzar diciendo que, aún con el agravante de sus diferentes concepciones acerca del modelo de reforma a seguir, el apoyo de ésta se hallaba en los principales grupos parlamentarios -



de la coalición gobernante en el bienio republicano-socialista. Desde el grupo de San Sebastián y la constitución del primer Gobierno Provisional, se echaba en falta una cierta precipitación programática en cuanto a los objetivos a seguir. La ausencia de un programa -- claro de reforma agraria se deja sentir, aunque todos acepten la necesidad de algún tipo de reforma de este sector.

El que fueran los ministerios socialistas, básicamente el de trabajo, los que comenzaran a poner en práctica la reforma agraria -- evidencia, al menos, que este partido era el único que poseía ideas claras respecto del modelo de reforma a emprender. Además, su potenciación como consecuencia del resultado electoral de las constituyentes --partido con más escaños, 117--, hace que sea un importante soporte de la reforma, no sin tensiones con la segura fuerza parlamentaria, los Radicales, cuyas concepciones de la reforma son de corte -- más derechista y, como los republicanos en su conjunto, incluidos -- los de izquierda, están en peores condiciones de entendimiento y -- comprensión de la problemática campesina.

Una entidad fundamental para la puesta en marcha de la reforma fue el Instituto de Reforma Agraria, que se contempla en la ley -- de Bases y se crea por Decreto cuya publicación es de 25-IX-1932, -- posteriormente modificado por otras disposiciones de 4-XI-32 y 3-IX-33.

Su constitución y funciones se contemplan, respectivamente, en las bases 3ª y 4ª de la Ley de Reforma. Se trata de un ente que -- ejecutaría todas las acciones tendentes a la realización de la reforma y que, por ende, asumirá la importancia de un grupo de presión.

No solamente destaca la autonomía y poder de maniobra del -- Instituto, sino su composición a base de técnicos agrícolas, juristas, propietarios, arrendatarios y obreros de la tierra, así como su dotación de una cantidad "no inferior a 50 millones de pesetas" que,

si bien resulta insuficiente para la magna labor por realizar, le otorga una influencia decisiva en el ámbito agrario.

Dada la importante labor reservada a este Instituto, no tardaría en abarcar tareas no solamente técnicas, sino de tipo político y, en su seno, tratan de influir los diferentes grupos para que la orientación de sus actuaciones se acerque lo más posible a sus intereses. Se trata, principalmente, de los diferentes grupos próximos al gobierno los que más peso adquieren en el I.R.A. Al final del primer bienio y ante las elecciones que se avecinan para noviembre de 1933, el Instituto fué utilizado por el Gobierno como grupo de presión electoral en favor de sus tesis y frente a las fuerzas de la derecha que amenazaban sus posiciones.

En la misma línea de defensa de la reforma se encuadra la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Tiene lugar en 1931 y es un órgano de la UGT especialmente dedicado al encuadramiento de los campesinos de ideología socialista. Ya ha sido destacado el importante papel de esta sección tanto en la potenciación del conjunto del sindicalismo socialista, cuanto en la radicalidad progresiva de este movimiento a lo largo de la República.

La dirección fundamental en la que se dirigen las presiones de la FNTT no es la de la reforma en abstracto, sino que sirve a los presupuestos del modelo de reforma socialista frente a lo sostenido por los republicanos. La FNTT plantea, como el socialismo todo, una agricultura colectivista de grandes unidades de producción, que no requiere la división en parcelas de las grandes propiedades. Resultaba importante su actuación en defensa de las tesis socialistas por cuanto que la realidad de la reforma, más bien respondía a los planteamientos burgueses republicanos de constitución de pequeños núcleos de propiedad, que al colectivismo socialista.

La potenciación de este sector sindical a lo largo del segundo bienio, da idea del fracaso del proceso de reforma agraria, tal y

como se recogía en la Ley de Bases pues, frustradas las esperanzas campesinas de la reforma, adoptan masivamente los postulados del socialismo radical, que en el campo están dirigidos por la FNTT.

Otro grupo que, inmerso en la representación de los intereses agrarios y con implantación en Cataluña, merece la pena citar, - es la Unión de Rabassaires. Su composición fundamental era de pequeños campesinos y su director original era Companys, estando sus posiciones muy próximas a la "Esquerra" Catalana.

Su problemática, reivindicaciones y logros, están más próximos a los de tipo burgués que a los planteamientos socialistas reflejados en la FNTT.

El segundo bienio republicano, en su conjunto, va a presentar un balance diferente -como ya veremos en su apartado correspondiente- en cuanto se refiere a la reforma agraria. Sin que, por sus resultados efectivos, pueda sostenerse muy firmemente que la primera de las etapas republicana fuera una panacea para la solución de los males de la agricultura española, en cambio, comporta una toma de posición mayoritariamente favorable al proceso de cambio, apoyada por la correlación de fuerzas representadas en las Cortes Constituyentes.

Frente a esta situación, queríamos destacar precisamente que el bienio denominado genéricamente radical-cédista, representa un balance de fuerzas que, coherentemente y en pura lógica, mostrarán una predisposición contraria al proceso de reforma. Como hemos pretendido destacar en otro punto, nos movemos en el terreno de los términos relativos ya que, si el primer bienio montó la reforma agraria y la apoyó, para sus principales propulsores probablemente aquel proceso quedase corto, casi frustrado y no diera los frutos deseados. Por el contrario, las fuerzas dominantes en el segundo bienio consideraban excesivas aquellas transformaciones y propugnaban una filosofía contrarreformativa en materia agraria.

En el terreno de los grupos, los intereses de la derecha estuvieron mejor representados en esta segunda etapa en las instancias institucionales pero, no se olvide, se mantienen vivos y más radicalizados por la misma lentitud de los acontecimientos, aquellos que pretenden una eficaz y cierta reforma agraria.

Los grupos político-parlamentarios que llevarán la voz legislativa de la suerte de la reforma, cambian su relación de fuerzas - desde noviembre de 1933. Antes había caído Azaña y había tomado su lugar Lerroux. No es automática la recesión de la reforma agraria, como tampoco lo es en el primer Gobierno post-electoral en que la - dinámica de lo ya emprendido por Marcelino Domingo, en el Gobierno Azañista, continúa ofreciendo resultados.

A nivel parlamentario la ascensión de la CEDA resultó irresistible y, con sus 115 diputados, pasaba a ser la mayor de las minorías y a constituirse en árbitro de la situación. El partido agrario, que como grupo parlamentario se había destacado en la defensa de los intereses de los terratenientes, alcanzó los 36 diputados y se constituye en partido integrado.

Resulta obvio que los intereses de la derecha se habían potenciado hasta tal modo que la suerte de la reforma agraria parecía decidida. También, entre los republicanos, se había potenciado considerablemente su grupo más derechista y ambiguo: el Partido Radical, que alcanzaba 102 escaños.

Recaen las responsabilidades de gobierno sobre el Partido Radical, con el apoyo exógeno de la CEDA y otros grupos de la derecha. En cuanto a las presiones relativas a la reforma agraria, pronto se contempla la mayor tolerancia sobre la continuación de la reforma - por parte del grupo radical y el grupo agrario no deja de presentar su batalla, llegando al enfrentamiento mismo con la CEDA que, inspirada por el catolicismo social, apoya una política agraria menos cerrada que la de aquellos, principalmente en la primera etapa de Mi-

nistro de Agricultura de Giménez Fernández, que luego fuera eliminado por su propio partido en demostración de que los intereses agrarios más retrógrados ascienden con el paso del "bienio negro".

A medida que pasan los meses de este segundo gran período de tiempo republicano, la dinámica de la presión de los diferentes grupos va virando, puesto que ya no se tratará -esto será así cada vez menos- de un enfrentamiento entre aquellos que tratan de impulsar la reforma agraria de septiembre de 1.932 y quienes tienden a su detención, sino que la pugna será entre los últimos y quienes entienden que el fracaso del primer bienio procede de su moderación y se apoyan en una creciente radicalización de posturas.

En este sentido, habría que contemplar la ascensión de la influencia en las organizaciones agrarias campesinas de representantes, como ya se indicó en su apartado correspondiente, de unas clases sociales en crítica situación y que hacen que el ambiente en el contexto general se haga ostensiblemente tenso. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra -UGT-, con un crecimiento y radicalización creciente, apoya tales tesis. El anarcosindicalismo, en constante lucha y cuestionamiento de la tarea republicana desde el comienzo del nuevo régimen, también es una organización significativa de oposición al segundo bienio.

Los representantes de los grupos e intereses de los terratenientes vieron con agrado las medidas que empezaban a tomarse de incremento de indemnizaciones, disminución de asentamientos, expulsión de colonos, etc.

La fuerza y dotaciones económicas del Instituto de Reforma Agraria también se vieron afectadas por la acometida de los intereses agrarios tradicionales.

Este segundo bienio, aunque reconociendo la necesidad de la reforma por el mismo Gil Robles y por el Ministro Manuel G. Fernández, contempla el predominio de los intereses más intransigentes en

el terreno agrario. Como quiera que el inaplazable problema agrario estaba ahí y comportaba unas condiciones sociales irresueltas, ello llevó a una reacción del campesinado que contribuyó a una bipolarización acusada de las fuerzas del país. Tal situación, mantenida - por el Frente Popular aunque de forma más sobresaltada en la toma - de decisiones reformistas, es la que provoca el gran enfrentamiento final de la guerra civil; de ella no está ajena en responsabilidades el problema agrario y sus vicisitudes. Por un lado engendraba - una situación social intolerable; por otra, unos estamentos inaccesibles a la cesión y ajenos a la razón. Solo una lucha armada y una guerra de liquidación del enemigo, podía dejar las cosas en la agricultura española en situación semejante a la del inicio de los años treinta. Aquella y no otra circunstancia incide en la resolución de la reforma agraria y no obstante, esta se intentó en la República y el fracaso parcial de aquella acompañó al total de esta, que aportó unas transformaciones reales que, junto con sus vicisitudes, estudiaremos concretizadamente en su correspondiente apartado.

#### IV.4.- EL EJERCITO Y LOS MILITARES: SU ACTITUD.

La experiencia de Primo de Rivera que, como ya destacáramos, constituyó la "primera dictadura militar propiamente dicha de la -- historia de España", supuso en sus primeros años un alivio a las -- tensiones existentes en los tiempos finales de la Restauración. Tales beneficios no tardaron en amortiguarse y pronto salen a la superficie los contras de una asunción personal del poder por parte -- militar.

Así, según afirma Payne y, como consecuencia de las tensiones y enfrentamientos en el propio seno del Ejército, "en 1.930 la idea de Dictadura militar estaba desacreditada incluso ante los propios militares" (45), como ya recogíamos en su apartado correspondiente. Tal estado de cosas es el dominante en el Ejército a la hora de proclamarse la IIª República y ello determina de alguna manera su comportamiento en aquel momento histórico.

Puede decirse, si se trata de definir de alguna forma la actividad del Ejército el 14 de abril, que su actuación fue negativa, pasiva, al inhibirse de intervenir en modo alguno favorablemente a la Monarquía, lo que automáticamente implicaba dejar vía libre al -- juego político que traería la República. Tal contribución, de la manera que se planteó, no implica necesariamente su colaboración con la proclamación republicana sino, más bien, su rechazo a todo tipo de intervención ante la triste experiencia de la Dictadura de Primo de Rivera.

Así pues, se produce un cambio cualitativo de gran importancia en el sistema político español sin la intervención militar. En los primeros momentos este estamento no tiene otra alternativa que permanecer expectante a que se vayan decantando los acontecimientos y así comprobar cual será su propia suerte.

Evidentemente, no parecía que pudieran ser muy exigentes en

tal sentido, por cuanto que su actuación había inexistido y ello había sido así muy principalmente por un estado de apatía y desmoralización producto de su insuficiente estructura, organización y medios materiales. Pero tal situación precisamente, y como ya hemos -apuntado, determina una tesitura cerrada y a la defensiva en su interior, que va a dificultar todo intento de reforma que razonablemente se aborde. Una característica destacada del estamento militar en la época será la resistencia al cambio y ésta será una importante fuente de conflictos frente al nuevo régimen.

Era pensable que estos conflictos no tardarían en aparecer por cuanto que, si el Ejército había tolerado pasivamente la aparición del régimen republicano, no quería ni mucho menos ello decir -que compartiera su espíritu. Si el nuevo régimen venía impregnado -de un carácter democrático y liberalizador, habíamos convenido que el Ejército de estos años había perdido su talante liberal de las -décadas iniciales del siglo XIX. Así pues, una afirmación es evidente especialmente y tenemos que dejarla ya establecida para lo sucesivo: mayoritariamente había un desfase político entre Ejército y -República. Conservador, fuertemente nacionalista y unitario aquel, chocaría contra ésta, liberal y autonomista. Pero a tal afirmación hay que añadir que, producto de situaciones pasadas y evoluciones -viciadas, el Ejército ocupaba el 14 de abril una ilógica preeminencia política interior, ya que era ineficaz y casi inservible para -sus tareas de defensa exterior.

Desde el punto de vista de los dirigentes políticos de la -República quedaba nítido y fehacientemente claro, que su proyecto -político alejaría de sí al estamento militar en su mayor parte, en el momento en que se empezasen a plasmar legislativa y positivamente lo que en principio eran sólo proyectos; esto si consideramos aquellas medidas de tipo general que en nada afectasen a la estructura y organización interna del propio Ejército; sobradamente queda acep



tado que tal situación se agudizaría en cuanto que aquellas medidas fuesen encaminadas a remover el "status" militar preexistente.

Así pues, en la mente de los dirigentes republicanos de los primeros años, encargados del espinoso tema de plantear una reforma en profundidad de la milicia, tendrían que predominar dos tareas a abordar sobre todas las demás: (46)

Primeramente y antes que nada, habría que neutralizar políticamente al Ejército y reducir la tradicional influencia con que - contaba en tal terreno; máxime en tanto que eran conscientes de la dudosa lealtad a la República que profesaban los militares.

Seguidamente, tendrían que abordar aquella fase de la reforma que permitiera mejorar técnica, material y profesionalmente al Ejército, para darle su perdida operatividad para la defensa nacional, que secundariamente también supondría una mayor profesionalización en detrimento de su politización y que, entre otras cosas, debería abordar el tema pendiente de descargar sus cuadros de mandos de un importante número de jefes y altos oficiales, rémora irresuelta de las pasadas guerras coloniales, lo que posibilitaría el trasvase de medios presupuestarios a su necesaria actualización técnica y profesional.

Pero, como decíamos, la resistencia a soportar las reformas necesarias, según los criterios de los responsables republicanos, - se agudizaría a medida que el proyecto político del nuevo régimen - fuera tomando nuevos rumbos que, no siendo sino los desarrollos de su planteamiento inicial, van separando el modelo político español de aquel que era al final de la solución excepcional militar que -- cierra la etapa monárquica.

Así pues, los móviles que en nuestra opinión contribuyen -- más a incomodar al Ejército y a indisponerle progresivamente con la República vienen dados, entre otros, de dos fuentes principales. De

una parte, por causa del desarrollo del proceso autonómico, que está en coherencia con el proyecto descentralizado del Estado que con lleva la República. De otra, por efecto de la radical posición de determinados sectores de la izquierda obrera que, gozando de mayor libertad de expresión y movimientos con el nuevo sistema, llevan sus planteamientos reivindicativos a lugares de compromiso para el nuevo régimen, que se colocará ante la tesitura de actuar de forma represiva en contradicción con su ideología global o de tolerar actividades que puedan ser consideradas provocativas para sectores con servadores tan potentes e influyentes como el que ahora estudiamos.

Y con esto sólo nos referimos a temas concretos de la política republicana que consideramos los más específicamente influyentes, aparte queda la lógica oposición de un ente conservador en sí mismo a una política progresista en su conjunto, aunque objetivamente moderada, como la llevada a cabo en el primer bienio republicano.

La primera de aquellas fuentes concretas de conflicto Ejército-República, lo constituye el desarrollo del propio contenido constitucional de 9 de diciembre de 1.931, que contempla al Estado español como descentralizado en una serie de entidades autónomas que históricamente reivindicaban tal condición. Ello chocaba frontalmente con la concepción nacionalista y patriotérica que sostenía principalmente el sector más conservador de la milicia española, producto de la lamentable campaña colonial en sus últimos episodios.

Reflejo evidente de todo lo dicho es que la primera intento na de realizar un pronunciamiento contrario a la República, llevada a cabo por el general Sanjurjo en 1.932, tiene lugar de manera muy directamente relacionada con la discusión y aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el citado año. Tal afirmación es compartida por SÁlas Larrazábal que, acertadamente, le une sus consecuencias posteriores sobre el conjunto de la política republicana en materia religiosa y agraria. Dice así: "Durante el bienio de Azaña se

produjo el pronunciamiento de Sanjurjo, del tipo muy parecido a - - aquellos que intentaron los conspiradores antidictatoriales y que - tuvo su arranque en un intento de impedir la aprobación del Estatuto Catalán, que encontró fuerte resistencia en el país; la Ley de - Congregaciones Religiosas y la de Reforma Agraria, todas las cuales se vieron muy facilitadas por el fracasado intento que apenas - encontró eco en los cuarteles" (47).

Unicamente, aceptada la idea básica de la citada afirmación, disintimos en la consideración del intento de Sanjurjo como "muy parecido a aquellos que intentaron los conspiradores antidictatoriales", porque en este caso se dirigía contra la República y especialmente contra el sistema democrático establecido en aquella, pues no por otros medios menos legales se estaba llevando a cabo la discusión y aprobación del "Estatut Catalá". Tal intento de frustración del juego normal democrático califica las intenciones de Sanjurjo - y, aunque no fuera seguido mayoritariamente en los cuarteles, sí es válido para manifestar un determinado estado de ánimo en ciertos - sectores de las filas militares.

Payne se pronunciará igualmente en la línea que estamos siguiendo, respecto de la primera reacción seria del elemento militar a lo largo del primer bienio republicano. Ello lo hará con referencia previa a dos cuestiones de interés en el desarrollo de nuestro estudio. Por una parte, que el Ejército no se había movilizado en - medida alguna en defensa de las posiciones eclesiásticas a la hora de la aprobación de una Constitución laica; explicación elemental: el grupo de mandos militares no se destacaba precisamente por su militancia católica. Por otra, la incidencia del radicalismo republicano, en sus formas, respecto del modo de abordar la problemática y las necesarias reformas militares. Un exceso de radicalismo verbal y formal, que luego no se correspondía con el fondo legal y fáctico de tales reformas, no fue sino perjudicial para llevar a buen puerto la tarea emprendida.

Este autor afirma: "la primera cuestión de carácter no militar que causó un gran impacto en el cuerpo de oficiales fueron los preliminares del Estatuto de Autonomía regional para Cataluña, en el verano de 1.932" (48). Pocos días antes, tan sólo unas semanas antes de su aprobación, se produjo el citado intento de un grupo de oficiales --según este autor no serían más de 200, es decir, el 2% -- aproximadamente-- cuya cabeza visible era Sanjurjo que, ahí tenemos una buena apoyatura para sostener la neutralidad expectante y sólo negativa o pasiva del estamento militar el 14 de abril, en la fecha crucial de la proclamación de la República se hallaba al mando de la Guardia Civil, puesto clave para, con su pasividad, dejar vía libre a los acontecimientos.

Por otra parte, y en esta misma línea, considera T. de Lara el tema del intento llevado a cabo en aquel agosto de 1.932 aunque él matiza el hecho de que aquello respondiese más bien a una predisposición de determinados sectores, tanto militares como civiles, -- (no se olvide que el movimiento de Sanjurjo puede contemplarse como aglutinador de diversos movimientos, dispersos y menores, contra la República) en los que tanto influye el tema del Estatuto Catalán, -- como los de la Reforma Agraria y, en sí, el conjunto de reformas -- pensadas por el 1º bienio republicano. Todo ello, junto con otra serie de factores, propició el terreno y Sanjurjo no vino en lo militar sino a encabezar los movimientos dispersos ya iniciados, pues -- según T. de Lara: "Había una doble conspiración y, por consiguiente, dos objetivos; la ya citada (se refiere a la conspiración de una serie de militares monárquicos no en activo, Cavalcanti, Barrera, etc), de carácter monárquico, y otra, simplemente de derecha y antisocializante". (49)

Con esto ya tenemos diseñado un boceto elemental de uno de los puntos de la política global republicana de mayor influencia sobre el ánimo del cuerpo militar español. Y queremos señalar que, -- aunque no se tratara de una motivación exclusiva, sí fue la agluti-

nante de otras varias que animaban al Ejército desde sectores sociales civiles interesados y, desde luego, fué la que más llegó a la fibra sensible del Ejército, tradicionalmente autoconscienciado de su condición de guardián de la unidad patria, de una unidad cuyo concepto resulta ciertamente rígido e inflexible y, por ende, susceptible de variación y de admitir otras concepciones.

La segunda de las incidencias negativas sobre el ánimo militar, lo constituye lo que podríamos llamar clima aparente de inestabilidad e inseguridad sociopolítica.

Tal clima no es sino la lógica repercusión en la realidad cotidiana de las coordenadas de un régimen más abierto y tolerante con los diferentes grupos sociales y políticos insertos en él, aunque no participen del consenso básico que mantiene al sistema o, incluso, atenten clara o encubiertamente contra él.

No nos vamos a referir aquí específicamente, pues este no es el tema, al radicalismo verbal y formal tan típico de la experiencia republicana española en su segunda versión. Radicalismo heredado de concepciones liberales exaltadas más típicas de la centuria anterior, pero que tuvieron bastante vigencia en el momento que nos ocupa, principalmente en el seno de destacados partidos partidos burgueses que tuvieron un puesto importante en organismos rectores del sistema. Y no nos vamos a referir a él por entender que fué simplemente un ropaje externo que, en ningún caso, respondía a los supuestos reales llevados a la práctica política por quienes así se expresaban, aunque seamos igualmente conscientes de que fue muy perjudicial a la hora de imponerse en la realidad política cotidiana, por mucho que esta distase, hacia menos, de las expresiones verbales y terminología utilizadas. Y fue perjudicial muy principalmente en las relaciones con un estamento altamente sensibilizado como el militar y, mucho más, en lo tocante a la reforma de sus propias estructuras y modificación de sus intereses.

Nos vamos a referir en concreto, a la actuación radical de grupos situados a extramuros de los que constituían el sostén político republicano básico y, muy principalmente, a la izquierda obrera intransigente con la vía reformista progresiva propugnada por -- los partidos de la izquierda republicana y con la que colaboraban -- los obreristas del socialismo español. En definitiva, entendemos -- perjudicial para la aceptación del proyecto republicano por parte -- del Ejército, la actuación de grupos de la influencia y peso entre la clase obrera como la CNT que, con su postura radical e intransigente, contribuyeron a dificultar muy poderosamente el clima de consenso necesario para ir posibilitando la aceptación de una política reformista y progresista, por moderada que fuera, a instituciones -- tan reticentes al cambio como la militar, que ahora estudiamos.

Si citamos expresamente a la CNT y a ella nos referimos como principal grupo causante de la ruptura del consenso político republicano, no será porque no existan otros grupos minoritarios afines que se orienten hacia semejantes posturas, sino principalmente por tratarse del grupo más amplio, influyente y representativo de -- tales posturas discordantes y más claramente inclinadas a soluciones revolucionarias.

De que tal postura resultara especialmente molesta para sectores influyentes que buscaban en el Ejército el brazo necesario de apoyo para la involución, da fe el hecho de que, desde aquellos mismos sectores o sus aledaños, se alentasen posturas similares a las del anarco-faísmo con el sólo ánimo de, mediante la provocación, -- buscar la reacción. En tal sentido, queda la duda a diversos historiadores de la época de que, determinados sabotajes y agresiones en momentos especialmente significativas o sensibles, no fuesen un intento de echar leña al fuego que luego quemase a sus oponentes.

De la línea de actuación que vaya a seguir la CNT respecto de la República, débil ésta y siempre necesitada de ayuda de todos

los sectores progresistas para compensar el peso conservador que la amenazó constantemente, da idea el hecho de que aunque, como ya se cita en su apartado correspondiente, en el momento de la proclamación republicana este grupo se hallaba en período de intensa reorganización interna, sólo tres meses después de proclamado el nuevo régimen, nos encontramos al anarcosindicalismo enzarzado en una huelga de la Compañía Telefónica, rota después merced a la intervención pacificadora de UGT, que en aquella ocasión hubo de alinearse con los intereses de la multinacional ITT, a cambio de devolver la paz social tan necesaria en sus inicios al régimen.

Ello demuestra que, desde aquellos momentos iniciales y a pesar de su citado estado de reorganización interna, el anarcosindicalismo español se ratifica, frente a la línea política abierta por la República, en su apoliticismo que, adoptando "la acción directa y la huelga general como medios de lucha (...) significó para la CNT una verdadera actitud revolucionaria de negación de la actividad política." (50)

Pero es que, como sostiene el mismo autor, no tarda en desarrollarse una segunda fase que él denomina "ofensiva" y que implica una tentativa revolucionaria en toda regla, que tiene lugar en varias etapas bien definidas. Así, consideramos la del 18 de enero de 1.932 con el levantamiento comunista libertario del Alto Llobregat, sin perder de vista los sucesos de Castilblanco (Badajoz), pocos días antes. Tal dinámica se mantiene ascendente a lo largo de 1.933 con los sucesos de Casas Viejas en los primeros días de enero y culminará con la acción conjunta de octubre de 1.934.

En definitiva, cada uno de estos movimientos revolucionarios suponen una grave alteración del orden político y de la estabilidad social del país. Ello engendra igualmente enfrentamientos continuos, de carácter cruento, con la Guardia Civil, que tantos nexos comunes tiene con el propio Ejército. Según recogemos expresamente de Tuñón

de Lara, desde los primeros enfrentamientos que, por otra parte, -- son ordenados por el Gobierno republicano-socialista que no puede -- renunciar a ejercer la represión en aras del orden necesario, "se -- inicia una corriente en ciertos medios militares de solidaridad hacia la Guardia Civil" (51) o, lo que es lo mismo, de solidaridad -- con quienes a diario se ven enfrentados a aquellos revolucionarios que, inexorable e interesadamente, les son presentados como consecuencia del nuevo estado de cosas que se deriva del régimen republicano.

En suma, los dos puntos que consideramos aquí fundamentales como factores de inestabilidad en la posición del Ejército a lo largo de la II República: su particular visión de la "desmembración de la patria" y su conciencia de inseguridad y de estado de lucha continua en lo social, no son sino dos pilares básicos de lo que constituyó su acepción de la política republicana a lo largo de su primer bienio.

Queremos con ello decir que ahí no paran las contradicciones entre el Ejército español y la política general, progresista y reformadora republicana en sus primeros tiempos pues, como ya hemos apuntado, en su conjunto y al tener concepciones globales diferenciadas, sería pensable la definición progresivamente más acusada de dos macrocosmos que, necesariamente, habrían de chocar. Así lo -- define Salvador de Madariaga y, aceptándolo, lo recoge Ricardo de -- la Cierva, al sostener que "venía a ser, pues, el Ejército un Estado dentro del Estado." (52)

Tal situación se agudiza como consecuencia del comienzo de las reformas que afectan directamente al Ejército y a los militares. Ya dijimos que una de las características derivadas para el Ejército de su situación pretérita a la proclamación de la República, era una resistencia a todo cambio de su estructura por necesario que éste fuera. Precisamente, el inicio de la tarea reformadora por parte



del equipo de Manuel Azaña, hizo que el resto de las contradicciones que se vislumbraban entre Ejército y sociedad en la España republicana, se agudizaran considerablemente.

Puede decirse que, en definitiva, el Ejército se perfila como un gran grupo de presión que actúa en el marco de toda la sociedad española. Ello se agudiza, como ya hemos apuntado, por una serie de tensiones secundarias que emergen y se desarrollan en una sociedad inestable y en proceso de cambio, como la española republicana.

Nos referíamos en el párrafo anterior a la incidencia sobre la aceptación psicológica de la reforma por parte de los miembros del Ejército -incidencia obviamente negativa- de los términos radicales y jacobinos con que ésta se emprende en muchas ocasiones y -- por parte de muchos individuos. Aparte de la intensa campaña a que se somete a las clases inferiores de la jerarquía, principalmente a la clase de tropa, por parte de grupos extremistas y radicales, léase anarquistas y comunistas, infundiéndoles todo tipo de reivindicaciones demagógicas por su precipitación y utopismo inmediato que no hacían sino propagar la inestabilidad de las bases militares y, obviamente, eran un factor adicional de inquietud para oficiales y -- clases superiores, había otros argumentos de preocupación.

Puede también encuadrarse en este punto concreto la importante infiltración en los cuadros militares de destacados y numerosos miembros de la masonería, lo que no deja de constituir menor -- factor de enfrentamiento y desestabilización, al considerarse por -- otra parte de importantes sectores que, del mismo modo que rige la prohibición de militar en partido político alguno, algo parecido debe tener vigor con respecto a la masonería para los militares.

Por todo lo dicho, podemos establecer una determinada relación entre el concepto de grupo de presión, en su acepción convencional, y el estamento militar en su conjunto, a lo largo de la IIª República. Pero a tal afirmación hay que realizarle las debidas ma-

tizaciones porque, como hemos visto y vamos a ampliar más adelante, no puede en rigor sostenerse la total homogeneidad de puntos de vista en el seno de la milicia.

En consecuencia, habremos de entrar en el estudio de los grupos que puedan delimitarse, diferenciada y aisladamente, en el seno del Ejército y de cuáles sean sus características. Para ello puede servirnos como base y preámbulo la afirmación sostenida por Payne - de que, "En general, el "Ejército" o "el cuerpo de oficiales" difícilmente podrían ser considerados, en un sentido político de grupo, como entidad monolítica con puntos de vista políticos específicos. (...) Al inaugurarse la década de los años treinta, podría decirse que, prácticamente, todas las ideologías políticas existentes estaban representadas en el cuerpo de oficiales". (53)

El citado autor, recogiendo las causas más probables que determinan esa situación, se centrará en las tensiones políticas de 1.917-23, en la propia Dictadura, así como en "la actitud agresiva del nuevo régimen para con los militares profesionales".

Entendemos que el hecho de entrar en el estudio de los grupos que pueden diferenciarse en el seno del Ejército, no supone una contradicción importante con la afirmación que hemos venido sosteniendo hasta aquí de considerarle como institución netamente diferenciada de la sociedad en que se desarrolla. Entendemos que no lo es porque, si bien queda fuera de toda duda la formación que se va cerrando en torno al núcleo de la oficialidad profesional a medida que avanza su propia crisis, si está clara la existencia de un espíritu de cuerpo que diferencia e incluso aísla al Ejército de la sociedad, no es menos cierta la existencia de diferentes grupos internos en el propio Ejército; grupos que existen a causa de las razones que pocas líneas atrás acabamos de explicar y de los que tampoco es muy ajena la penetración de las diferentes ideas y opciones políticas -tan vigentes y ágiles en su desarrollo a lo largo de es-

ta etapa- por muy impermeable que pretendiera ser a ellas la institución militar.

Asimismo, entendemos, habrá de ser éste contexto idóneo para introducir en él el estudio de aquellos otros grupos no específicamente militares, que tienen una incidencia muy importante al actuar de forma paralela a como lo hacen los del seno del Ejército y al contar decisivamente a la hora de poder emprender acciones de forma -- coordinada y conjunta o, mismamente, animar o incentivar a que tales acciones sean emprendidas por la milicia ordinaria.

En el capítulo II de este trabajo ya apuntábamos cómo, en -- los años pretéritos a la proclamación de este régimen, se producía -- la existencia de dos grupos o tendencias definidas en el seno militar. De una parte, los genéricamente denominados "africanistas" y, -- de otra, aquellos que se hallaban integrados en las Juntas de Defensa ahora desaparecidas.

Estas últimas ya habían desaparecido de la circulación mucho antes del 14 de abril de 1.931 pero, no obstante, y tal y como destaca R. de la Cierva, probablemente fuera el espíritu de aquellas tradicionales Juntas algo que perdurase en la milicia de la etapa republicana. Este autor, llegando a realizar una serie de precisiones excesivamente particulares, llegará a afirmar que, tal revivido espíritu de las Juntas, se apreciará tanto por la "extrema derecha" como por la "extrema izquierda" y que, "antes de terminar el bienio Azaña se llaman, respectivamente, Unión Militar Española (UME) y Unión Militar Antifascista (UMA), que después evolucionó a la UMRA con el -- nuevo y cada vez más falso adjetivo de "republicana" ". (54)

Estos dos grupos, que quedarán definidos cada vez con mayor precisión y, a la vez, con más clara oposición y enfrentamiento a medida que transcurran los años de la República, sobre todo a medida que se aproxima el año 1.936, serán tratados posteriormente, luego de que hagamos referencia a los también citados "africanistas".

El grupo de los africanistas mantiene su cohesión y su espíritu en el período republicano. Si recordamos que sus afanes combativos en Marruecos y la sucesiva realización de aquellas campañas son los orígenes y razones de la configuración de este grupo y que, fundamentalmente, habían tenido como gran incentivo de sus carreras y - para salir del burocratismo de la Península, el sistema de ascenso - por méritos en campaña que tanto apreciaron -frente al estricto profesionalismo propugnado por las Juntas de Defensa para los ascensos, al abogar porque éstos se realizaran por estricto orden de antigüedad-, chocarían precisamente con la Reforma Azañista en aquella parcela de ésta que fue marcada por la disposición del 12 de noviembre de 1.932, que prohibía aquel tipo de ascensos para las escalas inferiores a general, así como con aquella otra que contemplaba la posibilidad de anular aquellos ascensos por méritos de algún tipo, que - se hubiesen obtenido durante la Dictadura de P. de Rivera.

Pertenece a este grupo que consideramos el general Sanjurjo, cuya actividad antirrepublicana no tardó en hacerse patente e intentada, en agosto del año 1.932, una conspiración con el apoyo de otros militares también africanistas, así como del núcleo de monárquicos - que no desaprovechaban ocasión para tratar de conseguir la caída de la República. Dado el fracaso de la intentona, en la que no estuvieron implicados demasiados mandos militares, el laureado general Sanjurjo fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada, sirviendo ello a la República para la continuación, temporalmente firme, de su tarea reformadora militar y global.

Este grupo de africanistas se decantaba casi totalmente y, - como no era menos de esperar, hacia posturas antirrepublicanas claras, constituyendo el núcleo fundamental de los generales que se sublevaron en 1.936 contra la República.

Pero el núcleo más importante de militares que se decantan por la sublevación de julio, junto con los ya citados, son los que comen

zarán a agruparse en la UME a partir de 1.933, y con ellos, veremos aparecer el primero de los grupos dentro del Ejército que nacerá y se desarrollará a lo largo de la etapa republicana.

A finales de 1.933 es cuando se constituye la Unión Militar Española, originalmente en torno a un pequeño núcleo de oficiales -- que más tarde se ampliará considerablemente, cuyas características -- principales eran las siguientes:

1.- Se trataba en sus orígenes de oficiales de baja y media graduación, cuya principal laguna fue, con toda probabilidad, la falta de miembros del generalato entre sus filas, que hasta última hora no participan en el grupo.

2.- La creencia de la absoluta falta de viabilidad del modelo republicano, independientemente del Gobierno que rigiese sus destinos, pues a ninguno consideraban capaz de frenar los desórdenes revolucionarios que ellos veían constantemente.

3.- Su organización en grupos con cierta autonomía, que perseguían incluso finalidades variadas, aún con los comunes denominados de los puntos 1 y 2.

Por las características y los propósitos de la UME, era pensable que se trataría del más importante grupo antirrepublicano dentro del Ejército, ya que, los militares monárquicos no demostraron -- el empuje y la capacidad de organización que este creciente grupo de oficiales, que entablaron también contactos con aquellos así como, -- lo que es bien significativo, con Falange Española de José Antonio -- Primo de Rivera, puesto que el primer dirigente de la UME era simpatizante de este grupo, el coronel Emilio Rodríguez Tarduchy.

En línea coherente con sus planteamientos, tuvo gran incidencia en este grupo y fue el espaldarazo definitivo para su fortalecimiento, el intento revolucionario localizado en Asturias, en octubre de 1.934 que, de alguna manera, venía a confirmar su tesis del cada

vez más difícil mantenimiento del orden y del grave peligro revolucionario que se cernía sobre España, sin que un débil régimen liberal democrático fuera capaz de controlarlo.

Desde aquel momento van en aumento sus efectivos y, además, empiezan a entablarse incipientes contactos de cara a la sublevación, tanto con el movimiento falangista, que ya hemos estudiado y situamos en la línea de los fascismos europeos, en ascenso en la etapa, a través de sus dirigentes Pardo Reina y Barba Hernández con José Antonio; así como con los conspiradores monárquicos, tanto en su rama -- carlista como alfonsina, utilizando como interlocutor a Galarza.

Corrían los primeros meses de 1.935 y este grupo de la UME -- se centraba con sus esfuerzos en la preparación de una sublevación o un nuevo pronunciamiento, lejos ya de otro tipo de manifestaciones o declaraciones en línea anterior, que se referían a la defensa del Gobierno contra la revolución.

A tal altura del tiempo y con la debilidad manifiesta, todavía, de su escasa implantación entre los generales que eran fundamentales para plantear un intento serio de acceso al poder mediante un golpe de fuerza, los miembros más importantes de la UME y sus corrientes de simpatía eran los siguientes: "Barba Hernández, a quien se -- puede calificar simplemente de militarista; el teniente coronel retirado de infantería Tarduchy, antiguo falangista, carlista en esos momentos; el comandante retirado de infantería Luis Arredondo, principal jefe de la milicia falangista, y uno de los más eficaces organizadores de la UME; el coronel retirado de infantería Ricardo Rada, -- decididamente carlista; y finalmente, el capitán de ingenieros Sánchez Sacristán y el capitán de infantería Gándara, cuyas ideas políticas son más difíciles de clasificar." (55)

Fue el resultado de las elecciones de febrero de 1.936 el -- que, disipando todas las posibles dudas acerca del transcurso de la República por vías derechistas de la mano del Gobierno radical-cedís

ta, centró las voluntades en la sublevación. Crecieron los contactos y se desarrolló numéricamente la UME a gran velocidad, de tal manera que existen cifras que nos hablan de que casi la mitad de los oficiales en activo del Ejército español, y muchos suboficiales, pertenecían a la UME.

Su talón de aquiles, la falta de generales, tampoco iba a -- ser determinante por cuanto que, una mayoría de oficiales generales, eran pertenecientes al grupo de los africanistas y no sería muy difícil la existencia de importantes convergencias que facilitaran una -- entente de la UME con los generales de aquella tendencia (Franco, Mo la, Goded, Saliquet, Varela, Galarza, Villegas --uno de los pocos que pertenecía a la UME--, M. Anido, Sanjurjo), que ya preparaban los últimos detalles para la constitución de un gobierno militar de repuesto luego del derribo de la República.

Una vez analizado este grupo de Unión Militar Española que, junto con un buen número de militares africanistas, constituyeron la facción más definidamente conservadora y nacionalista que se opusó a la República dentro del Ejército, consideramos el otro extremo.

Es una bipolarización ciertamente peligrosa, no sólo para la perdurabilidad de la República, que ya se encontraba en una inestable posición con tan fuertes grupos enfrente como los citados anteriormente, sino por los oscuros presagios de enfrentamiento que luego, desgraciadamente, se confirmaron, apareció otro grupo en el seno del Ejército con características diametralmente opuestas a las de la UME. Nos referimos ahora a aquellos militares de talante fuertemente liberal, democrático e izquierdista, que se organizan en la citada ya -- Unión Militar de Republicanos Antifascistas (UMRA) y que tienen como finalidades básicas la de contrarrestar la influencia derechista de la UME en el Ejército fomentando la de la izquierda y la de intentar defender al régimen republicano tan atacado desde el otro ángulo.

La potenciación de este grupo tiene igualmente su punto de --

mayor interés desde la victoria frentepopulista en las elecciones de 1.936 (febrero). En contraste con la constitución orgánica de la UME, esta organización que ahora nos ocupa, aparte de contar entre sus filas a oficiales, aceptaba entre sus miembros a las clases de tropa y tenía relación con la militancia de los partidos socialista y comunista.

El Partido Comunista era especialmente celoso de su infiltración en el Ejército, a través de sus miembros pertenecientes a la --clase de tropa que, lógicamente estaba integrada en su gran mayoría por miembros de las clases sociales inferiores. Se llegó a sostener por fuentes fiables de la oficialidad que, allá por 1.935, el 25% --aproximadamente de las clases de tropa pertenecían a los partidos de izquierdas. (56)

Esta organización que fuera creada por un oficial de baja --graduación, el capitán Eleuterio Díaz Tendero, tuvo numéricamente mucha menor entidad que la UME, pero ello no quita para que acogiera --nombres destacados en su seno, como los de Núñez de Prado, José Asen-sio, Luis Romero, del Rosal, Castillo (teniente cuyo asesinato por --pistoleros ultraderechistas, fue el elemento desencadenante de una --dinámica que, al acabar con la vida de Calvo Sotelo, llegó a consti-tuir pretendido "casus belli" para la rebelión), etc..

No quedaría completa esta referencia a los grupos de presión en el seno del Ejército, si no se tuvieran en cuenta y, sobre todo, en el momento crucial de dar el paso definitivo de la confrontación militar, una serie de grupos cuya mejor denominación puede ser la de paramilitares. Unos grupos que, con unas características organizati-vas semejantes a la de las unidades militares, se colocaron a uno u otro lado, en los dos bloques perfectamente definidos y que se con-templaban en los últimos meses de la República.

En tal sentido, habremos de citar tanto a las Milicias Anti-



Fascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que se situaban próximas al PCE, como al Requeté, que de tendencia carlista y con implantación territorial fundamental en la región Navarra, fueron el grupo mejor preparado y organizado, así como dotado de material, de entre todos los que contribuyeron a la lucha armada contra la República fuera -- del Ejército. Finalmente, en el mismo sentido que los carlistas, hay que considerar a los Falangistas, que también constituyeron milicias de choque armado con menor entidad pero igualmente dignos de mención.

Cabe sostener, una vez analizados los grupos que pueden destacarse en el seno del Ejército a lo largo de la República que, en -- síntesis, y considerando en su conjunto, la actitud del Ejército respecto de la República y, por ende, las relaciones mutuas, fueron variando en los diferentes períodos que conducen desde el 14 de abril de 1.931 al 17 de julio de 1.936, principalmente en función del matiz político de las élites gobernantes en cada momento y de su actitud respecto de aquel.

Luego de unos primeros momentos de inhibición y pasividad ante los acontecimientos, comienzan con suma celeridad los primeros -- cambios emprendidos por el Gobierno Provisional con Azaña a la cabeza, que producen como respuesta las primeras reacciones que se traducen en una mayor tensión en las relaciones, aunque no se explicitan hasta 1.932 de la mano de Sanjurjo y al frente de diversos grupos militares opuestos al modelo republicano.

El fracaso del intento de Sanjurjo anima a proseguir la marcha de las reformas y no habrá cambios cualitativos en el estado de las relaciones, que variarán como consecuencia del importante giro -- acusado en el Gobierno republicano a raíz de las elecciones de noviembre de 1.933 y que es consecuencia de un deterioro político-social de la situación inicial, en el cual nó interviene directamente el estamento militar.

El inicio de este IIº bienio comportará un estado de disten-

sión, dadas las perspectivas de acercamiento que implica el hecho de quedar el Gobierno en manos de grupos más conservadores que, de una parte, vienen a resolver los problemas económicos y sociales en la línea propugnada por la oficialidad crítica con el sistema y, de otra, dan marcha atrás en alguna de las reformas consideradas fundamentales por los Azañistas pero que, al no satisfacer a significativos grupos militares, comportan ahora su contento.

Tal situación de "entente" se hace más neta cuando entra la CEDA en el poder y ocupa la cartera de Guerra José M<sup>a</sup> Gil Robles.

Destacaremos en su política militar, el sentido de restitución que comportan principalmente sus disposiciones relativas a nombramientos y destinos de los mandos que se entregan, como ya destacaremos en el capítulo V, a generales y oficiales de talante conservador, nacionalista e, incluso, reaccionarios que, por otra parte, son los máximos dirigentes de la contestación al espíritu de la reforma del I<sup>o</sup> bienio y, por lo tanto, a la concepción republicana del Ejército.

Los meses finales de 1.935 y, principalmente, la etapa del Frente Popular, será decisiva en la actitud del Ejército respecto de la República pues, mientras que ésta está gobernada por las fuerzas más radicales, que denotan ánimos de revancha ante el cúmulo de frustraciones encontradas en la República en su giro del II<sup>o</sup> bienio y que, obviamente, realizarán más presiones y una política más agresiva con instituciones tan caracterizadas por su conservadurismo como el Ejército, éste adoptará su reacción definitiva contra la República pues, de su división en dos bloques opuestos, será triunfante y mayoritario el que tenga como fin acabar con el modelo republicano.

#### IV.5.- LA IGLESIA: EVOLUCION Y POSTURAS

A la vista de la dinámica de los acontecimientos en las primeras semanas republicanas, hay que pensar que un giro radical se comienza a plantear para la Iglesia con la llegada del nuevo régimen. Su posición ahora va a diferir en mucho de la que venía manteniendo con la Monarquía y últimamente con la Dictadura. Ya veremos en el capítulo subsiguiente cuales serán las principales transformaciones realizadas en este orden por el intento republicano.

Ahora nos centraremos en la diferente posición ante la que se encuentra la Iglesia con la llegada del nuevo régimen y las presiones e intereses que se ponen en juego, tanto a favor como en contra, para lograr los objetivos propuestos desde cada ángulo.

Poco importarían ahora los datos sobre el potencial económico, medios humanos, etc., con que contaba la Iglesia Católica en España cuando se proclama la República. Ante todo, es un dato el más evidente cualitativamente y el que más nos interesa: desde el ángulo republicano se tenía perfecta conciencia de que la Iglesia había contribuido a sostener al caído régimen, de que alcanzaba un alto grado de poder e influencia en la vida nacional, y que ello era atribuido al potencial de las órdenes religiosas en España y a su dominio de importantes resortes de la vida ciudadana: su gran influencia social y su predominio en la orientación y el control del sistema educativo.

Si todo esto estaba claro para las mentes liberales y republicanas que sostenían el nuevo régimen, no puede decirse que se tratase de una concepción equívoca, ya que, como hemos referido en algún otro epígrafe de nuestro presente trabajo, la posición dominante y privilegiada de la Iglesia en España databa de siglos y, a la altura de los años treinta del XX, quedaban por hacer en nuestro país una serie de transformaciones en este campo, que ya se habían

ido realizando en Europa de forma gradual, desde la consolidación - misma del Estado Moderno superador de la idea medieval de "Comunidad Universal" de inspiración teocrática y, no digamos nada, desde la base de los principios inspiradores del revolucionarismo burgués, que se va desarrollando en toda su extensión a lo largo del siglo - XIX europeo.

Prácticamente toda la literatura disponible sobre el problema religioso en la Segunda República parte de la consideración de - que el lugar que ocupa la Iglesia española, social y políticamente, era impropio de los tiempos que corrían.

La República, bien es cierto que animada en muchos casos por unos ímpetus radicales más bien anclados en posturas y principios - pertenecientes a las mentalidades del anterior siglo; aunque, en general, regida por un espíritu racionalizador y laico del corte que requería el sistema democrático-parlamentario que traía consigo, - abordó de inmediato la reforma de la situación y el cambio de la legislación que permitía que las relaciones Iglesia-Estado estuvieran presididas por un predominio de la primera en muchos campos, de suyo temporales y laicos.

Era evidente que dos fuerzas tradicional y antinaturalmente identificadas, entrarían en una fuerte dinámica de enfrentamiento - de intereses: una para colocar las cosas en su sitio y hacerlas - coherentes con la inspiración que habría de dársele al nuevo régimen. La otra para defender los intereses y privilegios derivados de motivos históricos más que racionales.

Está claro que la hostilidad comenzaría pronto y que, desde sus inicios, el tema se situó en un plano eminentemente político.

Hemos visto cómo la República contiene los denominadores comunes de todo régimen liberal, parlamentario y con inquietudes socializantes, debido a las bases en que se apoya en el ámbito de ma-

sas, que no podían ser aportadas por los partidos republicanos pues, sencillamente, éstos no contaban con un cuerpo social idóneo para - sus intereses y estructuras: unas poderosas clases medias, que lo - hubieran sido de existir en nuestro país con una cierta entidad. - Así pues, la República burguesa con unos partidos republicanos que no eran los más importantes, ni menos determinantes para imprimir su carácter; por ende, hubo de contar con el apoyo de las masas socialistas, a lo que había que añadir la estimable aportación intelectual con que contó; todo ello, en fin, la configuró de forma incompatible con los términos en que se venía desarrollando en España la existencia de la Institución Eclesiástica, supuesto que:

- 1) Si la Iglesia había estado estrechamente vinculada a los intereses de la caída Monarquía, tal sería razón suficiente para la hosti lidad anticlerical de los políticos republicanos, que eran la alternativa y solución de recambio a la desaparecida Monarquía.
- 2) Si la Iglesia se había colocado en España tradicionalmente al la do de los poderosos y ella misma tenía importantes medios de poder, quedaría explicado el anti clericalismo de las fuerzas obreras, alia das republicanas ahora, y no digamos el de aquellas que aún se si tuaban más a la izquierda del propio marco republicano.
- 3) Si hemos visto cómo la Iglesia quedaba anclada en el pasado y cu bría por otros medios el vacío cultural de la población, constitu yéndose en un "freno para el progreso", será suficiente explicación para fundamentar el anticlericalismo de los intelectuales que, como decíamos, tanto peso tuvieron en la fundamentación político-ideológica de la Segunda República, en un sentido racionalizador y moder nizador.

Asuntos pues, de adscripción política, de alineación económi ca y de freno al progreso, son los que básicamente motivaron la si tuación problemática Iglesia-Estado, con el mero advenimiento de la

República.

Por lo tanto, el ambiente general contemplaba un fuerte sentimiento anticlerical del que no estaba exenta de responsabilidades la propia Iglesia. Pero, como es notorio, ésta mantenía un importante grado de adhesiones a su favor, tanto en el sentido del mantenimiento de un poderío y fuerza considerables, como en cuanto a la permanencia en las bases sociales españolas de un cierto sentimiento religioso que, si bien pudo haber estado mitigado en algún momento, no había desaparecido en absoluto y podía reverdecer al mandato de las circunstancias, como en realidad llegaría a ocurrir.

Que esta tensión se reflejara en los programas e idearios de los partidos políticos en liza no solo era evidente, sino coherente con la lógica del sistema establecido. Los partidos políticos de uno u otro signo, que ya han sido considerados en nuestro trabajo y abordado su estudio, toman parte en la polémica religiosa a lo largo de la Segunda República como actores naturales y lógicos protagonistas.

El Parlamento fué escenario de duras luchas en este terreno durante los debates en que se prepara la legislación, tanto superior como ordinaria, en este período republicano. Era el marco natural para abordar estos temas y, de los resultados de aquellos debates en que se elaboran los nuevos instrumentos jurídicos que transforman el anterior "status" Iglesia-Estado, trataremos en el punto correspondiente del esquema, donde se recogerá la regulación del tema religioso en su aspecto constitucional, así como la legislación ordinaria derivada: situación de las órdenes religiosas, enseñanza confesional, etc.

Por el momento, nos interesa mucho más centrarnos en la posición de defensa de sus intereses que adopta la propia Iglesia, en el instante en que vislumbra los intentos de modificar su preeminente posición secular. Posición defensiva que, realizada tanto desde

el seno de la propia jerarquía española, como desde el centro superior del Vaticano, hemos de plantearla en los justos términos en - que se llevó a cabo en su momento, es decir, en el ámbito de la lucha política temporal.

Por lo tanto, cabe sostener y tal es la postura que entendemos correcta, que la Iglesia española durante la Segunda República juega un papel en el terreno político típico de lo que se ha definido en la teoría política como grupo de presión, de interés o de opinión, según sea la faceta que quepa considerar. Tal papel de defensa de sus intereses temporales y materiales concretos lo realiza, - insistimos, no solamente mediante la actuación de la jerarquía española y vaticana oficiales, sino mediante la actuación de otros grupos específicos, instituciones subordinadas o partidos políticos, - de neto matiz confesional, aunque orgánicamente independientes de - la Iglesia oficial.

En cuanto a su actuación a través de su propia jerarquía, - cuando se llevó a cabo, inicialmente se partió de posturas moderadas y expectantes, siempre pendientes de que la nueva normativa no fuese demasiado lejos y de que una declaración reticente hecha con precipitación no agravara las cosas,

No fué así la táctica individual seguida por algunos miembros concretos de esa jerarquía, que apostaron por manifestarse en sentido más conservador e intolerante, destacando el caso del Prímado de España y Arzobispo de Toledo, D. Pedro Segura.

En definitiva, "En la Iglesia, como en toda sociedad, cabe - hablar de una política, que tampoco será sólo la que se titula oficial, sino que ha de encerrar también toda esa gama de declaraciones aisladas, presiones y posturas individuales, actuaciones semioficiales, etc.". (57) Porque, según este mismo autor, cabe hablar - de "numerosos grupos de carácter sobre todo ideológico, que al ampa

ro eclesiástico habían nacido y constituyeron, sin lugar a dudas, - verdaderos grupos de presión en favor de la postura de la Iglesia." (58)

Así pues, desde el punto de vista del Episcopado español, en la línea que destacábamos más arriba, su primera declaración ve la luz el día 1º de mayo del mismo año 1.931, aconsejando prudencia y mostrándose a la expectativa de los acontecimientos. No sucede lo mismo, en la línea también antedicha, con la primera declaración - del Cardenal Segura, que en ese mismo mes de mayo comienza las hostilidades ante la proclamación, por parte del Gobierno Provisional republicano de "la libertad de creencia y culto frente a las fórmulas restrictivas de la Constitución del 76." (59). Es una primera - declaración "preventiva", cuando ni siquiera se han empezado a afectar los intereses de la Iglesia.

En junio de 1.931, al mes siguiente, es expulsado Segura de España, aduciendo el Gobierno motivos de seguridad para la persona del propio Primado, por adivinar el peligro de que algunos grupos - pudieran atentar contra su vida; con lo que comienzan también los - errores por parte gubernamental.

El mismo mes, día 25, se suscribe una Pastoral Colectiva que protesta contra los contenidos del Anteproyecto de Constitución elaborado por una comisión de juristas, que serviría como documento - parlamentario de trabajo a la hora de dar al país una nueva Constitución. Los puntos específicos del Anteproyecto sobre los que hace hincapié la protesta son los siguientes:

- La definición laica del Estado
- La separación de la Iglesia y el Estado
- La subordinación al Estado en materia de educación, órdenes religiosas, independencia de los Prelados e inmunidad de la Iglesia.



El Vaticano, a través del Nuncio de Su Santidad, Monseñor Tedeschini, también interviene en sentido apaciguador en el caso Segura.

Es lógico pensar que esta postura inicial de la jerarquía española fuera modificándose y evolucionando en función de la marcha de los acontecimientos republicanos en materia eclesiástico-religiosa. Si en un primer momento reinaba el ánimo de concordia, invariablemente reaccionaba esta jerarquía en tono discrepante ante cada nueva medida tomada por el Gobierno que supusiera importantes alteraciones en materia religiosa: aprobación de la Constitución, disolución de la Compañía de Jesús, ley de divorcio, ley de congregaciones, disminución y posterior supresión de las partidas presupuestarias dedicadas a "culto y clero", etc., etc. Pensemos que, desde el punto de vista eclesiástico, todo aquello era considerado como una injerencia del poder republicano en unos derechos tradicionalmente reconocidos a la Iglesia.

Es decir, se admite como legítimo al poder republicano, pero ya no se está de acuerdo con tal poder cuando toma medidas que afectan a los intereses, animándose a los propios fieles católicos a tomar postura contra ese gobierno que emprende tales acciones lesivas. Que duda cabe que tales presiones de la Iglesia sobre los fieles - van a tener un reflejo muy evidente en los resultados electorales - de noviembre de 1.933, pudiéndose sostener que, uno de los temas - que hacen que claramente se decante la situación del lado de la derecha en aquellas elecciones, es la política religiosa republicana y la presión de la jerarquía eclesiástica sobre los electores.

Es indudable que a raíz de la formación del gobierno que sale de tales elecciones, el comportamiento republicano para con la Iglesia da un apreciable giro pudiéndose diferenciar, a título ordenador y orientador, dos etapas fundamentales de las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de la Segunda República:

El primer bienio, "Azañista" o "Republicano-Socialista", en que se toman las principales decisiones reformadoras que tienen relación con la Iglesia. Etapa de mayor conflicto, que hará reconocer al mismo Azaña cómo este factor fué el decisivo para el fracaso de este intento republicano.

El segundo bienio, "Radical-Cedista", en que se moderan las reformas, se establece una mayor "entente" e, incluso, se dan medidas de restitución.

No es menor la intervención de la Jerarquía Romana en la polémica relación Iglesia-República, siempre en razón de la marcha de los acontecimientos, ni tampoco hay que dejar de considerar la apreciable incidencia que tal intervención tuvo, no solamente sobre las bases católicas a la hora de enfrentarse con las elecciones de -- 1.933, sino a efectos de moralizar y potenciar la batalla de la jerarquía y grupos internos.

Bien es cierto que tal intervención pontificia se hace como supuesto último recurso, luego de todo tipo de presiones indirectas que se realizan para lograr sujetar la ley de Congregaciones Religiosas que, como se verá más adelante, será la que impida el ejercicio de la enseñanza a personas e instituciones clericales y, obviamente, es quizá el centro de mayores intereses para la Iglesia, no solo por su faceta económica, sino por el control y dominio cultural, intelectual e ideológico que la enseñanza le otorgaba. Naturalmente, es aquí donde echan "toda la carne en el asador" y, luego de las presiones parlamentarias, que más tarde llegan al propio Presidente Alcalá Zamora a sabiendas de su moderación y respeto por la religión, en todas las formas imaginables se publica una encíclica del Papa Pío XI referida expresamente a la situación de la Iglesia española.

Parecía evidente que el documento pontificio estaba ya redactado y listo para su publicación desde que la ley salió del Parla-

mento, pero se consideró oportuno demorar su publicación para ver - si surtían efecto las últimas presiones directas sobre el mismo Presidente. Promulgada la ley por la firma de Alcalá Zamora el 2 de junio de 1.933, en un acto de absoluta coordinación jerarquía españo-la-Santa Sede, se publica el día siguiente (3 de junio de 1.933) la encíclica "Dilectíssima Nobis", subtitulada "sobre la situación de la Iglesia Española".

Consideramos suficiente pronunciamiento acerca de la situa-ción española el mero hecho de la publicación de una encíclica pa-pal "ad hoc", para la "sumamente amada (...) nación española". Esto solo es ya un elemento de juicio para conocer la importancia que pa-ra la Iglesia Católica nacional y romana, tenía la situación por la que atravesaba en España. No hay que perder de vista que, aunque el momento histórico por el que atravesaba el mundo era crucial, tanto en el pontificado de Pío XI como en los de su antecesor y sucesor, respectivamente León XIII y Pío XII, por sus continuas conmociones sociales, políticas y económicas e, incluso bélicas, no era muy frecuenta, por parte de la máxima jerarquía eclesiástica, la publica-ción de encíclicas específicamente destinadas a Iglesias nacionales particulares. Dedicándose por esta vía a pronunciarse mayormente sobre problemas más amplios en cuanto a su temática y ámbito territo-rial.

Habían de suceder acontecimientos extremadamente graves como para que una encíclica se dirigiese a la problemática de un solo Estado o su Iglesia Nacional. Concretamente, el Pontífice Pío XI, au-tor de esta que nos ocupa relativa a España, dió igualmente a la pu-blicidad solamente otras dos de igual alcance: en 1.932, la "Acerba Animi", dedicada a la Iglesia Mejicana por la hostilidad y especial persecución de que era objeto la Iglesia en aquella nación y, en - 1.937 la que destinara a la Iglesia del III Reich alemán, "Mit Bren-nender Sorge" en la que, por obvias razones, se ponía de manifiesto

la "viva preocupación" por la situación de los católicos bajo el na  
zi alemán; tema sobre el cual insistiría el Pontificado en posterior  
es empeños.

En la "Dilectissima Nobis" -"Sumamente amada"-, se contiene expresamente una toma de posición contraria a la "Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas" aprobada por la Segunda República y, en concreto, en ella se dice que "esta constituye una nueva y -  
 más grave ofensa, no solo a la Religión y a la Iglesia, sino tam- -  
 bién a los mismos principios e instituciones de libertad civil, sobre los cuales se basa, según pregonan, el nuevo régimen español".  
 ( 60)

Se afirma que nada tiene la Iglesia contra la reforma republicana de Estado, como lo demuestra el hecho de que hayan sido sus  
critos concordatos con otras naciones de semejante forma de organización; pero, no obstante, se critica abiertamente a la misma Constitución de la República en el documento papal, por reconocer que -  
 el Estado no tenga religión oficial, cuando la población española -  
 se mantiene siendo mayoritariamente católica.

Evidentemente, es en el terreno material donde juegan los in  
tereses que ponen en funcionamiento, de manera más acusada, los mecanismos de presión y, naturalmente, es en este terreno donde se -  
 contempla mayor nivel de quejas en la propia encíclica por la actua  
ción del Estado Republicano. En tal sentido, se critica la usurpación por parte del Estado de bienes y propiedades "legítimamente ad  
quiridos, o donados a ella por piadosos fieles", así como la retirada de las asignaciones presupuestarias destinadas a culto y clero. Incidiendo posteriormente en el tema de la prohibición de la enseñanza a los religiosos, a pesar de que, según el documento papal, -  
 "la experiencia demuestra con cuanto cuidado y con cuanta competencia han cumplido siempre su deber los religiosos", así como sus - -

"magníficos resultados".

En razón de todas las ofensas y limitaciones de los intereses de la Iglesia no solo mediante la Ley de Congregaciones Religiosas sino, en general, a lo largo de todo el régimen republicano y por diversas vías, concluye la encíclica animando a los católicos españoles a que se valgan de "todos los medios legítimos, que por derecho natural y por disposiciones legales quedan a su alcance a fin inducir a los mismos legisladores a reformar disposiciones tan contrarias a los derechos de todo ciudadano y tan hostiles a la - - Iglesia sustituyéndolas con otras que sean conciliables con la conciencia católica". Así como a fomentar su unión, dejando de lado diferencias de matiz, "y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal".

Esta encíclica de Pío XI, que partía de la premisa del mantenimiento en España de una fuerte creencia católica por parte de la mayoría de la población, supone una presión y una influencia directa en la vida política interior de la República. Su efecto abstracto fué el de un fortalecimiento de todas aquellas posturas políticas que, con el denominador común de su catolicismo, mantenían una lucha constante en defensa de unos concretos intereses a lo largo de toda la República.

Cuando el documento papal está hablando de lucha "con todos los medios legítimos", está empleando un concepto ciertamente mas - amplio que el de la legalidad establecida. Medios legítimos que, - aún siendo conformes al derecho natural, no hacen sino legitimar - posturas externas al derecho legalmente establecido en la República española. Mientras que al hablar de lucha conforme a las "disposiciones legales", aunque se inscribe dentro de la más estricta legalidad y es legítima tal afirmación, a nuestro entender, no supone - sino un fortalecimiento de aquellas posturas que adoptan la propia legalidad establecida por la República española como vía instrumen-

tal de lucha contra esta. Posturas que, a la altura de la publicación de la encíclica, están representadas, concreta y específicamente, por la Confederación Española de Derechas Autónomas, que se fortalece y avanza en su proceso de consolidación para participar en la lucha electoral con posibilidades de éxito para, una vez alcanzado el poder, desvirtuar el contenido de la República para equipararlo al sistema dominante antes de su proclamación.

Quedaría perfectamente demostrado que el éxito de esta vía - estaba al alcance de sus manos como consecuencia de la confrontación electoral que tiene lugar en noviembre de 1.933, en que aquellas fuerzas de derechas se aproximan a las áreas de decisión, entrando poco después a la ocupación del gobierno y realizando una política mucho más acorde con los intereses de la Iglesia y sus afines. Era evidente que este éxito electoral había sido posibilitado, entre otras cosas, por el funcionamiento de todos los grupos de presión eclesiásticos inspirados en no escasa medida por la ejercida - por la propia Santa Sede a través, concretamente, del documento que acabamos de estudiar, cuya importancia queda fuera de toda discusión. No obstante, sería ilógico pensar que, solo exclusivamente - por tales presiones de intereses, daría un giro copernicano el matiz de la gobernación republicana entre su primer y segundo bienio de existencia; no puede quedar al margen del análisis el hecho de - que la República, en lo referente a su política religiosa y a sus relaciones con la Iglesia, cometió evidentes errores que abonaron - el camino al éxito de las presiones.

Dentro de la coherencia del comportamiento Iglesia-Estado - dentro de la República, en función de la evolución de los acontecimientos políticos que pudieran afectar a los intereses de la Iglesia, podemos contemplar las actuaciones del Episcopado español, que actúa en coordinación con la Santa Sede en los asuntos fundamentales. Pero, además, están otros niveles inferiores de comportamiento, que

corren a cargo de grupos de presión específicos no encuadrados en la jerarquía eclesiástica, pero que actúan en la misma dirección de defensa de los mismos intereses.

En lo referente a la jerarquía eclesiástica española oficial ya veíamos cómo manteniendo inicialmente una postura de expectante moderación a la vista de los acontecimientos primeros y siguiendo - las recomendaciones de prudencia de Roma, enviadas a través de su - Nuncio en España Monseñor Tedeschini, pasa a pronunciarse colectivamente ante las diversas circunstancias que así lo aconsejan. Ello - no es óbice para que algunos Prelados, siempre a título personal, - adopten posturas más extremas y tengan contenciosos más agudos con el régimen republicano, caso del ya citado Cardenal Segura. Concretamente, en coordinación con el documento elaborado por la Santa Sede sobre la situación de la Iglesia en España, a raíz de la promulgación de la Ley de Congregaciones Religiosas, la jerarquía españolula prepara igualmente un documento de similares características al estudiado, que recoge los mismos motivos de queja y desacuerdo, centrándose en la injusticia del trato para con la Iglesia respecto de otras instituciones y ciudadanos españoles, según la propia Constitución, haciendo hincapié, lógicamente, en el tema de la enseñanza y de la función docente de la Iglesia, reivindicando "el derecho inviolable a la libertad de enseñanza."

Con todo ello, el juego de todos los grupos de presión españoles relacionados con la Iglesia se centra en la derogación de la ley recientemente aprobada, al no poderla haber parado antes de su nacimiento y por absurdo que ello parezca, no fué un caso exclusivo dentro del período republicano, entrando dentro de la lógica del - juego de los grupos de presión el hecho de que, ante la imposibilidad del control legal del juego parlamentario, se tratara de obstruir su aplicación de inmediato. Táctica que dió sus frutos favorables en ocasiones repetidas.

Vista la actuación de la institución eclesiástica católica - española y romana en el terreno de la defensa de sus intereses, actuando de forma similar a los criterios con que se mueve un grupo - de presión típico, hemos de decir que, evidentemente, existen otros grupos a los que, con toda propiedad, puede denominárseles grupos - de presión y que actúan en este campo. Porque resulta obvio que la propia Iglesia no presenta las características y tipologías de un - grupo de presión en sus estrictas dimensiones, aunque tuviera con - cretas actuaciones equiparables a las de estos. Se tratará ahora de abordar el estudio precisamente de aquellos grupos propiamente di - chos, que se mueven en el campo de las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de la Segunda República Española.

Parece conveniente considerar, como lo hace M. Ramírez, a la hora de estudiar a la Iglesia Católica, la diferenciación entre la "postura oficial de la Iglesia, actuaciones individuales, grupos -- adictos a los intereses eclesiásticos y estados de opinión a ellos favorables". (61) Porque, no bastará ya con hablar de la postura - eclesiástica oficial mantenida, como hemos visto, por la encíclica y las declaraciones colectivas del Episcopado español, aparte de - los grupos de presión que considera Ramírez, sino de posturas de - otros estamentos religiosos y eclesiásticos, quizá mas lejanos a -- las áreas de decisión y poder dentro de la Iglesia, pero que forman parte de ella y ocupan una posición diferenciada en cuanto a sus - mismos intereses, mucho más modestos y moderados. Así, cabría dife - renciar igualmente, antes de avanzar en dirección al estudio de los grupos, de un lado la jerarquía y las órdenes religiosas (de ordina - rio poderosas y poseyendo en sus manos esos resortes importantes de interés que constituyen las propiedades y la enseñanza controladas por ellos), frente a los representantes del clero parroquial, los - curas párrocos, generalmente sencillos y humildes en cuanto a su ex - tracción social y forma cotidiana de vida, cuyos intereses, al ini - cio del período republicano, podían fácilmente diferir de los de la



jerarquía. En opinión de Ricardo de la Cierva, "La Jerarquía española de 1.931 debía sus sedes a la presentación regia y recibió a la República con bastante menos entusiasmo que una parte de su bajo clero" (62). Se trataba de un verdadero "proletariado eclesiástico", según Brenan, que incluso pudieron haber votado a las candidaturas republicanas el 12 de abril, pero su suerte no fué tomada en cuenta por la República, que se granjeó su antipatía y naturalmente, sus votos posteriores ya que, la supresión del Presupuesto de Culto y Clero, hizo que a este estamento humilde se le agotara su único método de vida, frustrándose sus esperanzas de una mejora de sus condiciones de existencia al proclamarse la República. Siguiendo a de la Cierva: "A nivel humano el clero español era pobre y dependía para su diario mal vivir del estipendio del Estado". (63)

Hecha esta importante salvedad para ponernos de manifiesto las matizaciones que hay que introducir en el estudio del comportamiento de la Iglesia ante la República, bien se trate de la Jerarquía, del clero parroquial o de posturas individuales tomadas a título personal y al margen de la línea oficial, entremos en el análisis de los grupos de presión.

Para el estudio de los grupos que actúan a favor y colateralmente con la Iglesia en la larga lucha de intereses que acompañó la vida de este régimen, será preciso analizar también aquellos grupos que, por el contrario, actúan contra ella a lo largo de este período. Efectivamente, al margen de la lógica lucha de los debates parlamentarios entre los partidos de ideología favorable a la Iglesia en su concepción tradicional y los favorables a una profunda revisión de su posición en España, se produce en la etapa que consideramos una lucha importante a nivel de grupos.

Parecía lógico que la Iglesia, sintiéndose afectada en sus intereses, moviera en su defensa todas las armas a su alcance, tanto institucionales propias (Jerarquía, Santa Sede, etc.), como polí

ticas (partidos afines principalmente y sindicatos), así como todo su entramado de grupos de presión. Pero con esto no termina de contemplarse el problema en toda su amplitud ya que, al margen de las instituciones oficiales de poder y legislación de la República que, legítimamente establecidas serían, en todo caso, los organismos competentes encargados de la toma de decisión en este terreno, se movían otros grupos, típicamente de presión, en sentido contrario a los intereses de la Iglesia, actuando de forma que se acentuasen las medidas antieclesiásticas que emanaban de los poderes públicos legalmente constituidos.

De ahí que, a la hora de estudiar los grupos de presión que a lo largo de la IIª República tienen que ver con la problemática eclesiástica y religiosa, no podemos perder de vista la existencia de unos grupos favorables a la Iglesia y defensores de sus intereses, frente a otros que actúan en sentido contrario.

Primeramente, ¿qué grupos podrían actuar en contra de la - - Iglesia, al margen de los cauces partidistas que, dueños de la mayoría en el poder legislativo, abordaban una seria e incluso dura política de revisión de sus intereses tradicionales?. Según se deriva de la literatura disponible en esta materia, se puede hablar fundamentalmente de dos: El anarquismo y la masonería; aparte de otros - de campo más específico, como la Institución Libre de Enseñanza en el terreno de la educación media y superior.

Por el contrario, ¿qué grupos principales juegan a favor de la defensa de los intereses de la Iglesia en este período?. Partiendo de la base de que alrededor de la Iglesia se habían creado una serie de grupos generalmente de matiz ideológico que, unas veces habían llegado a la Iglesia buscando apoyos de la Jerarquía y otras podían considerarse creaciones de la propia cúpula del poder eclesiástico con la que mantenían estrechas relaciones e identidades, - podemos citar los siguientes grupos favorables: Acción Católica, -

Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Acción Popular y - otra serie de grupos que van constituyéndose progresivamente y que, con diferentes campos como objeto de sus fines, tienen una procedencia y origen en los antes citados que podemos considerar matrices y de ahí se deriva su importancia.

Antes de analizar uno a uno estos grupos, así como sus principales características, digamos que su actuación entra en juego a medida que se va desarrollando la legislación republicana en materia religiosa. Apareciendo ante el debate de cada ley el juego de las presiones a favor o en contra. Evidentemente, este juego, tiene diversa intensidad y matiz según se produzca en el primer período - republicano (Bienio Republicano-Socialista) o en el segundo (Bienio Radical-Cedista). Pues, mientras el primero de los bienios aborda - toda la legislación fundamental reformadora en esta materia (Constitución de 9 del XII de 1.931; Disolución de la Compañía de Jesús, - 24 del I de 1.932; Ley de Congregaciones Religiosas, 2 del VI de - 1.933; supresión en 1.933 del Presupuesto de Culto y Clero; Ley de Divorcio de febrero de 1.932 y otras de menor rango), el segundo - adopta una postura mas respetuosa para con sus tradicionales posicionamientos, iniciando incluso una tímida pero progresiva política restitutiva, coherente con el cambio político acusado en el seno - del Gobierno Republicano. Cambio al que, en la medida de su actuación favorable a él, contribuyeron las instituciones eclesiásticas y grupos afines.

Grupos contrarios u hostiles a los intereses de la Iglesia.

Cuando algún acontecimiento negativo se produce que afecte a la Iglesia, probablemente salte a la mente de todos la actuación de dos grupos principales a lo largo de la República: se trata de la - masonería y los anarquistas. Cuando se produce la quema de Iglesias y establecimientos religiosos en los primeros meses de la República,

al margen de las sospechas existentes sobre la autoría que implican a grupos provocadores de extrema derecha o monárquicos, las miradas irán dirigidas a anarquistas y masones y esta será una pauta mantenida a todo lo largo del período republicano, estando en lo cierto al pensar que estos grupos son especialmente hostiles a la Iglesia.

Concretamente, la masonería, esa sociedad secreta de procedencia medieval que modernamente se transforma, pasando de agrupar a "los constructores de catedrales (masonería operativa) cuyos miembros se obligaban a ser buenos cristianos, a frecuentar la Iglesia y a promover el amor de Dios y del prójimo", a ser una "masonería - especulativa" (64) que en España tiene presencia a partir del siglo XVIII y que pronto pasa a ser considerada peligrosa tanto para la Iglesia como para el Estado, sufriendo la persecución del Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición, por su carácter de Sociedad Secreta de carácter laico y racionalista.

En la España del siglo XX existe un núcleo de cierta importancia de masones en nuestro país y su infiltración en diversas instituciones y partidos políticos hace que, a través de ellos, se realicen presiones por sus miembros. Presiones que tienen como uno de sus principales objetivos la Religión y la Iglesia Católica y que son especialmente abundantes en la Segunda República, momento histórico que le es más propicio y en el que se le achacan, probablemente con mayores dosis de leyenda que de realidad, las mayores influencias en muchas de las decisiones tomadas por los gobiernos republicanos.

Realmente influyó este grupo a lo largo de la República y - que especialmente dirigía su actuación contra la Iglesia, lo cual - no debe extrañarnos si pensamos que la Iglesia fué el objetivo tradicional de los ataques masónicos y que el fenómeno no fué exclusivamente español, sino de ámbito mundial. Son igualmente conocidos - los ingresos en la masonería por parte de miembros del estamento mi

litar, en España esto es más acusado a partir de la Dictadura de Primo de Rivera.

Si pensamos que en la etapa republicana la masonería tiene tanta importancia en España y nos planteamos cual era su credo fundamental, su inspiración liberal-burguesa y laica con base en los principios de Libertad, Fraternidad e Igualdad, pronto comprendemos de su enemistad e intervención en el problema eclesiástico.

Su programa concreto en estos años se basa en: "Defensa de los derechos humanos a través de proclamar el derecho a la vida y a la seguridad, a la libre emisión y difusión de pensamiento, libertad de conciencia y de cultos, enseñanza neutra, obligatoria y laica, trabajo obligatorio controlado por el Estado, igualdad ante la ley, justicia gratuita, libertad de reunión, asociación y manifestación; sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado; abolición de la pena de muerte y jurisdicción civil como jurisdicción única; servicio militar voluntario; derecho limitado de transmisión de la propiedad y Estado Federal". (65)

Tal programa contiene mucho de los puntos recogidos por la legislación republicana en materia eclesiástica.

No se olvide, en este sentido, que a lo largo de la República cuentan con miembros incluidos en las más altas instituciones del Estado, pudiendo decirse que, según las cifras que el citado M. Ramírez obtiene de fuentes diversas que se basan en Tusquets, Comín Colomer y Lerroux, pertenecieron a la masonería: 28 ministros, que suponen el 32,5% del total de ellos; 119 diputados de las Cortes de 1.931, que suponen el 25,4%; 55 diputados de las de 1.933 (12,2%) y 138 de las de 1.936 o Frente Popular, suponiendo un 29,1% del total. (66)

La masonería para su actuación utiliza los más claros métodos de un grupo de presión, puesto que su carácter de sociedad se-

creta lo posibilita más fácilmente, así pues, utilizan los boletines y comunicaciones internas, el acaparamiento de cargos oficiales y puestos políticos, el secreto, la ausencia exterior de noticias o publicidad, etc.

Y es evidente que los puntos sobre los que incide la masonería con mayor contundencia dentro de la política republicana, tienen mucho que ver con la Iglesia y la política religiosa. Así, están presentes en la elaboración de la Constitución de 1.931 y en su contenido puntos como la separación Iglesia-Estado, declaración de absoluta libertad religiosa, separación de la enseñanza del ámbito de competencia de las instituciones religiosas, supresión del presupuesto de culto y clero, secularización de cementerios, ley de divorcio, etc., que coinciden plenamente con los postulados masónicos y, es de sospechar que se trate, entre otras cosas, de éxitos en su política de presiones.

Tampoco se renovó el Concordato existente entre España y la Santa Sede, que databa de 1.851, a lo largo de la etapa republicana pues, aunque hubo serios intentos de llevarlo a cabo, al final no fructificaron, prevaleciendo en tal campo también los postulados masónicos.

En definitiva, la masonería tuvo una fuerte presencia a lo largo de la Segunda República, puesto que el carácter liberal y tolerante que dominaba en este período fué propicio a su desarrollo. Los elementos masones ocuparon importantes puestos de decisión en el régimen republicano y es constatable la identidad existente entre sus principales proposiciones e intereses en el ámbito religioso, de las relaciones Iglesia-Estado y cultural, con la orientación de la legislación religiosa básica adoptada en aquellos años; desde los artículos de la Constitución a la última de las leyes del primer bienio, pasando por normas tan importantes como la que regulaba las congregaciones religiosas y su enseñanza, así como la que

prohíbe en España a la Compañía de Jesús y todas en general.

Es constatable además que, a medida que fué mayor el porcentaje de miembros de la masonería en el Congreso de Diputados, más - legislación antieclesiástica sale del legislativo; así: Cortes del primer bienio 25,4% de miembros masones, por los 12,2% de las del - segundo bienio. No obstante, queremos constatar el hecho de que, en muchas ocasiones, se ha sacado el tema de los justos límites de su realidad, para llegar a ver la intervención de este grupo de presión mucho más allá de lo que realmente ocurrió. Así, es evidente - que no toda la legislación republicana en materia religiosa se impulsó por los grupos masones, ni que todas las acciones llevadas a cabo a lo largo de aquella etapa en tal terreno tuvieran detrás las manos masónicas. Incluso desde campos opuestos del espectro político, se utilizó a la masonería para justificar hechos en los que no había intervenido.

Con ser, por tanto, importante su actuación contra los intereses de la Iglesia, acotemos la acción de la masonería a sus justos límites.

El anarquismo fué el otro importante grupo que hizo de su actividad, en buena parte, un instrumento de lucha contra los intereses de la Iglesia. Pensemos que este grupo tenía una potencia considerable y notable influencia entre amplias masas de la clase trabajadora y ha sido estudiado con mayor detenimiento y en toda su extensión en el apartado correspondiente a fuerzas sindicales, que es a través de las cuales realiza su principal actividad.

En el campo concreto que ahora nos interesa considerar hemos de decir que el anarquismo, precisamente con esa notable influencia que desarrolló sobre la clase obrera a lo largo de la República y con su importante medio de difusión "Solidaridad Obrera", desarrolló una gran cantidad de ataques contra la Iglesia, extendiendo en-

tre sus bases y allegados un profundo sentimiento anticlerical.

La base de estos ataques se centraba en la consideración de la Iglesia y el clero como instituciones tradicionalmente sostenedo ras de la Monarquía y de los regímenes de opresión de la clase obre ra, cuyo sector representado por el anarquismo era el más radicalizado y, en muchos casos, el que era acompañado de menores niveles - culturales, lo que le configuraba como el más propicio para emprender acciones virulentas contra los objetivos frente a los que fuesen movilizados por sus dirigentes o sus medios de propaganda.

La razón de considerar a este grupo como "de presión" en este terreno concreto, responde en este caso en menor medida que en el anterior a razones de su propia estructura, pues no debemos olvidar que aquí estamos ante una fuerza agrupada en un sindicato de masas, la CNT. Pero la forma de su actuación desde fuera de los aleda ños del poder, el que la corriente ácrata no fuera sino una orientación dirigente del importante sindicato cenetista y su decidida actuación real, nos sitúan más en la lógica de considerar al anarquismo como grupo de presión actuante en el campo del anticlericalismo.

Como quiera que consideramos íntimamente relacionado con el tema de la política religiosa el de la política educativa y cultural de la Segunda República y lo analizaremos como una directísima consecuencia de su legislación religiosa, que fué la que afectó al sistema educativo, no habrá más remedio que hacer una referencia en este capítulo, por breve que sea, a aquellos grupos que se movieron en el terreno educativo y que en él jugaron sus presiones y sus intereses, puesto que se trataba de unas actuaciones muy directamente relacionadas con los intereses eclesiásticos y confesionales.

Nos tendremos que referir aquí a aquellos grupos que inspiraron y estimularon el modelo educativo republicano y su dinámica; modelo que, necesariamente, habría de ser consecuencia de una susti



tución del existente durante la Monarquía que, obviamente, se encontraba en manos del clero. De manera que su incidencia e interrelación son grandes.

No hemos de olvidar que la ayuda intelectual y la posibilidad del modelo educativo republicano, tienen su inspiración en cuatro grupos fundamentales:

La Institución Libre de Enseñanza, el Ateneo de Madrid, la - Revista de Occidente y la Federación Universitaria Escolar.

De todos estos grupos, es el primero de ellos el que más nos interesa: La Institución Libre de Enseñanza, por ser la impulsora - principal de la Segunda República en el terreno concreto que ahora nos ocupa.

La Institución Libre de Enseñanza, que data de 1.876 y cuyo principal promotor fué Francisco Giner de los Ríos, tiene como horizonte fundamental de su modelo educativo el del laicismo, bajo el - principio de libertad en el terreno científico, que se moverá exclusivamente por los dictados de la libre conciencia de cada uno. Por lo tanto, se moverá en un terreno completamente al margen de "cre-dos, iglesias y cultos".

La incidencia de esta "Institución" en la conformación del - modelo educativo republicano, no solamente se deriva de la constatación de que sus postulados básicos fueron luego reflejados en la legislación concreta de la República, sino que varios de los miembros de los gobiernos republicanos y altas personalidades se habían formado en sus centros, siendo ministros exactamente siete. Aparte de que la "Institución" recibe importantes subvenciones oficiales y financiación en esta época.

En su debido lugar será tratada la legislación republicana - en materia de educación, así como las transformaciones que este régimen trajo consigo en este terreno; podremos así apreciar entonces

con bastante mayor nitidez la importancia de estos grupos que aquí citamos, como defensores de intereses contrarios a los de la Iglesia en terrenos adyacentes al netamente eclesiástico.

Se tratará, a continuación, de contemplar aquellos grupos - que se sitúan próximos a la Iglesia Católica y que con unas relaciones estrechas con ella, van a dedicarse a la defensa de sus intereses a lo largo de esa etapa, aunque tengan una estructura y organización independiente de la institución eclesiástica y de la jerarquía oficial, a pesar de su proximidad e identidad de intereses.

En este terreno, habrá que estudiar fundamentalmente dos grupos: La Acción Católica y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de los cuales se derivará uno con fines eminentemente políticos, Acción Popular, así como otros muchos que se desarrollarán en muy diversos campos pero que tendrán a aquellos como matriz; tanto es así, que han sido definidos como "baluartes de la Iglesia Católica en la España de entonces y en la defensa de sus intereses." (67)

El primero de los grupos objeto de nuestro estudio específico será Acción Católica, que ya veíamos cómo desarrollaba su actividad a lo largo de la etapa primorriverista en el terreno ideológico, con la difusión y propaganda de la línea oficial de pensamiento - eclesiástico, tanto de la Santa Sede, como de la jerarquía oficial española.

En la etapa que ahora estudiamos no será ninguna exageración afirmar que no es una excepción a la afirmación que sobre él se hizo, al calificarlo como uno de los más poderosos con que jamás contara la Iglesia española entre los laicos.

Frente a otros grupos que fueron utilizados por la Iglesia, o que ellos mismos utilizaron su advocación, su nombre o su doctrina para actuar en el terreno específico de la política (luego vere-

mos algún ejemplo típico en este sentido), este de Acción Católica no tuvo nunca fines políticos específicos, limitándose al campo cultural, del trabajo; en fin, a propagar civilmente la idea católica realizando, por lo tanto, una específica labor de grupo de presión favorable a la Iglesia Católica al plasmar la doctrina de esta por otras vías y por otros medios.

Su relación con la Iglesia es mucho más obvia y mucho más eficaz a la vez, en cuanto que utiliza como terreno propicio para su labor formativa y de concienciación a los jóvenes, dándoles una formación religiosa de cara a su futuro ingreso en la vida política, momento en el cual y desde sus respectivos partidos, serán útiles y constantes defensores de las posiciones católicas.

Tal formación de jóvenes con vistas a su integración política nos permite dudar de que realmente sean tan apolíticas las intenciones que presiden su labor, aunque formalmente no esté reconocido tal cometido entre sus tareas a realizar.

Puede sostenerse sin apenas margen de error, que la Acción Católica será el vivero fundamental del que se nutrirá el grupo Acción Popular, de específica actividad política y núcleo del que sería partido dominante en el segundo bienio republicano: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); tales afirmaciones están en concordancia con lo escrito por M. Ramírez en el sentido de que: "Pese a su declaración de apoliticidad, desde un principio encontramos testimonios de las concomitancias de Acción Católica con el partido de Acción Popular". (68) Lo cual nos permite admitir la sospecha de que, a lo largo del segundo bienio republicano, tenga este grupo una incidencia importante en la política llevada a cabo por el Gobierno Radical-Cedista y que desde esta instancia gubernamental recibiera importantes apoyos.

Todo ello irá en consonancia directa, como se verá mas tarde,

con el diferente enfoque que se dió a la política republicana en su aspecto religioso, durante la etapa que se desarrolla desde noviembre de 1.933 a febrero de 1.936.

La situación en este segundo bienio podría considerarse a modo de lógico pago de los servicios prestados por este grupo, por sus hombres y por su prensa más próxima, en la campaña de propaganda previa a las elecciones de noviembre de 1.933, en la que su actuación es ciertamente importante. Tal actuación se produjo de hecho, a pesar de que el Pontífice era más partidario de mantener a la Acción Católica dentro de los estrictos límites de unos cometidos de propagación de la doctrina, que de su participación y lucha, por indirectas que fuesen, como grupo de presión en el juego político.

El segundo de los grupos que actúan a favor de la Iglesia y sus intereses en la Segunda República es la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que también puede incluirse, junto con el citado anteriormente, entre aquellos que tienen una finalidad doctrinal y de propagación de las creencias religiosas al servicio de la jerarquía eclesiástica española y vaticana.

Ya veíamos, al citar a la ACN de P como grupo que está en funcionamiento en el tiempo de la Dictadura de Primo de Rivera, que sus finalidades básicas son las de la propaganda católica en el orden social, bajo la sumisión a la jerarquía eclesiástica y que su finalidad política no está reconocida entre sus actividades, o al menos no es inmediata.

Lo que es evidente es que existe igualmente una estrecha relación entre esta Asociación de Propagandistas y la política de los partidos católicos llevada a cabo durante la etapa de la Segunda República. Hay que pensar que, casi hasta el final de este período, - ejercía el mandato sobre este grupo Angel Herrera, que fué importante artífice en la fundación del partido político de Acción Popular

y, por ende, de la CEDA, así como de la formulación de su principal táctica política.

Efectivamente, se puede afirmar que desde terrenos muy alejados de la ACN de P se formula el planteamiento político-doctrinal - más útil a la causa de los partidos católicos de la derecha española a lo largo de toda la República; se trata del "Accidentalismo", que veremos con mayor concreción a la hora de estudiar el grupo que lo llevó realmente a la práctica.

También puede decirse que la importancia de esta Asociación de Propagandistas radica en la organización e iniciación, a partir de ella, de otra serie de grupos e instituciones que, en diversos terrenos, desarrollaron su labor favorable a la causa común de la doctrina e intereses de la Iglesia, pudiéndose también de esta manera constatar la enorme actividad que demostraron sus hombres, con Angel Herrera como motor. Así, el diario "El Debate" tuvo en su seno a los "Propagandistas" más destacados, siendo una plataforma de expresión de ideas y realización de presiones siempre favorables - del lado de aquellos que propugnaban la utilización del marco republicano como alternativa viable para cambiar radicalmente el contenido de su legislación, haciéndolo más favorable a los intereses - por ellos representados. Postura posibilista esta, que contrastaba con la de los monárquicos alfonsinos, tradicionalistas y agrarios, de posiciones más recalcitrantes y menos efectivas.

Igualmente, la ACN de P contaba en Madrid con el Centro de Estudios Universitarios (CEU), que arranca en 1.932 con la impartición de los estudios de Derecho y que se irá expandiendo posteriormente, abarcando otras disciplinas y otros grados de enseñanza.

Esta Asociación jugó un eficaz papel de gran importancia en la Segunda República y fué, precisamente en el segundo bienio, donde se dejan sentir más claramente los efectos de este grupo en la -

vida política, pues no se olvide que el triunfo de las elecciones - que abren ese segundo ciclo republicano no supone sino la puesta - en marcha de la doctrina principal propugnada por los Propagandistas: la evolución desde dentro de la República hacia posiciones más conservadoras. A parte de que, tanto Gil Robles como Giménez Fernández, ministros del Gobierno, proceden de sus filas, amén de otra importante serie de personalidades que ocupan cargos de importancia y responsabilidad desde los cuales, y actuando de forma típica a como lo hacen los grupos de presión por antonomasia, ponen en práctica - los presupuestos básicos del grupo.

Cerremos su análisis con una cita recogida de las "Obras Selectas" del propio Mons. Herrera Oria, en la que sostiene acerca de la ACN de P. que: "sin ser partido político, ha realizado en el campo de la vida pública una labor fecundísima a través de sus cincuenta años. No fué un partido, pero fué aglutinante de partidos. No - fué un partido, pero mantuvo en la vida pública los principios fundamentales de una sabia política, que encarnó en las nuevas generaciones, y que acabó por cristalizar, ya fuera de la Asociación, en partidos políticos."

Párrafo que nos permite encuadrar genuinamente a la ACN de P. como verdadero grupo de presión que se dedicó, tanto al terreno teórico de la formación y preparación de las fuerzas católicas, como - al terreno práctico, en el sentido de la defensa de los intereses - de la Iglesia mediante actuaciones de matiz eminentemente político.

Finalmente, nos queda destacar un grupo que se ocupa igualmente de la defensa de los intereses de la religión católica y de la - Iglesia española, pero que principalmente tiene como misión y campo de actuación el de la lucha específicamente política, estando perfectamente claro que la procedencia de sus hombres viene, tanto de la - Acción Católica, como de la ACN de P.

Se trata de Acción Popular, de cuyo seno proceden la mayoría de los políticos de la derecha católica española de la República, - siendo por otro lado el origen de su mayor y más importante grupo - constituido a partir de 1.933: la CEDA.

La ya citada doctrina del "Accidentalismo" propugnada como - táctica política por estos grupos, es aplicada en la práctica por - Acción Popular, lo que permitiría la entrada de los católicos en la gobernación del régimen republicano. Ello permite que la situación de la Iglesia dentro de la República cambie radicalmente y a su favor, ya que este grupo apoyará sus actuaciones y posibilitará la finalización de los ataques del primer bienio, entrando en una etapa restitutiva de la situación anterior a 1.931.

Para citar otros grupos de menor entidad y cuya actuación a lo largo de la etapa republicana tuvo menor importancia, podemos hablar de los siguientes:

- Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas.
- Asociación Estudiantil Católica
- Federación de Estudiantes Católicos, que pretendía contrarrestar en el terreno estudiantil la fuerte presencia de la Federación Universitaria Española, de matiz democrático e izquierdista.

Todos ellos son grupos afines a la Iglesia Católica, cuyo - campo diferenciado de actuación es, en este caso, la formación e incidencia en las juventudes.

Además, cabría considerar, al lado de estas agrupaciones de ámbito nacional, todas aquellas que se implantan en casi todas las ciudades españolas, tales como los Círculos Católicos o Asociaciones de Padres de Familia, que se agrupan en una poderosa Confederación Católica de Padres de Familia cuya principal ocupación fué la de presionar en pro del mantenimiento de los privilegios de la Igle

sia en materia educativa.

Todo este conglomerado de grupos se puso en funcionamiento - con el propósito de la defensa de unos intereses religiosos y eclesiásticos que, agrupándose en torno a la Iglesia y a la religión, - cerraban filas para la defensa y mantenimiento de una posición que implicaba una serie de cuestiones menos relacionadas con el campo - del espíritu que con el de sustanciosos intereses materiales.



## CAPITULO IV

Relación de Citas

- (1) Antonio BAR CENDON: "La CNT frente a la IIª República" en 'Estudios sobre la IIª República española'. Edit. Tecnos. Madrid, 1.975, pág. 222.
- (2) Manuel TUÑON DE LARA: "El movimiento obrero en la historia de España". Edit. Taurus. Madrid, 1.972, pág. 873.
- (3) José Luis GUINEA: "Los movimientos obreros y sindicales en España. De 1.833 a 1.978." Edit. Ibérico Europea de ediciones. - Madrid, 1.978, pág. 69.
- (4) Paul PRESTON: "La destrucción de la democracia en España". - Edit. Turner. Madrid, 1.978, pág. 112.
- (5) Paul PRESTON: op. cit., pág. 110.
- (6) M. TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 875
- (7) Manuel TUÑON DE LARA: "La IIª República" Edit. Siglo XXI. - -- Madrid, 3ª edic., diciembre de 1.976. Vol. 1, pág. 121.
- (8) Antonio BAR CENDON: op. cit., pág. 241.
- (9) M. TUÑON DE LARA: "El mov. obrero...", pág. 877.
- (10) A. BAR CENDON: op. cit., pág. 243.
- (11) " " " " : " " , pág. 244.
- (12) " " " " : " " , pág. 245.
- (13) Recogido de J. PEIRATS: "Exámen crítico constructivo del movimiento libertario español." México, 1.967, en A. BAR CENDON: - op. cit., pág. 247.
- (14) M. TUÑON DE LARA: "El mov. obrero...", pág. 880.
- (15) " " " " " " " " " " , pág. 859.
- (16) Manuel RAMIREZ JIMENEZ: "Los grupos de presión en la Segunda - República española". Edit. Tecnos. Madrid, 1.969, pág. 98.
- (17) M. TUÑON DE LARA: en la pág. 859 de su obra "El movimiento - obrero en la historia de España" y en otras obras suyas, v.gr. "La IIª República". J. Luis GUINEA en su trabajo: "Los movimientos obreros y sindicales en España".
- (18) C. M. RAMA: "La crisis española del siglo XX". Edit. FCE. Madrid, 3ª edic., 1.976, pág. 146.
- (19) M. TUÑON DE LARA: "El mov. obrero..." pág. 859.
- (20) " " " " " " : "La IIª República." Vol. 1, pág. 120.

- (21) M. TUÑON DE LARA: "La IIª República.". Vol. II, pág. 46.
- (22) " " " " " " " " " " " " , pág. 47.
- (23) " " " " " " " " " " " " , pág. 60.
- (24) P. PRESTON: op. cit., pág. 288.
- (25) P. PRESTON: op. cit., pág. 53.
- (26) " " " : " " , pág. 54.
- (27) " " " : " " , pág. 96.
- (28) J. Luis GUINEA: op. cit.,
- (29) M. RAMIREZ: "Los grupos de presión..."
- (30) M. TUÑON DE LARA: "El movimiento obrero..." pág. 893.
- (31) Juan José CASTILLO: "Sindicalismo Católico. Sindicalismo amari  
llo." en "Historia 16" nº 32, diciembre 1.978.
- (32) M. TUÑON DE LARA: "El mov. obrero..." pág. 900.
- (33) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 108.
- (34) Juan José CASTILLO: artículo citado en "Historia 16" nº 32, -  
pág. 59-60
- (35) M. TUÑON DE LARA: "El Movimiento obrero...", pág. 901
- (36) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 125.
- (37) Vid.: Ramón TAMAMES: "Estructura Económica de España". Edit.:  
Guadiana de Publicaciones". 6ª edic., Madrid, 1.968.
- (38) M. RAMIREZ: op. cit., págs. 132 y ss.
- (39) Braulio MEDEL: "Notas históricas sobre la empresa pública en Es  
paña" en "La empresa pública en España". Edit.: I.E.F. Madrid,  
1.972, pág. 49.
- (40) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 135.
- (41) Edward MELFAKIS: "Reforma agraria y revolución campesina en la  
España del siglo XX". Edit. Ariel. Barcelona, 2ª edic., sept.  
de 1.972, pág. 204.
- (42) Vid.: Adolfo HERNANDEZ: "El sufragio en la IIª República". His  
toria 16. nº Extraordinario II. Abril 1.977, pág. 81.
- (43) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 119.
- (44) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 181.
- (45) Stanley G. PAYNE: "El Ejército. La República y el estallido de  
la guerra civil" en "Estudios sobre la República y la guerra ci  
vil española". Editor: Raymond CARR. Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª  
edic., 1.974.

- (46) Vid.: Julio BUSQUETS: "el militar de carrera en España". Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª Edic., 1.971, pág. 35.
- (47) Ramón SALAS LARRAZABAL: "Las fuerzas armadas en el siglo XX" - en "Historia Social de España siglo XX". Edit.: Guadiana de Editores. Madrid, 1.976, pág. 352.
- (48) S. G. PAYNE: op. cit., pág. 112.
- (49) M. T. DE LARA: "La IIª República" vol. 1, pág. 108.
- (50) Antonio BAR CENDON: op. cit.,
- (51) M. T. DE LARA: "La IIª República" vol. 1, pág. 99.
- (52) Ricardo DE LA CIERVA: "Historia básica de la España actual". - Edit.: Planeta. Barcelona, 1.974, pág. 279.
- (53) S.G. PAYNE: op. cit., pág. 113
- (54) R. de la CIERVA: op. cit., pág. 282.
- (55) S.G. PAYNE: "Los militares y la política en la España contemporánea". Edit.: Ruedo Ibérico. París, 1.968, pág. 263.
- (56) S.G. PAYNE: "Los militares y la política...", pág. 266.
- (57) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 214.
- (58) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 213.
- (59) Miguel ARTOLA: "Partidos y programas políticos. 1.808-1.936". Tomo I. Edit.: Aguilar. Madrid, 1ª edic. 1ª reimpr., 1.977, - pág. 589.
- (60) Toda la documentación citada sobre Encíclicas se ha obtenido - de: "Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios. (Concilio Vaticano II)" Tomo I. Madrid, 7ª edic., 1.977. Edit.: Publicaciones de la Junta Nacional de Acción Católica. Traducción e Indices: Mons. Pascual Galindo.
- (61) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 214.
- (62) R. de la CIERVA: op. cit., pág. 289.
- (63) R. de la CIERVA: op. cit., pág. 289.
- (64) José A. FERRER BENIMELLI: "Masonería española: mito o realidad." Revista "Tiempo de Historia". Año I nº 2. Madrid, enero de 1.975, págs. 18 a 49.
- (65) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 160.
- (66) M. RAMIREZ: op. cit., pág. 162.
- (67) M. RAMIREZ: "La agregación de intereses en la IIª República: - Partidos y grupos" en "Estudios sobre la IIª República española" Edit.: TECNOS. Madrid, 1.975.

(68) M. RAMIREZ: "Los grupos de presión...", pág. 223.

C A P I T U L O   V

EL PROCESO DE TRANSFORMACION ECONOMICO-SOCIAL  
Y FISCAL DE LA IIª REPUBLICA ESPAÑOLA:  
UN BALANCE

## CAPITULO V

EL PROCESO DE TRANSFORMACION ECONOMICO-SOCIAL Y FISCAL  
DE ESPAÑA DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICAV.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Habiendo analizado el juego de los principales grupos políticos-sociales y de presión que protagonizaron la etapa republicana, es necesario abordar este último capítulo que nos aportará el conocimiento del balance de las transformaciones a que da lugar el juego de aquellos grupos y partidos estudiados.

Todo el proceso de análisis hasta aquí realizado ha sido pensado en función de esta aportación, que será la fundamental en el conjunto de un trabajo que pretende ofrecer un balance de las que entendemos principales transformaciones económico-sociales de la Segunda República y, dentro de ellas, haciendo especial hincapié en las de ámbito fiscal.

Otorgaremos una importancia destacada a las transformaciones fiscales en el conjunto de esta investigación, las cuales serán analizadas en el próximo apartado del capítulo que nos ocupa, supuesto que el estudio de las reformas de tipo fiscal y hacendístico es una tarea insoslayable y específica en un trabajo como el presente, máxime cuando nuestra tarea de investigación se realiza en un Departamento de Economía y nuestra labor docente se emprende en el terreno de la Hacienda Pública. Pero es que además, en el contenido del proceso de transformación económico-social a que aquí nos vamos a referir con mayor énfasis, vamos a observar la continua incidencia fiscal y presupuestaria que se perfila como condicionante parcial al resultado de tal proceso, aparte del continuo recurso que constituye para otorgar argumentos de justificación a los responsables de su puesta en práctica cuando ven limitado, voluntaria o involuntariamente, el alcance de tales transformaciones.

Resulta evidente que nos hallamos ante un trabajo que pretende centrarse en los aspectos económico-fiscales que entendemos más importantes del conjunto de cambios llevados a cabo durante la etapa republicana; pero indudablemente, este trabajo cuenta con un enfoque político-social, puesto que aquellas transformaciones serán analizadas según el comportamiento determinante sobre ellas de los diferentes grupos sociales y de presión de la época, analizados en los capítulos precedentes.

Como ya indicábamos al inicio de este trabajo, en este capítulo final el balance que ofreceremos de las transformaciones económico-sociales republicanas habrá de ser necesariamente parcial, pues - desbordaría todos los límites naturales de una tarea como la que nos ocupa el intento de ofrecer una visión indiscriminada de todos los campos en que se intentó incidir durante esta etapa para su reforma.

El análisis del ámbito concreto de lo fiscal y lo hacendístico a abordar, si bien ocupará un lugar prioritario en el marco de nuestra investigación, no puede entenderse de manera aislada del contexto general de transformaciones que vamos a considerar en este capítulo, con cuyo estudio comprobaremos una dinámica homogénea en el comportamiento y desarrollo de los diferentes sectores económico-sociales, lo cual nos ayudará a perfilar el ámbito fiscal que ya comenzamos a analizar, específicamente, en el siguiente apartado a abordar.

## V.2.- TRANSFORMACIONES FISCALES.

La generalidad de los autores que han venido tratando el tema de las transformaciones fiscales durante la Segunda República, -- han coincidido en aceptar que su balance fue muy deficitario.

Como sucedió en algún otro terreno que estudiaremos en este mismo capítulo, fué mucho mayor la resonancia de las discusiones -- parlamentarias y el conglomerado de intentos de reformas y transformaciones que el resultante positivo final. No puede olvidarse que el componente hacendístico y fiscal era fundamental para configurar el terreno en el que se jugarían importantes intereses de tipo económico y, por ende, serían campos abonados para el juego de los diferentes grupos de presión.

Entendemos fundamental la aportación para nuestro trabajo -- del balance de disposiciones hacendísticas y fiscales de la etapa republicana y a esta tarea vamos a dedicarnos con prioridad en el presente apartado.

Son diferentes los autores y las obras consultadas para la -- elaboración de este balance y para su relación con el juego de diferentes grupos de muy distinto ámbito que inciden en él. Nos han marcado la pauta autores como Manuel Ramírez (1), Paul Preston (2) y, más concretamente, la reciente obra del prof. Calle Sáiz (3) y las -- fuentes directas que cita. De todos ellos se extraen básicamente dos nombres que destacan entre los ministros de Hacienda como emprendedores de las reformas básicas en el terreno que nos ocupa en este momento. Se trata de Carner y Chapaprieta.

Podemos, matizando incluso más, ofrecer un primer balance -- provisional de ambos, en el sentido de que se acepta con generalidad por la literatura disponible que la tarea reformista en lo fiscal en la etapa de Jaime Carner al frente del Ministerio de Hacienda fué la más real y cierta, así como la más positiva. Por el contrario, y sin



dejar de reconocerse su importancia, parece claro que Chapaprieta pasó poco de una serie de encomiables intentos que, por su falta de -- creatividad, pudieran calificar su labor como de reformismo potencial en una valoración de conjunto que comparar con la de Carner.

No obstante, y sistematizando la tarea emprendida, diganos -- que resulta de todo punto conveniente diferenciar las tareas reforma-- doras de la Hacienda española republicana en función de los períodos más destacados de la etapa de la Segunda República. Así, tendríamos que hacer una referencia al período de gobierno provisional, donde destacaría la figura del ministro socialista Indalecio Prieto, pero cuya tarea hay que analizar valorándola en su relación con la labor realizada por los ya citados anteriormente.

Más tarde, entrando en el análisis de las etapas posteriores, hay que diferenciar los dos períodos republicanos más destacados y, evidentemente, más diferenciados entre sí. Durante el primer bienio (primera etapa en cuestión) el contexto general de la República, como se observa en todos los terrenos analizados, es más propicio a -- los cambios y transformaciones, siendo la figura del citado Jaime -- Carner el más destacado entre los ministros de Hacienda. El segundo bienio, etapa de regresión respecto de los avances del primero, contempla en el terreno hacendístico una coherencia con el contexto general en cuanto a los resultados del balance final del período, a pe-- sar de que es figura característica en el terreno que nos ocupa el -- ministro Joaquín Chapaprieta, de cuyos deseos de colaboración en las transformaciones de la Hacienda y el Fisco no se puede dudar, pero -- que hubo de luchar contra una dinámica de la época que conducía la -- nave republicana hacia unos derroteros de reacción y retroceso difícilmente compatibles con deseos reformistas de determinados individuos del grupo que, en coalición, dominaba el poder. Tal fué no sólo el caso de Chapaprieta en Hacienda, sino asimismo el de Giménez Fernández en Agricultura como se comprobará en el apartado siguiente y

haremos referencia en el presente.

Habr  necesariamente que centrarse casi con exclusividad en los citados nombres al abordar la tarea que ahora nos proponemos. No vamos a dejar de considerar, no obstante, las actividades del resto de los ministros de Hacienda del per odo comprendido entre el 14 de abril de 1.931 y el 18 de julio de 1.936, aunque la validez de su referencia nos aporte poco m s que el hecho de que, sumando un total - de diez ministros en el espacio de poco m s de cinco a os, obtengamos fehacientemente dos conclusiones: la primera, el intenso juego - de intereses y grupos que, en equilibrio inestable y din mica de acci n permanente, consiguen fuerte nivel de movilidad en los nombres de los responsables de la pol tica hacend stica. En segundo lugar, - que tan escaso tiempo al frente de las responsabilidades de ministerio, pocas posibilidades ofrecer  de una acci n seria y coherente en beneficio del transcurso de las transformaciones que nos ocupan. En tal sentido, coincidimos plenamente con el autor citado en primer lugar cuando afirma que, "apenas contaron con tiempo suficiente en el ministerio como para dejar importante huella de su paso o s lo limitaron su actuaci n a retocar la labor de las dos figuras sealadas, se eros representantes de cada uno de los dos bienios que el r gimen conociera." (4)

Los siete ministros de Hacienda que completan la lista total de diez y que no hemos citado hasta el momento, no son otros que: -- Agust n Vi ual s, Antonio Lara, Manuel Marraco, Alfredo de Zabala, - Rico Avello, Gabriel Franco y Enrique Ramos.

Pasando sin mayor detenimiento al somero an lisis de la labor realizada en cuanto a transformaciones fiscales durante el primer per odo que sucede a la proclamaci n de la Rep blica, habremos de destacar la figura de Indalecio Prieto Tuero, que ocupa el Ministerio - de Hacienda en cuanto se constituye el primer Gobierno Provisional - el mismo 14 de abril. Puede decirse que la tarea realizada por este

ministro socialista no responde ni con mucho a lo que podría considerarse el programa fiscal elemental de un partido socialista. No oculta el mismo interesado su propio desasosiego por estas cuestiones y verá su final político en cuanto a cargos de gobierno en un ministerio diferente pues, como es sabido, acabará ocupando la cartera de - Obras Públicas.

Frente a sus colegas de partido en el Gobierno Provisional, especialmente Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo -que es el iniciador de la legislación social por la vía del decreto favorecedor de los intereses de las clases asalariadas y campesinas-, Indalecio Prieto cosecha menores éxitos en su tarea legislativa y es que, no se puede olvidar, tiene frente a sí la incidencia de importantes grupos dispuestos a refrenar toda medida atentatoria contra sus intereses. No es muy ajena en este sentido la banca, que incidió en su salida del ministerio a raíz de la presentación en las Cortes del -- proyecto de ley de Ordenación Bancaria.

Creemos importante, para poder valorar la tarea de Indalecio Prieto al frente del Ministerio de Hacienda, y con ello la de toda la etapa de Gobierno Provisional republicano, aportar un balance de las que consideramos más importantes disposiciones fiscales y hacendísticas firmadas por este ministro. En base a la citada reciente -- aportación de Ricardo Calle (5), relacionaremos las siguientes:

Decreto de 20 de abril de 1.931 estableciendo exenciones del Impuesto de Utilidades para los jornales de los obreros y los haberes de las clases de tropa y asimilados, independientemente de sus respectivas cuantías. El Impuesto de Utilidades venía gravando este tipo de rendimientos desde la etapa primorriverista.

Decreto de 4 de mayo de 1.931 que declara con vigor y eficacia el Real Decreto-Ley de 11 de mayo de 1.926, que aprobó una ley - del Timbre del Estado.

Decreto de 6 de mayo de 1.931 que se ocupaba de mantener vigente la Ley de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, cuyo texto databa asimismo de la etapa de Primo de Rivera; de esta manera, se exceptuaba esta disposición (incluyéndola - en el apartado d) del artículo 1º del Decreto de 15 de abril de - - 1.932) del ámbito de este decreto, que no hacía sino revisar la obra legislativa fiscal de la Dictadura.

Igualmente en esta misma línea de mantener disposiciones hacendísticas del régimen anterior que fueran de utilidad para la República, se aprueban otros decretos que vienen a dejar sin efecto, en sus parcelas concretas reguladas, el Decreto de 15 de abril de 1.931 a que antes hacíamos referencia y que, fechado el mismo día siguiente a la proclamación de la República, sometía a completa revisión general la legislación fiscal de la última etapa de la Monarquía. En tal sentido se hallan los Decretos de 30 de mayo de 1.931 (que restablecía las disposiciones del Ministerio de Hacienda) y el de 3 de junio, que mantenía el Estatuto de Recaudación vigente al inicio del período republicano, por tratarse de una disposición de tipo técnico-instrumental de utilidad y necesidad inmediata para el nuevo régimen.

Contrariamente a la línea de lo dispuesto anteriormente, el Decreto de 6 de junio de 1.931 se ocupaba de incluir en el ámbito de aplicación del citado Decreto del Gobierno Provisional de 15 de abril de 1.931, lo dispuesto en las normas reguladoras -durante agosto y - septiembre de 1.927- del contrato de explotación del Monopolio de Tabacos en las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo estatuto jurídico era el de Plazas de Soberanía en el Norte de Africa.

El análisis de los Decretos de 1 y 16 de junio de 1.931, patrocinados por este mismo ministro, pone claramente de manifiesto la variación tan rápida y súbita de una decisión que no podía sino estar motivada por el juego de las presiones de diferentes fuerzas interesadas; en este caso y de una parte el propio sindicato ferrovía-

rio de UGT, socialista como el propio ministro, y las compañías ferroviarias, consideradas como un fuerte grupo de presión en el sector industrial y monopolístico. El resultado se resolverá a favor de estos últimos ya que, mientras el Decreto de 1 de junio de 1.931 -- afirma que, para los efectos de la Contribución de Utilidades, serán considerados como obreros los maquinistas y jefes de máquinas ferroviarias y consideradas sus retribuciones por tales conceptos como -- jornales (con lo que, según el Decreto de 20 de abril de 1.931, quedarían exentos de tal tributo), por el de sólo quince días más tarde (Decreto de 16 de junio 1.931) se anula el anterior y se faculta a -- la Administración para aplicarles a estos contribuyentes el impuesto en la forma que reglamentariamente les corresponda.

En parecida línea de reglamentaciones de aspectos excesivamente concretos de la vida fiscal, que caracterizó toda la actividad de Indalecio Prieto al frente del Ministerio de Hacienda, pueden considerarse las siguientes disposiciones:

Decreto de 17 de julio de 1.931 estableciendo normas referentes a las operaciones de reembolso del importe de mercancías vendidas al extranjero.

Ley de 20 de agosto de 1.931 extendiendo el arbitrio municipal de un 3% existente para determinados recintos deportivos (frontones) a todos los demás espectáculos públicos deportivos: hipódromos, canódromos, etc. .

Ley de 2 de diciembre del mismo año, ya a punto de finalizar sus tareas en este ministerio, que regula la tributación de empresas concesionarias de aprovechamientos hidroeléctricos para así fomentar la política de construcción de embalses.

En otro orden de cosas, la etapa inicial de la República con Indalecio Prieto de responsable en Hacienda, contempla la aparición de otra serie de disposiciones no tan específicamente fiscales aun-

que sí conexas, que afectan a la política monetaria y bancaria de manera más especial.

Ya hemos hecho referencia al Decreto de 9 de octubre de 1.931 por el que se presenta a las Cortes un proyecto de ley relativo a la Ordenación Bancaria, que vendría a modificar el ordenamiento jurídico establecido en la reestructuración del Banco de España.

Asimismo, la Ley de 26 de noviembre de 1.931 se planteaba en términos reformadores semejantes del "status" de la banca derivado - del régimen anterior.

Quizá este intento de reforma bancaria, así como otra serie de medidas que ahora relacionaremos al ofrecer el balance final de - la época de su ministerio, son las que determinan el abandono de Indalecio Prieto de sus responsabilidades económico-fiscales y su paso a Obras Públicas; simplemente es un síntoma pero bastante significativo, de que el peso de grupos de presión tan fuertes y consolidados en la defensa de sus intereses como la banca podían determinar una - decisión de tal tamaño. Bien es cierto que la tarea de Prieto al - frente de su primer destino ministerial no descolló precisamente por la altura de miras de sus reformas ni por la profundidad de éstas, y que su mayor eficacia en Obras Públicas bien pudiera significar una mayor aptitud personal para esta segunda tarea que para la primera; no obstante, es un síntoma decisivo del talante reformista republicano el peso demostrado por los diversos grupos de presión acotando y limitando las tareas del ministro de turno e, incluso, propiciando - su sustitución cuando cuentan con fuerza para ello y su actividad no les es propicia.

Se incardinan en el balance final de sus medidas monetarias, bancarias y fiscales las siguientes:

Decreto de 6 de mayo de 1.931, que autorizaba al Banco de España a elevar el límite de billetes circulantes hasta 5.200 millones de pesetas.

Orden Ministerial de 16 de mayo de 1.931 limitando las cuantías de dinero que se autoriza a sacar de España a quienes viajen al extranjero (5.000 pesetas):

Decreto de 18 de mayo de 1.931, estableciendo normas de interpretación del régimen de concierto económico de Vascongadas en su relación con el Gobierno.

Decreto de 20 de mayo de 1.931 suprimiendo el Instituto de la Pequeña Propiedad, creado a finales de 1.930.

Decreto de 25 de mayo de 1.931 declarando total exención tributaria para todos aquellos actos resultantes de la cesión de bienes constitutivos del Patrimonio de la Corona a los Municipios.

Otras disposiciones de carácter fiscal, pero de menor interés que las antedichas son las siguientes:

Orden de 31 de mayo de 1.931 que suprime la consideración de beneficios fiscales que hasta entonces poseían la parte de los beneficios distribuidos a sus abonados por las compañías de seguros, a los efectos de la Contribución sobre la Riqueza Mobiliaria.

Decreto de 9 de junio de 1.931 que referente a control e inspección financiera, declara vigente el ordenamiento proveniente del régimen monárquico de Primo de Rivera, que regula penal y procesalmente el contrabando y el fraude. Es una medida más en la línea de las ya comentadas que, utilizando figuras jurídicas del antiguo régimen de contenido meramente técnico, sirve a los propósitos del nuevo sistema en sus primeros momentos de urgente necesidad de cobertura jurídica.

Orden de 23 de junio de 1.931 que permite la extensión de las tareas de inspección de los Inspectores del Timbre a los libros de bancos y sociedades; así se consigue un mejor control de las actividades de estas entidades y la comprobación de si su funcionamiento es o no conforme a la legislación del citado impuesto.

Orden de 7 de julio de 1.931 que concede la exención del impuesto de Derechos Reales a las pensiones recibidas por los mutualistas de los Montepíos o Asociaciones Mutuas que se sostengan de las cuotas de sus socios o de donativos benéficos. Se trata igualmente de una medida que protege a los sectores más desfavorecidos del cuerpo social, en la misma línea de aquellas que eximían de la Contribución de Utilidades a los jornaleros.

Orden de 28 de julio de 1.931 que establece recargos en los gravámenes de la Contribución Territorial e Industrial en las provincias de Andalucía y Extremadura.

Orden de 10 de agosto de 1.931 que establece el repartimiento de la Contribución Territorial de cara al ejercicio 1.932.

Los Decretos de 29 de agosto y 21 de septiembre de 1.931 fijan las cifras de negocios en España de una serie de compañías que se relacionan, de cara al establecimiento de la Contribución de Utilidades sobre riqueza Mobiliaria y del Impuesto del Timbre del Estado. Contiene unas series de relaciones de compañías extranjeras que operan en España.

Decreto de 13 de octubre de 1.931 que suspende durante el -- ejercicio económico de 1.932 la elevación de bases de población a -- efectos del pago de la Contribución Industrial y de Comercio.

Agrupando también aquellas otras medidas de carácter monetario y bancario no consideradas entre las anteriormente citadas, podemos traer a colación las siguientes disposiciones:

Decreto de 27 de mayo de 1.931 autorizando al Banco de España a aumentar la circulación de billetes hasta el límite establecido por la normativa bancaria primorriverista. Medida esta de tipo transitorio, en tanto que se abordase la transformación citada de octubre-di-  
ciembre, o al menos que fuese intentada.

Decreto de 29 de mayo de 1.931 dictando normas relativas a -



las operaciones de valores; igualmente en esta dirección se inscribe la Orden de 3 de junio del mismo año, que afecta especialmente a la contratación de valores con cotización internacional.

Orden de 7 de julio de 1.931 fijando los tipos de interés -- que se establezcan en las operaciones realizadas por el Banco de España.

Decreto de 8 de julio de 1.931 que reduce temporalmente el 0,5% la bonificación que concederá el Banco de España en el interés establecido por los descuentos, siempre que tales operaciones se -- realicen mediante el redescuento de los bancos, banqueros y sociedades de crédito.

Decreto de 23 de julio de 1.931 relativo a la emisión de -- nuevos billetes del Banco de España con emblemas o alegorías de la República, así como al estampillado de los que posea en sus cajas y de los que estén en circulación.

En este mismo terreno y con la clara finalidad de contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo que vengan a mitigar la grave situación existente, tanto en el sector agrario como en el industrial, se inscriben las siguientes disposiciones:

Orden de 26 de julio de 1.931 que reglamenta la ejecución -- del Decreto del 23 del mismo mes, por el que se había concedido un crédito de 10 millones de pesetas destinadas a la realización de -- obras municipales que mitiguen la deficiencia de puestos de trabajo en la España rural.

Decreto de 28 de julio de 1.931 que impone una reglamentación más flexible en cuanto a las operaciones de préstamo que realice el Banco de Crédito Industrial.

Finalmente, consideramos en Decreto de 28 de agosto de 1.931, que prohibía el aumento de sucursales o filiales bancarias en terri

torio nacional sin que previamente lo autorizase el Delegado del Gobierno en el Consejo Superior Bancario.

En síntesis, se puede obtener de este exhaustivo balance de medidas legales que vieron la luz gracias a la etapa ministerial de Indalecio Prieto en Hacienda y que corresponden al período de Gobiernos Provisionales de la República, una impresión poco propicia a la afirmación de que estamos ante una etapa de especiales ni profundos cambios.

Puede afirmarse que Prieto legisló solo aspectos parciales y coyunturales de la vida fiscal española, dando una sensación global de poca entidad. Recuperó aquellas disposiciones provenientes de la Dictadura que podían constituir instrumentos válidos para la nueva etapa por su carácter técnico y, en nuestra opinión, ello fue realizado con bastante buen criterio. Promulgó, asimismo, disposiciones de tipo sectorial y parcial destinadas a favorecer a aquellas clases sociales que constituían la base natural de apoyo del Partido Socialista al que pertenecía: jornaleros, jubilados o mutualistas, parados; ello tanto en el ámbito fiscal como monetario. Finalmente, realizó una serie de intentos de transformación de las instituciones bancarias que no logró ver concluidos por su inmediata salida del ministerio a consecuencia, entre otras cosas, de presiones de grupos interesados.

Toda esta serie de afirmaciones basadas en el balance legislativo de la etapa inicial de la República, hacen comprender que este período no pasara a la historia precisamente por la profundidad y alcance de sus transformaciones fiscales.

Habrà que entrar en el análisis de los siguientes meses y estudiar el espacio pleno del primer bienio republicano, para poder pasar a considerar los esfuerzos transformadores en lo fiscal y lo hacendístico y obtener un balance más positivo cualitativa y cuantitativamente.

En esta etapa de pleno dominio gubernamental por parte de la coalición republicano-socialista --momento de mayor auge reformista de la República, al margen de la fugaz y azarosa etapa del Frente Popular hasta 18 de julio de 1.936--, hallará el ambiente más propicio el proceso de transformaciones fiscales. Destacará en este --sentido la tarea de un equipo de hombres bajo la dirección del ministro de Hacienda Jaime Carner. Será éste quien aparezca como artífice de las principales transformaciones fiscales republicanas siendo, además, el ministro de este departamento más estable en el cargo durante toda la República, aproximándose al año y ocho meses su etapa al frente del ministerio. Bien es cierto que le hará sombra la figura de Chapaprieta, pero siempre se mantendrá aquél en un destacado primer lugar.

Entendemos, no obstante, que el contexto general del primer bienio favoreció decisivamente los propósitos reformistas del hacendista catalán, ambiente con el que no contó el levantino en la etapa radical-cedista; ello no quita para que el balance de los logros alcanzados por cada uno apoye la justicia del hecho de destacar al primero por encima de todos los demás.

La medida fundamental de reforma tributaria emprendida por Carner, que supondría una profunda transformación en la estructura y filosofía de nuestro sistema tributario o, al menos, un paso decisivo en tal sentido, consistió en la implantación en España de la --Contribución General sobre la Renta. Suponía esta figura nada menos que la implantación de un tributo característico de un sistema personal --por tímido que luego resultase--, en el feudo tradicional de un sistema dominado por los impuestos reales o de producto en su --cuadro impositivo directo.

Esta figura, tantas veces calificada como "pilar básico" de un sistema tributario que aspire a la modernidad, pasa a ser discutida en las Cortes el 15 de diciembre de 1.932, lográndose su apro-

bación el día siguiente sin votos en contra y su establecimiento — por Ley de 20 de diciembre de 1.932. Entraría en vigor en el ejercicio presupuestario de 1.933, a partir de 1 de enero.

Parece ciertamente difícil pensar que una norma avanzada de nuestro ordenamiento republicano no tuviese oposición de aquellos — grupos parlamentarios y económicos más conservadores, del mismo modo que se habían enfrentado con todas aquellas disposiciones negativas para sus intereses en todos los demás terrenos. No constituye — suficiente explicación a este hecho el que esa Contribución sobre — la Renta se hubiese aprobado en un momento político abiertamente favorable a los procesos reformistas, como es la segunda mitad del — año 1.952 a raíz de la aglutinación de las fuerzas republicanas avanzadas por consecuencia del intento antirrepublicano llevado a cabo por el general Sanjurjo en agosto de ese año. Entendemos que la fácil aprobación de la Ley reguladora de ese impuesto se debe, básicamente, a la moderación de su contenido y, prueba evidente de ello, son las críticas que en tal sentido se le formulan por los grupos de la izquierda en el Parlamento. Tal es el caso del grupo Radical Socialista que enfatizó en su oposición por la izquierda a esta ley, tal y como lo hizo con las transformaciones religiosas de la República como se analizará oportunamente.

Pero se entenderá más claramente la moderación de esta figura cuando analicemos algunos puntos básicos de su contenido. Constituían el sujeto de tributación exclusivamente personas naturales, excluyéndose Corporaciones, Asociaciones, Sociedades Mercantiles y Fundaciones. Las explicaciones dadas por Carner en la explicación — de motivos no son del todo aceptables, por cuanto para defender — esas excepciones, "estas razones, que pueden conceptuarse estimables a propósito de entidades mercantiles, y con relación a ellas — se refuerzan considerablemente ante la contemplación de la desfavorable coyuntura económica actual, no tienen tanto valor referidas a

Corporaciones, muy especialmente a las administrativas; es más: quizá hubieran aconsejado traerlas a tributar justamente cuando el régimen de autonomías crea nuevas corporaciones en las regiones favorecidas por su aplicación, y al mismo tiempo impone segregaciones cuantiosas de los ingresos fiscales." (6)

El objeto del impuesto es la renta total obtenida por el sujeto tributario en el período de la imposición. Pero no está sujeta a gravámen toda la renta, queda una exceptuación importante en el sentido de que solamente son gravadas por esta contribución las rentas superiores a 100.000 pesetas, lo cual es justificado por el legislador en base a la carencia de órganos competentes de administración y gestión tributaria, así como por el hecho de que este tributo fuese superpuesto -que no sustitutivo- de la vigente imposición de producto y viniese a limar las imperfecciones de éstos.

Esta renta imponible se declarará por el propio contribuyente (estimación directa), aunque también prevé la ley su estimación objetiva y por signos externos, entre los que cuentan las viviendas, vehículos y embarcaciones de recreo, servidores, etc.; este sistema, si bien desvirtuaba la esencia del método de estimación de bases de un impuesto personal, era realista respecto de su conocimiento de las deficiencias instrumentales y administrativas para implantar este impuesto en su pureza.

Es asimismo importante tomar en consideración la escala de gravámen recogida por el impuesto, de carácter variable y configuradora de un impuesto progresivo. El artículo 18 de la ley, recoge la siguiente tarifa:

| <u>BASE IMPONIBLE</u> |   |         |       | <u>TIPO DE GRAVAMEN</u> |
|-----------------------|---|---------|-------|-------------------------|
| 100.000'01            | a | 120.000 | ..... | 1%                      |
| 120.000'01            | a | 150.000 | ..... | 1'43%                   |
| 150.000'01            | a | 200.000 | ..... | 2%                      |

| <u>BASE IMPONIBLE</u>     |   |                     | <u>TIPO DE GRAVAMEN</u> |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 200.000'01                | a | 250.000 .....       | 2'78%                   |
| 250.000'01                | a | 300.000 .....       | 3'42%                   |
| 300.000'01                | a | 400.000 .....       | 3'97%                   |
| 400.000'01                | a | 500.000 .....       | 4'68%                   |
| 500.000'01                | a | 750.000 .....       | 5'57%                   |
| 750.000'01                | a | 1.000.000 .....     | 6'84%                   |
| 1.000.000'01 en adelante: |   |                     |                         |
|                           |   | primer millón ..... | 7'70%                   |
|                           |   | Resto .....         | 11%                     |

El equipo reformador de Carner afirmaba su esperanza de reducir el mínimo exento en un futuro próximo, así como establecer -- unos tipos de gravámen coherentes con los implantados a raíz de las 100.000 pesetas, para las cifras inferiores que pasaran a tributar.

Estos datos ponen de manifiesto la timidez del proyecto y -- su considerable moderación que, como se le achacó en su momento, ra dicaba en los siguientes puntos:

-Un elevado mínimo exento que, situado en las citadas cien mil pesetas, dejaba fuera del ámbito del impuesto a un importante -- número de potenciales contribuyentes.

-Una tímida escala de gravámen que, como hemos visto, oscila -- ba entre el 1% y el 7,7% correspondiente al primer millón, aunque -- se consiguiese en el transcurso de los debates parlamentarios lle-- gar a establecer en un 11% el tipo aplicable a aquellas rentas que sobrepasen el millón citado.

-Unas escasas previsiones recaudatorias a cargo de este im-- puesto que, para el presupuesto de 1.933 --primero en que se implan-- ta--, se estiman en 20 millones de pesetas que, en el contexto de -- unos ingresos presupuestarios estimados globalmente en 3.500 millo-- nes, resulta una cifra insignificante. (7)

Mucho más se acusan tales conclusiones si tenemos en cuenta la realidad de las recaudaciones verdaderamente obtenidas por este impuesto al liquidarse el presupuesto de 1.933; según información -- aportada por el propio Ministerio de Hacienda a través de la revista "España Económica y Financiera" a primeros de 1.934, sólo se recaudó la mitad de lo previsto por Contribución sobre la Renta, exactamente alrededor de los 10 millones de pesetas. (8)

Tal moderación puede efectivamente explicarnos la rapidez -- de la aprobación de esta ley y la falta de dureza en los debates -- parlamentarios; lo que no puede hacer es restar méritos a la indiscutible aportación de Jaime Carner a la transformación fiscal de -- nuestro país.

Su trabajo en relación con este impuesto no terminó con la ley que lo implantó, sino que continuó tratando de posibilitar y -- perfeccionar su aplicación. En esta línea se inscribe el Decreto de 15 de febrero de 1.933, que dicta normas para la aplicación de la -- Ley de 20 de diciembre de 1.932. Asimismo, la Orden de 26 de junio de 1.933, está encaminada a potenciar la función estadística e investigadora del Fisco con miras a ampliar la base de aplicación del atributo. Esta Orden dispondrá "entre otras cosas, la confección de ficheros provinciales donde se resuma, por contribuyentes, la contribución territorial e industrial y minera satisfechas, y las transacciones que permiten inducir para alguna persona natural rentas -- superiores a 40.000 pesetas". (9)

Pero la tarea hacendística de Carner no terminó con la implantación de la importante figura tributaria analizada; desde su -- entrada en el ministerio reformó y estableció otra serie de tributos fundamentales (Contribuciones Territoriales, Industrial, Utilidades, Transportes y Minas), realizó una importante serie de recargos en las tarifas de esos y otros tributos y hubo de ocuparse de -- los problemas presupuestarios de los diversos entes desde su misma

llegada al cargo.

Pasaremos ahora a ofrecer un balance de las principales disposiciones aportadas por Carner, con lo que habremos logrado ofrecer el de todo el primer bienio republicano, supuesta la escasa tarea renovadora debida a los otros dos ministros que ocuparon la cartera de Hacienda hasta las elecciones de 1.933: Agustín Viñuales y Antonio de Lara con los Gobiernos Lerroux y M. Barrio.

Ley de 17 de marzo de 1.932 relativa a los impuestos sobre - transporte por mar y a la salida por las fronteras, sobre el alcohol y la cerveza, sobre pólvoras y mezclas explosivas, sobre la gasolina y sobre el tabaco.

Ley de 17 de marzo de 1.932, que constituía la reforma del - Impuesto del Timbre hasta que un mes más tarde, el 18 de abril de -- 1.932, se aprobaba por Decreto como Ley de la República la Ley del - Timbre. No obstante, por Decreto de 26 de mayo de 1.932, se prorroga la entrada en vigor de esta ley hasta el 1º de junio de ese mismo -- año.

Nuevas disposiciones complementan esta reforma de la Ley del Timbre, tales como la Orden de 6 de septiembre de 1.932, que regula la aplicación del art. 199 de la nueva ley; contemplándose aún dos - disposiciones más, la Ley de 28 de diciembre de 1.932, que cambia el contenido de varios artículos del texto original, y el Decreto de 28 de enero de 1.933, que varía parte de la Ley de 18 de abril de 1.932. Todo ello configura un gran dinamismo en el contenido de la regulación de este impuesto que, por Decreto de 23 de febrero de 1.933, -- queda regulado en lo concerniente a su servicio específico de inspección (Inspección del Timbre).

La ley de 15 de abril de 1.932 modifica el contenido de la - reguladora del Impuesto de Derechos Reales y Transmisiones de bienes que data de la época primorriverista. El Decreto de 5 de mayo de --



1.932 aprueba el nuevo texto de esta ley, así como su tarifa, mientras que el Decreto de 16 de julio de 1.932 aprueba su reglamento de aplicación.

Mediante el Decreto de 30 de abril de 1.932 se aplica la tarifa segunda de la Ley Reguladora de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria a los comerciantes e industriales individuales obligados a satisfacer por Contribución Industrial una cuota del tesoro cuyo importe anual exceda de 1.500 pesetas. Esta medida, unida a otra serie que luego analizaremos, trae como consecuencia el enfrentamiento con el ministro de Hacienda de una serie de -- grupos de presión representativos de los intereses de comerciantes e industriales descontentos con la presión fiscal adicional que comportan esas medidas para su sector. Sus presiones van desde la notificación directa al ministro exigiéndole la retirada del paquete de medidas reformadoras, a cargo de la Unión Mercantil de Madrid, hasta la celebración de asambleas, notificaciones y reuniones, propuestas de paro y cierres a cargo de la Cámara de Industria, la Asociación Libre de Comerciantes e Industriales, la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, etc., fuerzas ciertamente ligadas a los grupos parlamentarios y económicos más conservadores.

En tal sentido de insistir en los recargos fiscales y en el incremento del control sobre los contribuyentes, que a la larga pretendía finalidades semejantes, hallamos las siguientes disposiciones de Carner y, obviamente, del primer bienio:

Ley de 11 de marzo de 1.932 relativa a recargos en las contribuciones e impuestos que se relacionan, complementada y especificada por la Orden de 15 de marzo del mismo año.

Orden de 17 de marzo de 1.932, que reglamenta oportunamente el cobro del recargo transitorio del 2,5% y 10% que, respectivamente, afectaban a la Contribución Territorial Urbana y Rústica.

Ley de 4 de marzo de 1.932, que concede hasta el 15 de mayo de 1.932 de plazo para los poseedores o propietarios de fincas rústicas no sujetas a tributación, o deficientemente gravadas, enclavadas en términos municipales cuya riqueza tribute por el régimen de amillaramiento o por el de Catastro, declaren la renta percibida por -- sus fincas; o cuando se trate de fincas cultivadas directamente por el propietario o poseedor, las que sean susceptibles de producir, La Ley de 19 de mayo de 1.932 prorrogaba este plazo hasta el 31 de mayo del citado año. Este plazo volverá nuevamente a abrirse en base a la Ley de 29 de noviembre de 1.932, hasta el 31 de marzo de 1.933, lo -- que demuestra que se trató de una árdua tarea el logro de una actualización de las valoraciones de las rentas percibidas por los propietarios de fincas rústicas.

En la misma línea de tecnificación de los instrumentos fiscales auxiliares, que tanta importancia tienen a la hora de precisar y distribuir las cargas fiscales, se encuentra el Decreto de 15 de septiembre de 1.932, que aprueba la realización y confección del Catastro de Riqueza Urbana.

Asimismo, el 3 de diciembre de 1.932 se aprueba la Ley de Administración de la Hacienda Pública.

Dada la fecha de entrada en el ministerio por parte de Jaime Carner, ha de resolver con rapidez la urgente problemática presupuestaria que se le plantea. Así, la Ley de 26 de diciembre de 1.931, -- prorroga los presupuestos del año anterior al primer trimestre de -- 1.932. Igualmente, ha de dictar normas relativas a la prórroga del -- Presupuesto de 1.931 al primer trimestre del año siguiente, para aquellos Municipios de régimen común que no tengan la aprobación presupuestaria de los respectivos Delegados de Hacienda.

Hasta el 31 de marzo de 1.932 no se aprueba la Ley de Presupuestos de 1.932 para ese ejercicio económico, hasta cuya fecha se --

han prorrogado los del año anterior, mientras que por Ley de 28 de - diciembre de 1.932, se aprobarán los que habrán de regir en 1.933, - con lo que queda regularizada la vida presupuestaria, tema no muy -- frecuente en la etapa que estudiamos entera.

Para hacernos finalmente una somera idea de la gran activi- dad legislativa que tuvo esta etapa ministerial, al margen de las re formas citadas hasta aquí, vamos a relacionar un importante reperto- rio de disposiciones fiscales, que nos darán el balance total que -- nos permitirá juzgar cualitativamente esta época transformadora, - - siempre en base a la citada obra del profesor Calle Sáiz. (10)

Decreto de 4 de enero de 1.932 y relaciones relativas a los Presupuestos Generales del Estado para el primer trimestre de 1.932.

Decreto de 1 de abril de 1.932 disponiendo la emisión por -- parte de la Dirección General del Tesoro de Deuda del Tesoro, con fe cha de 12 de abril de 1.932, exenta de absolutamente todo tipo de im puesto o gravámen, por cantidad de 500 millones de pesetas, reembol- sables a la par en un plazo de dos años y devengando un interés anual del 5,5% abonado trimestralmente.

Decreto de 16 de noviembre de 1.932 relativo a la aplicación de los impuestos de Derechos Reales y Timbre en la provincia de Nava- rra.

Ley de 17 de diciembre de 1.932 declarando exceptuadas del - recargo del 30% sobre el canon de superficie a que se refiere el ar- tículo 22 de la Ley Tributaria, a las minas, cualquiera que fuere el canon de superficie con que contribuyan.

Orden de 30 de diciembre de 1.931 reguladora de las operacio- nes de contracción en cuentas de gastos públicos de las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio 1.931, y proveer a la forma de atender a la prosecución de obras y servicios por administración en el período que media entre el final del ejercicio y el momento en

que se efectúe la provisión de fondos con cargo a los créditos que - autorice la prórroga del presupuesto

Decreto de 7 de enero de 1.932 declarando subsistentes los - preceptos de los Reales Decretos de 23 de febrero de 1.924 y 18 de - abril de 1.927 y disposiciones aclaratorias de los mismos, que se in- dican, relativos a la bonificación del 50 por 100 de la contribución territorial urbana respecto de las casas de precio reducido, cuyo be- neficio hubiese sido solicitado con anterioridad al día 7 de enero - de 1.932.

Ley de 9 de enero de 1.932 declarando excluido del contrato celebrado entre el Estado y la Compañía Arrendataria de Tabacos, el Monopolio de Tabacos en las plazas de soberanía del Norte de Africa; y disponiendo que la explotación de dicho Monopolio en las referidas plazas se adjudique en arriendo mediante la celebración de concurso público.

Orden de 20 de enero de 1.932 dictando las normas que se in- dican, relativas al régimen vigente de contratación de divisas.

Decreto de 23 de abril de 1.932 relativo a la explotación - del Monopolio de Tabacos en las Plazas de Soberanía del Norte de - - Africa.

Ley de 26 de mayo de 1.932 relativa al incremento de valor - que pudieran experimentar las carteras de títulos de las entidades - bancarias españolas, a los efectos de la tributación.

Orden de 16 de agosto de 1.932 aprobando el repartimiento de la Contribución Territorial para el ejercicio de 1.933.

Decreto de 30 de diciembre de 1.932 constituyendo una Comi- sión Interministerial integrada en la forma que se indica, para los

estudios preparatorios de la formación de Presupuestos.

Considerada la tarea reformadora llevada a cabo por Carner, casi podemos dar por terminado el balance de las transformaciones - del primer bienio; sólo la corta labor realizada por Agustín Viñuales, que ocupó el ministerio breves semanas, y los primeros momentos de Antonio Lara, que es ministro "puente" que nos conduce hasta el - segundo bienio al pertenecer a los Gobiernos anterior y posterior de Lerroux a las elecciones de noviembre de 1.933, que marcan con general aceptación las fronteras divisorias de los espacios temporales - republicanos.

Las aportaciones de Viñuales se pueden sintetizar en las siguientes:

Decreto de 29 de junio de 1.933 dictando reglas referentes a las cifras relativas de negocios aplicables, a efectos fiscales, a - los repartos de las sociedades extranjeras con negocios en España -- acuerden con cargo a sus reservas.

Decreto de 21 de julio de 1.933 creando la Comisión Informativa del Impuesto del Timbre.

Decreto de 27 de julio de 1.933 relativo al traspaso de la - contribución Territorial a la Generalidad de Cataluña, en el marco - de las transferencias de competencias y recursos financieros a su gobierno autonómico, como consecuencia del desarrollo de lo contenido en su Estatuto de Autonomía.

Orden de 14 de agosto de 1.933 aprobando el Repartimiento de la Contribución Territorial para el ejercicio de 1.934.

Decreto de 12 de octubre de 1.933 de emisión de 290 millones de pesetas de Deuda del Tesoro, ya aprobada por Lara desde el primer Gobierno Lerroux.

Un balance del primer bienio ciertamente positivo en su conjunto, fundamentalmente porque en él se emprenden una serie de transformaciones viables y, en un contexto reformador generalizado, el responsable de la Hacienda y el Fisco lleva a cabo unas reformas capaces de implantarse sin la oposición decisiva de ningún grupo, con el respeto de casi todos y con la excepción del excesivo moderantismo que se le achaca por parte de sectores de la izquierda que, por el contrario, no le escatimaron sus votos a la hora de apoyar sus decisiones fundamentales.

Lo que resulta evidente a todas luces es que ninguna acusación que se le formulen a estas reformas de radicalismo se sostiene en pie.

El segundo bienio republicano contemplará en el terreno de las transformaciones fiscales ostensibles diferencias respecto del primero, aunque ello se acuse más pronunciadamente en otros campos de la actividad económico-social. En este terreno, la poca contundencia y la ausencia de excesos que se contemplan en la primera de las etapas, así como la existencia en la segunda de una figura de talla como es Chapaprieta que, aunque de talante moderado no oculta sus propósitos reformadores, hacen que los contrastes, aunque existentes, no sean tan apreciables.

Pronto finaliza el balance cualitativo de la tarea llevada a cabo por los otros cuatro ministros de Hacienda del segundo bienio republicano, el citado Lara, Manuel Marraco y los efímeros Zabala y Rico Avello.

La tarea de Lara en el período de su ministerio correspondiente al segundo bienio se limita a la prórroga presupuestaria del de 1.933 al primer trimestre de 1.934 (Ley de 31 de diciembre de 1.933 para los Presupuestos Generales del Estado) y otra de la misma fecha para los Presupuestos Municipales, así como el Decreto de 4 de enero de 1.934 relativo a los Presupuestos Generales del Estado -

del año anterior.

Dos decretos suyos hacen referencia a impuestos establecidos o reformados por la República: el de 9 de octubre de 1.934 relativo a la Contribución General sobre la Renta y el de la misma fecha relativo a modificaciones de la Ley del Timbre. Idéntica fecha tiene su decreto incrementando la carga fiscal de la gasolina y, de 31 de -- agosto de 1.934 data el que regula la formación de un Registro Fiscal de la Propiedad Rústica.

El hecho de que Zabala y Rico Avello, los otros dos ministros del bienio, sólo se dediquen prácticamente a prorrogar los respectivos presupuestos da idea, junto con las pocas semanas que ocuparon -- el cargo, de su precaria situación y escasa importancia en cuanto a su incidencia en el balance de las transformaciones de la etapa.

Hechas estas consideraciones parece aconsejable la entrada directa en la consideración de la figura de Joaquín Chapaprieta, al -- que venimos considerando segundo en importancia de los ministros encargados de Hacienda durante la IIª República, a pesar de que su estudio no nos pueda aportar un resultado demasiado brillante en sus -- transformaciones, principalmente por coincidir su labor con el momento de máximo auge de las fuerzas reaccionarias y derechistas en el -- seno de la República, circunstancia que viene a situar a este hacendista en el polo opuesto respecto de la situación en que actúa Carner en 1.932.

La idea principal que movía la actuación de este ministro era la de establecer un plan de austeridad y equilibrio presupuestario y del sector público español, lo que por algunos ha sido llamado el -- "primer plan de estabilización español". Como él mismo expresa a través de sus discursos iniciales en el Parlamento a finales de mayo de 1.935, su programa "consistía en ir rápidamente a la nivelación del Presupuesto del Estado, sin dejar de atender largamente los gastos -- de fomento de la riqueza pública, los sociales y los de defensa na-

cional". Para ello, según sigue reconociendo, "era preciso hacer valientemente economías, suprimiendo todo abuso cualquiera que fuese - el sitio en que radicara; que había que prestar el máximo cuidado a la recaudación y retocar algunos tributos con la doble finalidad de hacerlos más justos y reforzar sus rendimientos." (11)

Evidentemente, en el contexto del momento político en que vive, se trata de los planteamientos de un técnico independiente, que era su consideración política. Son los análisis y propuestas de un - "técnico anterior a la tecnocracia" como afirma de él el profesor -- Carlos Seco en el "Estudio Preliminar" de las Memorias del político. (12).

Por mucho componente técnico que contuviera su planteamiento, era evidente que los resultados de su actuación serán tomados de manera diferente en función de los intereses a que afecten en cada caso.

Dentro de su plan de actuación, antes de entrar a exigir nuevas partidas de ingresos, creyó conveniente predicar con el ejemplo y comenzar a establecer la austeridad y la restricción en los gastos. Para ello comenzó a poner en funcionamiento la denominada "Ley de Restricciones" que es presentada en los últimos días de mayo de - 1.935. Esta ley contiene la reducción de diversos ministerios, la su presión de determinadas Direcciones Generales, la desaparición de - otros órganos administrativos, la supresión de cajas presupuestarias especiales que hacían endémico el déficit presupuestario, la desaparición del excesivo personal burocrático y de cargas por ese concepto, etc. .

Tal tarea se desarrolla mediante diversas leyes y decretos, - destacando la Ley de 1 de agosto de 1.935 que es la que autoriza al Gobierno para que, por decreto aprobado en Consejo de Ministros, reorganice los diferentes servicios de cada uno de los departamentos ministeriales.



Estas medidas, que también afectan a la reducción de la carga de la Deuda Pública, son consideradas por el propio Chapaprieta en los términos siguientes: "Para mí, la Ley de Restricciones era fundamental, tal vez no tanto por las economías que produjera como por su hondo sentido moral de saneamiento." (13). No existen dificultades para su aprobación en la Cámara, supuesto que contaban con todo el apoyo de la mayoría gubernamental capitaneada por Gil Robles, anuencia que constituye un síntoma decisivo de que no resultaban excesivamente afectados los intereses representativos de esos grupos, al menos en la primera fase de las medidas.

Comienza así para Chapaprieta con un considerable éxito su etapa al frente de la Hacienda española, lo que le permitiría abordar la segunda parte de su bienintencionada reforma con cierta dosis de optimismo. Ahora se tratará de realizar las reformas relativas a los incrementos de ingresos y a su más justa distribución que, con el saneamiento ya iniciado, cerrarían la labor proyectada por quien demostraba un ánimo seriamente reformista en su moderación.

Con un problema quizá no contase Chapaprieta al iniciar sus tareas. Los intereses perjudicados por la primera parte de sus reformas serían muy diferentes y mucho más débiles y manejables que los afectados por la segunda. A pesar de que el propio interesado se vanaglorie en sus Memorias del favorable eco en la prensa de sus medidas y a pesar de que afirmase que, en su primer aspecto, no perjudicasen a determinados sectores humildes, sino que corregían abusos -- allí donde se encontrasen, existen testimonios de que sí hubo afectados entre tales sectores y fueron destacados por determinados sectores de prensa, al menos por los de izquierda ("El Socialista", "Leviatán"), al considerar que se había perjudicado a quienes más fácilmente se podían repercutir las medidas y no exactamente a los responsables de los más acusados abusos que determinaban la situación a corregir.

En todo caso, esta parte no es la peor parada de sus reformas sino, como indicábamos, lo será la que vendría en contrapartida de la anterior, exigiendo mayores sacrificios a los contribuyentes para incrementar los ingresos. Aquí los intereses afectados serían más potentes y, aunque Chapaprieta consideraba que "las reformas tributarias tendrían incluso en los propios contribuyentes simpática acogida al ver que no siempre recaía sobre ellos el sacrificio", él mismo reconocerá su error al indicar que: "luego se verá cuan plenamente me -- equivoqué."

Intenta la obtención de mayores recursos mediante la reforma de diversos tributos, que emprende abordando una veintena larga de proyectos de ley que afectarán a los de la Renta, Territorial, Utilidades, Timbre, Derechos Reales y Transmisiones, Gas, Electricidad, etc..

De todos ellos el más venturoso final, llegándose a aprobar, es el que modifica la Contribución sobre la Renta. Ciertamente que se trata de unas alteraciones sólo parciales en su texto, viendo incrementados los tipos de gravamen a aplicar (recordemos la timidez del de Carner en este aspecto) y reduciéndose su base imponible a -- 80.000,01 pesetas de las 100.000,01 anteriores, pero esta ley se -- aprueba en el Parlamento el 6 de noviembre de 1.935, datando su promulgación del 14 de noviembre de 1.935.

Otros dos proyectos van a llegar a ser discutidos y aprobados en su articulado, pero no llegan a su definitiva aprobación al disolverse las Cortes al final de ese ciclo republicano y convocarse nuevas elecciones:

Se trata de la modificación de algunos conceptos de la Ley de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, que supone un incremento del 10 al 15% de la tarifa que grava los rendimientos del capital y ante cuya discusión de su articulado se comienza a notar la oposición de --

los propios miembros de los grupos de derecha que apoyan el Gobierno. Las ausencias son notorias a la hora de las votaciones del articulado y la marcha es tan lenta que se dará lugar a la suspensión de las Cortes sin su votación definitiva aunque estuviese aprobado el articulado. Parecida circunstancia acontece con el proyecto de ley que modifica varios artículos del Impuesto del Timbre del Estado (finales de noviembre de 1.935).

Pero serán dos proyectos preparados y presentados por este ministro los que comporten la mayor frustración de su labor por tratarse de tributos de importancia y significado, sencillamente al afectar seriamente los intereses de grupos poco dispuestos a una mínima cesión y, además, muy bien instalados en los centros de poder. Se trata de dos tributos que determinarán la decisión de esos grupos de acabar con la tarea política del ministro: el relativo a los Derechos Reales y el de Contribución Territorial. Afirma él mismo que, "De los proyectos por mí presentados hubo dos que atrajeron la respuesta de las clases acomodadas: el de reforma del impuesto de derechos reales y el relativo a la contribución territorial. Seguramente que este último habría sido combatido por los grandes terratenientes con más tesón que el de derechos reales..." (14) En otro momento -- afirma: "El proyecto que reformaba el impuesto de derechos reales -- fue escogido desde el primer momento como terreno propicio para darme la batalla." (15)

No creemos necesaria, ni siquiera conveniente, la entrada en el estudio del contenido concreto de las reformas de estos proyectos, sino que lo que nos parece fundamental es destacar el pobre balance aportado por un ministro deseoso de realizar una tarea ecuaníme en la reforma y saneamiento de la Hacienda española, a causa de las presiones e impedimentos de los grupos de interés tantas veces citados como influyentes en el transcurso del régimen republicano, principalmente en su segundo bienio y con un carácter regresivo (grupos banca

rios y financieros, terratenientes y propietarios de fincas rústicas, mercantiles e industriales, etc.).

Cuando en este tema de la Ley de Restricciones de Chapaprieta se entró en la parcela relativa a una transformación fiscal por moderada que esta fuese, volvieron a salir a la luz todos los métodos de obstrucción que veremos en cualquiera de los otros campos objeto de transformación; ausencia de la Cámara, constantes enmiendas, minuciosas intervenciones, votaciones nominales.... Ello, por curioso que parezca, corriendo a cargo de la propia mayoría gubernamental radical-cedista y, especialmente, de la propia CEDA. Cuando corrían el más mínimo riesgo de alteración instituciones como la de la propiedad (especialmente la de la tierra) o de la herencia (ante el impuesto de derechos reales y sucesorio), o cuando interesadamente se decían ver esos peligros en una mínima reforma fiscal, los grupos representativos de la coalición derechista no tenían respeto ninguno ni con la estabilidad de los mismos miembros de su propio gobierno.

En tal sentido, Chapaprieta fué un caso paralelo al del ministro cedista de Agricultura Giménez Fernández, reconociendo él mismo el origen de sus dificultades al afirmar que, "las clases acomodadas de España incurrieron en el grave pecado de egoísmo que luego tan caro han pagado (se refiere a los meses finales de la República y la guerra civil). Con sus absurdas resistencias a nímios sacrificios --bien justificados teniendo en cuenta los que se habían pedido a -- otros sectores de la sociedad española--, sirvieron inconscientemente de pretexto a maniobras políticas del más viejo estilo." (16)

Finalizado el bienio radical-cedista con la disolución de las Cortes y posterior convocatoria de elecciones para febrero de 1.936, llega la República a su etapa final, de matiz radicalizado y acusadamente reformista, de cuyas consecuencias y causas no es ajena la responsabilidad de ese período de reacción y egoísmo que desoye las más elementales necesidades y reivindicaciones del cuerpo social español,

que se radicaliza fuertemente con sus representantes políticos a la cabeza. La etapa frentepopulista es lo suficientemente corta hasta el comienzo de la guerra civil, que resulta prácticamente imposible realizar una tarea novedosa y de profundidad en los cambios fiscales.

El más destacado de los ministros de la época consideramos -- que es Gabriel Franco, a pesar de sus escasos meses en el cargo, sus tituyéndole luego Enrique Ramos.

Las decisiones fiscales en esta etapa van encaminadas a dar -- un nuevo matiz progresista y transformador al sistema tributario y a la Hacienda en su conjunto, aunque se trate de reactivar medidas y -- decisiones más que de poner en órbita un plan estructurado y con nuevas coordinadas; no obstante, el período excepcional de guerra hace que salten por los aires los principios exigibles a un Fisco normalizado y estable.

Digamos que las disposiciones fundamentales de Gabriel Franco, a los simples efectos de completar el balance legislativo fiscal en--sayado en este apartado son:

Decreto de 31 de enero de 1.936, que prorroga el Presupuesto del Estado de 1.935 al segundo trimestre de 1.936.

Decreto de 8 de abril de 1.936 de concesión de créditos presupuestarios para tal prórroga.

Decreto de 30 de abril de 1.936 modificando determinados aspectos de la Ley de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria.

Decreto de 30 de abril de 1.936 autorizando al ministro de Ha cienda a presentar en Cortes un proyecto de ley modificando el que -- grava el gas-oil y sus especialidades.

Decreto de 7 de mayo de 1.936 que presentaba a las Cortes un proyecto de ley estableciendo un recargo progresivo a la Contribu- -- ción territorial Rústica.

Asimismo establece diferentes emisiones de Deuda y Obligaciones del Tesoro.

Luego de este balance de las disposiciones de la última etapa republicana, que supone el cierre de las consideraciones acerca de todo el período de 1.931 al 18 de julio de 1.936, consideramos necesaria una valoración sintética y de conjunto de las transformaciones fiscales de esta etapa.

Aparecen destacadas sobre las demás figuras los Carner y Chapa prieta, aún con valoraciones diferentes de sus logros. El primero de ellos es el gestor de unas reformas ciertas aunque con el sello de la moderación, avaladas por unas fuerzas políticas dominantes en el primer bienio de tipo progresista. De su tarea destaca la implantación de la Contribución General sobre la Renta que una vez abolida la República, no es reimplantada en España, en la línea de los sistemas fiscales modernos de los países occidentales desarrollados, hasta finales de la década de los setenta.

El segundo se nos presenta como reformista que aporta grandes propósitos pero frustrado en sus logros reales, principalmente por tener frente a sí los intereses de los grupos representados en los mismos partidos y coaliciones políticas que avalaban su gobierno pero que, como sucede en algún otro caso representativo, prefieren eliminarle del Gobierno antes que ceder un ápice ante una moderada reforma.

Un balance ciertamente discreto y moderado, que resulta insignificante en comparación con las tensiones y presiones verbales y -- fácticas desarrolladas en la época y que, obviamente, descalifican por completo a quien, con esas bases, pretenda tildar a esa etapa de revolucionaria o excesivamente avanzada.

Es, enfin, una etapa en la que no predomina precisamente la estabilidad como se puede comprobar del número de gobiernos existen-

tes y del de ministros que sucesivamente fueron encargados de las responsabilidades de la Hacienda y el Fisco. En tal sentido, como -- bien afirma el profesor Calle Sáiz, apoyando así las tesis del profesor Albiñana (17), proliferan los créditos extraordinarios y suplementarios, las constantes prórrogas presupuestarias, los recargos en los tributos, etc.; ello es absolutamente contrario a la existencia de un plan de reformas, sistemático y claro, que no hemos podido hallar a lo largo de nuestra investigación entre los logros transformadores de la IIª República en el terreno fiscal y hacendístico.

La improvisación y las respuestas inmediatas a las necesidades urgentes de cada momento se imponen a los criterios racionales, pues tales eran los signos de la época. No podemos, sin embargo, quitar mérito a los logros reformistas obtenidos, que están ahí y ante las circunstancias citadas otorgan mayores méritos a sus protagonistas. Quizás por todo ello o por el talante de estos sí encontramos -- una mayor identidad lineal entre lo logrado en las diferentes etapas de la República, a diferencia de las transformaciones de otros aspectos económico-sociales que estudiaremos a continuación, que nos presentan grandes oscilaciones de un bienio a otro y un balance final no excesivamente destacado en sus aspectos cualitativos. En el terreno fiscal, aún llegando al mismo punto de reformismo moderado, no fué a costa de desandar el camino andado.

### V.3.- OTRAS TRANSFORMACIONES ECONOMICO SOCIALES

Aún cuando el objetivo fundamental de todo el trabajo haya sido el estudio de los diferentes grupos de presión e interés al servicio de la comprensión de sus actuaciones tendentes a la explicación de las transformaciones fiscales de la Segunda República, habremos de completar el estudio con el análisis de aquellas otras transformaciones que nos ofrezcan un más completo balance del terreno económico-social resultante al final del régimen republicano.

Resulta indudable que existe una interrelación de importancia entre las analizadas transformaciones fiscales y el conjunto de los cambios económico-sociales que conllevó la etapa 1.931-1.936 en sus principales campos aquí estudiados; es decir; reforma agraria, - reformas educativo-religiosas y reformas militares. Tal conexión evidente se amplifica desde la perspectiva del enfoque que nosotros venimos ofreciendo en nuestro trabajo, que pretende relacionar ese conjunto de transformaciones con el juego de los grupos sociales y de presión en el seno de la vida republicana.

El contexto de grupos de uno y otro signo que condicionan la existencia de un determinado modelo de reformas fiscales, así como - su viabilidad en la realidad de aquellos años, serán los que vengán paralelamente a conformar el panorama económico-social aquí analizado, tanto en su plasmación jurídica, como en lo referente a su puesta en práctica y, sobre todo, a su distinta valoración a medida que se suceden los grupos en el poder en las diferentes etapas por las que atraviesa la IIª República.

Así pues, si nos interesaba primeramente la consideración de las transformaciones del ámbito fiscal y tributario del citado régimen, intentamos ahora abarcar más nuestro campo problemático y ofrecer un balance mas amplio del juego de los grupos, en orden a considerar otras transformaciones de aspectos vitales de la vida española



de los años treinta, para así enmarcar lo fiscal y lo tributario en el justo ámbito a que ciertamente pertenece. No se olvide que, aún - siendo objetivo básico para nosotros, el mundo de la Hacienda Pública republicana no fué, en sí mismo, punto clave de atención del régimen que, en base a su realidad social cotidiana, tenía que dedicar - atención preferente a la problemática campesina y agrícola y, en base al talante de los nuevos rectores de su vida política encargados de conformar y estructurar un nuevo Estado, habría de prestar su dedicación al ámbito educativo, religioso y militar en los que, como - ya veremos, resultaba de gran importancia la incidencia de los aspectos presupuestarios y la actuación del sector público. De tal manera que estos aspectos cobran para nosotros una doble importancia.

Pasemos a continuación al estudio detallado de cada uno de - estos ámbitos.

#### V.3.1.- Transformaciones agrarias

Como consecuencia del juego de partidos y grupos sociales y de presión a lo largo de la etapa republicana, se produce un proceso de transformación en el terreno agrario que resulta destacable del - contexto de todas las transformaciones de tipo económico-social de - la etapa estudiada.

Poca novedad representa esta transformación concreta respecto de las demás en el sentido de su proceso pues, a los intentos de reforma iniciados con el propio régimen, conseguidos con esfuerzos - y con relativo grado de éxitos, sucede la contrarreforma que, en casi todos los demás terrenos, tiene lugar como consecuencia directa - del cambio en la relación de fuerzas políticas parlamentarias y gubernamentales.

Convendrá centrar nuestros análisis finales en el balance - que ofrece la etapa en cuanto a logros y consecuciones de tipo agrario, en relación con la situación preexistente en el campo español.

Para el análisis de este conjunto de transformaciones, aparte de su diferenciada cualidad en uno y otro bienio, nos vamos a regir conforme al siguiente esquema:

Analizaremos primeramente las medidas agrarias adoptadas por el Gobierno Provisional. Comportan una serie de actuaciones de urgencia para compensar, en parte, la grave situación y difícil panorama que ofrecía el sector agrario al inicio de la etapa republicana. Son unas medidas dadas por Decreto en base a razones de urgencia que, si bien son preparación y complemento de la definitiva reforma, no entran en las actuaciones de fondo que ella requería, debido principalmente al pacto existente para que las medidas de esa magnitud solo fueran adoptadas cuando existiera un Parlamento democráticamente elegido y con fuerza legislativa plena. Tal sucedería con la elección de las Cortes Constituyentes.

Precisamente, el segundo bloque de actuaciones para la reforma agraria, se produce durante el período constituyente, siendo tomadas las principales medidas reformadoras por las Cortes elegidas en las elecciones de 28 de junio de 1.931 que, como tarea básica, tendrían la de elaborar un texto constitucional.

Esta segunda etapa de la reforma es la fundamental por cuanto que, en ella, se abordan los cambios estructurales cualitativamente más importantes. Se va a elaborar una Ley de Bases que oriente toda la reforma y se va a producir el proceso de expropiaciones de la tierra, de asentamiento de colonos y de resolución de arrendamientos. Aunque con diferente intensidad en la ejecución de las medidas, esta etapa es la que establece los instrumentos y fundamentos de derecho necesarios para la viabilidad de la reforma. El proceso irá constituyéndose en vivo reflejo del transcurrir de los acontecimientos políticos y juego de fuerzas dentro de la coalición gubernamental.

La tercera etapa corresponde a la ralentización de las reformas

mas. Su origen se halla en las elecciones de noviembre de 1.933 en las que los republicanos de izquierda y los socialistas ceden su situación de dominio a los republicanos de centro-derecha (los radicales) y a otras fuerzas más netamente derechistas y de más dudosa condición republicana (la CEDA y los Agrarios). Aunque no es inmediata la parada del proceso reformista, a medida que se consolidan las nuevas fuerzas ganadoras en aquellas elecciones y los intereses más reacios a la reforma se implantan en los aledaños del Gobierno republicano, se contemplará lo que llamamos "reforma de la reforma agraria" o contrarreforma agraria.

La etapa final que debemos considerar corresponde al período comprendido entre la victoria electoral de las fuerzas del Frente Popular en febrero de 1.936 y julio de aquel mismo año. Son unos breves meses en que las fuerzas representativas de los intereses agrarios afectados negativamente por la lentitud desesperante de la reforma y, luego, por la contrarreforma, toman el poder y se disponen a llevar a cabo la reforma en su acepción más rápida, eficaz y radical. Se trata de llevar a cabo, con una filosofía casi de revancha, el contenido de la reforma agraria de manera que permita la rápida expropiación de tierras, el asentamiento masivo de colonos y la explotación individual y colectiva del campo.

Esta última etapa no hará sino poner en funcionamiento los mecanismos de defensa y agresión de aquellas clases y grupos afectados por las expropiaciones que, aún infrarrepresentados a nivel político y legal, tienen fuerza de hecho como para oponerse por esa vía a la reforma y a la República entera que, probablemente, no encontró el método adecuado para transformar una situación de la cual, quienes se encontraban favorecidos por ella, tan reacios se mostraban a permitir que fuera cambiada; tanto como para emprender una guerra civil por esa, entre otras causas.

En un elemental planteamiento racional de las transformacio-

nes agrarias republicanas, hay que tener presente su ordenación cronológica, al margen de aquella que atiende a su ordenación cualitativa. Así pues, habremos de comenzar considerando aquellas medidas relacionadas con la problemática agraria que se toman en la etapa del Gobierno Provisional y que, al responder a acuciantes necesidades sociales, adoptan la forma de Decreto y, sin pertenecer a la legislación fundamental en esta materia, sí constituyen importantes medidas jurídicas complementarias o, al menos, conexas con la reforma agraria en sus medidas de fondo.

La primera medida a destacar en este sentido es el Decreto - de 28-IV-1.931, sólo dos semanas después de proclamada la República, que es conocida por "Ley de Términos Municipales" y obligaba a emplear en primer lugar a los obreros pertenecientes a cada municipio - en su propio término municipal.

La intención manifiesta que implicaba esta ley era la de mitigar determinadas situaciones negativas para los propios obreros, - especialmente para algunos significados por su filiación política de izquierda o sindical, que se derivaba de la existencia de libre contratación de mano de obra y, mediante la cual, los patronos elegirían con certeza a aquellos que estuvieran dispuestos a ofrecer su - trabajo a menor precio, tanto por proceder de zonas en las que por - su mayor abundancia y excedente aquel se abaratase, como por carecer de conciencia reivindicativa y no exigir las mejoras conseguidas a - través de la lucha sindical.

Ante tal situación claramente favorecedora de los patronos y de las prácticas caciquiles que el régimen republicano venía a eliminar, se promulga esta medida vía Decreto, posteriormente aprobada por las Cortes, cuya procedencia estaba en el Ministerio de Trabajo y su inspiración en el ministro socialista que ocupaba aquella cartera, - Francisco Largo Caballero.

Evidentemente, la primera intención de esta medida está cla-

ramente justificada, pero lo que aparentemente se deduce de ella es que fué poco meditada antes de ser puesta en funcionamiento. Una medida de tales características habría de requerir estudios serios y - continua planificación para no incurrir en las consecuencias que luego se derivaron, en el sentido de desequilibrio de la mano de obra - de unos municipios a otros. La urgencia de su promulgación constituía una seria contradicción con el necesario estudio de sus posteriores consecuencias que, por tal carencia, fueron bastante negativas al que dar unos municipios con insuficiente fuerza de trabajo para el cultivo mínimo necesario de su suelo, mientras que en otros la mano de obra llegó a sobrar, ocasionando trabajadores en paro a causa de la citada medida.

Puede adivinarse que esta medida, por tales efectos negativos y por la falta de previsión de sus consecuencias, fué fuertemente combatida por diferentes grupos parlamentarios y de presión que - realmente se oponían a la fuente de procedencia de la Ley, el Partido Socialista, que fué el que casi exclusivamente adoptó su defensa.

El Decreto de 7 de mayo de 1.931, igualmente dimanado del Ministerio de Trabajo e inspirado por su titular Largo Caballero y su grupo político, es el de Jurados Mixtos, que es una figura que evoluciona a partir de la de aquellos "Comités Paritarios" que fueron implantados por el régimen primorriverista. Estos Jurados son a modo - de tribunales laborales con funciones diversas, tales como la resolución de contenciosos planteados entre patronos y obreros, establecimiento de normas de trabajo, inspección, etc...

Podemos establecer el hecho de que sólomente los socialistas, al igual que en el caso anterior, defienden en solitario esta medida que, por el contrario, es contestada desde el sector patronal de modo muy fundamental, así como desde el otro grupo importante de representación de los intereses obreros, el anarquismo, partidario - de la acción directa y contrario a la mediatización de las relacio-

nes laborales por instituciones de arbitraje como la que se implanta a través de este Decreto cuyo estudio ahora nos ocupa, que se ratifica y promulga por el Parlamento el 27 de noviembre de 1.931.

No obstante, y a pesar de todo lo dicho, aparecen los Jurados como un instrumento útil a la resolución de la grave problemática agraria de los inicios de la IIª República desde un enfoque moderador y conciliador tendente a evitar en lo posible la tensión y la lucha de clases observable de forma acusada y grave, como consecuencia de la radical oposición de intereses en el campo. Su éxito y el matiz predominante de sus decisiones dependería de la fuerza mas sobresaliente en cada una de las regiones puestos en práctica; cuando eran los ugetistas los hegemónicos su viabilidad fue posible, no así si el anarcosindicalismo resultaba fuerza decisiva o si los patronos contaban con auge suficiente como para anular las decisiones de los Jurados.

Estas instituciones de arbitraje dependieron en buena medida de la marcha de las fuerzas políticas a lo largo de la etapa republicana; así, en el segundo bienio serán reformados por Ley de 11 de julio de 1.935 en la dirección mas conservadora que apuntaban los tiempos.

De la misma fecha que el Decreto que establece los Jurados - Mixtos, 7 de mayo de 1.931, data el que obliga a los cultivadores de tierras a la realización de todas las labores propias de un buen cultivo. Es el denominado de "Laboreo forzoso", que trata de evitar la maniobra que ya se estaba observando de dejar de realizar muchas labores del campo para así ofrecer menos jornales y agudizar la grave situación del campesinado; lo que no suponía sino un boicot al nuevo régimen republicano en su débil flanco campesino y agrario por parte de los terratenientes que, deseosos de mantener su situación privilegiada a cualquier precio, toman este tipo de represalias anticipadas al conocimiento mismo de la ley de reforma agraria y de sus efectos

concretos.

Esta situación es útil para plasmarnos no sólo la necesidad de estos Decretos urgentemente adoptados, sino también el ambiente - de dificultades que comportaba el mero inicio de un proceso de reforma agraria independientemente de su contenido.

Otra serie de Decretos pertenecientes a esta época de Gobierno Provisional y que se dirigen hacia la regulación de aspectos relacionados con la política agraria, son los siguientes: (18)

Decreto de 28 de abril de 1.931, que se encaminaba a poner - fin a los deshaucios emprendidos contra aquellos colonos que se pronunciaron favorablemente y apoyaron la proclamación de la República.

Decreto de 11 de junio de 1.931 que permitía la revisión de aquellas rentas que se venían cobrando en cuantía excesiva, adecuándolas a la renta catastral de las fincas. Prohibía asimismo los subarriendos.

Decreto de 17 de junio de 1.931 que regulaba el derecho a la indemnización en caso de accidente laboral en la agricultura que, en la mayoría de los casos, no estaba aún reconocido.

Decreto de 1 de julio de 1.931 que fijaba la jornada laboral en la agricultura en 8 horas.

Finalmente, dentro de este conjunto de medidas encuadradas - en el período del Gobierno Provisional, citaremos el Decreto de 21 - de mayo de 1.931 inspirado por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es asimismo socialista, Fernando de los Ríos, que crea la Comisión Técnica Agraria, que será la "encargada de proponer al Gobierno la legislación y medidas para llevar a cabo la reforma" (19). Nos limitamos ahora a citar este Decreto entre los que emanan de la etapa ahora considerada, ya que el estudio mas concreto de esta Comisión - será preámbulo para entrar en las medidas específicas de reforma agraria correspondientes al primer bienio republicano, en su etapa consti

tuyente y legislativa.

La tarea fundamental emprendida por el primer bienio republicano a partir de las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1.931, fué la de elaborar una Ley de Bases que diese orientación a la prevista reforma agraria a realizar por la República.

Esta Ley de Bases, que contempla en torno suyo la puesta en funcionamiento de todos los mecanismos de luchas y presiones de intereses, tiene un largo recorrido que parte del citado Decreto de 21 de mayo de 1.931, creador de la Comisión Técnica Agraria, primer paso dado en este sentido, que contaba entre sus misiones con la del estudio de la problemática de los latifundios, bienes comunales, crédito agrícola y arrendamientos que, como se ve, forman esencialmente los temas básicos sobre los que girará la futura reforma agraria.

Tal Comisión Técnica Agraria tiene una composición que, presidida por el jurista D. Felipe Sánchez Román, es la siguiente: 6 ingenieros agrónomos, 2 ingenieros de montes, 4 economistas, 8 juristas, 4 profesores especializados en Geografía, 5 agricultores, 2 obreros y 2 oficiales administrativos.

El funcionamiento de esta Comisión se montó a través de una serie de subcomisiones especializadas, una de las principales fué la de Reforma Agraria, encargada de esa tarea específica, dando un énfasis especial al estudio de la problemática latifundista. Esta Subcomisión estaba presidida por el mismo Presidente de la Comisión Técnica, Sr. Sánchez Román, estando integrada por los economistas Flores de Lemus y Viñuales y por los ingenieros agrónomos Pascual Carrión y Rodrigáñez; pudiéndose sostener que los artífices esenciales de la reforma no fueron otros que Sánchez Román en el aspecto jurídico, Flores de Lemus en el económico y Pascual Carrión en el técnico agrícola.

Esta Subcomisión fué la que elaboró el primer proyecto de -



ley de reforma agraria que si, como veremos, no fué el definitivo, - fué el que marcó la pauta esencial de la estructura a seguir por la reforma.

Este primer proyecto contenía fundamentalmente el siguiente esquema en torno al cual giraría la reforma:

Invalidaba las divisiones de fincas realizadas con posterioridad al 14 de abril para escapar a la previsible expropiación.

Disponía que en el primer año de efectividad de la reforma - serían asentados entre 60.000 y 75.000 familias campesinas, como cifras mínimas que se consideraban necesarias para mitigar la situación campesina.

Centraba la reforma, manteniendo la filosofía de que la problemática latifundista sería la mas acuciante, en las zonas de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real y Toledo que, a su vez, ofrecían un panorama de mayor agudización de la problemática social.

Ponía en manos del Instituto de Reforma Agraria la ejecución de tal reforma, dotándolo simultáneamente de 50 millones de pesetas como presupuesto de partida.

Disponía la creación de una junta central y unas juntas locales para preparar y ejecutar la reforma, que afectaría según este primer proyecto a las siguientes extensiones de tierra:

Terrenos de cultivo herbáceo que excedan de 300 hectáreas.

Terrenos de olivar de extensión superior a 200 " " "

Terrenos de viñedo " " " " " " 100 " " "

Dehesas " " " " " " 400 " " "

En terrenos de regadío afectaría a las extensiones superiores a ..... 10 hectáreas.

Igualmente recogía el proyecto la posibilidad de ocupación temporal de tierras, así como la expropiación sin indemnización en -

casos determinados y la constitución de comunidades de campesinos - asentados, que tenían en sus manos la posibilidad de decidir la forma de explotación individual o colectiva a seguir.

Este primer proyecto se elaboró con buenas dosis de entusiasmo por parte de la Subcomisión encargada y, en el entendimiento de la urgente necesidad de su implantación ante la grave situación social campesina, estuvo dispuesto por completo a mediados de julio de 1.931 lo que, si pensamos que la Comisión Técnica Agraria data de 21 de mayo, es toda una fecha record en la finalización del proyecto.

Este fué presentado al Consejo de Ministros que se celebró - el 21 de julio y explicado por los tres principales artífices de su ejecución al Gobierno, pretendiendo su puesta en marcha vía decreto a sabiendas de las obstrucciones y retrasos que su discusión parlamentaria acarrearía y de lo gravemente perjudicial de ese retraso para una situación agraria a punto de estallar.

El proyecto incomodaba a importantes y, sobre todo, fuertes sectores interesados que, por diferentes vías mostraron su inquietud y la hicieron llegar hasta el Gobierno, que muestra actitudes diferenciadas ante el contenido del texto pero que, en su conjunto, no llega a su aprobación, eligiendo un camino más lento y aún más moderado y asumiendo con ello los riesgos que seguramente comportase tal lentitud.

Como alternativa a este primer proyecto y mostrando fuerte sensibilidad ante el problema agrario y sus imprevisibles consecuencias, se presenta un nuevo proyecto auspiciado desde el propio Gobierno y, principalmente, por su Presidente Alcalá Zamora; ello tiene lugar el 25 de agosto de 1.931 y, conforme consta en el mismo - preámbulo del nuevo proyecto, se apoyaba en la propuesta de la Comisión Técnica aunque con determinados retoques. Lo que es bien cierto es que el tiempo perdido jugaba en contra de la viabilidad de cualquier tipo de reforma y la sensibilidad del Gobierno quizá no llega-

se a captarlo.

Aunque mantiene importantes aportaciones del primer proyecto (número de asentamientos, creación del Instituto de Reforma Agraria, creación de la Junta Central de Reforma Agraria -llevada a cabo por Decreto de 4-IX-31-, etc.), la parte de este segundo que se diferencia del primero en sentido moderador, se refiere a los puntos siguientes:

Realización de la expropiación mediante indemnización de los propietarios basada en el líquido imponible contenido en el Catastro.

Pago de estas expropiaciones en dinero hasta las primeras 500.000 pesetas, sólo el resto se hará por vía de títulos de Deuda. La moderación que comporta esta medida nos es explicada por Pascual Carrión cuando afirma que "500.000 pesetas de 1.931 equivalen a 8 millones de 1.970, mostrándonos la liberalidad de esta medida."

Asimismo, quedaba una importante superficie de tierra exenta de expropiación, supuesto que este proyecto exceptuaba de la posibilidad de ser expropiadas aquellas tierras "cultivadas directamente por los propietarios a uso y costumbre de buen labrador", así como los espacios forestales y los dedicados a pasto no cultivables permanentemente.

Igualmente, se desechaba la ocupación temporal de fincas del contexto de este proyecto.

Tampoco este segundo, de moderadora vocación respecto del primero, escapó de las críticas duras de los sectores de la derecha representativos de los intereses afectados y que dejan oír su voz en el Parlamento, en asambleas y actos públicos realizados en diversas entidades madrileñas y del resto de España. Son evidentes manifestaciones de los grupos de presión en plena acción; a ellas habían de responder los componentes de la Comisión de Reforma mediante un pro

grama de reuniones informativas y actos públicos, así como mediante publicaciones diversas en las que ofrecían la verdadera dimensión de la reforma y rebatían muchos de los argumentos ofrecidos en su contra, muchas veces exagerados y siempre interesados.

Hasta la fecha, solo se había adelantado en la puesta en marcha del ya citado Decreto de septiembre de 1.931, en que se constituía la Junta Central y las Provinciales de reforma agraria. Aquella, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y constituida - por un Magistrado, un Ingeniero Agrónomo y otro de Montes, un representante de la Asociación General de Ganaderos, un propietario agrícola y dos representantes de los obreros agrícolas de las provincias afectadas. Estas Juntas Locales agrarias, que con pocas variaciones se contemplaban en los dos primeros proyectos estudiados, son las encargadas de la importante misión de confeccionar un Catálogo de fincas que, en cada término municipal, pudieran ser afectadas por la reforma, especificando su condición jurídica, su extensión a partir de determinado tamaño, su tipo de aprovechamiento de cultivo, vecindad del propietario, forma de explotación, etc.

Conseguidos estos logros que, afortunadamente para la reforma, podían comenzar a funcionar de manera autónoma, ven la luz todavía dos proyectos más antes del definitivo que llegue a ser discutido en el Parlamento. El primero de estos proyectos, tercero en orden cronológico, data de octubre de 1.931 y está representado por el dictamen emitido por la Comisión Parlamentaria en base al proyecto del Gobierno; volvía a ser más radical que el segundo y denotaba la influencia de sectores socialistas mayoritarios en la Comisión. Naturalmente, también fué duramente criticado por los sectores católico y conservador, así como por sus grupos afines. También tuvo en contra a los miembros mas moderados de la propia Comisión, tales como - los señores Díaz del Moral (Asociación al Servicio de la República) e Hidalgo (Partido Radical).

Aún hubo un cuarto proyecto que no llegó al proceso de discu sión parlamentaria; estuvo este constituido por un nuevo dictamen de la Comisión Parlamentaria, yendo también mas allá del proyecto de Al calá Zamora al incrementar las fincas expropiadas y disminuir las in demnizaciones.

Huelgan los comentarios reiterados acerca del cúmulo de pre siones que suscitó este tema a lo largo de la República, y ello queda perfectamente obviado con el hecho de que pasase más de un año de tensiones y luchas sin que progresara ni un ápice la reforma agraria, a pesar de que se hallaba el gobierno en manos de aquellos que más - interés tenían en emprender las transformaciones en este campo.

Hubo de ser, por fin, el quinto de los proyectos elaborados el que pasase a ser discutido parlamentariamente, suponiendo ello el paso definitivo para la iniciación efectiva del grueso de la reforma que, en su esencia, no fué realizada por los decretos reguladores de los aspectos parciales estudiados, sino por la vía legislativa ordinaria del Parlamento.

Este quinto y definitivo proyecto fué el presentado por Marcelino Domingo, Ministro de Agricultura, y data de 14 de marzo de 1.932. Presenta como novedad la supresión del gravamen especial sobre la propiedad rústica que se contemplaba en los primeros proyectos y comporta un compromiso entre las principales fuerzas políticas.

También este proyecto fué duramente atacado por la derecha - en un ánimo obstruccionista que estaba causando los efectos deseados y sembrando ostensible desaliento en quienes apoyaban la necesaria - reforma que, además, veían su propia pérdida de credibilidad entre - los propios campesinos ante la falta de aportación de realidades por parte de la República y la influencia, en sentido crítico, de fuerzas del extremo izquierdo del panorama político y sindical.

Puede afirmarse con toda certeza que fué un sólo acontecimiento

to el definitivo impulsor del éxito de la Ley de Reforma Agraria. -- Sin el movimiento militar que intentara sin éxito el General Sanjurjo el 10 de agosto de 1.932 y que aglutinó y recabó nuevas fuerzas - y moral entre los republicanos, quizá no hubiera llegado nunca a la España republicana una ley de reforma agraria.

La definitiva promulgación de esta ley tiene lugar el 15 de septiembre de 1.932, sólo un mes después del golpe de Sanjurjo, pero casi un año y medio más tarde de la fecha de proclamación de la República.

Aparte de ello, como consecuencia inmediata y en respuesta a la Sanjurjada, el 24 de agosto de 1.932 se procede a la expropiación sin indemnización de las fincas de los Grandes de España, que comprendían unas extensiones definibles como de escándalo; aunque tal medida, tomada con el furor de la respuesta inmediata, no pasase luego del terreno de los propósitos al de la realidad, una vez superado el primer momento de radicalizada reacción.

Resultaría ciertamente complicado seguir de cerca el curso - de los debates parlamentarios que origina esta ley ya que, prolongada durante cuatro meses (10 de mayo a 9 de septiembre de 1.932), su discusión llena prácticamente las sesiones parlamentarias que se celebran en este interregno temporal. Como sostiene Malefakis, "la razón más importante de la extraordinaria duración y complejidad de los debates se debió a la campaña de obstrucción de la minoría agraria". (20) La táctica seguida era la de agotar todos los turnos de intervenciones, el tiempo límite de la intervención y la presentación del máximo número de enmiendas a cada artículo.

Lo que realmente no pudo ser resuelto por el lento transcurrir de los debates fué casi milagrosamente salvado por la concienciación que supuso para las fuerzas republicanas el intento de Sanjurjo de acabar con la República. Así, la "Gaceta Oficial" del día -

21 de septiembre de 1.932, recogía el texto de esta ley que sentaba los fundamentos para la reforma agraria y cuya aprobación por 318 votos contra 19 -vota exclusivamente en contra el grupo agrario-, no representaba una real coincidencia y unión en torno a ella como aparentemente se deducía de las cifras. Acorde nuestra opinión con la -de Malefakis, hemos de decir que tal unanimidad de votos a su favor fué meramente circunstancial y condicionada por los sucesos del 10 -de agosto: "Muchos de los que habían dado su aprobación volvieron a oponerse a la Ley tan pronto como desapareció el espíritu de unidad republicana surgido a raíz del levantamiento de Sanjurjo". Pero es -que, además de esas diferencias en el seno de quienes potencialmente apoyaban la reforma, existe un hecho fundamental, que es la proporción y peso real mucho mayor de las fuerzas de la derecha que se opo-nían a la reforma que su representatividad parlamentaria que era, al fin y al cabo, la que se reflejaba en la aprobación de la ley; contribuyendo esa desproporción a la diferencia de aceptación "de facto" respecto del apoyo "de iure" obtenido parlamentariamente por la reforma agraria.

El análisis concreto del contenido de la ley nos pone de manifiesto su complejidad que, en buena parte, es causa de los diferentes acuerdos y compromisos que esta entrañaba, así como su apoyo en el proyecto de la Comisión Técnica.

A pesar de las dificultades para su introducción y de ser fuer-temente combatida, esta ley puede ser considerada como teñida de - - cierta moderación y sólo en contraste con la situación española pre-térita podría verse en ella un instrumento ciertamente revolucionario. Veamos sus rasgos mas esenciales y ellos nos ayudarán a apoyar estas conclusiones adelantadas.

Su ámbito de aplicación fué limitándose hasta las zonas de - predominio latifundista (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salaman-ca), aunque ello sea provisionalmente ya que, a instancias de los so-

cialistas en cuyo ánimo se encontraba la idea de una reforma total, se obligó a inscribir en el Registro de tierras expropiables a todas las del conjunto del país. No obstante, aquello requería la necesidad de una nueva ley votada en Cortes y el alcance real de la Ley de 15-IX-32 tenía la citada limitación territorial, entre otras cosas, porque eran limitados los recursos y las posibilidades de poner en práctica el mecanismo.

La excepción a esta norma de la limitación espacial de la ley se encontraba en aquellas tierras de la Grandeza y de Señoríos Jurisdiccionales, que podían ser expropiadas sin indemnización en todo el territorio nacional. Seguían esta misma suerte de expropiaciones sin indemnización las tierras sin cultivar o las deficientemente cultivadas, así como las que perteneciendo a zonas de regadío permanecieran sin ser regadas.

En cuanto a la extensión máxima de terrenos que podían permanecer en las mismas manos propietarias, lo establecido por la Comisión Técnica (primer proyecto) se amplía considerablemente. Los límites fijados de extensión se diferencian en dos sentidos; primeramente, la ley reconoce unas extensiones máximas por propietario referidas en exclusiva a cada término municipal, mientras que la Comisión hacía referencia a todo el territorio nacional en cuanto a extensiones máximas de propiedad admisible. En segundo lugar, la cantidad máxima de tierra permitida para cada propietario por el proyecto de la Comisión se convierte ahora en límite inferior de un determinado tramo por categoría de cultivo. Veamos el siguiente cuadro comparativo (21), que nos señala esos máximos de propiedad autorizados en el proyecto de la Comisión Técnica y en la definitiva Ley de Bases de la - Reforma Agraria:

| <u>TIPO DE CULTIVO</u>    | <u>PROYECTO COM. TEC.</u> | <u>LEY DE BASES</u> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Secano cultivos herbáceos | 300 hectáreas             | 300 a 600 hectáreas |
| " olivares                | 150 " "                   | 150 a 300 " "       |



| <u>TIPO DE CULTIVO</u> | <u>PROYECTO COM. TEC.</u> | <u>LEY DE BASES</u> |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Secano de viñedo       | 100 hectáreas             | 100 a 150 hectáreas |
| Dehesas                | 400 " " "                 | 400 a 750 " " "     |
| Regadío                | 10 " " "                  | 30 a 50 " " "       |

Resulta obvio del análisis de esta doble diferenciación entre el proyecto y la definitiva ley -que se aprueba en base al proyecto presentado por Marcelino Domingo-, que no es sino respuesta a las - concesiones que este Ministro de Agricultura había hecho, al elaborar su proyecto, a las posturas de la oposición de derechas en el contexto de la búsqueda de un consenso que posibilitase la llegada del proyecto a su definitiva meta, es decir, al Parlamento para su discusión y aprobación.

En la tónica de lo plasmado en el citado proyecto, quedan - igualmente fuera del ámbito de la ley aquellas tierras no susceptibles de cultivo continuo, tales como bosques y pastos; de tal manera que, no tratándose de Señoríos Jurisdiccionales, resultaba otra limitación especial que favorecía a los propietarios y sus intereses al reducir, de hecho, buena parte del catálogo expropiable.

Igualmente moderador y limitador del alcance de la ley resulta el hecho de que, de sus fuentes de financiación, desapareciera - ese impuesto progresivo a partir de rentas superiores a las 10.000 - pesetas.

La reforma deja sin efecto las ocupaciones temporales de tierras que contemplaba el proyecto de la Comisión Técnica con carácter inmediato y que tanto hubieran favorecido la marcha real de la reforma, aliviando la situación de muchos campesinos y convirtiéndolos en apoyos potenciales del proceso reformista republicano.

Otras Bases de la Ley se ocupan de la formación de un Inventario de fincas afectadas, así como un censo de campesinos que sería - llevado a cabo por las Juntas Provinciales de reforma agraria y no -

por las Juntas Locales que, tal y como se recogía en el proyecto primero, serían las más idóneas para encargarse con eficacia de esa tarea.

La capitalización de las fincas expropiables -según se recoge en la Base 8ª de la Ley- se realizaría tomando como base el líquido imponible recogido en el Catastro y que oscila entre un 5% y un 20% cuando esta renta oscile entre las 15.000 y las 200.000 pesetas. - - Igualmente sucede con el porcentaje de indemnización que pagaría en numerario -el resto se paga en títulos de la Deuda como ya se ha citado en otras ocasiones-, oscilando entre el 20% para las rentas de 15.000 pesetas y el 1% para las de 200.000.

En cuanto a los modelos de explotación -individual o colectiva- que recogía la Ley, así como la posibilidad de que ello fuera decidido por los mismos interesados, la coincidencia es total entre el proyecto de la Comisión y la Ley.

Este es básicamente el contenido de la Ley que venía a renovar el viejo sistema agrario español. Una Ley que si intrínsecamente tenía diversos elementos moderadores, no podía aislarse del contexto de una agricultura arcaica para la que venía a ser un revulsivo y, - evidentemente, sin poderse aislar de tal contexto, representaba un - elemento revolucionario.

Por estas razones una Ley que en sí misma no aparentaba mayores dificultades, tendría que atravesar enormes obstáculos en la España republicana y una considerable lentitud en su puesta en marcha, que daría lugar a que el contexto general de la República, al quedar en manos de las fuerzas más reacias al cambio, impidiese todo avance reformista agrario tal y como se había inspirado por el primer bienio. En esta línea se expresa Malefakis cuando afirma textualmente: "Una gran distancia ha separado siempre las leyes españolas de las - realidades que pretendían regular. No es difícil hallar una legisla-

ción social avanzada en el Derecho positivo español (...); lo difícil es hallar muestras de su aplicación enérgica." (22)

Aparte de la consideración que en este sentido nos merezca la realidad de la reforma agraria y sobre la cual volveremos, habremos de anotar otra serie de transformaciones que, en el terreno agrario, tuvieron carta de naturaleza jurídica durante el primero de los bienios republicanos. Habremos de destacar en este orden de cosas el Decreto de 22 de octubre de 1.932 sobre "Intensificación de cultivos", que se puso en marcha de forma apremiante y al margen de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Fué la agobiante situación social del campo en la provincia de Badajoz la que promovió esta ley, que - luego se extendió a otra serie de provincias de parecidas circunstancias.

El alcance de este decreto consistió en que, mediante él, "se realizó una ocupación temporal por utilidad social de las fincas - - afectadas por la reforma agraria, con pago de una renta, como propuso la Comisión Técnica en julio de 1.931 y recogiendo los proyectos del gobierno, siendo lamentable que se perdiese un año y seis meses sin realizar estas ocupaciones tan necesarias para aliviar la situación de los campesinos." (23)

Un proyecto de ley que merece ser destacado aunque no pasase de su condición de proyecto, fué el de Arrendamientos de Fincas Rústicas, que se contemplaba en la propia Ley de Bases. Fué presentado al Parlamento en julio de 1.933 por el Ministro Marcelino Domingo y, al recoger períodos mínimos de seis años renovables en el arrendamiento y moderar las rentas haciéndolas acordes con el líquido imponible establecido en el Catastro, fué fácil presa de las derechas - que, a medida que se adentraba el verano de 1.933, contaban con mayor fortaleza.

Asimismo, data del primer bienio republicano el impulso a la política de regadíos que se imprimió bajo el ministerio de Indalecio

Prieto en Obras Públicas, pero que sólo viene a establecer los fundamentos de una política hidráulica y de regadíos que se desarrollará con mucha posterioridad al final de la etapa republicana.

En cuanto al balance de la reforma en el primer bienio, no - pueden constatarse unos resultados demasiado halagüeños y las trans- formaciones agrarias así auspiciadas se llevaron a cabo con extrema- da lentitud. Son razones de tipo político y de tipo económico las que motivan tal balance negativo; balance que se refleja con claridad - en los datos que nos ofrece Pascual Carrión, que tan importante la- bor activa desarrolló en su protagonismo durante aquel proceso de - transformación: "Hasta el 31 de diciembre de 1.933, es decir, quince meses después de ser promulgada la Ley de Reforma Agraria, sólo se - habían ocupado 24.203 hectáreas en las que se asentaron 2.500 campe- sinos". (24)

Puede deducirse de estas cifras la insignificancia de tales medidas puesto que, si tenemos en cuenta los asentamientos previstos por la Comisión Técnica -de 60.000 a 75.000 campesinos al año-, aque- llas vienen a representar exclusivamente alrededor del 2% de las - previsiones para esos dos años.

No pueden desvincularse en ningún caso las causas políticas - de las económicas que motivan el hecho de que, una ley de suyo difí- cil de elaborar y moderada en su resultante, se aplicase lentamente y muy por debajo del techo que contemplaba su letra.

Son evidentes razones políticas, las mismas que condicionan - su discusión y aprobación con más de un año de retraso, lo que hace que perdiera eficacia al no ser capaz de cubrir la problemática ur- gente que venía a tratar de resolver. No son sino las presiones que constantemente ejercen en su contra los grupos de interés afectados por ella los causantes de tal retraso.

Una vez elaborada, las responsabilidades de su lenta aplica-

ción habrán de ser repartidas por igual entre aquellos que siempre se opusieron a ella y los mismos que la elaboraron. Aquellos, tanto a la derecha como a la izquierda del consenso parlamentario básico - que la engendra, resultaron afectados en sus intereses de manera poco proporcionada a su voz parlamentaria y, naturalmente, habrían de elegir los cauces de la obstrucción y de las vías extraparlamentarias para su oposición. Nos referimos a los terratenientes afectados y a los grupos campesinos que, agrupados en torno a posturas anarcosindicalistas, agotan sus dosis de paciencia al no ver satisfechas - sus reivindicaciones y necesidades básicas.

Pero también son en buena medida causantes de la ineficacia - de la aplicación de la Ley en el primer bienio, aquellos mismos que la patrocinan y habrán de encargarse de su ejecución. No está lejos de esta causa el hecho de que la necesidad de cesiones y consensos, diese lugar a un texto legal técnicamente complejo, cuya puesta en - práctica se dificultaba por esa misma razón.

Aparte de todo ello, hay una razón esencial que se deriva de la propia situación general del grupo rector del primer bienio republicano y que se pone fácilmente de manifiesto con el transcurrir de los meses que van desde el 14 de abril de 1.931 a los últimos meses de 1.933. El grupo de republicanos de izquierda que rige los destinos de la República en esta etapa, conjuntamente con los socialistas, no son los más idóneos para la comprensión y resolución de los problemas agrarios. Ni su extracción social, ni su formación, ni su - - idea de la gobernación del país, son las adecuadas para abordar con la energía y prioridad requerida por tamaño problema las soluciones mas adecuadas.

De poco sirven las justificaciones basadas en necesidades presupuestarias dadas por el Ministro de Agricultura y por el mismo Azaña cuando se trata de justificar el escaso montante económico destinado al IRA, que en 1.932 sólo recibió 8 millones de pesetas y en -

1.933 exactamente los 50 previstos; a pesar de que de este presupuesto dependía toda la viabilidad de la reforma que, además, se basaba en las indemnizaciones ofrecidas por las expropiaciones, clave de todo el proceso. Parece obvio que un gobierno más seriamente identificado con el grave e insoslayable problema social agrario, hubiera re legado el equilibrio presupuestario a este tipo de necesidades y hubiera luchado más decididamente contra todo tipo de obstrucciones a esta política.

Como muy lúcidamente sostiene Malefakis en su brillante obra: "los partidos republicanos durante la monarquía tenían una base esencialmente urbana y una orientación esencialmente europeísta. Se habían nutrido de anticlericalismo, antimilitarismo y antimonarquismo". (25) Evidentemente, estos principios que sostenían su ideología poco tenían que ver con el tema que nos ocupa.

También los socialistas formaban parte del Gobierno en este bienio, pero ellos solos no podían afrontar responsabilidades exclusivas en esta materia, máxime en cuanto que dependían de la coalición con los republicanos para el gobierno y, además, tenían en contra el dominio de grandes zonas afectadas por el problema social agrario que ejercía el anarcosindicalismo, rival en el control del movimiento obrero y propugnador de soluciones más radicales que, asimismo, hacían más incómoda su posición al verse obligados a propugnar soluciones drásticas a costa de su viabilidad, con tal de no perder credibilidad entre su clientela que, a causa de la dinámica lenta de la reforma, se veía abocada a posturas cenetistas.

De cualquier modo, y a pesar de la oposición a la reforma de sectores interesados y situados fuera del Gobierno del primer bienio, así como de las deficiencias y lentitudes achacables al propio Gobierno, puede decirse que si el balance cuantitativo de las transformaciones agrarias durante el primer bienio ha sido tan pobre como el que ya se ha destacado, este período de tiempo ha establecido los

fundamentos esenciales para la viabilidad de la reforma. En tal sentido, no puede desestimarse la importancia de las medidas parciales tomadas por la vía del decreto ya desde el Gobierno Provisional primero y, generalmente, achacables a los ministros socialistas, así como los aprobados simultáneamente al proceso de discusión de la Ley. Esta fué combatida duramente y obstruída por las fuerzas afectadas - que mantenían un evidente poder y tal política tuvo sus resultados, lo que no puede negarse es que el primer bienio realizó la tarea más difícil, ciertamente comenzó el camino que, "a priori", tan dificultoso parecía. Así, se montó el aparato legal necesario para quien decidiese su aplicación, se confeccionó el Registro de la Propiedad Expropiable que era "conditio sine qua non" para la viabilidad de la Ley, también se elaboró en parte el censo de beneficiarios de la reforma y se formaron las juntas de reforma agraria en el ámbito de todas las provincias españolas. Todo ello estaba dispuesto cuando la dinámica de los acontecimientos republicanos provocó la caída del Gobierno Azaña y el inicio de una etapa bien diferente en la vida de la República, comenzando lo que, genéricamente, se está denominando como segundo bienio, a pesar de no responder con exactitud a tal período cronológico.

Los inicios de este segundo bienio no contemplan un retroceso inmediato de las tareas de reforma sino que, muy al contrario, aprovechan la infraestructura establecida por el primer bienio para continuar en la misma línea. Además, las tareas emprendidas por el Gobierno Azaña son más que modestas como para notarse demasiado contraste con el nuevo equipo agrícola resultante de las elecciones de noviembre de 1.933.

Así, todavía el año 1.934 ve la aportación de buenos resultados en las transformaciones agrarias pues, figuras como Cirilo del Río y Giménez Fernández, comprenden el problema campesino y apoyan - sus soluciones con la simple puesta en marcha de los instrumentos ya

montados por los republicano-socialistas.

Hasta que sus propios grupos políticos impidan la tarea de es tos hombres y se apodere de la situación el más neto reaccionarismo social, pueden verse datos aceptables, dentro de su modestia, en - - cuanto a resultados de la puesta en marcha de la Ley de septiembre - de 1.932.

Si aunque, como bien afirma Pascual Carrión, los resultados - totales de la reforma no llegan a suponer ni la ocupación de las fin cas de los Grandes de España, de las que hemos ofrecido una buena - muestra en otro capítulo; a la altura del 31 de diciembre de 1.934, seguía adelante el programa agrario en comparación con los datos - - ofrecidos el año anterior, ya que, para esta fecha, los datos totales eran los que siguen: (26)

| <u>NUMERO DE FINCAS</u> |     | <u>EXTENSION HECTAREAS</u> | <u>NUMERO DE ASENTADOS</u> |
|-------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| Expropiadas             | 468 | 89.133                     | 8.609                      |
| Ocupadas                | 61  | 27.704                     | 3.651                      |
| TOTALES                 | 529 | 116.837                    | 12.260                     |

Considerando los que ofrecíamos acerca de las realizaciones - conseguidas en 1.933, hasta 31 de diciembre, está claro que la aplicación de los instrumentos legales aportados por el bienio republica no socialista para la reforma agraria no se detiene, sino que se incrementan dentro de la modestia comparativa de los datos en relación a la magnitud del problema y a los proyectos iniciales.

Tales datos, no obstante, no son de desdeñar por cuanto que, dadas las nuevas características del grupo dominante a raíz de las - elecciones de 1.933, lo que era de esperar era la anulación de todo vestigio de reforma que, sin embargo, no sucedió de inmediato, entre otras cosas porque ahora las presiones en tal sentido corrían de la mano de los republicano-socialistas, que aún eran una minoría consi-



derablemente fuerte en el Parlamento y acusaban una mayor radicalización sus organizaciones obreras y campesinas.

Las cosas comenzaron a ser diferentes a raíz de los sucesos de Asturias en octubre de 1.934. Puede decirse que estos acontecimientos podrían equipararse, en sentido contrario, con el intento golpista de Sanjurjo en cuanto a su incidencia sobre la reforma agraria. Si la Sanjurjada sirve para recabar fuerzas para los republicanos e impulsar la reforma, la revolución de octubre, de paso que desmonta las organizaciones de izquierda, rearma las energías de los grupos contrarios a todo cambio y anima la realización de la contrarreforma agraria, así como la modificación en el sentido de sus intereses de la legislación que contempla aspectos parciales de ella.

En tal sentido, se produce la modificación de la Ley de Arrendamientos que había sido promulgada para mejora y beneficio de los campesinos y, sobre todo, la promulgación de una nueva Ley de Reforma Agraria o Ley de Reforma de la Reforma, el 10 de agosto de 1.935, que venía a modificar en aspectos importantes la de 15 de septiembre de 1.932, base de las reformas efectuadas.

Fueron sutiles las transformaciones realizadas respecto del texto legal originario de la reforma agraria, pero consiguen su objetivo básico: desarticular la Ley en sus puntos esenciales. La incidencia fundamental de esa nueva normativa se basó en el tema clave de las expropiaciones y, en consecuencia, del asentamiento de campesinos, todo ello a través de la institución clave para la reforma: el IRA y su presupuesto.

Destaquemos primeramente que la Ley de 1.935 anula el Inventario de aquellas fincas que podían resultar expropiables, con lo que no se lograba sino abrir la vía de la evasión para todos aquellos que así lo quisieran, supuesto que podían dividir, ceder o transformar su propiedad sin perderla. Con ello, ¿qué importaba si se mante-

nía la posibilidad de expropiación para tierras por encima de determinada extensión, para las mal cultivadas o para las no regadas?.

Otro baluarte esencial de la contrarreforma era el cambio de las indemnizaciones, pasando a pagarse su importe en títulos de Deuda Pública a su precio de mercado en el momento de la venta y convertibilidad automática. Ello contrastaba vivamente con el sistema anterior de la escala inversa en relación al líquido imponible de cada finca y ponía en manos de la negociación bilateral IRA-propietario - el acuerdo sobre el precio, teniendo los tribunales ordinarios competencia sobre los contenciosos que de ahí pudieran surgir. Igualmente por este sistema hubieron de abordarse las indemnizaciones, con carácter retroactivo, respecto de aquellas tierras expropiadas desde - 1.932.

Igualmente hay que destacar los efectos de esta nueva legislación sobre el Instituto de Reforma Agraria. Esta institución, para - poder continuar con su cometido, aún bajo los presupuestos de la - nueva filosofía legal de 1.935, necesitaría un importante incremento del presupuesto en función del fuerte aumento de las indemnizaciones. Paradójicamente esto no fué así y, además, aquel presupuesto de 50 - millones de pesetas con el que quedaba dotado en 1.932 como cantidad mínima, sería a partir de ahora montante máximo permisible de sus - disponibilidades económicas. Tal condicionante es el que hace que Malefakis afirme en su obra que: "la limitación drástica del presupuesto del IRA es quizá la mejor prueba de la hipocresía de los conservadores que controlaban las Cortes. Pese a su retórica preocupación - por la suerte del agricultor, la verdad es que no deseaban reformas de ninguna clase, ni colectivistas, ni individualistas, ni socialistas, ni católicas." (27)

Si esta restricción presupuestaria del organismo por el que - necesariamente habría de pasar la ejecución de la reforma ya era una medida de lo más significativa, no lo era menos respecto de las in-

tenciones de la coalición derechista del segundo bienio -última etapa- la reestructuración emprendida del Instituto de Reforma Agraria en su nivel orgánico y estructural, expulsando de él a aquellos miembros que con mayor fe y entusiasmo trabajaban en aras de la reforma, sobre todo los socialistas que, mas cerca de la problemática campesina, siempre habían imprimido un carácter dinámico a sus labores en el Instituto. Es tan significativa la intención de desmontar el IRA de la manera más drástica, que el mismo diario católico "El Debate", de corte muy moderado, pero en la línea reformista social eclesial -defendida por Giménez Fernández, criticaba con nitidez tales medidas en su número de 1 de enero de 1.936.

No puede olvidarse que estas medidas de contrarreforma, tomadas en claro detrimento de la posición del campesinado, venían a - - unirse a las causadas por la propia difícil situación económica general para conformar una situación social de características graves.

Tal es la situación social agraria que se contemplaba al final de este segundo bienio republicano cuando, con motivo de las elecciones de febrero de 1.936, se abre el período más radical de la República con el Gobierno denominado Frente Popular.

En el terreno agrario se acusó especialmente el cambio que - comportaría la nueva situación, al reflejarse en él un ímpetu revolucionario importante, aunque comprensible por la eclosión de todas - aquellas fuerzas perjudicadas o no suficientemente satisfechas por - las medidas agrarias republicanas precedentes.

No cabe duda de que el impulso final que se contempló en la - etapa republicana respecto de sus transformaciones agrarias, aunque efímero y abortado contundentemente por la guerra civil y su resultado, fué consecuencia de la nueva distribución de fuerzas parlamentarias y del cambio de comportamiento de alguna decisiva. Tal es el caso del Partido Socialista Español que, como se observa en su epígra-

fe correspondiente de este mismo trabajo, abandona su vía moderada - en vista de su esterilidad y, aupado por la dinámica de sus propias bases, adopta una vía revolucionaria para sus reivindicaciones al final de la etapa republicana.

La tónica general de las medidas agrarias del Gobierno del - Frente Popular fué la de reemprender el camino marcado por la Ley de septiembre de 1.932 pero con un matíz netamente más radical, sin dejar de aprovechar algún contenido de lo legislado en agosto de 1.935, tal como aquella disposición de la Ley de Contrarreforma Agraria que facultaba al Estado para ocupar "por razones de utilidad social cualquier finca española, cualesquiera que fuesen su tamaño y condición." (28)

En esta época se amplía territorialmente el ámbito de la Ley, se reponen todos aquellos campesinos expulsados por el segundo bienio, se reestablece el Decreto de Intensificación de Cultivos, Arrendamientos, etc., todo ello nuevamente, pero de forma más acusada, en beneficio de los más afectados por la crisis social: los campesinos y los obreros del campo desprovistos de tierra.

Puede considerarse que una de las causas de las que no puede separarse demasiado el inicio de la guerra civil fué el problema - - agrario y la lucha de intereses en torno suyo. Al fin y al cabo, en este terreno se jugaban claramente y de forma manifiesta los intereses tradicionalmente contrapuestos en la historia española: los terratenientes, portadores de una situación de privilegio que no estaban dispuestos a ceder y los obreros del campo, acusando duramente - una crisis social insostenible que les abocaba a la revolución como única vía hacia su redención individual en lo humano y social como - clase.

La guerra civil terminó decantando, con la contundencia e - - irracionalidad de la fuerza, la situación del lado de los tradicionalmente beneficiados, que lo seguirían siendo indefinidamente. La -

República no resolvió el problema. La izquierda del primer bienio - fué incapaz de actuar con firmeza y energía, quizá porque sus fuerzas no se lo permitían; la derecha del segundo desbarató en buena medida los fundamentos establecidos por aquellos y el balance fué desolador al presentarnos una serie interminable de acciones, presiones y reacciones de interés teñidos de fuerte verbalismo, obstruccionismo y maniobras varias que hicieron que transcurriera el tiempo entre fuegos de artificio pero sin estructurar una reforma agraria capaz - de llevar la justicia y el consenso mínimo al campo español que, por efectos del fuego real, se mantuvo en una situación lamentablemente deprimida y muy por debajo de las posibilidades de este sector, en - un país que podía haber montado su futuro económico a muy largo plazo sobre la base firme de un sector agrario fuerte y estructurado racionalmente. La IIª República fué una gran ocasión perdida.

#### V.3.2.- Transformaciones educativas y religiosas.

La lucha por las transformaciones en el ámbito religioso y, - consecuentemente en el educativo, a lo largo de la etapa republicana, marcó uno de los puntos de conflicto que mayor carácter imprimieron a la época que estudiamos.

Muy posiblemente, alrededor de la problemática religiosa y - educativa, así como de los conflictos que originó su transformación, se decidió en buena parte la suerte de la República, al reflejarse - en la pugna por la hegemonía en estos campos las posturas enfrentadas como concepciones globales acerca del contenido del nuevo régimen. En definitiva, una serie de intereses de carácter amplio y diverso se juegan alrededor de la polémica religiosa, en la etapa que va de 1.931 a 1.936.

Si, como ya sostuvimos, algunos sectores republicanos influyentes en esta polémica, conservan reminiscencias de un anticlericalismo trasnochado, que afecta negativamente a la manera de abordar - la resolución de un problema antiguo y de urgente solución, es preci

so tener igualmente presente que, alrededor de los intereses de la - Iglesia, en defensa de su causa, así como de posturas e intereses a extramuros de la propia religión y más bien de tipo político y material, se agrupan todas las fuerzas de la derecha española, contrarias a cualquier cambio aportado por la República y que les suponga pérdida de privilegios tradicionales. Combaten así en toda regla a la República, utilizando para ello la bandera de la Iglesia y de la reivindicación religiosa.

Muy probablemente no hubiera a lo largo de toda la experiencia republicana unos debates más encendidos y un juego de presiones más activo, que cuando se debatían en el Parlamento los artículos constitucionales que regulaban la situación de la Iglesia en España, así como durante los debates de las leyes que desarrollarían posteriormente el contenido constitucional. Quizá tampoco, ningún Presidente de la República, tuviera que soportar mayores niveles de presión que cuando se trataba de plasmar su firma para la promulgación de las leyes relacionadas con las Congregaciones Religiosas o los intereses eclesiásticos.

Es muy difícil pensar que nuevos sentimientos religiosos y espirituales fueran capaces de mover montañas tan altas. Resulta más fácil comprender que alrededor de la Iglesia, sus congregaciones e instituciones diversas, se movían intereses más prosaicos.

Dos razones se pueden deducir como explicación a la suma resistencia presentada a las transformaciones que pretendió introducir la República en el "status" jurídico de la Iglesia española:

De una parte, la derecha, siempre reticente a cambios, conservadora o reaccionaria, y tradicionalmente poco rica en fundamentaciones ideológicas en que basarse, desechado el debate de su seno como instrumento de aporte de ideas y agrupada en torno a intereses materiales como motores y fundamento de su existencia, adopta a la Reli-

gión Católica como nexo común de unión y como ideología básica.

De otra, consecuencia de la anterior, la defensa de los intereses religiosos, que ya intrínsecamente representan fuertes intereses materiales, se presenta como índice o prueba de fuerza en la que fundamentar la defensa que trata de impedir nuevas transformaciones en campos mucho más concretos y materiales y menos espirituales: estructura de la propiedad, reforma agraria, etc., etc.

La principal de las transformaciones que aportó el advenimiento de la Segunda República en el orden de la jerarquía normativa, - fué la aprobación de una Constitución que rompía con el ordenamiento anterior.

En el terreno de la contemplación del fenómeno religioso y de las relaciones Iglesia-Estado, la nueva Constitución traía consigo - importantes innovaciones respecto de la situación anterior. La importancia de tales innovaciones no radica en el hecho de su aplicación práctica inmediata, pues sabido es que una Constitución marcará simplemente las líneas programáticas del ordenamiento jurídico ordinario, sino precisamente de que de ella se derivará toda una normativa de gran transcendencia política, económica y social, que regulará el campo que nos ocupa.

Resulta obvio que alrededor de la discusión y aprobación de - la Constitución, se organizan importantes niveles de conflicto al ponerse en juego todos los intereses defendidos por partidos políticos y grupos de presión, para tratar de orientar la regulación de los - apartados concernientes a Iglesia y Religión en el sentido más favorable a cada uno; ello, a sabiendas de que, lo que saliera del trabajo constituyente, allanaría considerablemente el camino para pasos - sucesivos.

El primer paso dado por la República en el camino constituyente radica en la creación de una Comisión Jurídica Asesora, que esta-

rá encargada de la elaboración de un Anteproyecto de la futura Constitución. Los miembros de tal Comisión van a tener la ocasión de imprimir a ese primer boceto su primera orientación ideológico-política, si bien, no será sino eso: un primer boceto que luego, como máximo, será utilizado como documento de trabajo para la elaboración de la definitiva. Esta comisión imprime a su trabajo una orientación - que está animada por "un espíritu de moderación dentro del interés - que en todos los sectores existía por ofrecer al país un texto constitucional avanzado y acorde con el aire de cambio que traía el nuevo régimen." (29)

Tal Anteproyecto era pensable que, a su paso por los procesos lógicos de elaboración de las leyes en un régimen parlamentario y de mocrático, sufriría modificaciones que se acentuarían en sentido progresivo y avanzado, a la vista de la composición de la Cámara en las Cortes Constituyentes Republicanas.

Tal sucedió respecto de la parte del articulado relativo a regulación de los aspectos religiosos y relaciones Iglesia-Estado. El Anteproyecto tenía claros puntos de referencia en la regulación contenida en la Constitución alemana de Weimar, que planteaba la separación Iglesia-Estado respetando, en todo caso, la libertad de conciencia y cultos, tal y como reconocía el presidente mismo de esta comisión, el jurista sr. Osorio y Gallardo.

El articulado del proyecto dejaba entrever, en su conjunto, - una posibilidad clara de entendimiento y relaciones concordadas entre ambas instituciones, denotando un carácter liberal en la resolución de este complejo y difícil tema.

Comenzaba la tarea constituyente dentro de la propia Cámara - elegida a tal efecto en junio de 1.931, con la elección de la correspondiente Comisión Constituyente, integrada por 21 miembros, en representación proporcionada de los distintos grupos parlamentarios ha



bidos en la Cámara y bajo la presidencia de D. Luis Jiménez de Asúa, representante de la mayor de las minorías, la socialista, y en razón de su cualificación técnica-jurídica.

El Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora es utilizado ahora sólo como base de partida, aportando "ex novo" los planteamientos de sus componentes, que vienen a modificarlo de forma importante y en corto espacio de tiempo. Tal celeridad se deriva, indudablemente, del consenso mayoritario habido entre los parlamentarios allí representados acerca de ofrecer al país una Constitución superadora - del Anteproyecto por su izquierda, cosa obvia si se piensa en la escasa representación de Diputados de la derecha en estas Cortes y, - por ello, en esta Constitución.

Tales observaciones pueden ser hechas respecto del documento constitucional a nivel global, pero mucho mas hay que abundar en este sentido al considerar concretamente sus materias eclesiástico-religiosas y temas conexos: su contenido iba más allá que lo regulado en el Anteproyecto.

El primero de los artículos de la citada Constitución que van a tratar del tema que nos ocupa es el tercero, a cuya discusión en pleno se llega el 13 de octubre de 1.931, con el levantamiento de duras polémicas por parte de los defensores de las distintas posiciones en juego, principalmente por la oposición de matiz católico, que pretendía el reconocimiento de su religión como la oficial del Estado, alegando que el pueblo español se mantenía fiel al dogma católico y que, aún reconociendo las esferas diferenciadas de ambas instituciones, "entre ellas podría haber la relación de subordinación que existe entre los fines superiores y los inferiores", como reconocía y defendía Gil Robles en el Parlamento.

Las posturas más moderadas defendían al menos la realización de oportunas enmiendas para que se mantuviese vigente el Concordato firmado con la Santa Sede por el Estado Español, aún con las necesi-

rias modificaciones.

La izquierda, por el contrario, con su concepción laica del - Estado que inspiraba en su conjunto al régimen republicano, defendía el artículo en términos de separación, de forma que se especificase que el Estado no tenía Religión alguna, y sus argumentos prioritariamente utilizados en tal sentido se centraban en que si, a nivel de - sentimientos, se mantenía la fe católica en España, nadie sino la - propia Iglesia resultaba culpable de haber cometido el grave error - "de identificar la suerte de la Iglesia y la Religión en España con la Monarquía y con la Dictadura", según citaba el catalán de izquierdas Carrasco Formiguera y recogía el Diario de Sesiones del 13 del - X de 1.931. (30)

El artículo tercero quedaba definitivamente redactado de la - siguiente manera: "El Estado español no tiene religión oficial". (31)

Tal redacción, difícilmente puede representar reparos, al poderse deducir de su lectura, únicamente, una separación del ámbito - oficial de Estado e Iglesia que resultaba acorde con el modelo de organización política que se estaba tratando de poner en funcionamiento, en la que dominaba una ideología de tipo liberal que había dejado de ser revolucionaria en el contexto europeo hacía más de un siglo.

Aunque la definición de este artículo recogiera el pensamiento básico acerca de la materia sostenido por los principales grupos que se oponen a los intereses de la Iglesia, masones y anarquistas, no cabe achacar directamente a su intervención la aprobación de un - texto que estaba en el ambiente del modelo republicano y, en todo caso, las presiones recibidas para tratar de orientar este tema en uno u otro sentido, fueron numerosas y de diversas procedencias a lo largo de la discusión del artículo.

En definitiva, según las coordenadas liberal-democráticas ins

piradoras de la República española y ya añejas en su validez y permanencia histórica mundial, ningún tipo de ofensa del Estado a la Iglesia suponía este artículo 3º. Ahora bien, situados en la óptica de la posición tradicional de la Iglesia española respecto del Estado, sí suponía una pérdida de la situación anterior llena de privilegios. Pérdida que causó la resistencia de los interesados.

Pero será el siguiente artículo el que recoja la regulación de esta problemática y el que mayores consecuencias comporte. Se trata del artículo 26 del Texto Constitucional, que profundiza en la regulación jurídica de la situación eclesiástica de manera más concreta y que, por descontado, va a ser discutido con la utilización de todos los argumentos y presiones de las posiciones en liza.

Puede sostenerse sin temor a equivocación, que la aprobación de este artículo 26 de la Constitución va a traer unas consecuencias de gran alcance para el desarrollo posterior y viabilidad del propio régimen, supuesto que será, a todo lo largo del período republicano, caballo de batalla de las posiciones católico-monárquicas y de la izquierda republicana.

La aprobación del artículo pasa por un laborioso proceso de elaboración, desde la presentación de enmiendas y votos particulares, que en este caso son especialmente abundantes y complejos, hasta la llegada a una especie de consenso que condujera a las posiciones de la definitiva redacción.

Será precisamente en este proceso y contexto cuando se produzca (13-X-1.931) la famosa intervención de Manuel Azaña, tantas veces citada y tantas sacada de su contexto y privada de su sentido real, en la que expresa que España ha dejado de ser católica y que, el tema que se debate, era mucho más político que religioso.

Según el "Diario de Sesiones de Cortes", que recogemos del prof. Ramírez, Azaña sostuvo textualmente:

"Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura", es en este sentido en el que consideraba que España no sigue el rumbo católico.

Y, en cuanto al segundo de los temas abordados, afirma Azaña que "organizar un Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español" es un asunto puramente político ya que, según él, "El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta del misterio sobre nuestro destino. Este es un problema político, de constitución de Estado, y es ahora, precisamente, cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo (...) excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó." (32)

El punto de este artículo 26 que probablemente levantara las mayores ampollas en las discusiones y presiones, como se verá a la hora de analizar la ley específica que se arbitró para tal fin, será el de la prohibición de impartir enseñanza por las Ordenes Religiosas, que supondría cerrarles una de las más importantes actividades ideológico-culturales y acabar con una de sus principales fuentes de influencia e ingreso.

Los grupos de derecha buscan el mayor retraso posible de la votación del artículo para que, por otras vías, se ejerza todo tipo de presión, dada la inferioridad numérica en el Parlamento.

El citado artículo se aprueba en la madrugada del 14 de octubre, con 178 votos favorables y 59 contrarios, en los términos si-

guientes:

"Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero.

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:

1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2ª Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente el Ministerio de Justicia.

3ª Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados."

De cómo la discusión de este artículo ha supuesto la entrada en escena de las fuerzas pesadas de todos los intereses en acción, — da idea el hecho de que su aprobación traiga dos consecuencias inmediatas:

Por una parte, se abre una crisis gubernamental al dimitir el Presidente del Gobierno Provisional, Alcalá Zamora y su Ministro de la Gobernación, Miguel Maura; ambos de talante conservador y respetuosos con el catolicismo, aunque plenamente integrados en la Repú-

blica.

Por otro lado, se produce la retirada parlamentaria de las minorías Agraria y Vasco-Navarra, dejando constancia de que su abandono tiene relación con la actitud contenida en la Constitución respecto de la Iglesia. Tal retirada nos plantea la seria convicción de - que, ambas minorías, que no hacen gala con tal postura de una fe excesiva en el sistema democrático, intentarían ya desde aquella actitud conseguir sus propósitos por otros medios.

Del citado artículo 26 de la Constitución se derivarán dos leyes decisivas en la propia suerte de la República, que ya analizaremos en su momento: el Decreto de Disolución de la Compañía de Jesús (24 de enero de 1.932), así como la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (2 de junio de 1.933), que implica su prohibición de impartir la enseñanza.

Es bastante probable que la salida del Parlamento republicano de los grupos más derechistas se hubiera producido tarde o temprano y con uno u otro motivo. El momento utilizado fué decisivo para aprovechar el descontento de las conciencias católicas por una legislación religiosa que, si bien podía resultar totalmente comprensible y racional, se estaba llevando a cabo con los errores radicales de un anticlericalismo anclado en la historia. Resultado de todo ello fué que, buena parte de la clientela electoral que había apoyado a la República como alternativa al "Antiguo Régimen" y que contaban con un pensamiento moderado y de fe religiosa, se viese apartada para acogerse a posiciones políticas acordes con sus credos fundamentales. - Obvia falta de visión política por parte de la República a la hora - de resolver el tema, a sabiendas de que la cuestión religiosa sería utilizada como bandera electoral de primer orden por la derecha española.

Así, el artículo 27 fué menos problemático en su discusión -

tanto por su contenido como por la ausencia de la oposición de derechas, que había abandonado el hemiciclo. Quedaban en la Cámara, no obstante, otros representantes de los intereses religiosos que habían optado por mantener desde dentro su oposición, aceptando los presupuestos básicos del sistema. Método que, como es sabido, dió los frutos evidentes en la persona de Gil Robles y sus próximos que, desde este artículo 27, se constituyó en portavoz de las posturas defensoras de la Iglesia y la Religión Católica.

Las discusiones de este artículo permiten la llegada a un texto, definitivamente redactado en los términos siguientes:

"La libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros." (Art. 27)

Si consideramos detenidamente este artículo y su precedente, será bastante simplemente con echar una ojeada a los textos constitucionales anteriores -fundamentalmente el de 1.876, que es la base jurídica de la Restauración- y a las leyes ordinarias españolas, para darnos cuenta del cambio de definición tan esencial que se había efectuado sobre las estructuras tradicionales de la Iglesia española en relación con el Estado y con la sociedad civil.

Serán los artículos 43 y 48 de la Constitución los que recojan, por último, nuevos temas relacionados con la problemática religioso-eclesial de la IIª República, con un enfoque de nuevo cuño

respecto del tiempo pretérito.

El artículo 43, se centra en la regulación de la familia que, junto con el de la enseñanza, es un tema tradicionalmente orientado en la sociedad española por la Iglesia. No es necesario insistir en la importancia de este tema puesto que, al ser la familia unidad básica sobre la que se monta la sociedad, al tener también una decisiva importancia económica (unidad básica de consumo, aportadora de unidades de trabajo y clave para la institución jurídica de la herencia, en una sociedad como la occidental basada en la propiedad privada), se deriva su esencial interés político y la posición decisiva que ocupará en la organización humana temporal aquella institución que sea capaz de orientar ideológicamente la esencial célula familiar.

En este punto el contencioso será evidente, tanto en la discusión parlamentario-constituyente, como en la regulación de la normativa ordinaria posterior. La Iglesia habrá de luchar denodadamente por mantener su influyente situación, utilizando para ello todos los medios de presión a su alcance. La República, dentro de las coordenadas ideológicas en que se desenvuelve, pretenderá desprender a la Iglesia de su marco de influencias y ocupar para el Estado tales cometidos que, en definitiva, pertenecen al ámbito de la sociedad civil.

En este artículo constitucional se regulará la protección de la familia por el Estado y los principios que ordenan el matrimonio y su disolución, temas que hubieron de provocar la reacción del bloque conservador y de derechas en las Cortes.

El artículo que nos ocupa recoge igualmente, con un criterio liberal, temas como el de la investigación de la paternidad, el de la igualación de consideración jurídica de todos los hijos, etc. Los términos exactos de su redacción fueron los siguientes:



"La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y - podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los conyuges, con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y - protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño." (Art. 43)

Es, finalmente, el artículo 48 el que recoge de forma expresa la regulación del tema relacionado con la Iglesia y la Religión. Se trata de un desarrollo expreso, en cuanto al laicismo de la enseñanza, de los preceptos recogidos en el artículo 26 que prohibían el - ejercicio de la enseñanza a la Iglesia, manteniéndose ahora la posibilidad de enseñar sus respectivas doctrinas en sus respectivas parroquias.

El artículo 48 dice textualmente:

"El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y por la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección - del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos."

Está fuera de toda duda, y así lo venimos destacando en nuestra línea argumental, la importancia excepcional que trae consigo el establecimiento de una Constitución a la hora de incidir en la orientación de todo el ordenamiento jurídico de un país. Tal fué el caso español de 1.931 y, específicamente, en lo relativo al tema religioso porque, como se reconoció por ambas partes contendientes en su elaboración y discusión, alrededor de este tema se jugó toda la suerte del nuevo régimen.

Traigamos a colación dos opiniones de personajes claves en la época y de diferente pensamiento, que así lo atestiguan:

Alcalá Zamora ante la aprobación del artículo 26 sostuvo que su consecuencia neta fué que, no solo se detuvo la aproximación de - fuerzas que militaban en el campo monárquico hacia el republicano como había sido la tónica anterior, "sino que desde este se rechazó, - violenta y deliberadamente, hacia aquel, enorme masa que aseguró y - dió la victoria del 12 y del 14 de abril." (33)

Azaña, a fines de 1.933, reconoce que el porvenir de la República, su cuestión capital, se jugó "inexorablemente" en "la ley de congregaciones religiosas, el artículo 26 de la Constitución, la política laica, la neutralidad de la escuela..." (34)

Vistas las bases fundamentales de la regulación constitucional de la problemática eclesiástico-religiosa, será preciso considerar con mayor detenimiento toda la legislación específica en este terreno aportada por la República.

Las medidas más importantes que fueron tomadas en el orden legislativo y en desarrollo de la Constitución, acerca del tema religiosos, fueron las siguientes:

- 1º.- La disolución de la Compañía de Jesús.
- 2º.- Ley de Congregaciones religiosas, que trae consigo toda la regulación del tema de la enseñanza.

3º.- Progresiva supresión del presupuesto de culto y clero.

4º.- Ley de divorcio, secularización de cementerios y otras - de menor importancia.

De estas medidas, por su importancia y por su prioridad cronológica destacaremos, en primer lugar, la de:

#### DISOLUCION DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

Existía la creencia, muy extendida entre diferentes capas sociales de nuestro país, de que el potencial económico y de riquezas en manos de esta congregación era de un monto importantísimo. Tal será el móvil que inicie la discusión acerca de su disolución, durante la etapa republicana.

Citando a J. Arrarás, afirma M. Pérez Galán que el potencial de esta Compañía en España estaba constituido por las cifras siguientes: (35)

|   |       |
|---|-------|
| Total de Jesuitas españoles.....                  | 3.630 |
| Residentes en España .....                        | 2.967 |
| Centros de enseñanza primaria y profesional ..... | 163   |
| Centros de segunda enseñanza .....                | 21    |
| Escolares en segunda enseñanza .....              | 6.798 |

#### Centros de Enseñanza Superior:

- Instituto Químico de Sarriá
- Universidad de Deusto
- ICAI de Madrid
- Universidad Pontificia de Comillas

El 24 de enero de 1.932, aparece en la Gaceta el decreto de → Disolución de la Compañía de Jesús en España aprobado el día anterior, cuya fundamentación se enraizaba directamente con el artículo 26 de la Constitución, cuando este recogía la prohibición de aquellas

órdenes religiosas que prestaban una obediencia especial a entidades distintas del Estado. En tal supuesto se hallaba la S.J., por su especial voto de obediencia a la Santa Sede.

Ni que decir tiene qué fuerzas apoyaron el decreto y cuales - se negaron a su aprobación de entre las habituales en este juego, - existiendo además numerosos testimonios de muy variada procedencia - que llegaron a la Mesa del Congreso de los Diputados, pronunciándose en uno u otro sentido.

El contenido preciso del Decreto recogía:

- La disolución de la Compañía de Jesús en todo el territorio nacional, así como el cese de la vida común de sus miembros.
- La incautación por parte del Estado de todos sus bienes, - dándoles un destino benéfico y para la enseñanza.
- La constitución de un patronato con el fin específico de inventariar y dar el adecuado destino a los bienes de la Compañía.

Era obvio que los movimientos de protesta, que habían comenzado con la aprobación misma del artículo 26 de la Constitución mediante una carta a las Cortes de los Provinciales de la Compañía previendo que su contenido les venía a la justa medida, no cesarían fácilmente.

Una Pastoral colectiva del Episcopado español con motivo de - la aprobación de la Constitución dedicaba un buen espacio a la S.J., ello sucedía el 20 del XII de 1.931. El mismo Pío XI se refería al - Decreto al día siguiente de su publicación y no faltaron las acciones jurídicas de sus mismos miembros.

Los puntos sobre los que se basaban las diferentes alegaciones en su favor eran los siguientes:

- La compatibilidad de la Compañía con muy diversos tipos de

regímenes en todos los países del mundo.

- Las actividades positivas desarrolladas por ellos en nuestro territorio en el campo benéfico, religioso y cultural, aparte de la condición de españoles de sus miembros pertenecientes, en muchos casos, a respetables y distinguidas familias.

- La consideración de ese su cuarto voto de obediencia como mera ratificación explícita de una realidad evidente para todos los católicos: su obediencia a la Santa Sede. El propio Pontífice argumentó que, en todo caso, hubiera sido aceptable la prohibición de una institución que prestara obediencia a una autoridad equiparable a la del Estado, pero no a una autoridad en el orden espiritual.

En esta ardorosa defensa se ponía en muchas ocasiones un énfasis exagerado, llegando a hablarse sistemáticamente de expulsión de los Jesuitas, término inexacto pues, "aunque algunos Jesuitas salieron del país en los primeros momentos, lo que dió lugar a que determinada prensa hablase de expulsión, la gran mayoría continuó en nuestra patria, siendo "creciente la prosperidad de la extinguida Compañía de Jesús, que bajo otros epígrafes amplía sus colegios y se -- apresta a gozar de una espléndida, aunque subterránea, existencia", -- según palabras de Américo Castro." (36)

No cabe duda de que, tampoco en este tema, cabe computar a la República un éxito seguro. Primeramente, hay que poner en duda la legitimidad de una medida contra esta orden concreta, a pesar de que -- por sus intereses e ideología resultase un enemigo interior molesto, máxime cuando su actividad no se constreñía al ámbito espiritual.

Por otra parte, la habilidad de la Compañía para evadir la fiscalización del patronato encargado de administrar sus bienes mediante personas interpuestas o sociedades ficticias, su capacidad para mantener de forma encubierta las actividades de sus mismos cole-

gios, así como el mantenimiento de su Universidad de Comillas, por su consideración de Pontificia, hace que el éxito de la operación republicana de disolución no fuese tan aplastante ni, por ende, tan de sastrosas las consecuencias para la Compañía.

Con el segundo bienio la situación mejora considerablemente, puesto que se acusa un giro progresivo y generalizado hacia la derecha, permitiéndole a la Compañía una reorganización que ya no volvería a perder en los meses del Gobierno del Frente Popular.

#### LEY DE CONGREGACIONES RELIGIOSAS.

La aprobación por la República de esta ley trajo consigo quizá las mayores presiones e incidentes de todo el período republicano, como ya hemos citado en su lugar correspondiente. No olvidemos que alrededor de este tema giraba toda la problemática de la enseñanza.

Esta ley tenía asimismo su fundamento en el artículo 26 de la Constitución que textualmente decía cómo, uno de los términos a que se debía ajustar la ley que regulase la existencia de las órdenes re ligiosas, aparte de los Jesuitas, sería la "prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza."

La gestación de esta ley es sumamente larga. Los problemas que la presidirán serán prueba fehaciente de los intereses encontrados que la contemplan. Desde aquel 7 de octubre de 1.932 en que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley, hasta aquel 2 de junio en que se promulga con la firma del Presidente de la República, han pasado muchas etapas penosas y se han puesto en marcha muchos in tereses. Debates -iniciados el 2 de febrero-, enmiendas, reparos, ma niobras de retardamiento, preceden a la fecha en que por 278 votos a favor contra 50 queda aprobada en el Congreso, un 17 de mayo de 1.933.

Son conocidas ya la intervención colectiva del episcopado español, hecho ya casi habitual ante cada nuevo paso legislativo en es

ta materia, como la encíclica de Pío XI dedicada a la materia, así - como la intervención de los genuínos grupos de presión, asociaciones de padres de familia, etc.

Pero lo que ahora más nos interesa destacar es el contenido - concreto de esta ley, cómo será el tema de la enseñanza el más directamente afectado por esta ley y cómo se plantea para la República - una de sus más costosas y arduas tareas: la sustitución de la enseñanza impartida por las órdenes religiosas por una enseñanza estatal.

Los puntos fundamentales de su texto serán tanto el artículo que especifica que "las órdenes y congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza", estableciendo una modalidad de control para que se produzca su cumplimiento y no queden posibilidades de evasión o subterfugios, como las disposiciones que establecen unos plazos concretos para el cese de tales actividades educativas por parte del clero pasando al Estado. Tales plazos serán: - el 1º de octubre de aquel mismo año de 1.933 para todo tipo de enseñanzas exceptuando la primaria, que cesará el 31 de diciembre del citado año.

El primer asunto que hay que analizar es el de la estimación de la magnitud del problema. Es decir, qué número de alumnos pertenecían a la educación impartida por las órdenes religiosas; por tanto, cuales serían las necesidades de puestos escolares a que tendría que hacer frente el Gobierno republicano con caracteres de absoluta urgencia. Es inevitable que, ante temas de estas características aparezca la consabida "guerra de las cifras", pretendiendo la invalidación de determinados argumentos con intencionalidad política y a golpe de cifra.

Nosotros contamos con dos fuentes principales de datos, recogidas de la literatura disponible más asequible y solvente. Tenemos por un lado las ofrecidas por J. Arrarás, que recoge M. Ramírez (37),

que hablan de:

160.000 alumnos masculinos y 44.000 femeninos en la enseñanza primaria, cifras a las que habremos de sumar los 24.041 de las escuelas nocturnas y los 17.103 de las profesionales. Añadiendo que tales alumnos, pertenecientes a escuelas de órdenes religiosas, suponen al rededor de  $\frac{1}{3}$  del total de alumnos existentes en la enseñanza primaria española.

En lo relativo a la segunda enseñanza se afirma en aquella obra que, si en los establecimientos oficiales cursaban estudios al rededor de 25.000 alumnos, en los eclesiásticos llegaban a los 27.000.

Tenemos, por otra parte, los datos que se nos ofrecen en la obra de P. Galán (38)\* que utilizan como fuente el "Anuario Estadístico de España" de 1.933 y nos hablan de:

4.965 colegios -1.040 de niños y 3.925 de niñas- pertenecientes a las comunidades religiosas, totalizando 352.004 alumnos - (130.225 niños y 221.779 niñas). Esto en primera enseñanza, la segunda enseñanza impartida por religiosos, tenía lugar en 295 colegios, alcanzando a 20.684 alumnos, de los que eran masculinos 17.547 y femeninos 3.137.

Son unas cifras que están más en relación que las aparecidas en base a la anterior fuente, con las que se derivan de la estadística encargada por el mismo ministro de Instrucción Pública, a la sazón el socialista Fernando de los Ríos, para obtener los datos sobre los que basar la operación de sustitución desde el propio ministerio. Tales datos del MIP., hablan de 350.937 alumnos a los que habrá que buscar plaza por el Estado, en sustitución de la perdida en un centro religioso. Tales cifras se convierten en 351.937 de primera enseñanza y 17.098 de segunda, cuando F. de los Ríos expone el problema ante las Cortes.



Son cifras todas estas últimas (Anuario Estadístico y Ministerio de Instrucción), que tienen una fiable proximidad entre sí y por las ofrecidas por Rodolfo Llopis -ex Director General de Primera Enseñanza- en su artículo de julio de 1.934 en la revista "Leviatán", que habla de 350.437 (128.258 niños y 222.679 niñas), frente a las ofrecidas, p. ej., por el diario "El Debate", que llegó a sostener la existencia de 600.000 alumnos de enseñanza primaria a cargo de centros religiosos.

Convengamos, en conclusión, y para simplificar la "guerra de las cifras", que el problema que se derivaba de la promulgación de la ley de Congregaciones Religiosas, venía a representar la necesidad de escolarizar a más de 350.000 niños, aparte de la necesaria potenciación de plazas escolares para seguir el proceso de alfabetización y escolarización iniciado por la República.

Lo que sí está claro es que la magnitud del número de alumnos de enseñanza primaria es mucho mas considerable que la de los de la secundaria, demostrándose con ello la gran selección realizada a la hora de realizar estudios secundarios y, principalmente, entre los escolares del sexo femenino.

Ahí están las cifras para demostrar que, mientras que las familias que llevan a sus hijos a colegios religiosos prefieren esta enseñanza en mayor medida para sus hijas que para sus hijos, la pauta se cambia netamente al pasar a la enseñanza media, a la que acceden en mucha mayor cantidad los varones que las hembras. Es evidente que, en la valoración de las mentalidades de las familias católicas españoles en la época de la IIª República, tenía mayor peso una enseñanza primaria religiosa para sus hijas; siempre fué evidente una mayor influencia de estas creencias en el sexo femenino, que parecía -se intentaba seguir fomentando. Por el contrario, la importancia de la enseñanza secundaria era valorada mucho más a favor de los varones en cuyo nivel pasaban a ocupar la cabeza, observándose un impor-

tante nivel de deserciones en este grado del sexo femenino, que muy probablemente eran destinadas, con la sola posesión de un nivel educativo primario pero, eso sí, de fuerte arraigo religioso, a fines - familiares y maternos más que a tareas profesionales, técnicas o - intelectuales.

Este aluvión de nuevos alumnos que se presentaba requería una urgente solución en dos direcciones fundamentales:

- Disposición y formación del profesorado adecuado, con sus - correspondientes dotaciones presupuestarias.
- Programa de construcciones escolares.

Según se trate de nivel primario o secundario de la enseñanza, la problemática tendrá una diferente valoración.

Como ya hemos apuntado, la problemática del nivel secundario ofrecerá unas proporciones numéricas menos considerables, pero requería una rápida habilitación de profesorado e institutos, pues según el propio ministerio, serían 510 profesores, 20 Institutos de segunda enseñanza y 50 colegios los necesarios con urgencia, debido a que habrán de comenzar sus actividades en la ya cercana fecha del 1º de octubre (curso 1.933/34).

Resultará que, posiblemente por reticencias de los padres a - enviar a sus hijos a centros estatales laicos, no existe problema a este nivel, aunque según los datos que se nos ofrecen por el Anuario Estadístico de 1.951,(39) en el curso 1.933/34 existen 18 Institutos más que el curso anterior y el incremento total de alumnos matriculados es de 16.107 entre ambos sexos. Tal reducida cifra puede ser, - asimismo, índice de que la enseñanza impartida por las órdenes religiosas se mantuviese de forma encubierta en alguna medida, a pesar - de la prohibición.

A nivel de profesorado, el plan de sustitución es viable en -

este grado de la enseñanza, debido a que el equipo ministerial se - ocupa aquel mismo verano de 1.933 en convertir colegios y universidades en centros de formación acelerada de profesorado, capaces de impartir cursillos intensivos pedagógicos a los licenciados necesarios para cubrir las vacantes de profesorado. Aparte de la urgencia, se - conseguía la sustitución de la tradicional oposición por un nuevo - sistema de reclutamiento del personal docente.

El curso 1.933/34 comienza a funcionar con normalidad en la - fecha prevista y con la sustitución realizada.

Solo un plan muy bien pensado y con una segura financiación - permitiría al Gobierno republicano tomar sin miedo de fracaso en la práctica una medida política del alcance de la ley de Congregaciones, a la hora de sustituir por enseñanza estatal la enseñanza primaria - impartida por las órdenes religiosas.

Ya sabemos que los datos de alumnado de que parte el Ministerio de F. de los Ríos, provienen de su propia estadística, que sitúa la cifra en 350.937. La primera enseñanza, por lo tanto, planteaba - un serio problema en cuanto a su sustitución, viniendo a significar una contradicción con la propia política republicana de escolarización que tan acuciante resultaba para el país. En definitiva, "como en otros momentos históricos se anteponía la cuestión ideológica (enseñanza por quién y de qué) a los concretos, difíciles y urgentes - problemas de la escolarización de un país con un alto índice de analfabetismo." (40)

El problema, exactamente con las mismas características que - en la Segunda Enseñanza, se presentaba con dos vertientes: de una - parte la formación y habilitación de maestros y de otra, la construcción de escuelas necesarias. Todo ello habría de ser resuelto en el plazo comprendido entre mayo-junio de 1.933 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

Los maestros tendrían que habilitarse en un número que se cifra en los 7.000 luego de la oportuna asignación presupuestaria, - - pues no se olvide que el problema de su selección no era el único ni, probablemente, el más importante.

La selección de los maestros no resultó demasiado árdua pues, para lograr aquellos 7.000 necesarios, se utilizó un cursillo habilitador en el que, entre otras cosas, se trataba de adivinar su orientación ideológica y encauzarla hacia los esquemas dominantes en la República. Todo aquello no resultó demasiado difícil puesto que, para cubrir las citadas plazas, se presentaron alrededor de 20.000 - - maestros de los cuales pasaron 10.000 la primera preselección, siendo estos el núcleo de donde salieron los definitivamente elegidos. - Piénsese que la situación del magisterio español de la época resultaba muy precaria lo que, de una parte, favorecía la disposición de - candidatos para la selección, mientras que por otra, al establecer - la República unos sueldos dignos para ellos, serían seguros adheridos a sus proposiciones y fácilmente controlables ideológicamente, - por cuanto que los filtros que en tal sentido fueron exigidos no resultaban demasiado severos, en coherencia con un sistema flexible y tolerante como el que se intentaba implantar.

Es evidente que el interés demostrado por el Gobierno republicano del primer tercio de su existencia -etapa de los ministros Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos- con el tema educativo, hizo - que se facilitara considerablemente el control del Magisterio a nivel político e ideológico. El incremento del prestigio profesional y social, así como las mejoras económicas, fueron decisivas en este - sentido.

Esta cifra de 7.000 nuevos maestros de 1.931 continúa aumentando especialmente durante el Primer Bienio, retardándose considerablemente en el Segundo, en coherencia con las pautas generalmente seguidas por toda la reforma educativa.

## 432

Utilizando los datos que nos ofrece M.P. Galán en su obra, podemos cifrar de la manera que sigue el aumento del número de maestros a lo largo de la etapa republicana.

| <u>AÑOS</u> | <u>NUEVAS PLAZAS</u> |                           |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| 1.931       | 7.000                |                           |
| 1.932       | 2.580                | Iº Bienio                 |
| 1.933       | 4.000                |                           |
| 1.934       | 1.333                |                           |
| 1.935       | 1.242                | IIº Bienio                |
| 1.936       | 5.300                | 1º año del Frente Popular |

Los sueldos con que se dotaron las diferentes plazas creadas fueron distintos según el momento en que se crean. Así, el sueldo con que se dotan las primeras 7.000 plazas de 1.931 por el Gobierno Provisional es de 5.000 pesetas/año, desde septiembre de 1.931 se establece el sueldo de 4.000 pesetas anuales por maestro. El presupuesto de 1.934, con los radicales en el Gobierno, establece el sueldo de 3.000 pesetas por maestro al año; mientras que las que se crean en 1.935, están dotadas con las 4.000 pesetas establecidas en septiembre de 1.931 por haberles afectado en razón del plan de estudios por ellos seguido, que data de tal año.

El tema de la creación de escuelas, una vez visto el modo y la cuantía en que se habilitan maestros, plantea una problemática diferente. Hay que tener en cuenta el plan iniciado en el mismo año 1.931 de fomentar la construcción de escuelas para lograr la mayor alfabetización posible de la población española, pero a ello hay que añadir el esfuerzo adicional emprendido para conseguir la puesta en marcha de los centros escolares necesarios para acoger a los alumnos que se quedaron sin escuela a causa del cierre de aquellas en que se impartía la enseñanza de las órdenes religiosas.

Los planteamientos iniciales contemplaban la creación de - - 7.000 escuelas en el primer año y a 4.000 anuales se proyectaba el - ritmo de los años posteriores. Tales cifras resultaron ser demasiado utópicas a tenor de los resultados de construcciones reales emprendi- - das. La forma de llevar a cabo tales construcciones desde los ini- - cios de la República, fue a través de una Oficina Técnica que tenía a su cargo la preparación de los proyectos y su misma construcción, ello mediante una aportación Municipal porcentual variable. A raíz - de un decreto firmado el 5 de enero de 1.933 (Gaceta del día 10), se unifican los criterios de construcciones escolares, quedando de la - siguiente forma: (42)

- Que cada pueblo contribuya a la construcción según su rique-  
za.
- Las ayudas estatales, caso de que el Municipio decidiera -  
construir por su cuenta, pasan de un máximo de 10.000 pesetas  
a 12.000 y agilizando considerablemente los pagos.
- Se daba prioridad a la construcción de las de los Municipios  
que aportasen un plus de un 5% más de lo que les correspondía.

Ante el tema que nos venía ocupando de la sustitución de las Ordenes Religiosas, se incrementa la importancia de los Ayuntamien-  
tos para la elaboración de un programa de construcciones escolares -  
de choque, que posibilite la sustitución de las enseñanzas hasta en-  
tonces en manos eclesiásticas. Naturalmente que la colaboración muni-  
cipal en este concreto tema habría de ofrecer una determinada respues-  
ta en función de la proximidad del Municipio a la ideología y progra-  
mas del Estado en aquel punto concreto. De tal forma que aquellos -  
Ayuntamientos de ideología y zonas en que esta fuese distante de la  
dominante, inspiradora del programa estatal, la colaboración fue es-  
casa y, concretamente, en Vizcaya, "donde el número de escuelas a -  
crear era de 212, los Ayuntamientos ofrecieron su colaboración para  
106 solamente. En Guipúzcoa, donde se necesitaban 355 escuelas, los

municipios solo se ofrecieron a colaborar en 56". Por el contrario, en zonas como Alicante, "necesitando crear 130 escuelas a los fines de la sustitución, prepararon sin ningún auxilio estatal 104 locales con el mobiliario y material correspondiente para su puesta en marcha." (43)

En base a las mismas fuentes, se nos facilitan las construcciones escolares a lo largo de toda la IIª República:

| <u>CURSO</u> | <u>INCREMENTO DE ESCUELAS (44)</u> |
|--------------|------------------------------------|
| 1.931-32     | 2.542                              |
| 1.932-33     | 2.083                              |
| 1.933-34     | 1.427                              |
| 1.934-35     | 2.331                              |
| 1.935-36     | 1.936                              |
| TOTAL.....   | 12.862                             |

La llegada del Frente Popular plantea una considerable aceleración de las construcciones escolares pues, como sucede en casi todos los terrenos, este último período de la vida republicana ve aparecer unos ánimos renovados de continuar los cambios iniciados en la primera etapa y ralentizados en la segunda.

Así, en febrero de 1.936 se plantea la realización de un ambicioso plan de construcción de 5.300 escuelas que, por obvias razones de todos conocidas, no llegaría a cumplirse.

Podemos decir que con el tema de la enseñanza y su sustitución para el paso a manos del Estado, a raíz de la Ley de Congregaciones Religiosas en junio de 1.933, se produce un reflejo exacto del juego de intereses de la época, enfrentándose dos concepciones opuestas de la enseñanza: la liberal y la católica. La República emprende la primera de las vías como modelo a seguir e implantar a lo largo de su existencia.

Posiblemente uno de los mayores esfuerzos realizados fuera el que se centraba en su preocupación por los problemas de la enseñanza. Era vital que se querían cambiar el sistema político y de convivencia en España, habrían de dominar los resortes educativos tradicionalmente en manos de la Iglesia que hasta entonces había inspirado todo el sistema social. Posiblemente con dos objetivos contradictorios se emprende la tarea: extensión de la escolarización y sustitución de la enseñanza religiosa, que daba plaza escolar a una parte importantísima de la población estudiantil.

Cuando mayores tensiones se producen ante el problema es cuando se plantea la ruptura definitiva con la enseñanza de las órdenes religiosas. El paso del primero al segundo bienio, con los cambios decisivos que se producen en el control del poder, demostrará cómo se sigue la pauta de una u otra concepción de la enseñanza.

En el bienio republicano-socialista se realizan los principales cambios y transformaciones en el terreno eclesiástico y educativo. Solo al final de esta etapa se aprueba la Ley de Congregaciones y se inicia todo el proceso de sustitución y cambio de manos de la enseñanza, en una maniobra de gran urgencia ante los estrechos límites fijados, que terminarían con el comienzo del curso siguiente. Una enseñanza que se basaría en principios tales como: el laicismo, la escuela única, la coeducación...

Nada mas hacerse cargo del poder el primer Ministro de Instrucción Pública del Segundo Bienio, se presenta un proyecto de ley para desacelerar la aplicación de las sustituciones en la enseñanza derivadas de la Ley de Congregaciones. "Sin embargo, no solo no se cumplieron los plazos establecidos, sino que se paralizó totalmente el proceso de sustitución". (45)

El desarrollo de este bienio radical-cedista, no solo trajo consigo la citada paralización de las medidas tomadas en el primero,



sino que los religiosos siguen con su enseñanza e incluso se fomenta su potencial, básicamente con el consentimiento de un Gobierno que - tiene una política acorde con las orientaciones de la jerarquía eclesiástica, en numerosas ocasiones manifestada, y con la acción directa de grupos diferentes, entre los que podemos destacar: la Confederación Católica de Padres de Familia, el Centro de Estudios Universitarios, cuya creación data de 1.932, la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre, la Federación de Amigos de la Enseñanza, etc. (46)

Una etapa esta que, a pesar de la reacción en la línea inicial del Frente Popular que nos permite pensar en una de las leyes - de mayor alcance y conflictividad de la Segunda República (la ley de Congregaciones y su principal consecuencia, el tema de la Enseñanza, que podría haber supuesto una de las más importantes transformaciones republicanas), pudo ser fácilmente neutralizada a la caída del - régimen y, en todo caso, quedó en unos límites estrechos a causa de la política contraria a los proyectos del Gobierno Provisional y del primer Gobierno Constitucional Republicano, seguida por el IIº Bienio.

Al margen de este importante tema caben analizar otra serie - de transformaciones acerca del tema religioso-eclesiástico, que trajo consigo la IIª República. Temas como el de la gradual suspensión del presupuesto de Culto y Clero, así como medidas legales de menos trascendencia que las aquí citadas, entre las que podemos citar la Ley de Divorcio en desarrollo del correspondiente precepto constitucional, la ley que seculariza los cementerios y alguna más de menor importancia.

Otro de los temas que alcanzarían una importancia decisiva en el terreno de las relaciones Iglesia-Estado y de la propia consideración religiosa por parte de la República, fue el de sus Presupuestos dedicados a este capítulo, comunmente denominada esta partida de - - "Culto y Clero".

Siguiendo la política laica y de separación de ambas entidades, el primer bienio se ocupa de la reducción de tales partidas presupuestarias con una dedicación e interés político tan acalorados, -- como los que solían acompañar a todos estos temas. Se pensaba en -- aquella línea, que era absolutamente contradictorio el hecho de la -- existencia de un Estado definido como laico y que, en sus partidas -- presupuestarias, recogiera unas cantidades destinadas a gastos eclesiásticos.

Además, el artículo 26 de la Constitución, dejaba sentado que tal asignación presupuestaria debería desaparecer en línea con lo regulado en el conjunto de tal artículo. Se podría pensar que haciendo un detenido análisis de las consecuencias de tal reducción presupuestaria se adoptaría la medida de manera gradual y progresiva. Las cifras presupuestarias nos demuestran el error.

El Presupuesto de 1.931, que estaba ya en funcionamiento en -- su período de ejecución a la llegada de la República, recogía entre sus gastos, bajo la denominación funcional de "otros Servicios Comunitarios" y concretamente en el capítulo de "Religión" (47), una cifra de 66.117 pesetas, que en poco diferían de las 67.450 del Presupuesto de 1.930 o de las 68.543 del de 1.929, último de la Dictadura de Primo de Rivera. Frente a tales cifras, el Presupuesto de 1.932, que hubo de comenzar por ser una simple prórroga del de 1.931, pues no se aprueba el del año siguiente hasta marzo (último día), la cifra recogida para "Religión" es de 32.433 pesetas, con lo que la reducción supone que esta cantidad quedaba en menos de la mitad de la contemplada en el año anterior. Pero la pauta se mantiene y, en -- 1.933, cuyo Presupuesto, que se aprueba como caso excepcional a lo -- largo de la República para que entre en vigor en su justo momento -- (1 de enero), la cifra de esta partida queda ya reducida simplemente a 5.292 pesetas, que representan menos del 9% de la que recogía el -- Presupuesto del año en que se establece la República. Pero es que si

analizamos el de 1.934 (en que se prolongó por todo el primer semestre el del año anterior, debido a que durante la fecha normal de su ciclo en que este debía encontrarse en el Parlamento, se habían producido las elecciones de noviembre de 1.933 y estaba en plena constitución la nueva cámara, con los obvios retrasos que ello comporta, - máxime cuando ha cambiado radicalmente la mayoría parlamentaria y, - por ende, el Gobierno de la Nación), veremos, pues, que en el Presupuesto de 1.934, la desaparición de tal partida ha sido casi total, quedando una cantidad de solo 398 pesetas.

La primera consecuencia importante que esta súbita retirada - presupuestaria comportó fué la del empobrecimiento total de un clero parroquial, destinado en pequeñas poblaciones, que nada tenía que ver con las riquezas e influencias de determinadas órdenes religiosas y que, como máximo, tendrían influencias de confesonario ante sus fieles. Este clero no tenía porqué representar unos intereses materiales muy ajenos u opuestos a los del nuevo régimen, pero con actuaciones de los republicano-socialistas como la que nos ocupa, muy posiblemente se enajenaron todo tipo de apoyos del último reducto - eclesiástico, que quizá hubiera podido mantenerse próximo.

La segunda consecuencia de tal política restrictiva fué la lógica agudización de conflictos y enfrentamientos entre las posturas que representaban a la República y quienes venían defendiendo los intereses de la Iglesia: Jerarquía y grupos, prensa, etc., que luchan denodadamente por mantener las partidas presupuestarias en su nivel inicial.

Enlazando con el tema de las numerosas presiones que se realizan en lo relativo al presupuesto de culto y clero, cabe decir que, si tales grupos de interés no alcanzan el éxito durante el bienio - azañista, están plenamente satisfechos con la victoria de las fuerzas políticas del segundo bienio, que reconocen y apoyan sus intereses, pues no en vano son los suyos mismos y han recibido importantes

ayudas para su establecimiento en el poder.

En 1.934 se aprueba ya un Presupuesto, en su segundo trimestre, que va a prolongarse hasta 1.935 en que, hasta junio, no se -- apruebe el nuevo. Este de 1.935 ya consideraba un incremento importante de la partida destinada a "Religión" con una cifra de 16.550 -- pesetas, que era sólo una demostración de que estos intereses habían sido reconsiderados por el nuevo Gobierno que, como en las demás facetas, deshace la política llevada a cabo por sus predecesores o, al menos, así lo intenta.

No solo puede verse en tales cifras presupuestarias el cambio de política de los radical-cedistas del segundo bienio, pues inmediatamente de constituidas las nuevas Cortes se plantea la necesidad de compensar a los miembros del Clero, vía haberes pasivos, por considerarse que su actividad prestada hasta 1.931 era un servicio público. Ello supone que los sacerdotes recibirán unas cantidades que se -- aproximan a los dos tercios de lo recibido en aquel año inicial de -- la República, que si bien no colmaba las aspiraciones de la CEDA, sí suponía un importante cambio en las variables de la política religiosa republicana que, además era entendida como sólo un primer paso de susceptible y necesaria reforma.

En esta línea de éxitos de su política, está la celebración -- de la J.A.P. (Juventudes de la CEDA) de una numerosa concentración -- en El Escorial durante el mes de abril de 1.934.

En definitiva, la política presupuestaria de la República en el terreno del "Culto y Clero", pasó por dos etapas bien definidas y coincidentes con todo el conjunto de la política religiosa, etapas -- de supresión total y recuperación de las cifras presupuestarias, respectivamente, que coinciden con el Iº y IIº bienio. Ello comporta -- que lo iniciado por los azañistas no se ratifica por los radicales y cedistas y que, durante el corto período en que gobierna el Frente -- Popular, no es materialmente posible entroncar con el espíritu del --

primero de los períodos.

También en este tema la caída de la República permite una - - realmente fácil vuelta a la situación inicial, anulándose las transformaciones radicales que se realizaron inicialmente con un ánimo antitlerical en la misma segunda etapa de vigencia de este modelo político.

Esquematizando, podemos ofrecer el siguiente cuadro que recoja los Presupuestos republicanos en su partida relativa a "Religión" y las fechas de su aprobación según la fuente antedicha:

| <u>AÑO</u> | <u>FECHA APROBACION</u> | <u>PRESUPUESTO "RELIGION"</u> |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.931      | Antes del 1-I-31        | 66.117 pts.                   |
| 1.932      | 31-III-1.932            | 32.433 "                      |
| 1.933      | 28-XII-1.932            | 5.292 "                       |
| 1.934      | 30- VI-1.934            | 398 "                         |
| 1.935      | 29- VI-1.935            | 16.550 "                      |

Otra serie de disposiciones y medidas son tomadas a lo largo de la República que afectan al tema religioso. Todas ellas son generalmente en desarrollo del contenido de la Constitución y, principalmente, de sus artículos 26, 27 y 43.

Por ejemplo, y ya mediante unas citas rápidas que nos permitan simplemente anotar estos temas, podemos hacer referencia a los - siguientes, que, si bien, no llegaron a provocar los enfrentamientos y protestas de los más fundamentales, sí fueron capaces de poner e marcha todos los intereses presentes en un movimiento de acción-reacción.

En primer lugar nos referiremos a la aprobación de la Ley d Divorcio, cuyo anteproyecto comienza a debatirse en febrero de 1.93 votándose el 25 del mismo mes y aprobándose por 260 votos contra 23. Naturalmente que se pronuncian en contra los grupos parlamentarios Monárquico y Agrario, así como la prensa y grupos afines a la Igle-

sia, cuya doctrina sobre el particular es bien conocida, máxime en aquella época, sosteniendo una indisolubilidad del vínculo matrimonial fuera de toda contestación.

Este mismo año se contempla la aparición de nuevas leyes que desarrollan puntos relativos al artículo constitucional que regula la familia y la filiación. Todas estas leyes suponen un cambio de guías en la legislación acordes con la ideología que inspira la Segunda República. El 20 de mayo se aprueba la ley que admite la inscripción en el Registro Civil, como hijos legítimos, de los habidos fuera del matrimonio, mientras que el 16 de junio se aprueba el proyecto de ley que establece el matrimonio civil, a propuesta del Ministro de Justicia, sr. Abornoz.

Finalmente destaquemos:

- La secularización de los cementerios.
- Disolución del cuerpo eclesiástico del Ejército (4-VII-32).
- Supresión de la asignatura de Religión de todos los centros docentes. (III-1.932)
- Derogación de las exenciones de realizar el servicio militar a los religiosos ordenados.
- Etc.

#### V.3.3.- Transformaciones militares

Fueron de gran trascendencia varios de los intentos de reforma llevados a cabo a lo largo de la IIª República y que supondrían importantes transformaciones del orden social, político y económico del anterior régimen. Intentos que, como ya se ha estudiado respecto de otros terrenos y recogemos en este mismo capítulo, sufrieron diferentes alternativas con el paso del primer al segundo bienio de esta etapa. No obstante, a pesar de tal dinámica, es una evidente realidad, a la cual debemos ceñirnos para su estudio, el esfuerzo realiza

do por el régimen republicano en esta línea reformista, al margen - del balance que el final de la etapa nos pueda merecer.

Uno de estos procesos de transformación, que ha de incluirse necesariamente entre los más importantes, es el que atañe al estamento y estructuras militares. Resulta obvio destacar la fuente de donde le viene dada tal importancia, si pensamos que la incidencia de - tales reformas, entre otras cosas, contribuyó a crear el clima que - permitió el concreto desenlace con que se resolvió la salida del régimen republicano.

A pesar de que, como en todos los terrenos, la fuerte inflé- xión que en el poder político se acusa a raíz de las elecciones de - noviembre de 1.933 incide en la marcha de los acontecimientos milita- res; la tónica de reformas militares de la República está marcada - desde el núcleo gubernamental del primer bienio y, básicamente, debe su inspiración y ejecución a la persona de D. Manuel Azaña.

El interés de este estadista republicano por la temática mili- tar se traduce tanto en el hecho de que no abandonará en ningún mo- mento, desde su entrada a formar parte del Gobierno Provisional como Ministro de la Guerra, hasta su salida de la jefatura del Gobierno a la que añadió su mantenimiento en el citado ministerio, el máximo - puesto rector de los asuntos castrenses de la República; como en su interés por el estudio teórico sobre la materia, que ya demostrara - bastantes años antes de la proclamación del 31, pues tomando como mo- delo la política militar llevada a cabo por la tercera república -- francesa, dedicó horas de estudio al tema desde 1.918 y lo plasmó - pronunciando diversas conferencias en el Ateneo de Madrid, en las - que demostraba un interés fundamental por el tema en base a dos cri- terios que, como demostró la historia posterior, vinieron a darle to- da la razón: de una parte, la importancia militar internacional en - un momento en que, pasada la Iª Gran Guerra, quedaban en Europa los

gérmenes embrionarios de la IIª y, de otra, la importancia interior, ante los constantes desastres coloniales y la inestable situación de nuestros ejércitos. (48)

En suma, la persona clave que llevó a término la citada tarea de reforma no fué otra que Azaña, supuesto que los partidos republicanos no puede decirse que tuvieran un programa claro acerca del modelo a diseñar en tal sentido. Recogemos en la misma línea las afirmaciones de Payne que dice: "no se sabía bien cual sería la política militar de los republicanos, porque los dirigentes partidarios de la República no formaban un grupo político coherente y organizado y estaban aún en la etapa de elaboración de su programa." (49)

Por otra parte, Azaña llevó a cabo su labor con un reducido grupo de asesores, que fueron quienes realizaron y desarrollaron con él la reforma; asesores que no eran demasiado representativos de la oficialidad militar sobre la que iba dirigida la reforma y cuyas opiniones se pidieron poco y se tomaron escasamente en consideración. Una persona también importante en estas tareas fué el general Ruiz Fornells que, de antiguo profesor de la Academia General Militar, fué nombrado Subsecretario por Azaña en su ministerio de la Guerra. Además, contó con un gabinete de asesoramiento, cuyo jefe era el comandante de Artillería Juan Hernández Sarabia y que estaba formado por otros militares, tales como, el comandante de Caballería D. Germán Boaso Román; comandante de Artillería, D. Antonio Vidal Lóriga; comandante de Infantería, D. Andrés Fuentes Pérez; comandante de Estado Mayor, D. Angel Riaño Herrero; comandante de Ingenieros, D. Enrique Escudero Cisneros; comisario de guerra de segunda, D. José de Armas Chirlada; capitán de Caballería, D. Juan Ayza Bergoños; capitán de Artillería D. Pedro Romero Ramírez, capitán de Intendencia, - D. Elviro Ordiales Oroz. (50)

En este sentido, cabe señalar que la idea fundamental que motivaba a Azaña a la hora de emprender tal cúmulo de reformas, era la



de que "debía ceñirse a su ámbito de estamento al servicio del interés general y, de ningún modo, a protagonista de la política española de cada día" (51); dicho de otro modo, planteaba la urgente necesidad de despolitizar al Ejército por considerar que esa era una de sus principales rémoras heredadas, y de darle efectividad profesional y técnica porque, entre otras cosas, entendía que la institución militar, en el Estado que se encontraba, era una de las principales claves de sostenimiento de la España tradicional y reaccionaria que la República venía a superar y sustituir.

En suma, y desarrollando con más detenimiento esta idea central de Azaña, tendía a la formación de un nuevo Ejército al:

- Suprimir el personal sobrante.
- Incrementar y mejorar las retribuciones del personal que hubiera de permanecer en él.
- Mejorar todo el nivel de Formación Militar, fomentando:
  - La nueva formación en las Academias.
  - El acceso al Ejército de las clases populares.
  - La escala de suboficiales y su promoción.

Mediante todo ello, buscaba consolidar un Ejército no político, nacional y avanzado. Eminentemente profesional y al servicio del interés general. Eficaz y técnicamente moderno. Un Ejército, en fin, racional y no excesivamente caro, desprovisto de las grandes cargas innecesarias que arrastraba. Un Ejército, pues, útil a la República y que dejara de ser un potencial y peligroso enemigo.

El inicio concreto de las reformas no tarda en aparecer y Azaña las aborda desde muy pocos días después de proclamarse la República.

Si descontamos el Decreto de 23 de abril de 1.931, que simplemente afecta a la formalidad del cambio de la fórmula de juramento - hasta entonces vigente para los militares, y que pasa de ser un jura

mento en línea y coherencia con las instituciones e ideologías vigentes en el régimen monárquico recientemente caído, a adoptar la fórmula de promesa "hecha por el honor, de servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas", según recogía el texto dimanado del Ministerio de la Guerra. Pues bien, descontando ese decreto formal, solamente transcurrieron 11 días desde aquel 14 de abril para que, el 25 del citado mes, Azaña firmara el decreto mediante el cual todos los generales y oficiales que lo solicitaran, ya pertenecieran a la reserva o se encontrasen en situación activa, podían optar por el retiro absoluto simplemente con la solicitud formal en aquel sentido en el plazo de treinta días y, lo que es más importante y significativo, conservando enteramente sus retribuciones salariales.

Tal medida que, lógicamente, iba a surtir efectos de tipo político en primer lugar, trata de eliminar de la manera menos ofensiva posible a aquellos oficiales y generales que no estuvieran de acuerdo con la nueva línea política que se propugnaría por el nuevo régimen. Supondría también un alivio en el sentido de descargar al Ejército de los mandos que tanto le sobraban para la época de paz, por encontrarse sobrecargados luego de acumular sobre sí la oficialidad de diversas y ya rancias campañas de acción militar. Los efectos en tal terreno satisfacen los proyectos deseados ya que, aproximadamente la mitad de los oficiales en activo aprovecharon la oferta y optaron por el retiro voluntario.

Tal decreto, que aparecerá en el "Diario oficial del Ministerio de la Guerra" con fecha 28 de abril de 1.931, recogía textualmente en su primer artículo que tal medida sería extensible a "todos los oficiales generales del Estado Mayor General, a los de la Guardia Civil y Carabineros y a los de los cuerpos de Alabarderos, Jurídico Militar, Intendencia, Intervención y Sanidad, en sus dos secciones de Medicina y Farmacia...". Mientras que en el segundo, tales be

neficios se hacían extensivos a "todos los jefes, oficiales, y asimilados, así como en situación de efectividad como en la de reserva retribuida, de las distintas armas y cuerpos del Ejército, incluso los oficiales menores de guardias alabarderos."

Para comprobar el efecto cuantitativo de estas medidas y, por ende, para ratificarnos su verdadera efectividad, lo que supondría - que en este asunto concreto la política azañista tuvo su éxito sonado, vamos a considerar las cifras siguientes: (52)

EJERCITO PENINSULAR

| <u>AÑO</u> | <u>GENERALES</u> | <u>OFICIALES</u> | <u>SUBOFICIALES</u> | <u>TROPA</u> |
|------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1.930      | 163              | 12.600           | 7.793               | 109.588      |
| 1.932      | 84               | 7.697            | 7.149               | 98.218       |
| 1.933      | 83               | 7.773            | 8.036               | 105.639      |
| 1.934      | 83               | 7.771            | 8.036               | 105.654      |
| 1.935      | 80               | 7.205            | 8.337               | 99.020       |

EJERCITO EN MARRUECOS

|       |   |       |       |        |
|-------|---|-------|-------|--------|
| 1.930 | 5 | 2.365 | 2.477 | 56.392 |
| 1.932 | 3 | 1.756 | 1.930 | 39.844 |
| 1.933 | 3 | 1.509 | 1.686 | 33.762 |
| 1.934 | 3 | 1.509 | 1.686 | 33.762 |
| 1.935 | 3 | 1.401 | 1.893 | 21.455 |

Tales cifras son igualmente positivas, en cuanto que aquellas medidas de reforma venían a responder coherentemente a la política - internacional propugnada por la República, que estaba en la línea de su adhesión pacifista a la filosofía de la Sociedad de Naciones, política de no agresión y, por ende, Ejército no preparado para las acciones exteriores y simplemente utilizable para la disuasión de posibles agresiones; en suma, para tareas defensivas.

Igualmente, con reducciones tan sustanciosas del personal y,

aún a pesar del mantenimiento de sus retribuciones, se está consi- -  
guiendo una de las partes pretendidas con la reforma; nos referimos  
a la racionalización del número de su oficialidad activa, así como a  
la utilización presupuestaria para las mejoras técnicas y permitir -  
que, en lo relativo al material militar, el Ejército español pueda -  
situarse a unos niveles admisibles a la situación y tamaño potencial  
que corresponde a nuestro país en el concierto internacional.

Lógicamente que, para llevar a buen término tales reformas, -  
hubo Azaña de poner en marcha una serie de decretos complementarios  
al citado del 25 de abril (D.O.M.G. de 28-IV-31). De gran importan-  
cia resulta también el Decreto por el cual se adaptaba la estructura  
orgánica del Ejército a las nuevas cifras de oficiales y materiales  
resultantes del decreto dictado el 25 de abril.

Se trata del de 25 de mayo (D.O.M.G. de 26 de mayo de 1.931),  
que suprime 37 Regimientos de Infantería, 4 batallones de Montaña, 9  
de Cazadores, 17 Regimientos de Caballería, 1 de Ferrocarriles y 2 -  
batallones de Ingenieros y, a raíz de lo cual, se constituyen:

- Sólo 8 Divisiones de Infantería, de las 16 con que contaba  
mal dotadas y, aunque nominalmente completas, llegaban a con-  
tar con sólo la mitad de sus efectivos antes de la Reforma.
- 8 Brigadas de Artillería, 12 Regimientos independientes y -  
una serie de grupos especiales.

Aparte de esta modificación profunda y más realista del cua-  
dro militar y de combate del Ejército español, se reformó igualmen-  
te su ámbito administrativo y territorial; reformas asimismo presidi-  
das por un ánimo racionalizador y economizante, así como motivacio-  
nes políticas -seguramente las fundamentales en la tarea reformista  
de Azaña-, al suprimir los grados de Capitán General y Teniente Gene-  
ral, así como el cargo de Gobernador Militar.

En un sentido político estuvo específica y explícitamente en-

caminada la supresión de las Capitanías Generales y Gobiernos Militares, por cuanto las primeras no eran sino una reminiscencia arcaica con un mando e influencia territorial que no era coherente con la filosofía que presidía el nuevo régimen.

Igualmente se modificó el organigrama administrativo del Ministerio de la Guerra, así como se llevó a cabo una reorganización - del Estado Mayor Central del Ejército. Siendo también de destacar - por su importancia la reforma relativa al Poder Judicial en lo relacionado con lo militar. En tal sentido, se disolvieron los organismos judiciales del Ejército y, en su lugar, fue creada una sala específica para tales asuntos en el Tribunal Supremo.

Tampoco son de desdeñar aquellas medidas que, como ya anunciábamos inicialmente al presentar esquemáticamente la tendencia global azañista sobre la materia, irían encaminadas a la reforma de los estudios militares. Así pues, se suprime la Academia General Militar de Zaragoza el 29 de junio, dándose la justificación de su elevado - coste de mantenimiento, en contradicción con las necesidades futuras de enseñanza para un moderno Ejército como el que se estaba tratando de diseñar, que habría de basarse en nuevos métodos y procedimientos que, por mayores conocimientos y especialización, permitieran mayores incentivos a los estratos inferiores de las escalas para su ascenso y acceso a las escalas superiores.

Asimismo, en esta medida de supresión de la AGM de Zaragoza y aunque no confesados, existían sus intereses políticos, por considerarse por parte de Azaña que su enseñanza y profesorado eran mayoritariamente del grupo denominado de los "africanistas", que eran muy poco favorables al espíritu de la República y, por supuesto, enemigos del Ejército republicano tal y como estaba comprometido a construirlo D. Manuel Azaña.

Era Director de la Academia en el momento de su clausura el - ya conocido Francisco Franco, que a pesar de no ser partidario de -

grandes alardes por su carácter más práctico y reservado, pronunció un duro discurso de despedida de los cadetes en el que mostró su contrariedad y oposición a aquel cierre. No obstante, y manteniendo un fuerte espíritu militar en el cual la disciplina brilló en aquel momento con luz propia, no así años después cuando encabezara la sublevación contra el Gobierno legalmente constituido de la República, - asestándole el golpe que acabaría con tal experiencia política, en - aquel discurso tuvo exhortaciones a la disciplina y a la unidad del Ejército; disciplina que, según él, habrían de mantener aún cuando - se tratara de ejecutar órdenes con las que no estuvieran de acuerdo por considerarlas injustas.

De la eficacia de estas reformas en su aspecto cuantitativo y material pueden darnos fe, no ya solamente las cifras consideradas - de reducción de personal y unidades orgánicas, sino igualmente las - cifras presupuestarias que vamos a traer ahora a colación y que fueron ampliamente difundidas y comentadas por Azaña.

Del éxito político de la reforma habrá que hablar con menor - entusiasmo pues, como se demostró, no se logró un Ejército fiel a la República e incluso, como más tarde veremos, ni siquiera quienes - aceptaron el retiro voluntario lo hicieron en coherencia con lo pretendido por el reformador quedando, además, en el seno de la milicia elementos contrarios al espíritu republicano. Volveremos sobre el tema.

Los efectos presupuestarios favorables de la reforma dicen mucho en su favor, hablan de su éxito en tal faceta y son utilizados - por Azaña como verdadero núcleo del éxito de su política; pues de la demostración de un ahorro efectivo en los gastos militares sacaría - un provecho político que no pudo sacar en otros terrenos.

Los datos que a continuación traemos a colación son: los del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Ejército del año 1.930 y -

los del Presupuesto de Gastos del Ministerio de la Guerra para 1.932 (53) (Datos obviamente resumidos):

| CONCEPTO  | PESETAS/1.930  | PESETAS/1.932  |
|---|----------------|----------------|
| Servicios de carácter permanente.                             | 360.087.706,65 | 351.550.620,38 |
| Servicios de carácter temporal...                             | 5.000.000      | 35.700.325,53  |
| Servicios incorporados del<br>Presupuesto extraordinario..... | 54.044.573,90  | 6.134.850,53   |
| Ejercicios cerrados.....                                      | 60.937,22      | 620.546,93     |
| Acción en Marruecos.....                                      | 316.206.423,87 | -----          |
| TOTAL .....   | 734.399.641,55 | 394.006.343,37 |

Incluso, si descontamos los gastos habidos por causa de las acciones bélicas en Marruecos, aún queda un saldo favorable a la - cuenta de 1.932 respecto de 1.931, que se cifra en 24.186.874,31 pesetas.

Pero el mismo Manuel Azaña se encarga de realizar un desglose pormenorizado del ahorro que supone su proceso reformista; cosa que lleva a cabo en la sesión parlamentaria del 9 de marzo y que recoge el "Diario de Sesiones" del citado día, que es utilizado por M. Ramírez en los datos antes ofrecidos y en los que a continuación se plasmen.

La comparación que llevará a cabo Azaña lo será respecto del Presupuesto del año anterior, 1.931, que aún pertenece y es el último del Gobierno de la Monarquía; se realizará citando expresamente - las "pesetas menos" que se gastaron en cada una de las partidas presupuestarias por los diversos y variados conceptos que ahora se citan:

#### COMPARACION DE PRESUPUESTOS DE 1.931 y 1.932

| CONCEPTO  | PESETAS MENOS |
|---|---------------|
| 1.- Cuerpos armados, tropas especiales y<br>aeronáuticas. | 10.000.000    |

| CONCEPTO  | PESETAS MENOS |
|---|---------------|
| 2.- Personal de remonta                                 | 3.333.000     |
| 3.- Servicios de remonta                                | 2.492.000     |
| 4.- Personal con destino fuera plantilla                | 875.000       |
| 5.- Instrucción preliminar y cultura física             | 950.000       |
| 6.- Devengos independientes de sueldos y haberes        | 11.871.000    |
| 7.- Subvenciones y gastos diversos                      | 116.000       |
| 8.- Material de centros y dependencias                  | 17.000        |
| 9.- Cuerpos y cuarteles de inválidos                    | 362.000       |
| 10.- Imprenta y talleres Ministerio                     | 64.000        |
| 11.- Material de cuerpos de Caballería                  | 300.000       |
| 12.- Obras de Ingenieros                                | 2.748.000     |
| 13.- Ferrocarriles y automovilismo                      | 421.000       |
| 14.- Servicios de Intendencia                           | 6.311.000     |
| 15.- Propiedades del Estado                             | 827.000       |
| 16.- Servicios de Sanidad                               | 10.000        |
| 17.- Vestuario  | 7.560.000     |
| 18.- Gastos que proceden del Presupuesto extraordinario | 10.312.000    |
| TOTAL   | 79.154.000    |

Parecen, pues, fuera de toda duda, los efectos positivos que tuvo en cifras presupuestarias la reforma de Azaña, aunque no se citen aquí los efectos de carga que hubo necesariamente de comportar - el pago como clases pasivas de aquellos que, con su sueldo íntegro, habían optado por su retirada de la situación activa; tal observación fue hecha en los debates parlamentarios desde los grupos de oposición de derechas al planteamiento de Azaña.

Pero lo que queda, en nuestra opinión, fuera de toda duda, y tal aserto se apoya notablemente por el fuerte interés de Azaña en - demostrar las cifras tan favorables a sus posicionamientos, es que



a tal éxito cuantitativo no acompañó un éxito cualitativo en las reformas.

Las reformas de Azaña se plantearon básicamente en dos direcciones: una de tipo técnico y profesional, que pretendía disminuir de forma acorde con los tiempos de paz un Ejército sobrecargado y poco cualificado material y técnicamente; otra, de tipo político, que pretendía básicamente desmontar la influencia política con que contaba el Ejército español y, sobre todo, que pretendía eliminar los elementos influyentes de tipo reaccionario de su oficialidad y construir un Ejército favorable a la República. Ambas direcciones estaban relacionadas perfectamente entre sí, proyectándose la primera al servicio de la segunda.

Era por todos los estamentos sociales españoles compartida la idea de que resultaba imprescindible una reforma en profundidad del Ejército, aunque sobre lo que había mayores discrepancias era sobre la manera de llevarla a cabo. Si respecto de la primera faceta de las reformas -sobre aquella que tiene un carácter de tipo predominantemente cuantitativo-, el consenso podía ser algo más fácil; sobre la segunda -la reforma de tipo político y la manera de ejecutarla-, el desacuerdo y el enfrentamiento a la política de Azaña surgen de manera acalorada.

Justamente este frente, que era el que Azaña y su equipo abordaban con mayor ahínco y a cuya consecución encaminan el fondo de todas sus actividades, fué el que costó el mayor fracaso en este terreno a la política azañista y el que permite hablar de una política del primer bienio republicano fallida en lo militar.

Si Azaña lo que pretendía era que los militares que se mantuvieran en activo fueran los más adeptos a la República, puede decirse que no llegó a lograrlo del todo, ya que, los que aceptaron el retiro podían estar entre alguno de los grupos siguientes: "los ultramonárquicos, que no querían servir al régimen republicano y que te-

mían ser perseguidos por él; algunos de los más inteligentes oficiales, que habían descubierto que no les satisfacía o no les compensaba suficientemente la carrera militar, y muchos otros oficiales simplemente descontentos, o que carecían de interés por el Ejército y aceptaron satisfechos la oportunidad de seguir cobrando su sueldo completo sin hacer nada." (54) Pero se mantuvieron en él aquellos que sentían una verdadera vocación profesional, o aquellos otros que difícilmente se hubieran podido encuadrar en otra profesión por falta de capacidad. Estos que, como ya destacamos, el 14 de abril de 1.931 se comportaron de manera expectante y absolutamente neutral, fueron reaccionando progresivamente en contra, tanto del espíritu de la reforma, como de los mismos reformadores.

Con esto vamos a desembocar en la clave del problema que es que, si bien Azaña sabía dónde quería ir a parar, sabía muy poco la manera de tratar al estamento militar sin herir su susceptibilidad y su espíritu de cuerpo. Manuel Azaña pecó de un exceso de radicalismo verbal en sus afirmaciones respecto del Ejército, del que no tardó en obtener respuesta adecuada. Tal respuesta no fué otra que la contraria de la que esperaba obtener, es decir, su politización expresamente anti-republicana y, además, su división entre quienes apoyaban a la República (en clara minoría) y quienes eran hostiles a ella.

Según afirmaciones de R. de la Cierva, los aspectos negativos del intento reformista de Azaña fueron no solamente la citada división de sus miembros, fatal como se demostrará el 18 de julio de 1.936, sino que, además, "había provocado una alianza exterior entre el Ejército y las derechas que no existía en 1.931, a raíz de las frustraciones dictatoriales y monárquicas." (55)

En síntesis, fuera realizado por la mejor vía posible o no y tuviera o no la aceptación o los rechazos, es un hecho que se intentó realizar una profunda reforma del Ejército, fundamentalmente en los primeros años de la etapa republicana. La persona clave que se

encarga de la materialización de tal reforma es Don Manuel Azaña y él se deben los aciertos y los errores pero, indudablemente, fué - quien puso en marcha una tarea que era solicitada y reconocida su necesidad por todos.

Resulta evidente que, en buena medida, aprovechando el malestar creado por tales reformas entre la oficialidad y los propios errores de su realizador, así como siguiendo la tónica dominante en la segunda etapa republicana de retroceso de lo ya avanzado, se produce a raíz de las elecciones de 1.933 (noviembre) un importante frenazo en la política reformista militar y ello es ostensible si se emprende el análisis de cada una de las disposiciones llevadas a cabo en este terreno durante el citado bienio.

Puede, en definitiva, hablarse con toda certeza de una política de rectificación o restitución, que va a contrarrestar los efectos de la política azañista. En las cuestiones militares la orientación que se sigue por los radical-cedistas, es diametralmente opuesta por su espíritu político a la de Azaña, a pesar de que en su faceta material y técnica se mantuviese el proyecto de lograr lo que hasta entonces no había sido posible, es decir, un Ejército moderno y eficaz.

Las medidas concretas que nos permiten realizar las afirmaciones anteriores, se empiezan a producir desde el momento en que es nombrado el primero de los ministros de la guerra del nuevo equipo. Recae el nombramiento sobre el radical Diego Hidalgo, a principios del año 1.934. En esta línea concreta la afirmación de Payne en el sentido de que, "en líneas generales, el nuevo ministro intentó llevar a la práctica la política de los radicales, que consistía en reconciliarse con los grupos de presión afectados por el Gobierno Azaña." (56)

La primera decisión tomada por Hidalgo y que se diferenciaba

netamente de las de Azaña, era la de no amortizar ya determinados - cargos que fuesen quedando vacantes en diferentes ramas de la oficia- lidad. Iba claramente encaminada a contemplar a aquellos oficiales - molestos con la política azañista y que habían engrosado considera- blemente las filas de la UME, como ya estudiábamos en el apartado co- rrespondiente del capítulo IV.

No es menos nítido el sentido que tuvo la utilización del - - Ejército en la represión del movimiento revolucionario de Asturias, en octubre de 1.934. Algún autor de los aquí citados tratan de refle- jar y destacar la importante prueba de disciplina dada por el Ejérci- to, al avenirse a aplastar aquella insurrección asturiana ordenada - por el Gobierno. En alguna medida, entendemos, ello no hace sino apo- yar nuestra tesis, en cuanto que fué una actuación muy en línea - con los deseos de la oficialidad más conservadora, integrada por la UME, de acabar con todo vestigio revolucionario siendo ello, además, un mero síntoma de su posterior interés por abordar el asalto a una República que veían identificada totalmente con tal revolución, a - partir de febrero de 1.936.

En la misma línea, se puede anotar la promoción de generales del estilo de Francisco Franco, que figurase ya en un discreto pue- sto en la campaña represiva de Asturias, pero llevando importantes - parcelas de responsabilidad en su coordinación. Este general, de ne- to matiz africanista y ya conocido su talante por actuaciones como - la que desarrolló al frente de la Academia General Militar, puede de- finirse como muy poco simpatizante de la experiencia republicana, a pesar de su prudencia y de que jamás diese un paso en falso. Su pro- moción se observa con mayor fuerza en febrero de 1.935, en que es - nombrado para el puesto de comandante en jefe de las fuerzas milita- res en Marruecos, de cuyo cargo no tardará en ser relevado por acce- der, de la mano de Gil Robles, jefe de la CEDA y nuevo Ministro de - la Guerra desde mayo de 1.935, al cargo de Jefe del Alto Estado Mayor.

Pero consideramos que de todo el llamado por la izquierda "bienio negro" republicano, el síntoma más importante de cambio en este terreno hacia la restitución, lo constituirá el citado nombramiento del jefe cedista para regir los destinos militares españoles.

Es bien claro que la distensión Ejército-República, se comienza a producir con la constitución del nuevo gobierno dimanado de las elecciones de noviembre de 1.933, pero cuando más ostensible se hace el nuevo estado favorable de las relaciones es con la llegada de Gil Robles. Dirá Payne que "El primer cambio de importancia en la política militar tuvo lugar en mayo de 1.935, al confiarse la cartera de Guerra, dentro de la reorganización ministerial, a José M<sup>a</sup> Gil Robles, líder de la confederación de grupos católicos conservadores, - la CEDA." (57)

Significó mucho este ministro para la política militar de la República pues, no sólo constituyó el "anti-Azaña" al frente de la cartera citada, sino que, representando al grupo de interés más definitivamente derechista y que, como ya vimos, tenía como intención esencial el cambio de sentido de la República dentro de su propio seno, trató con su actividad de "fortalecer y unificar el Ejército y convertirlo en baluarte contra los revolucionarios". Junto con Franco, a su lado, desde el Estado Mayor, tienen la tarea básica de reunificar moralmente a la familia militar y reorganizar el mando, de tal manera que el Ejército pasara a ser un ente capaz de reaccionar contra los dirigentes izquierdistas de la República, en el caso de que estos volvieran a ocupar su Gobierno. Es lo mismo que decir que lograron una reforma que diera un Ejército capaz de reaccionar contra la propia República, cuando los intereses por ello representados se viesen en peligro aprovechando y guiando, eso sí, un estado de opinión sensibilizado en el seno militar, dirigido en tal dirección.

Fué en tal sentido en el que se centró la política de nombramientos de mandos y cargos militares que, recayendo sobre caracteres

conservadores y ultranacionalistas, fué tarea esencial emprendida en el contexto de la contrarreforma militar de Gil Robles.

Alguna de las principales de estas medidas, merecen ser citadas en apoyo de las afirmaciones hechas.

La primera de ellas, y quizá fundamental, ha sido ya referida y se trata del nombramiento del General Franco a puestos de importancia básica para la reorganización pretendida: el 17 de mayo de 1.935 tiene lugar su nombramiento como Jefe del Alto Estado Mayor, así como miembro del Consejo Superior de Guerra. Tal nombramiento no puede sostenerse que se debiera a razones estrictamente técnicas y profesionales, aún aceptando el gran prestigio de Franco en tales sentidos, sino que igualmente responde a motivaciones de tipo político, - por cuanto la concepción del Ejército que tenía este General, respondía bien al modelo que la CEDA necesitaba para transformar los presupuestos políticos de la República.

Gil Robles no tardó tampoco en llamar a consulta a varios de los Generales más significativos, una vez ocupado su cargo ministerial; no es de desdeñar la posible relación causal que tuviera tal consulta -a aquellas alturas era claramente dominante entre los Generales la postura más conservadora-, con la sustitución de una serie de militares de talante liberal (Miaja, Hernández Sarabia, Riquelme, Hidalgo de Cisneros y otros) por otros de los del grupo africanista o de convicciones netamente conservadoras, tarea que fué prontamente emprendida por el nuevo Ministro.

En la misma dirección puede considerarse la posterior designación del General Mola, que meses después pasó del Gobierno Militar - de Melilla a la jefatura de la Comandancia de las fuerzas armadas - del protectorado de Marruecos.

Tal política de nombramientos hizo que pronto se desarrollase un importante clima de sentimiento antirrepublicano en los mandos mi

litares, observación hecha por el propio Presidente Alcalá Zamora, - ante la evidencia de que un hombre como Fanjul, próximo a la UME y - partidario del golpe de fuerza militar, aparte de conocido antirrepublicano, ocupase la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra.

A toda esta política de nombramientos hay que añadir una serie de medidas de diversos tipos, que ratifican el sentido de la política gilrroblista al frente del Ministerio.

Entre ellas figuran: la nueva proliferación de los ascensos - por méritos y ajenos al escalafón por antigüedad, que se vuelve a implantar para grados inferiores a General. La reimplantación de los - tribunales de honor abolidos en 1.931, la vuelta a la autorización - de actos religiosos en los cuarteles, que se habían suprimido por la reforma de Azaña, etc.

Todo ello complementado, como ya hemos apuntado, con un fortalecimiento de la política de mejora técnica y material del Ejército, que hicieran de éste mejor instrumento de combate y utilización práctica que como se hallaba en 1.931.

En conclusión y como referencia a la política militar del II<sup>º</sup> bienio, digamos que destaca en ella la tarea realizada por el ministro Gil Robles pues, aún no siendo el único ministro de aquella etapa, fué el más significativo de un período que, en su conjunto, puede calificarse en su política militar como de contrareformista respecto del primero de los bienios republicanos.

Tal contrarreforma se centra en el cambio de la filosofía política básica respecto del estamento militar pues, si en la etapa de Azaña al frente del M<sup>º</sup> de la Guerra, sus tareas se centraron en la - despolitización y neutralización de los jefes militares reaccionarios para hacer de esta institución algo compatible con el espíritu del nuevo régimen, la etapa del II<sup>º</sup> bienio se caracterizó por la - - vuelta a la influencia de los militares descontentos del primero, -

que coincidían con los intereses del proyecto político de la CEDA y otros grupos de presión tan nefastos para la viable continuación de la República. Aunque la política seguida en una y otra etapa respecto de cuestiones técnicas y materiales del Ejército, parecía ir dirigida en ambas a su necesaria mejora y eficacia, no puede desprenderse en ninguno de los dos casos de su necesaria relación al servicio de las finalidades políticas perseguidas en cada caso.

Con el advenimiento del Gobierno surgido de las elecciones de febrero de 1.936, no hubo posibilidad alguna de hacer política militar coherente, dado el nivel general de enfrentamiento y conflictos de la sociedad española que se reflejaba en el seno del Ejército, - que ya preparaba desde antes una sublevación, facilitada por la ocupación de cargos de relieve por militares conservadores y antirrepúblicanos desde los nombramientos de Gil Robles.

El Gobierno nuevamente presidido por Azaña en 1.936 deshace - las combinaciones de cargos nombrados por los radical-cedistas y encarga tales puestos a jefes de talante liberal o altamente disciplinados. Los cesados, sus enlaces y sus colaboradores próximos, continúan su dinámica de preparación de la rebeldía, aunque de forma lenta, pero decidida y animada por el estado de inseguridad vivido en - aquella etapa final de la República en que las posiciones están decantadas por el enfrentamiento.

Si respecto del Frente Popular hemos de afirmar la inexistencia de una política militar coherente, por imposibilidad manifiesta dada la rapidez con que se desarrollan los acontecimientos y la falta de estabilidad necesaria; del primer bienio con la reforma de Azaña diremos que, planteada correcta y bienintencionadamente, de acuerdo con las premisas políticas y en coherencia con el proyecto de República por ellos deseado, fracasó por falta, entre otras razones secundarias, de capacidad para abordar los problemas con el tacto y la estrategia suficientes como para no herir y, por ende, enajenarse el



estamento sobre el que afectaba directamente el intento de reforma. Mientras que la nueva reforma de Gil Robles, que confesadamente buscaba un modelo de milicia acorde con unos intereses conservadores de la dirección de la República, resultó responder y servir a quienes, estrechamente relacionados con los anteriores, propugnaban sencillamente la caída y desaparición del sistema republicano.

Así pues, en buena parte porque los rectores del II<sup>º</sup> bienio, no estando demasiado claro si voluntariamente o no, propiciaron un - Ejército antirrepublicano en lugar de un Ejército para una República conservadora; en parte también porque quienes guiaron la política de los primeros años republicanos carecieron de un proyecto militar coherente y, sobre todo, erraron en su procedimiento y materialización, resulta que el proceso de transformación militar de la II<sup>a</sup> República fué un sonado fracaso que:

- No tuvo sentido lineal ni en sus más elementales aspectos - materiales, técnicos o profesionales.
- Se centró, sobre todo, en una serie de medidas de sentido - político, tendentes a unir a la institución militar con la causa de cada cual.
- Se hizo sin considerar los intereses y opiniones, así como las necesidades fundamentales, del propio sujeto pasivo: los propios miembros del Ejército.
- Pasó por dos etapas perfectamente definidas que podemos calificar como de reforma y contrarreforma.
- Se llevó a cabo, esencialmente, por dos figuras personales: Manuel Azaña (único interesado e informado de los problemas - militares de entre los republicanos de izquierda) y José M<sup>a</sup> - Gil Robles.
- Resultó contraproducente respecto de los efectos pretendidos en sus inicios: la neutralización política y la constitución de un ente profesional y eficaz.

En línea con esta última característica, podemos establecer - una conclusión final que se argumentó en el sentido de que, en el tema que nos viene ocupando, el resultante fué de sentido contrario a la premisa original que intentábamos ofrecer.

Si lo que tratábamos era de referirnos a las transformaciones que la República imprimió al Ejército, ya hemos visto su ineficacia, su tortuosidad y sus contradicciones. Pero si volviéramos la oración por pasiva y, a la luz de los resultados finales de aquella etapa, - plateáramos las transformaciones que el Ejército fué capaz de imprimir al régimen republicano, tendríamos un resultado de claridad meridiana en el sentido de que el estamento militar fué el determinante de la caída y desaparición de la República, al iniciar una sublevación en el verano de 1.936 contra el Gobierno derivado de las elecciones de febrero de aquel mismo año que, ocasionando una prolongada guerra civil, terminó con aquella experiencia y condicionó el futuro español a lo largo de varias décadas posteriores.

Aceptemos que, si ello fué así y el Ejército pasó de sujeto - pasivo de unas transformaciones que tanto eran demandadas por sus miembros más lúcidos, a sujeto activo transformador, violento y radical del universo político español, lo fué por aquellos desafortunados intentos que sobre él se llevaron a cabo; pero resulta evidente que, a la luz de los acontecimientos, se produjo tal atípica y progresiva inversión de roles respecto de lo proyectado inicialmente, - que ésta será la conclusión fundamental a destacar del presente apartado, sin que quepa entrar aquí en la ejecución concreta de tal intervención, que quedaría fuera de nuestros actuales propósitos de estudio.

## CAPITULO V

Relación de Citas

- (1) Manuel RAMIREZ: "Las reformas tributarias de la IIª República - española: Apuntes para un estudio político" en "Las Reformas de la IIª República". Edit.: Tucur. Madrid, septbre., 1.977.
- (2) Paul PRESTON: "La destrucción de la democracia en España". Edit. Turner. Madrid, 1.978
- (3) Ricardo CALLE SAIZ y otros: "La Hacienda Pública en la Segunda República". Edit.: Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, - -- 1.979.
- (4) Manuel RAMIREZ: op. cit., pág. 173.
- (5) Ricardo CALLE y otros: op. cit., mecanografía, págs. 1.329 a - 1.331 y 1.342 a 1.347.
- (6) Pío BALLESTEROS: "La Contribución General sobre la Renta en España". Edit.: Revista de Derecho Privado. Madrid, 1.933. pág. - 30.
- (7) Vid.: Pío BALLESTEROS: "Teoría del Sistema Tributario español". Edit.: Revista de Derecho Privado. Madrid, 1.933, págs. 88 y ss.
- (8) Manuel RAMIREZ: "Los grupos de presión en la IIª República española". Edit.: Tecnos. Madrid, 1.969, pág. 329; recogiendo datos de la citada Revista del día 20 de enero de 1.934.
- (9) Pío BALLESTEROS: "La Contribución...", pág. 14.
- (10) Ricardo CALLE y otros: op. cit., mecanografía págs. 1.346 y ss.
- (11) Joaquín CHAPAPRIETA: "La paz fué posible. Memorias de un político". Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic., febrero de 1.972, pág - 165.
- (12) Joaquín CHAPAPRIETA: op. cit., págs. 17 a 115.
- (13) " " " " " " " " , " 166
- (14) " " " " " : " " , " 302
- (15) " " " " " : " " , " 293
- (16) " " " " " : " " , " 302
- (17) Ricardo CALLE y otros: op. cit., mecanografía, págs. 1.352-1.353
- (18) Vid.: Pascual CARRION: "La Reforma Agraria de la Segunda República". Edit.: Ariel. Barcelona, 1.973, pág. 114.
- (19) Pascual CARRION: op. cit., pág. 115

- (20) Edward MELFAKIS: "Reforma Agraria y Revolución Campesina en la España del siglo XX". Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic. 1.972, pág. 235.
- (21) Fuente: Pascual CARRION: op. cit., pág. 124.
- (22) Edward MELFAKIS: op. cit., pág. 278.
- (23) Pascual CARRION: op. cit., pág. 127.
- (24) " " " " : " " , " 128.
- (25) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 296.
- (26) Pascual CARRION: op. cit., pág. 129.
- (27) Edward MALEFAKIS: op. cit., pág. 413.
- (28) " " " " : " " , " 414.
- (29) Manuel RAMIREZ: "Las reformas de la IIª República", pág. 20.
- (30) " " " " : " " " " " " " " " 29.
- (31) Los artículos del Texto Constitucional tienen como Fuente: Ramón SAINZ DE VARANDA: "Colección de Leyes Fundamentales". Edit.: Acribia. Zaragoza, 1.957.
- (32) Manuel RAMIREZ: "Las reformas...", pág. 32, recogida del "Diario de Sesiones" de 13 de octubre de 1.931.
- (33) Niceto ALCALA ZAMORA: "Los defectos de la Constitución de 1.931", Madrid, 1.936, pág. 91.
- (34) Manuel RAMIREZ: op. cit., pág. 39, recogiendo de Ramos Oliveira.
- (35) Recogido de Mariano PEREZ GALAN: "La enseñanza en la IIª República española". Edit.: Cuadernos para el Diálogo. 2ª edic. corregida, Madrid, 1.977, pág. 162.
- (36) Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 165.
- (37) Manuel RAMIREZ: "Los grupos de presión...", recogiendo datos de Joaquín ARRARAS: "Historia de la IIª República española". Madrid, 4 vols.
- (38) Mariano PEREZ GALAN: op. cit., págs. 171 y ss.
- (39) Recogidos de M. P. GALAN: op. cit., pág. 346.
- (40) Carlos ALBA TERCEDOR: "La educación en la Segunda República: un proyecto de socialización política" en "Estudios sobre la IIª República española", Madrid, 1.975, pág. 67.
- (41) Fuente: Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 334.

- (42) Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 104.
- (43) " " " " " ": " " , " 177.
- (44) Fuente en Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 341.
- (45) Mariano PEREZ GALAN: op. cit., pág. 284.
- (46) Carlos ALBA: op. cit., pág. 71.
- (47) Fuente utilizada y clasificación funcional de "Datos básicos para la Historia Financiera de España. 1.850-1.975". Vol. I. Edit. I.E.F. Madrid, 1.976, págs. 969 y ss.
- (48) Vid.: Cipriano de RIVAS CHERIF: "Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña" Edit.: Grijalbo. Barcelona, 1ª edic., 1.979.
- (49) Stanley G. PAYNE: "Los militares y la política en la España contemporánea". Edit.: Ruedo Ibérico. Paris, 1.968, pág. 231.
- (50) Manuel RAMIREZ: "Las reformas...", pág. 59, recogido de J. ARRARRAS: op. cit., Tomo I, pág. 52.
- (51) Manuel RAMIREZ: "Las reformas...", pág. 51.
- (52) Fuente: S.G. PAYNE: "Los militares...", recogiendo datos de los "Anuarios Militares" correspondientes a aquellos años.
- (53) Datos extraídos de M. RAMIREZ: "Las reformas de la IIª República", págs. 64-65, que utilizan como fuente primaria el "Anuario Militar" de 1.930 y el "Diario de Sesiones de Cortes" de 9 de marzo de 1.932, respectivamente.
- (54) S.G. PAYNE: op. cit., pág. 239.
- (55) Ricardo de la CIERVA: "Historia Básica de la España actual" -- 1.800-1.974. Edit.: Planeta, Barcelona, 1.974, pág. 284.
- (56) S.G. PAYNE: op. cit., pág. 257.
- (57) S.G. PAYNE: "El Ejército. La República y el estallido de la guerra civil" en "Estudios de la IIª República española". Edit.; - Raymond CARR. Edit.: Ariel. Barcelona.

465

C O N C L U S I O N E S

## CONCLUSIONES

1ª) Toda investigación sobre la Segunda República que acepte sin reservas en sus conclusiones el reconocimiento de que en este período se produjeron transformaciones económicas y fiscales considerablemente significativas, constituye cuando menos conceder una transcendencia desproporcionada al cambio real operado en este terreno entre 1.931 y 1.936.

2ª) Es evidente, no obstante, como se deduce de la investigación realizada, que durante la Segunda República surgen al menos diversas propuestas de cambio de las que pocas se concretan en realizaciones específicas. Sin embargo, dado que estas se distribuyen de forma desigual en el tiempo a lo largo de este período, es importante desglosar la etapa republicana en subperíodos, a los efectos de valorar las mencionadas propuestas y los cambios subsiguientes.

3ª) Realmente, y en una valoración global, las transformaciones fiscales y económico-sociales durante la Segunda República española nos presentan un pobre y moderado balance que, obviamente, responde a la dinámica de los diferentes grupos político-sociales, económicos y otros grupos de presión y a su incidencia sobre tal proceso reformador.

4ª) En tal sentido y en función de su influencia en este proceso, se contemplan una serie de grupos políticos y partidistas a favor y en contra de esta dinámica según sus respectivas ideologías e intereses, así como un conglomerado de grupos económicos y de presión anexos y en coordinada actuación con los anteriores.

5ª) Actuarán impulsando básicamente esa dinámica transformadora dirigida hacia el logro de un sistema democrático y liberal, los

partidos republicanos -diversos, aglutinados en torno a figuras personales y al propio proyecto republicano, pero anclados ideológicamente en el pasado en buena medida y sin firmes bases sociales de -apoyo- y el Partido Socialista Obrero Español que, renunciando a muchos de sus presupuestos ideológicos básicos, aporta al proyecto republicano sus bases y su organización fuertemente consolidada, al menos en la etapa inicial.

6a) Inciden en contra del proceso reformador aquellos grupos cuyos intereses e ideologías se van a ver negativamente afectados en él por corresponderse con la tradicional situación española dominante y amparada por el régimen monárquico. Es la coalición de la CEDA la que en lo político aglutina tales intereses a través de su posibilismo táctico en sus actuaciones dentro de la República.

7a) Otra serie diversa y plural de grupos no partidistas inciden en uno y otro sentido realizando una importante tarea de apoyo a cada una de las posturas descritas, presionando en los respectivos -terrenos en que se juegan sus intereses.

8a) A pesar de la moderación del balance de tales transformaciones fiscales y económico-sociales, sí conformaron un período de -dinámica actividad caracterizado por su diferenciación según se trate del subperíodo inicial (genéricamente denominado bienio reformador) en el que se proponen y realizan las distintas transformaciones, o del subperíodo final (bienio reintegrador) en el que se ralentizan o detienen aquellas, con tendencia al regreso a la situación ante-rior al inicio de los cambios.

9a) Concretamente, en el terreno que más nos interesa, el fiscal y hacendístico, hemos visto cómo fueron aportados un conjunto de leyes y decretos que supusieron el intento de avanzar nuestro siste-



ma fiscal en el sentido de su homologación con un modelo moderno y racional, conllevando tales medidas un desarrollo y una suerte desigual que estuvo muy en relación con la división temporal de la etapa republicana considerada en conclusiones anteriores.

10ª) De los diez ministros de Hacienda que ocupan el Departamento hasta julio de 1.936, son atribuibles únicamente las más trascendentales medidas reformadoras al catalán Jaime Carner y al levantino Joaquín Chapaprieta, quedando muy por debajo de ellos figuras como la del socialista Indalecio Prieto, que vió limitada su actividad a un conjunto de decretos en la etapa de Gobiernos Provisionales de los primeros meses de la República no constitutivos de reforma estructural alguna de nuestro ordenamiento fiscal, tales como el Decreto de 20 de abril de 1.931 que eximía del pago del Impuesto de Utilidades a los jornales de los obreros, haberes de clases de tropa y asimilados.

11ª) A cargo de los citados ministros estuvo la responsabilidad de más de 25 decretos y leyes importantes para la transformación de nuestro panorama fiscal, que se centraron en la implantación y la reforma de figuras impositivas tales como la Contribución Territorial, Utilidades, Timbre, Derechos Reales y Transmisiones y, especialmente, la Contribución sobre la Renta (Ley de 20 de diciembre de 1.932) que entraría en vigor a partir de 1 de enero de 1.933; tales medidas están encaminadas al doble logro de una mayor justicia distributiva en las cargas fiscales y a un incremento en la recaudación para potenciar y sanear el Sector Público.

12ª) Esta figura impositiva personal de la Contribución sobre la Renta, que se comienza a discutir en las Cortes el 15 de diciembre de 1.932, que se aprueba el día siguiente y que se promulga el -

20 del mismo mes, indudablemente resultó ser la más novedosa aportación fiscal de la Segunda República, introduciéndose con ella en - - nuestro ordenamiento un importante elemento modernizador, capaz de - aportar buenas dosis de justicia y progresividad a nuestro sistema.

A pesar de la moderación estructural de esta figura, basada - en el posibilismo de su aplicación, así como en su subordinación a - los medios técnico-administrativos imprescindibles para su puesta en marcha, nos marca la pauta del alcance transformador de la República cuando la moderación y el realismo de las reformas primaron sobre el radicalismo verbal y fáctico, superando así las resistencias de los grupos contrarios temerosos real o interesadamente de una revolución inmediata.

13ª) Tal tónica reformadora, típica del primer subperíodo con siderado, se detuvo en el segundo. Chapaprieta -principal protagonis ta de esta etapa- no pudo continuar la tarea de Carner y, en sus - - días, los grupos contrarios, ya inmersos en un proceso de reacción - generalizada, impidieron la aportación reformista y saneadora que es te ministro proyectaba realizar.

Así, aún no solo manteniendo, sino también mejorando la Con tribución sobre la Renta (mediante Ley que se aprueba en el Parlamen to el 6 de noviembre de 1.935 y se promulga el 14 del mismo mes), no se llegan a votar las leyes reguladoras de la imposición sobre el - Timbre, Utilidades y Territorial por disolución de las Cortes, corta pisándose antes de su discusión aquella que regulaba los Derechos - Reales y las Transmisiones, contra la que se centró especialmente la oposición de los grupos de interés más conservadores.

14ª) La incidencia determinante de los diferentes grupos de - presión, impidiendo que prosperasen en el segundo bienio las refor mas de Chapaprieta en línea similar a las emprendidas por Carner en

el primero, tendentes al perfeccionamiento técnico y a la modernización de nuestro sistema fiscal, puede considerarse en parte una de las causas que retrasó nuestro ordenamiento fiscal respecto de los de los países occidentales, retraso que se acusó fehacientemente desde los años cuarenta.

15ª) Cabe afirmar, en esta misma línea, que de haber prosperado tales reformas, España pudiera haber iniciado globalmente un proceso de perfeccionamiento fiscal paralelo al seguido por otros países. Al no ser así, es evidente que durante la Segunda República se perdió una buena oportunidad de cambio fiscal en profundidad con claros efectos positivos en el posterior proceso de acomodación del cuadro fiscal español al europeo.

16ª) Además, y dado que no puede aislarse la problemática fiscal del conjunto de causas y efectos del resto de las transformaciones económico-sociales de la IIª República, resulta evidente la incapacidad del sistema fiscal español para apoyar aquellas reformas -- que, como las agrarias, educativas o militares, dependían de la amplitud del sector público para poderse llevar a cabo materialmente, al menos en la parte que se hubiese podido conseguir una vez superadas las presiones de los grupos de interés en cada uno de esos terrenos. En consecuencia, y por ese cúmulo de razones, España a la salida de la IIª República quedó francamente relegada respecto del contexto occidental de su época en todas estas áreas.

17ª) Consecuentemente, podemos afirmar que en otros terrenos económico-sociales tan decisivos como la estructura agraria, aún acusando mayor intensidad en los procesos de acción y reacción tendentes a su reforma y aspirándose a logros estructurales aún mayores -- que en el terreno fiscal a lo largo del primer bienio, el resultado final de la etapa presenta un balance que no permite apreciar gran-

des dificultades para la recomposición de la estructura tradicional de propiedad y explotación de la tierra imperante en España al inicio de los años treinta. A una ley meritoria y de difícil génesis, - la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1.932 - (Diario Oficial de 21 de septiembre de 1.932), sucedió en el segundo bienio la de 10 de agosto de 1.935 o Ley de Reforma de la Reforma - Agraria, netamente contrarreformatora.

18ª) Asimismo, en terrenos tan decisivos para la suerte de la República y para la conformación de la situación posterior a su caída, tales como el educativo-religioso y el militar, el proceso transformador tuvo tanta espectacularidad verbal y emocional como limitaciones de hecho, que van desde las propiamente presupuestarias citadas que no permiten al Estado hacerse cargo del funcionamiento de - los modelos alternativos propuestos a un sistema educativo en manos de la Iglesia, ni de la necesaria tecnificación y renovación de un - Ejército anclado en sus disfunciones coloniales, hasta la presión de aquellos grupos afectados por las reformas y egoistamente aferrados a sus intereses, entre los que destaca la propia Iglesia con un conglomerado de fuerzas subordinadas, así como la línea jerárquica del Ejército entre cuyas virtudes no descollaba la disciplina -minada - por todo un siglo de protagonismo político y humillaciones coloniales- ni la liberalidad.

19ª) Del análisis de la realidad transformadora republicana, así como de la consideración de los grupos e intereses que la condicionan, cabe concluir afirmando que la IIª República no fué un período revolucionario en comparación con el contexto occidental de su - época, ni en relación a las necesarias reformas estructurales derivadas de una situación socio-económica desigual e injusta.

20ª) Sí aconteció en este período, sin embargo, un enfrenta-

miento entre dos bloques de intereses tan desiguales y desproporcionados como alejados y opuestos. Frente a quienes demandaban profundas transformaciones inaplazables en base a unas necesidades sociales agobiantes masivamente sentidas, se alineaban quienes poseían unos rancios y ucrónicos privilegios que, aquejados de un egoísmo histórico, no estaban dispuestos a perder. En medio, un proyecto republicano que planteaba un modelo político parlamentario, burgués, democrático y parcialmente socializante, disfuncional respecto de la estructura social analizada y que no contaba con bases sociales, económicas y culturales para su consolidación.

21ª) El resultante final de la época fué un constante flujo y reflujo de propuestas de cambios estructurales de efímera duración y de contrapropuestas anuladoras de los citados cambios por el distinto juego de los grupos de interés que, por sus características, conforman un balance irregular a lo largo de los diversos períodos diferenciados en la República y que, en definitiva, resultó escaso para cubrir las demandas sociales básicas y excesivo para los intereses de los grupos fuertemente arraigados en su posición tradicional que, con una actuación final contundente, dieron al traste con el segundo intento republicano de la historia de España.

473

B I B L I O G R A F I A

## B I B L I O G R A F I A

I) LIBROS

- ACOSTA SANCHEZ, José: El desarrollo capitalista y la democracia en España. (Aproximación metodológica). Edit.: DIROSA. - Barcelona. 1ª edic., mayo 1.975.
- ARRARAS, Joaquín: Historia de la IIª República española. 4 volúmenes. Editora Nacional. Madrid, 1.968.
- ARTOLA, Miguel: Partidos y Programas Políticos 1.808-1.936. - 2 Tomos. Edit.: Aguilar. 1ª edic., 1ª reimpr. Madrid, 1.977.
- AZAÑA, Manuel: Obras Completas. 4 volúmenes. México, 1.966- - 1.968.
- BALCELLS, Alberto: Crisis Económica y agitación social en Cataluña de 1.930 a 1.936. Edit.: Ariel. Barcelona, 1.971.
- BALLESTEROS, Pío: La Contribución General sobre la Renta en - España. Edit.: Revista de Derecho Privado. Madrid, 1ª edic., 7 de octubre de 1.933.
- BALLESTEROS, Pío: Teoría del Sistema Tributario español. - - Edit.: Revista de Derecho Privado. Madrid, 1.933.
- BENAVIDES, Leandro: La Política Económica en la IIª República. Edit.: Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1.972.
- BRENAN, Gerald: El laberinto español. Orígenes políticos y sociales de la Guerra Civil. Edit.: Ruedo Ibérico. París, 1.962.
- BROUE, P. - TEMIME, E.: La Revolución y la Guerra de España. 2 volúmenes. Edit.: F.C.E. México, 1ª reimpr. de 1ª edic. esp. 1.971. 1ª edic. francesa, 1.961. Editions de Minuit., París.
- BUSQUETS, Julio: El militar de carrera en España. Edit.: Ariel. Barcelona, 1ª edic., enero 1.971.
- CALLE SAIZ, Ricardo y otros: La Hacienda Pública en la IIª República. Mecanografiado. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1.979.
- CARR, Raymond: España 1.808-1.939.: Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic.: diciembre 1.970.
- CARR, Raymond (ed): Estudios sobre la República y la Guerra Civil española. Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic: 1.974.
- CARRION, Pascual: Estudios sobre la agricultura española. - - (1.919-1.971). Edit.: Revista de Trabajo. Madrid, 1.974. Edición a cargo de: J. Luis GARCIA DELGADO.
- CARRION, Pascual: Los Latifundios en España. Edit.: Ariel. - Barcelona, 2ª edic.: octubre 1.975.

CARRION, Pascual: La Reforma Agraria de la IIª República y la situación actual de la agricultura española. Edit.: Ariel. - Barcelona, 1.973. Prólogo: Juan VELARDE FUERTES.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DEL VALLE DE LOS CAIDOS: Anales - de Moral Social y Económica. Vol. XXXIX. Madrid, 1.975. El Reparto de la Carga Fiscal III. Manuel RAMIREZ JIMENEZ: Las Reformas tributarias de la IIª República española.

de la CIERVA, Ricardo: Historia Básica de la España actual. - (1.800-1.974). Edit.: Planeta. Barcelona, 3ª edic.: Novbre. - 1.974.

COLECCION DE ENCICLICAS Y DOCUMENTOS PONTIFICIOS (Concilio Vaticano II). Edit.: Publicaciones de la Junta Nacional de Ac-ción Católica. Tomo I. Madrid, 7ª edic., 1.977. Traducción e índices: Mons. Pascual GALINDO.

CHAPAPRIETA, Joaquín: La Paz fue posible. Memorias de un Político. Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic.: febrero de 1.972.

Datos Básicos para la Historia Financiera de España. 1.850- - 1.975. Edit.: I.E.F. Madrid, 1.976. Introducción: E.F. QUINTA NA.

DESVOIS, J.M.: La Prensa española (1.900-1.931). Edit.: Siglo XXI. Madrid, 1.977.

DIAZ DEL MORAL, Juan: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. (Antecedentes para una Reforma Agraria). Edit.: - Alianza Editorial. Madrid, 1.973.

FUSI AIZPURUA, Juan Pablo: El Problema Vasco en la Segunda República. Edit.: Turner. Madrid, 1.979.

GARCIA ESCUDERO, José Mª.: Historia Política de las Dos Espa-ñas. 4 volúmenes. Edit.: Editora Nacional. Madrid, 1.976. 2ª edic., corregida y aumentada.

GARCIA VENERO, Maximiano: Historia de los movimientos sindicalistas españoles (1.840-1.933). Ediciones del Movimiento. Ma-drid, 1.961.

GIL ROBLES, José Mª: No Fué posible la paz. (Memorias). Barce-lona, 1.968.

GUINEA, José Luis: Los movimientos obreros y sindicales en España. (1.833-1.978). Edit.: Ibérico Europea de Ediciones. Ma-drid, 1.978

HERMET, Guy: Los comunistas en España (Estudio de un movimiento político clandestino). Edit.: Ruedo Ibérico. Edición espa-ñola. París, 1.972.



- JACKSON, Gabriel: La República española y la Guerra Civil. - 1.931-1.939. 1ª edic. española: México, 1.970. Edic. original: 1.965 Princeton University Press.
- JULIA, Santos: Orígenes del Frente Popular en España (1.934-1.936). Edit.: Siglo XXI. Madrid, 1ª edic., febrero 1.979.
- MALEFAKIS, Edward: Reforma Agraria y Revolución Campesina en la España del siglo XX. Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic., - septiembre 1.972.
- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: La Burguesía Conservadora. (1.874-1.931). Edit.: Alianza Editorial, Alianza Universidad. Col.: Historia de España "Alfaguara". Madrid, 1.973.
- MEER, Fernando de: La Constitución de la IIª República. Edit.: EUNSA. Pamplona, 1.978.
- PAYNE, Stanley G.: Los militares y la política en la España - contemporánea. Edit.: Ruedo Ibérico. París, 1.968.
- PAYNE, Stanley G.: La Revolución española. Edit.: Ariel. Barcelona, 1.972 (trad. española) 1.970: University of Wisconsin.
- PEIRATS, José: Exámen crítico constructivo del Movimiento Libertario español. México, 1.967.
- PEREZ GALAN, Mariano: La Enseñanza en la Segunda República española. Edit.: Cuadernos para el Diálogo (EDICUSA). Madrid, - 1.977.
- PRESTON, Paul: La destrucción de la Democracia en España. Reacción, Reforma y Revolución en la Segunda República. Edit.: Turner. Madrid, 1.978.
- RAMA, Carlos M.: La Crisis española del siglo XX. Edit.: F.C.E. México, 3ª edic., 1.976.
- RAMIREZ JIMENEZ, Manuel (ed): Estudios sobre la IIª República española. Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.
- RAMIREZ JIMENEZ, Manuel: Las Reformas de la IIª República. - Edit.: Tucar. Madrid, 1ª edic.: septiembre 1.977.
- RAMIREZ JIMENEZ, Manuel: Los Grupos de Presión en la Segunda República española. Edit.: Tecnos. Madrid, 1.969.
- RAMOS OLIVEIRA, A.: Historia de España. 3 volúmenes. México, 1.960.
- REGLA, Juan.: Historia de Cataluña. Edit.: Alianza Editorial. (Col. de Bolsillo). Madrid, 1.974.
- RIVAS CHERIF, Cipriano de: Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña. Ediciones Grijalbo. 1ª Edición. Barcelona, 1.979.

SAINZ DE VARANDA, Ramón: Colección de Leyes Fundamentales. - Edit.: Acribia. Zaragoza, 1.957.

SCHWARTZ, Fernando: La internacionalización de la Guerra Civil española. Edit.: Ariel. Barcelona, 2ª edic.: diciembre, - 1.972.

SIMON SEGURA, Francisco: Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Gerona. Edit.: I.E.F. Madrid, 1.979.

TAMAMES, Ramón: Estructura Económica de España. 3 volúmenes. Edit.: Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1.973. 7ª edic., revisada y ampliada, enero 1.974.

TAMAMES, Ramón: Introducción a la Economía española. Edit.: - Alianza Editorial. Madrid, 1.967. 8ª edic., revisada: 1.973.

TAMAMES GOMEZ, Ramón: La República. La era de Franco. Edit.: Alianza Editorial. Col.: Historia de España Alfaguara. Madrid, 3ª edic.: 1.974.

TIERNO GALVAN, Enrique: Leyes políticas españolas fundamentales. (1.808-1.936). Edit.: Tecnos. 1ª edic, 1.968. Reimpr. - 1.972. Madrid.

TORTELLA CASARES, Gabriel (ed): La Banca española en la Restauración. Serv. de Est. del Banco de España. Madrid, 1.974.

TUÑON DE LARA, Manuel: La España del siglo XX (1.914-1.939). Edit.: Librería Española. París, 1.973.

TUÑON DE LARA, Manuel: El Movimiento Obrero en la Historia de España. Edit.: Taurus. Madrid, 1.972.

TUÑON DE LARA, Manuel: La IIª República. 2 volúmenes. Edit.: Siglo XXI de España. Madrid, 3ª edic.: diciembre, 1.976.

TUSELL GOMEZ, Javier: La Segunda República en Madrid: Elecciones y Partidos Políticos. Edit.: Tecnos. Madrid, 1.970.

UBIETO, REGLA, JOVER, SECO: Introducción a la Historia de España. Edit.: Teide. Barcelona, 11ª edic.: actualizada, 1.977.

VARIOS AUTORES: Historia Social de España siglo XX. Edit.: - Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1.976.

VARIOS AUTORES: La Empresa Pública en España. Aspectos Generales. Edit.: Inst. de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda). Madrid, 1.972.

VARIOS AUTORES: El siglo XX. De la Segunda República a nuestros días. Edit.: EDAF. Madrid, 1.974.

VELARDE FUERTES, Juan: Política económica de la Dictadura. - Edit.: Guadiana de Publicaciones (Biblioteca Universitaria - Guadiana). Madrid, 1.973.

VICENS VIVES, J.: Historia Económica de España. Edit.: Vicens Vives. Barcelona.

VILAR, Pierre: Historia de España. Edit.: Librería Española. París, 1.963. Traduc.: Manuel T. de LARA.

## II) FUENTES PRIMARIAS DE LEGISLACION

DIARIO DE SESIONES DE CORTES: Números consultados correspondientes desde las Cortes Constituyentes a las resultantes de las elecciones de febrero de 1.936.

GACETA DE MADRID (DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA): Desde su nº 105. Año CCLXX de 15 de abril de 1.931, al nº 200, año - - CCLXXV de 18 de julio de 1.936.

## III) ARTICULOS EN OBRAS COLECTIVAS Y REVISTAS MONOGRAFICAS

ALBA TERCEDOR, Carlos: La Educación en la IIª República: Un - intento de socialización política. Edit.: Tecnos. Madrid, - - 1.975.

BAR CENDON, Antonio: La Confederación Nacional del Trabajo - frente a la IIª República. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

BEIRAS, Xosé M.: La Economía Española durante la IIª República. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

BELFORD, Nicholas: El sistema bancario durante la Dictadura - de Primo de Rivera. (Cuadernos Económicos de I.C.E., nº 10) - Madrid, 1.979.

CONTRERAS CASADO, Manuel: El Partido Socialista: la trayectoria de un conflicto interno. (Estudios sobre la IIª República) Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

GARCIA DE LA SERRANA, José Luis: Los Intelectuales en la IIª República. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

GIL ROBLES, José Mª: La IIª República. Causas y consecuencias de una experiencia. (Historia Social de España siglo XX). - - Edit.: Guadiana. Madrid, 1.976.

MALEFAKIS, Edward: El movimiento Socialista durante la IIª República. (Historia Social de España siglo XX). Edit.: Guadiana. Madrid, 1.976.

MONTERO GIBERT, José R.: La CEDA: El partido contrarrevolucionario hegemónico de la IIª República. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

RAMIREZ JIMENEZ, Manuel: La agrupación de intereses en la IIª República: Partidos y Grupos. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

SALAS LARRAZABAL, Ramón: Las Fuerzas Armadas españolas en el siglo XX. (Historia Social de España siglo XX). Edit.: Guadiana. Madrid, 1.976.

TAMAMES, Ramón: Los problemas económicos en la IIª República. (Historia Social de España siglo XX). Edit.: Guadiana. Madrid, 1.976.

TUÑÓN DE LARA, Manuel: En torno a la Dictadura de Primo de Rivera. (Cuadernos Económicos de I.C.E. nº 10). Madrid, 1.979.

VELARDE FUERTES, Juan: La Política Económica de la Dictadura, cincuenta años después. (Cuadernos Económicos de I.C.E. nº 10) Madrid, 1.979.

VELARDE FUERTES, Juan: Problemas de la realidad económica española en la época de Alfonso XIII. (Historia Social de España siglo XX). Edit.: Guadiana. Madrid, 1.976.

VILAS NOGUEIRA, José: El Autonomismo Gallego en la IIª República. (Estudios sobre la IIª República). Edit.: Tecnos. Madrid, 1.975.

#### V) OTROS ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS

CASTILLO, Juan José: Sindicalismo Católico. Sindicalismo Amarillo. Historia 16, nº 32. Madrid, diciembre 1.978.

GUTIERREZ-INCLAN, José Manuel: ¿Fue posible la Monarquía el 14 de abril de 1.931). Tiempo de Historia. Año V, nº 53. Madrid, abril 1.979.

GUZMAN, Eduardo de: Los cinco Congresos Históricos de la C.N.T. Tiempo de Historia. Año VI, nº 61. Madrid, diciembre 1.979.

HERNANDEZ, Adolfo: El sufragio en la IIª República. Historia 16. Nº Extraordinario II. Madrid, Abril 1.977.

JACKSON, Gabriel: La marcha hacia el poder: Socialistas y Anarquistas en España, 1.900-1.936. Historia 16. Año I, nº 9. Madrid, enero 1.977.

MAESTRE ALFONSO, Juan: Los militares y la IIª República: Recuerdo de Martínez Barrio. Tiempo de Historia. Año V, nº 51. Madrid, febrero 1.979.

RUIZ, David: Octubre, 1.934: La Revolución de Asturias. Tiempo de Historia. Año I, nº 1. Madrid, diciembre 1.974.

RUIPEREZ, María - PEREZ LEDESMA, Manuel: José Peirats, la - - C.N.T. y la Revolución Social. Tiempo de Historia. Año VI, nº 62. Madrid, enero 1.980.

TENORIO GARCIA, Rafael: Las elecciones de febrero de 1.936. - Tiempo de Historia. Año V, nº 54. Madrid, mayo 1.979.

VARIOS AUTORES: Manuel Azaña y la República del 14 de abril. Tiempo de Historia. Año VI, nº 65. Madrid, abril 1.980.

